CONTESTACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO

CASO 12.251 VEREDA LA ESPERANZA

BOGOTÁ D.C

7 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INDICE

I. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 8

II. CUESTIONES PREVIAS: OBSERVACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE AL TRÁMITE ADELANTADO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 13

A. La Honorable Comisión trasladó al Estado observaciones de los peticionarios, luego de transcurridos más de diez años de su presentación y luego de transcurridos cuatro años de la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo 17

B. La ausencia de motivación en su decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. 21

1. El tiempo transcurrido en la etapa inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obedece a actuaciones dilatorias imputables al Estado. 22

2. El Estado no tuvo igualdad de oportunidades para presentar observaciones, alegatos y pruebas. 23

3. El Estado presento respuesta a todos y cada uno de los escritos que fueron remitidos debida y oportunamente, es decir, a los escritos presentados por los peticionarios en el año 2000. 24

III. EXCPECIÓN PRELIMINAR: FALTA ABSOLUTA DE REPRESENTACIÓN Y *LOCUS STANDI* EN CASOS CONTENCIOSOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 26

IV. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD: LOS HECHOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LAS AUTODEFENSAS ILEGALES - TERCEROS PARTICULARES- NO CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO COLOMBIANO 30

A. El fenómeno de las autodefensas en Colombia: desde su creación de manera autónoma, hasta su desmonte por parte del Estado. 31

B. La responsabilidad del Estado de conformidad con el Derecho Internacional Público. 44

C. Los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza, no configuran el fundamento de responsabilidad en el caso bajo estudio. 51

V. CONTEXTO 57

A. Presencia de los distintos Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley –GAOML-: surgimiento, expansión y asentamiento en el Magdalena Medio. 61

1. Las FARC en el Magdalena Medio 63

2. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Magdalena Medio 64

3. El Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Magdalena Medio 64

4. Los grupos de autodefensas ilegales en el Magdalena Medio 65

4.1 Periodo 1977-1984 66

4.2 Periodo 1984-1991 67

4.3 Periodo 1991-1994 69

4.4 Periodo 1994-2000 69

4.5 Periodo año 2000 hasta la desmovilización 69

B. La carretera Bogotá – Medellín: su ubicación geográfica como objetivo estratégico para el asentamiento de los actores armados en la región. 73

C. La situación del Oriente Antioqueño en el marco de la disputa territorial. 76

D. La lucha por la autopista Bogotá-Medellín y la Fuerza de Tarea Águila. 83

E. La doctrina del enemigo interno y el contexto del conflicto armado bajo la Constitución de 1991. 85

F. Marco jurídico de justicia transicional en Colombia. 86

F. Mecanismos nacionales para enfrentar el delito de desaparición forzada. 94

1. Ley 589 de 2000 94

1.1 Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas 94

1.2 Registro Nacional de Desaparecidos 95

1.3 Mecanismo de Búsqueda Urgente 97

1.4 Administración de bienes de los desaparecidos 97

2. Plan Nacional de Búsqueda 97

3. Mecanismos de protección de los cadáveres en condición de no identificados inhumados en cementerios 98

4. Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas 98

5. Conmemoración 99

6. Estrategia Interinstitucional para la recuperación de cuerpos en cementerios 99

7. Asistencia a familiares 100

II. HECHOS 101

A. Capítulo denominado por la CIDH como "Los hechos ocurridos entre junio diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza." 102

B. Capítulo denominado por la CIDH como "La desaparición de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y el niño Oscar Zuluaga Marulanda el 21 de junio de 1996". 103

C. Capítulo denominado por la CIDH como "La desaparición de los niños Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Ancízar Cardona Quintero, y de alias Fredy y su esposa el 22 de junio de 1996". 104

D. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de María Irene Gallego Quintero el 26 de junio de 1996" 104

E. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero; y muerte de Javier Giraldo Giraldo el 7 de julio de 1996". 106

F. Capítulo denominado por la CIDH como "Desapariciones de Hernando de Jesús Castaño Castaño, [redacted] Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño el 9 de julio de 1996". 107

G. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de Andrés Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo el 27 de diciembre de 1996". 108

H. Procesos internos 109

1. Procesos penales 109

1.1 Jurisdicción ordinaria 109

1.2 Justicia y Paz 126

2. Proceso disciplinario No. 008-10799-98, adelantado por los hechos que conforman el caso en cuestión. 128

3. Proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, adelantado por los hechos que conforman el caso en cuestión. 134

3.1 Proceso acumulado 2002-00528 134

4.2 Proceso 2002-00527 145

VII. FONDO 146

A. El Estado no es responsable por la presunta vulneración de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial supuestamente derivadas del procedimiento de Justicia y Paz adelantado para esclarecer los hechos del caso objeto de análisis 146

1. Garantía del derecho a la verdad en el marco del procedimiento de Justicia y Paz 149

1.1 Contenido y alcance del derecho a la verdad en relación con la obligación de investigar con debida diligencia. 150

1.2. Debida diligencia en la corroboración de la información obtenida en el marco de las versiones libres 158

1.3 Debida diligencia en la verificación de la permanencia de Ramón Isaza como postulado en el marco de la Ley de Justicia y Paz 173

1.4 Potestad en cabeza de la Fiscalía de solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de los postulados 177

1.5 Acceso a la información contextual y de patrones de macrocriminalidad relacionados con el caso concreto 180

1.6 Presentación del caso concreto como un caso connotado ante la Magistratura 182

2. Plazo razonable en desarrollo de la investigación de Justicia y Paz 185

3. Proporcionalidad de la pena impuesta en el marco del procedimiento de Justicia y Paz 191

B. Convencionalidad de los mecanismos de racionalización de la acción penal implementados por el Estado colombiano 196

1. Prácticas de racionalización de la acción penal derivadas del derecho comparado y del derecho internacional 197

1.1 Concentración de la investigación en los patrones de macro-criminalidad 203

1.2 Concentración la investigación en los crímenes más graves 204

1.3 Concentración de la investigación penal en los máximos responsables 207

2. Convencionalidad de la racionalización de la acción penal 213

3. Criterios de priorización implementados por el Estado colombiano 218

3.1 Criterio subjetivo 220

3.2 Criterio objetivo 221

3.3 Criterios complementarios 222

4. Conclusiones 223

C. El Estado ha garantizado el seguimiento de líneas lógicas de investigación en el marco del proceso penal ordinario 225

D. EL ESTADO COLOMBIANO INVESTIGÓ LOS HECHOS DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO PENAL VIGENTE PARA LA ÉPOCA EN QUE ÉSTOS OCURRIERON, OBSERVANDO ADEMÁS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL 231

1. El principio de legalidad en el derecho penal 232

2. "Legalidad flexible" como mandato del derecho internacional y su cumplimiento en el derecho colombiano. 233

3. El Código Penal colombiano y la tipificación del delito de desaparición forzada 237

3.1 Los fiscales de Colombia están sometidos al imperio de la ley. 238

3.2 En el año 2009 la representación de las víctimas en el proceso penal solicitó la readecuación típica de la conducta investigada 239

3.3 En el año 2010 la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- fijó importantes lineamientos en materia de legalidad. 241

3.4 En el año 2011, la Fiscalía 80 Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH decidió readecuar la tipicidad de la conducta investigada. 241

4. La investigación adelantada en la Jurisdicción Penal ordinaria, ha tenido en cuenta dentro de sus hipótesis, la posible participación de agentes del Estado. 242

E. El ESTADO NO ES RESPONSABLE POR LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE IRENE DE JESÚS GALLEGO POR LOS HECHOS OCURRIDOS ENTRE EL 26 Y EL 28 DE JUNIO DE 1996 247

1. Los hechos ocurridos el día 26 de junio de 1996 no suponen una "retención" en perjuicio de los derechos de Irene Gallego Quintero. 248

2. Los hechos ocurridos el día 28 de junio de 1996 en el despacho de la Fiscalía de Santuario. 253

F. El Estado no es responsable por la alegada violación a los derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5,y 7 de la Convención Americana, así como de los artículos 1.a y 1.b de la CIDFP en relación con a Alias "Fredy" y su compañera sentimental 258

[redacted]

VIII. REPARACIONES 278

A. El deber de reparar integralmente las violaciones 278

B. El principio de subsidiariedad y sus implicaciones en el SIPDH 281

C. El valor que le ha reconocido la jurisprudencia de la Honorable Corte IDH al recurso contencioso administrativo como mecanismo que tiene la potencialidad de brindar una reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos 285

D. Reconocimiento de la Ley de Víctimas por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 289

E. Reparación en sede judicial 290

F. La Ley de Víctimas como recurso adecuado y efectivo para la reparación integral de los hechos del caso 309

1. Idoneidad de la Ley 1448 de 2011 para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia 311

1.1 Las reparaciones derivadas de la Ley 1448 de 2011. 315

1.1.1 Indemnización administrativa 316

1.1.2 Medidas de restitución 317

1.1.3 Medidas de satisfacción 318

1.1.4 Medidas de rehabilitación 320

1.1.5 Garantías de no repetición 322

1.1.6 Medidas específicas para el hecho victimizante de desaparición forzada de personas 325

1.1.6.1 Acompañamiento psicosocial a familiares víctimas de desaparición forzada que asisten los procedimientos judiciales de entrega cuerpos y/o restos. 325

1.1.6.2 Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal 326

1.1.6.3 Atención psicosocial en el marco del hecho victimizante de desaparición forzada 326

1.2 La Ruta de Reparación Individual 327

1.3 Ruta de reparación colectiva 328

2. Información relativa a las víctimas del presente caso. 332

2.1 Registro Único de Víctimas 332

2.2 Reparación administrativa 354

2.2.1 Octavio de Jesús Gallego 354

2.2.2 Andrés Antonio Gallego Castaño 354

2.2.3 Javier de Jesús Giraldo Giraldo 355

2.3 Reparación Colectiva 355

G. Observaciones frente a los listados de víctimas 360

IX. COSTAS 360

X. PRUEBAS 361

A. Observaciones sobre las pruebas del Escrito de Sometimiento 361

1. Observaciones en relación con la prueba pericial: las pruebas no están relacionadas con el orden público interamericano 361

1.1 Requisitos que determinan el ejercicio de la facultad otorgada a la Comisión Interamericana para proponer pruebas periciales. 361

1.2 Inobservancia de los requisitos reglamentarios que determinan la facultad de la Comisión para ofrecer pruebas periciales 364

B. Observaciones sobre las pruebas del Escrito de Argumentos, Solicitudes y Pruebas 367

1. Observaciones en relación con las pruebas documentales 367

2. Observaciones en relación con la prueba testimonial 368

3. Observaciones en relación con la prueba pericial 370

C. Pruebas que ofrecerá el Estado 371

1. Prueba documental 371

2. Prueba testimonial y declaraciones informativas 371

3. Prueba pericial 372

XI. PETITORIO 373

XII. LISTA DE ANEXOS 375

I. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

El Estado colombiano lamenta profundamente los hechos ocurridos entre junio y diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza. Hechos que no debieron ocurrir y que no deberían repetirse en un Estado de derecho, en el que la protección a la vida e integridad de sus habitantes es un fin esencial.

No sería acorde con el momento histórico de reconciliación que vive Colombia, desconocer y olvidar lo ocurrido a Aníbal de Jesús Castaño Gallego y el niño Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, a los niños Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Ancízar Cardona Quintero, a María Irene Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero, a Javier Giraldo Giraldo, a Hernando de Jesús Castaño Castaño, a Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño, a Andrés Gallego Castaño y a Leonidas Cardona Giraldo. Ello sería condenarnos a repetirlo. Por esto, el Estado reitera que lo lamenta y que confía encontrarse en el camino correcto hacia la garantía real de no repetición de hechos como los que nos convocan ante la Corte en esta ocasión.

La coherencia en la función pública y la rigurosidad en la atención del pasado son elementos cardinales para el logro de un país que si bien no olvida, sabe darse paso a un mejor futuro. En ese orden de ideas, el Estado también lamenta que si bien se han hecho esfuerzos importantes en justicia, a la fecha no se conozca el paradero de quienes se encuentran desaparecidos, ni tampoco cuente con absoluta claridad sobre las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

El Estado colombiano no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en los casos de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño y Leónidas Cardona Giraldo, en los siguientes términos:

Por omisión, por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3), vida (art.4), integridad personal (art.5) y libertad personal (art. 7) en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

El Estado reconoce su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, y libertad personal, de los señores Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño y Leónidas Cardona Giraldo. Lo anterior, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de cada una de estas personas y no se tiene conocimiento de su paradero o el de sus restos.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en los casos de los niños Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Ancízar Cardona Quintero en los siguientes términos:

Por omisión, por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3), vida (art.4), integridad personal (art.5), libertad personal (art. 7) y derechos de los niños (art. 19), en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

El Estado reconoce su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, y libertad personal, de los niños Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Ancízar Cardona Quintero. Lo anterior, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de cada uno de los niños.

Adicionalmente, el Estado reconoce su responsabilidad por la vulneración de los derechos de los niños, contenidos en el artículo 19 de la CADH, a la luz de las obligaciones reforzadas que le asiste a los Estados frente a los menores.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en el caso de Irene de Jesús Gallego Quintero en los siguientes términos:

Por omisión, por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3), vida (art.4), integridad personal (art.5) y libertad personal (art. 7) en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

El Estado reconoce su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, y libertad personal, de la joven Irene de Jesús Gallego Quintero. Lo anterior, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de Irene de Jesús y no se tiene conocimiento de su paradero o el de sus restos.

El presente reconocimiento de responsabilidad no abarca los hechos ocurridos entre el 26 y el 28 de junio de 1996, tiempo durante el cual Irene de Jesús estuvo con agentes del Estado, de conformidad con lo que se expondrá en el fondo del asunto.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en el caso de Javier de Jesús Giraldo Giraldo en los siguientes términos:

Por omisión, por violación de los derechos a la vida (art.4) e integridad personal (art.5) en relación con el artículo 1.1 de la CADH.

El Estado reconoce su responsabilidad por la omisión en la garantía de los derechos a la vida e integridad personal del señor Javier Giraldo. Lo anterior, teniendo en cuenta que aún se desconocen las circunstancias específicas en las que ocurrió su muerte.

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los familiares directos de las víctimas antes referidas, en los siguientes términos:

Responsabilidad parcial, por la violación a las garantías judiciales (art. 8), y a la protección judicial (art. 25), en relación con el artículo 1.1 de la CADH, de los familiares directos de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga

Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, Javier de Jesús Giraldo Giraldo.

El Estado reconoce que la demora prolongada en las investigaciones adelantadas en la jurisdicción ordinaria, relacionadas con los casos de las víctimas constituyó, por sí misma, una violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. Concretamente, el alcance de este reconocimiento se realiza teniendo en cuenta que los 19 años transcurridos desde el inicio el de la investigación sobrepasan un plazo que pueda considerarse razonable.

Asimismo, el Estado reconoce que en las investigaciones adelantadas en la jurisdicción ordinaria, se presentaron algunas inconsistencias relacionadas con los siguientes aspectos: i) omisiones en las etapas iniciales de la investigación, ii) retraso en la práctica de diversas diligencias y iii) periodos de inactividad, que han dificultado el esclarecimiento de la verdad de los hechos y la sanción a los responsables.

El Estado reconoce las vulneraciones derivadas de los sentimientos de angustia, dolor e incertidumbre que han tenido que padecer estas personas, como consecuencia de la ausencia de información sobre las circunstancias específicas en las que acaecieron los hechos.

En este punto, es pertinente resaltar que la H. Corte *"…ha estimado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes (en adelante "familiares directos")…"*[1].

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por el caso de la vivienda del señor José Eliseo Gallego Quintero en los siguientes términos:

Responsabilidad parcial, por la violación a las garantías judiciales (art. 8), y a la protección judicial (art. 25), en relación con el artículo 1.1 de la CADH, por la falta de investigación de los hechos relacionados con los daños que habría sufrido

[1] Caso Radilla Pacheco *Vs.* Estados Unidos Mexicanos, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, párr. 162.

la vivienda del señor Eliseo. Como consecuencia de lo anterior, el Estado también reconoce su responsabilidad por la vulneración del derecho a la propiedad (art. 21)

***

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, el Estado se permite aclarar ante la Honorable Corte que el reconocimiento de responsabilidad acabado de efectuar, no implica la aceptación de la ocurrencia del ilícito internacional de desaparición forzada en el caso concreto, toda vez que aún no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir que en los hechos participaron agentes estatales. En tal sentido, el Estado no reconoce responsabilidad por la presunta violación de las garantías contenidas en los artículos 1.a y 1.b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

No obstante, el Estado reconoce que la sustracción de las víctimas afectó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad personal.

***

Por todo lo anteriormente reconocido, el Estado colombiano le pide perdón a las víctimas y les expresa un absoluto respeto y consideración. El Estado entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy desde que ocurrieron los hechos ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones. Esperamos que este reconocimiento contribuya a que recuperen parte de esa confianza perdida.

***

En primer lugar, el Estado quiere poner de presente que de acuerdo con la jurisprudencia de la H. Corte, la presentación de una excepción preliminar y el reconocimiento de responsabilidad internacional, no resultan ser actitudes procesales contradictorias, siempre y cuando las excepciones no limiten o vacíen el reconocimiento de responsabilidad[2]. En el caso que nos ocupa, ni la solicitud de realizar un control de legalidad sobre las actuaciones de la CIDH, ni la excepción preliminar que interpondrá el Estado, limitan o vacían el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional que presentará el Estado en este escrito; por esta razón, el Estado le solicita a la H.Corte que estudie ambas cuestiones dentro de su sentencia.

[2] CorteIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Párr. 26

***

II. CUESTIONES PREVIAS: OBSERVACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE AL TRÁMITE ADELANTADO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Antes de efectuar cualquier consideración sobre el Escrito de Sometimiento presentado por la H. Comisión y sobre el escrito remitido por los ilustres representantes, para el Estado es necesario presentar algunas observaciones frente al trámite procesal que se le dio al caso en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que en el marco de éste se presentaron algunas inconsistencias que deberán ser analizadas por la Honorable Corte, las cuales ameritan un pronunciamiento por parte de este Tribunal, de cara a prevenir que situaciones similares tengan ocurrencia en otras causas.

En ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano jurisdiccional y Tribunal del Sistema Interamericano, cuenta con amplias facultades, no solamente para pronunciarse sobre la eventual responsabilidad internacional de un Estado, sino también para evidenciar aquellas inconsistencias presentadas durante el trámite surtido ante la CIDH, las cuales por su misma naturaleza no pueden ser inadvertidas en el litigio ante esta respetada Corte.

Para esos efectos, y antes de hacer alusión a los errores procesales en los que se incurrió en el trámite ante la Comisión, es necesario revisar la Jurisprudencia interamericana en lo que atañe al control de legalidad, de manera que se puedan determinar con claridad los supuestos en los cuales esta figura procede y cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado por parte de la Corte Interamericana en ocasiones anteriores.

En un primer momento[3], la Honorable Corte sostuvo que para efectuar un control de legalidad sobre las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era necesario acreditar un error grave que desembocara en la afectación del derecho de defensa de las partes. Según este planteamiento, la revisión del procedimiento adelantado en sede de la CIDH, únicamente era procedente cuando la parte que alegaba el error en dicha etapa, lograba

[3] Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158. Párr. 66; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 17. Párr. 32 y 40. Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr. 40

demostrar que con éste se había generado una afectación de su derecho de defensa, traducido en la ocurrencia de un perjuicio en su contra.

No obstante lo anterior, posteriormente la Jurisprudencia de la Honorable Corte[4] adecuó sus pronunciamientos de conformidad con los criterios establecidos en la Opinión Consultiva No. 19, oportunidad en la que manifestó que:

> "El trámite de las peticiones individuales se encuentra regido por garantías que aseguran a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el procedimiento. Tales garantías son: a) las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención), y b) las relativas a los principios de contradicción (artículo 48 de la Convención)[5] y equidad procesal. Igualmente es preciso invocar aquí el principio de seguridad jurídica (artículo 39 del Reglamento de la Comisión)."

Desde esta perspectiva, es claro que lo que la Honorable Corte quiere proteger, mediante el ejercicio del control de legalidad, no es más que los principios que orientan un debido proceso: contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica. De esta manera, para que la Corte Interamericana ejerza el control de legalidad, bastará con que cualquiera de las partes demuestre que las actuaciones de la distinguida Comisión contravienen los citados principios.

Así las cosas, se evidencia cómo el Tribunal interamericano amplió la óptica del control de legalidad, ya no restringiendo su ejercicio a la vulneración del derecho de defensa, sino que por el contrario incluyó –correctamente- importantes principios que deben ser protegidos en cualquier escenario procesal, sin distinción del órgano del que se trate.

En ese orden de ideas, el Estado considera acertada la posición aludida, toda vez que con ella se blinda a las partes con garantías procesales, otorgándoles además confianza legítima en que las actuaciones de la Honorable Comisión, no irán en desmedro de los principios en los que se cimienta el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos.

Pese a lo anterior, pareciera que el precedente que se viene analizando tuvo una ostensible variación, incluso volviendo a la postura inicialmente adoptada,

[4] Corte IDH. Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 231. Párr. 46

[5] Ver también artículos 30, 37, 38, 42 y 43 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado en su 109º Período Extraordinario de Sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, modificado en su 116° Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002 y en su 118º Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003.

por cuanto en el caso *Rodríguez Vera y otros*, la Honorable Corte estableció que el control de legalidad únicamente procede en situaciones en las cuales se demuestra un error de tal magnitud que configura la violación del derecho de defensa, y que además genera la inadmisibilidad del caso en sede de Corte[6]. Así, el Estado considera que no solamente se abandonó la Jurisprudencia por medio de la cual se protegían tan importantes principios como son los de contradicción, equidad procesal y **seguridad jurídica**, sino que además se incorporó un nuevo criterio –si se quiere requisito-, en virtud del cual se exige que el error alegado tenga vocación de excepción preliminar, so pena de que el control de legalidad no pueda ser ejercido.

A partir de lo anterior, se puede concluir que la posición adoptada recientemente por la Honorable Corte, desnaturaliza la institución del control de legalidad, en la medida en que reconoce que aun habiendo errores procedimentales, a través de los cuales se desconocieron los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica, éstos no serán relevantes cuando no atropellen la competencia del Tribunal. El Estado entiende que la Corte es respetuosa de la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho Colombia también lo es y en esa medida comprende que dicho órgano cuenta con independencia en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, ejercer un control de legalidad sobre sus actuaciones, de ninguna manera riñe con la autonomía e independencia predicadas. Autonomía que no debe entenderse como sinónimo de arbitrariedad, sino que debe significar discrecionalidad en el ejercicio de su mandato, siempre –y sin excepción alguna- con estricto apego a las normas que lo regulan.

En consecuencia, en aquellos eventos en los cuales la Honorable Comisión se aparta del debido proceso legal, independientemente del resultado que esta situación traiga consigo, es procedente efectuar un control de legalidad, precisamente para que a través de éste mecanismo se pueda determinar, con absoluta certeza, si la Comisión actuó o no, en desmedro de las garantías procesales de las partes. Es ésta –y no otra- la columna vertebral de la institución que se viene comentando, de lo contrario, de nada serviría efectuar el control de legalidad única y exclusivamente cuando lo que se pretende es atacar la competencia de la Honorable Corte, pues para ello existen otros mecanismos expresamente regulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Corte Interamericana. En síntesis, Colombia considera que el control de legalidad, desde ninguna perspectiva, pugna con la autonomía e independencia de la CIDH, es más, dicha función

[6] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Párr. 54.

siembra en las partes mayor confianza –seguridad jurídica- y por lo tanto garantiza transparencia en que la CIDH, de conformidad con esa autonomía, actuó de manera correcta.

Asimismo, considera el Estado que de ninguna manera existe una incompatibilidad entre el ejercicio del control de legalidad y un eventual pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Bien puede la Honorable Corte advertir que durante el trámite ante la Comisión Interamericana –cualquiera sea su etapa- se cometieron errores que redundaron en la afectación de garantías procesales de las partes y, al mismo tiempo, efectuar un análisis sobre el fondo; de hecho, no hacerlo podría configurar una afectación aun mayor, no solamente en perjuicio de las presuntas víctimas, sino también en desmedro de los derechos de los Estados.

En ese orden de ideas, considera el Estado que limitar el ejercicio del control de legalidad, a la configuración de una excepción preliminar, significa desconocer abruptamente que las funciones de la Honorable Comisión no se limitan exclusivamente a efectuar un análisis de competencia y admisibilidad, sino que trascienden más allá de eso y, por lo tanto, el control sobre sus actuaciones no puede recaer únicamente sobre esta "etapa inicial", sino que debe comprender cualquier actuación, incluso hasta la finalización de la etapa de fondo. De esta manera, sostener que el control de legalidad solamente procede cuando éste tiene vocación de excepción preliminar, es desconocer la naturaleza misma de la figura, la cual en ocasiones no se orienta a atacar la competencia de la Honorable Corte, sino a evitar la repetición de inconsistencias en perjuicio de las partes.

De conformidad con lo previamente expuesto, y antes de proceder con el análisis de los errores procesales cometidos en el caso bajo estudio, el Estado se permite aclarar, que el control de legalidad que se solicita en el presente caso, no se encuentra orientado a impugnar la competencia de la Corte para conocer de éste, de ninguna manera; de hecho, en coherencia con el reconocimiento de responsabilidad que efectuará el Estado en acápites subsiguientes, así como teniendo en cuenta la única excepción preliminar presentada, no se está cuestionando la competencia de este respetado Tribunal. Lo que se pretende, por el contrario, es que mediante el control de legalidad solicitado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre los errores procesales en los que incurrió la distinguida Comisión, de manera que se garantice seguridad jurídica para las partes intervinientes y, por consiguiente, se evite la repetición de situaciones similares en futuros trámites que se adelanten ante dicha instancia.

Habiendo hecho claridad en lo anterior, a continuación el Estado procede a evidenciar los yerros en los que incurrió la Honorable Comisión y sobre los cuales se le solicita a la Honorable Corte, efectuar un pronunciamiento. Para esos efectos, serán dos las cuestiones que se abordarán: **A.** el traslado inoportuno de documentación remitida por parte de los ilustres peticionarios, otorgando además plazos irrisorios para contestar; y **B.** la falta de motivación de la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo.

A. La Honorable Comisión trasladó al Estado observaciones de los peticionarios, luego de transcurridos más de diez años de su presentación y luego de transcurridos cuatro años de la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo.

Mediante comunicación de 7 de marzo del año 2000, la Honorable Comisión le notificó al Estado colombiano la presentación de la petición "Vereda La Esperanza", otorgándole un plazo de 90 días para efectuar sus observaciones sobre el contenido de la denuncia.

En respuesta a dicha comunicación, mediante nota de 7 de junio del mismo año, el Estado presentó sus primeras observaciones, argumentando que la petición debería ser declarada inadmisible, de conformidad con la falta de agotamiento de los recursos internos, como quiera que las investigaciones se encontraban en curso y por lo tanto se estaban cumpliendo a cabalidad las obligaciones internacionales.

Posteriormente, mediante nota de 30 de junio del año 2000, la Comisión Interamericana remitió las partes pertinentes con información presentada por los Ilustres peticionarios; A su vez, mediante nota de 1 de septiembre de 2000, el Estado remitió su respuesta al escrito de los peticionarios; Luego de ello, mediante comunicaciones de 11 de octubre de 2000 y 8 de noviembre del mismo año, la Honorable Comisión remitió información adicional aportada por la representación de las presuntas víctimas; Frente a estos escritos, el Estado se pronunció mediante nota de 14 de diciembre del año 2000.

Luego del correspondiente intercambio de las mencionadas comunicaciones entre las partes, el trámite de la petición fue suspendido durante un lapso significativo de tiempo, en la medida en que no se volvió a presentar información por parte de los ilustres representantes, o al menos no se había procedido con el traslado de ésta por la Honorable Comisión. No obstante, mediante Nota de 21 de abril de 2010, la Comisión Interamericana le informó al Estado que:

> "(…) tras una revisión del expediente del caso de referencia, a la CIDH no le consta si trasladó al Estado con anterioridad los escritos de los peticionarios de **23 de marzo de 2000** (junto con un DVD que contiene las declaraciones de las presuntas víctimas y testigos de los hechos, así como de un fragmento de una entrevista televisiva de Ramón Isaza), de **20 de enero de 2001**, de **2 de julio de 2002**, de **25 de agosto de 2003** y de **marzo de 2006** (junto con un DVD que contiene una entrevista realizada a Ramón Isaza el 7 de febrero de 2006). A los efectos de que el Estado cuente con un expediente completo, la Comisión realiza el traslado **y solicita a su Ilustre Gobierno que presente las observaciones que considere pertinentes en el plazo de un mes**." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

De conformidad con lo anterior, el Estado pudo concluir que el trámite no se encontraba suspendido pues los peticionarios efectivamente habían continuado aportando información, con la particularidad que ésta nunca fue trasladada al Estado para su conocimiento. Así, en el transcurso de seis años, esto es, entre el año 2000 y el año 2006, se presentaron sendos escritos por parte de los representantes, sin que se le otorgará oportunamente una posibilidad razonable al Estado para pronunciarse sobre el contenido de éstos, por el contrario, tal y como se evidencia en el párrafo anteriormente citado, **solamente se le otorgó plazo de un mes** para efectuar observaciones con relación a información presentada varios años atrás, la cual por su volumen debía ser estudiada detenidamente por parte de las autoridades colombianas concernientes.

Desde esa perspectiva, considera el Estado que al tratarse de un error de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ninguna manera imputable al Estado, se le debió otorgar un término prudencial y razonable a éste, no solo para analizar la información remitida por los peticionarios, sino además para recopilar los insumos necesarios para responder, lo cual por el paso del tiempo se tornaba aún más complejo. Por consiguiente, la Honorable Corte podrá percatarse de que el Estado solamente tuvo conocimiento de la información aludida, luego de transcurridos más de diez años, contados a partir de la comunicación del año 2000, tiempo durante el cual los documentos estuvieron a disposición de la Comisión Interamericana.

Ahora bien, un aspecto adicional, y no menos importante, que deberá tener en cuenta este Honorable Tribunal es que durante los diez años que transcurrieron entre la presunta suspensión del trámite –año 2000-, y el traslado tardío de la documentación –año 2010-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la decisión de diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y

decisión sobre el fondo[7], teniendo en cuenta para ello información que fue aportada por los peticionarios pero que no pudo ser controvertida de manera oportuna por parte del Estado.

Así las cosas, la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicación de 11 de octubre de 2006, tuvo en cuenta información aportada por los peticionarios en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2006, mientras que del Estado solamente consideró las alegaciones efectuadas en el año 2000, lo cual a todas luces riñe, no solamente con el principio de igualdad de armas, sino que además vulnera flagrantemente el derecho de contradicción. Se trata entonces de una decisión que fue adoptada de manera irregular, toda vez que se fundamentó en información y pruebas aportadas únicamente por una de las partes, que por no haber sido trasladada oportunamente al Estado, éste no pudo controvertir y, en consecuencia, se decidió con información parcializada y con un vacío significativo en el expediente internacional, que de no haber existido, eventualmente hubiera cambiado sustancialmente el rumbo del proceso.

Aunado a lo anterior, es oportuno recordar en esta instancia, que desde el mismo momento en que el Estado fue informado del error en el traslado de la documentación, manifestó su inconformidad con éste, así como con el plazo que fue otorgado por la Honorable Comisión, para pronunciarse sobre la información remitida. En efecto, mediante diversas comunicaciones[8], el Estado dejó expresa constancia de la gravedad de la situación, poniendo de presente diferentes aspectos que vulneraban su derecho de defensa, veamos:

- **Comunicación DIDH No. 29737/0539 de 21 de mayo de 2010**

Antes que nada, cabe recordar que en la multicitada comunicación de 21 de abril de 2010, la H. Comisión no solamente le otorgó plazo de un mes para pronunciarse sobre el volumen de la documentación y pruebas aportada por los peticionarios, sino que dentro de este mismo término, el Estado debía pronunciarse sobre el eventual inicio de un trámite de solución amistosa, y además, remitir copia de las principales piezas procesales de los expedientes penal, disciplinario, y contencioso administrativo. Todo ello, se reitera, dentro del término de un mes.

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota de 11 de octubre de 2006
[8] Comunicaciones de: 21 de mayo de 2010, 25 de junio de 2010, 12 de julio de 2010, 8 de septiembre de 2010.

Ante ese panorama, y como quiera que resultaba evidente la imposibilidad de cumplir con dicho plazo, el 21 de mayo de 2010 el Estado se vio en la necesidad de solicitar una prórroga para pronunciarse sobre todos y cada uno de los requerimientos efectuados, y así evitar que se "lastimara su derecho de defensa". En esa medida, dejó absoluta claridad en que debido a la cantidad de información transmitida de manera tardía, se requería proceder con un "estudio responsable y necesario de los documentos de los peticionarios", razón por la cual hasta que eso no sucediera, tampoco se podría emitir una respuesta sobre el ofrecimiento de iniciar un trámite de solución amistosa.

- **Comunicación DIDHD.GOI. No. 37075/0659 de 25 de junio de 2010**

El Estado puso en conocimiento de la H. Comisión que "algunas de las mencionadas pruebas y documentos [referidas en la comunicación de 21 de abril de 2010] aún no habían sido oficialmente trasladas al Estado". Teniendo en cuenta esto, se solicitó que sean trasladados "todos y cada uno de los documentos e indicios de prueba mencionados", dejando constancia de que "en la medida en que dichos documentos y pruebas no sean debida y oficialmente remitidos al Estado en su totalidad, es improcedente que Colombia se pronuncie sobre éstos **ya que su contradicción sería imparcial e incompleta, aspecto que quebrantaría el derecho de defensa del Estado**." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Comunicación DIDHD.GOI. No. 39733/0715 de 12 de julio de 2010**

Teniendo en cuenta que hasta esta fecha el Estado no había recibido respuesta alguna por parte de la CIDH, respecto de los planteamientos efectuados en las dos comunicaciones anteriores, el 12 de julio de 2010 se dirigió a la distinguida Comisión de la siguiente manera:

> "(…) a pesar de que al día de hoy el Estado no ha recibido una comunicación oficial de la H. Comisión pronunciándose específicamente sobre el tema, **situación que ha mantenido la confusión sobre el efectivo traslado de la totalidad de los documentos** de la comunicación de fecha 21 de abril de 2010, el Estado solicita respetuosamente a la H. Comisión Interamericana que:

(i) Realice un inventario detallado de cada uno de los documentos mencionados en comunicación de 21 de abril de 2010, numerando cada uno de los anexos, especificando cuáles son trasladados y el número de folios de cada uno de dichos documentos, para así verificar si efectivamente el Estado cuenta con la totalidad del expediente mencionado en la comunicación de 21 de abril de 2010.
(ii) **Establezca un plazo razonable y determinado con el que contaría el Estado para pronunciarse sobre todos los documentos trasladados por los peticionarios**, una vez haya sido elaborado y trasmitido oficialmente a Colombia el requerido inventario." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

De conformidad con lo previamente expuesto, para el Estado es claro que la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo no se adoptó con base en información actualizada **presentada por ambas partes**, sino que tuvo en cuenta como última información, aquella que fue remitida por parte de los representantes en el año 2006. De esta manera, y de habérsele dado la oportunidad al Estado de demostrar oportunamente la inadmisibilidad de la petición, seguramente el devenir procesal sería diferente.

A partir de lo anterior, es decir del grave error procesal cometido en sede de la Honorable Comisión, surge el segundo de los planteamientos efectuados por el Estado *supra*:

B. La ausencia de motivación en su decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo.

Respecto de esta cuestión, es pertinente recordar que mediante Nota fechada 11 de octubre de 2006, la H. Comisión le notificó al Estado su decisión de diferir el tratamiento de admisibilidad de la petición hasta el correspondiente debate y decisión sobre el fondo. No obstante, en la comunicación aludida no se hace una argumentación que justifique jurídicamente la aplicación del artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión, tornándose así en una decisión inmotivada.

Como consecuencia de lo anterior, el Estado envió sendas comunicaciones[9] a la H. Comisión, solicitando un pronunciamiento en el que se explicaran las razones por las cuales se adoptó la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. En ese sentido, le solicitó expresamente que señalara por qué en este

[9] Escritos del Estado de: 22 de noviembre de 2006, 9 de abril de 2007, 23 de enero de 2008, 12 de mayo de 2008.

caso se presentaron las circunstancias excepcionales de las que trataba el entonces artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, desafortunadamente transcurrió más de un año, contado a partir de la primera vez que el Estado solicitó la motivación de la decisión, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará al respecto. Fue así, que hasta el 15 de febrero de 2008, la Honorable Comisión respondió los cuestionamientos del Estado, señalando que los motivos que originaron su decisión de acumular las etapas, eran básicamente tres: **(i)** el periodo de tiempo que demoró el trámite ante la Comisión; **(ii)** la oportunidad que tuvieron las partes para presentar información y alegatos, y **(iii)** la falta de respuesta del Estado.

1. El tiempo transcurrido en la etapa inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obedece a actuaciones dilatorias imputables al Estado.

Con respecto al primer argumento, es decir en lo que tiene que ver con el tiempo que demoró el trámite en sede de la CIDH, el Estado se permite manifestar que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia y desde ninguna perspectiva, se trata de una circunstancia que pueda ser imputable a las partes. Si bien para la época en la que se adoptó la decisión de unificar las etapas, la petición llevaba seis años en trámite, ello no obedeció a inactividad o ausencia de la representación de las víctimas o del Estado, de ninguna manera. Por el contrario, desde el inicio del trámite, es decir en el año 2000, el Estado y los peticionarios presentaron diversos escritos en los que plasmaron sus alegaciones, controvirtiendo la posición de la otra parte.

Pese a lo anterior, no sucedió igual con el comportamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que por razones hasta este momento desconocidas, mantuvo inactiva la petición durante cuatro años, esto es, entre el año 2000 y el año 2004. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que durante esos cuatro años, y como ya se mencionó, los peticionarios aportaron pruebas e información que NO fue transmitida oportunamente al Estado, razón por la cual éste solo tuvo conocimiento de dicha actividad procesal hasta el año 2010. Finalmente, y para sorpresa del Estado, en el año 2006, es decir dos años luego de reactivado el trámite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide postergar el análisis de la admisibilidad hasta la etapa de fondo.

Así las cosas, se concluye que la presunta demora que habría configurado la acumulación de ambas etapas, obedeció única y exclusivamente al periodo de inactividad que se presentó durante los años 2000 a 2004, tiempo en el que el trámite se surtió a instancias de la H. Comisión, razón por la cual es allí donde debe recaer cualquier tipo de responsabilidad, y no en las partes involucradas.

2. El Estado no tuvo igualdad de oportunidades para presentar observaciones, alegatos y pruebas.

Ahora bien, la CIDH menciona como segunda razón, la oportunidad que tuvieron las partes para presentar información y alegatos, afirmación por demás equivocada como se demostrará a continuación. Se ha insistido en el flagrante error en el que incurrió la CIDH al no trasladar oportunamente información y pruebas remitidas por los Ilustres peticionarios. Información que demoró más de diez años en conocer el Estado; información que para la fecha de la decisión de acumulación, todavía no conocía; información sobre la cual no pudo pronunciarse y, mucho menos, controvertir; e información que sirvió como sustento para la decisión de la H. Comisión. Se cuestiona entonces el Estado si en realidad ¿tuvo la oportunidad para presentar información y alegatos?

La respuesta es evidente Honorable Corte, no la tuvo. Desafortunadamente, el Estado no contó con la posibilidad de presentar alegaciones, de hecho y de derecho, que permitieran desvirtuar el cúmulo de información y de material probatorio aportado por la representación de las presuntas víctimas; tampoco tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, respecto de las afirmaciones que se expresaban en dichos documentos, todo ello por la única razón que el Estado ni siquiera tenía conocimiento de que los peticionarios habían presentado escritos ante la CIDH. En ese orden de ideas, el Estado de manera respetuosa disiente ostensiblemente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando señala que se le permitió a las partes la presentación de alegatos y de información, lo cual podrá ser efectivamente corroborado por este Honorable Tribunal.

En suma, los ilustres peticionarios presentaron alegatos y aportaron pruebas en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2006, mientras que el Estado solamente tuvo la oportunidad de hacerlo en el año 2000, bajo el entendido que la petición se encontraba inactiva, presuntamente por la falta de actividad de los peticionarios, y en consecuencia no habría información que controvertir o desvirtuar.

3. El Estado presento respuesta a todos y cada uno de los escritos que fueron remitidos debida y oportunamente, es decir, a los escritos presentados por los peticionarios en el año 2000.

En tercer lugar, respecto de la falta de respuesta del Estado, Colombia considera que no es necesario redundar más en el argumento. Basta entonces con señalar que materialmente se hace imposible dar respuesta a documentos e información sobre los cuales no se tiene conocimiento, para desvirtuar el raciocinio de la H. Comisión. En la medida en que los documentos y pruebas aportadas por los peticionarios no fueron transmitidos en debida forma y oportunidad, no se le puede exigir al Estado un comportamiento diferente al que efectivamente tuvo. No se puede sostener, como equivocadamente lo hace la CIDH, que en el presente caso existió "falta de respuesta del Estado", como quiera que se ha dejado claro que frente a los documentos efectivamente trasladados el Estado ejerció su derecho de defensa y se pronunció dentro de los términos reglamentarios concedidos; cosa diferente, es exigir una respuesta sobre información que no fue transmitida y respecto de la cual no se tenía conocimiento, ya que de ser así se estaría obligando a lo imposible, situación que desde ninguna óptica es admisible.

En síntesis, de manera respetuosa, el Estado considera que las tres razones esbozadas anteriormente, más que ser imputables a las partes, son atribuibles única y exclusivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien no podrá alegar su propia culpa para justificar la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. Por consiguiente, estamos al frente de una decisión carente de motivación, que *per se*, transgrede garantías procesales y desconoce el debido proceso del Estado colombiano. Sobre el particular ha establecido la Honorable Corte Constitucional que:

> "(…) la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, como garantía ciudadana. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia."[10]

Con fundamento en lo previamente expuesto, a la fecha no se vislumbra la razón o razones que condujeron a la CIDH a postergar el análisis de la admisibilidad de la petición. Sin embargo, lo que sí está claro, es que en el presente caso no

[10] Corte Constitucional. Sentencia SU 424/12 de 6 de junio de 2012.

se verifican las circunstancias excepcionales que darían paso a una eventual acumulación de etapas, con lo cual se evidencia un error procedimental, reflejado en la adopción de una decisión que al no tener sustento jurídico por carecer de motivación, o mejor aún, estar sustentada en información aportada por una de las partes, sin ser sometida a contradicción, merece un pronunciamiento por parte de esta Honorable Corte, orientado a fijar las consecuencias jurídicas de esta clase de actuaciones y, por ende, evitar su ocurrencia en futuros asuntos.

Adicionalmente, el Estado se permite informar a la Honorable Corte, que las inconsistencias señaladas fueron oportunamente evidenciadas ante la respetada Comisión, no solamente en las comunicaciones ya referidas, sino también en la Audiencia celebrada el 23 de octubre de 2008, en el marco del 133° Periodo Ordinario de Sesiones, oportunidad en la que se demostró cómo la argumentación de la CIDH, era improcedente de conformidad con el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En resumen, a continuación se extraen las conclusiones del presente acápite, las cuales servirán como fundamento a este respetado Tribunal, para proceder con el control de legalidad solicitado, en pro de las buenas prácticas del Sistema Interamericano, y en beneficio de los intervinientes en un litigio de esta naturaleza:

- La petición estuvo inactiva a instancias de la CIDH durante un periodo de 4 años, sin razón que lo justificara.
- Durante ese periodo de tiempo, incluso hasta el año 2006, los peticionarios aportaron información y pruebas que no fueron transmitidas de manera oportuna al Estado.
- La CIDH adoptó una decisión procesal con fundamento en información aportada solamente por una de las partes, con el agravante de que ésta no fue sometida a contradicción.
- Transcurrieron más de 10 años para que el Estado pudiera tener acceso a la información y poder ejercer su derecho de defensa y contradicción respecto de ésta, aun cuando la decisión de acumular etapas había sido adoptada cuatro años atrás.
- Los plazos otorgados al Estado durante ese periodo de tiempo fueron irrisorios, desconociendo las circunstancias propias del caso y omitiendo el grave error en el que incurrió la H. Comisión.

A la luz de todo lo anteriormente dicho, y luego de haber demostrado que en el presente caso la respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incurrió en graves errores, que de no haberse presentado, habrían conducido el

proceso por un cauce distinto, por lo menos en el marco del cual se garantizara el debido proceso legal, el Estado considera que el caso Vereda La Esperanza representa una oportunidad valiosa e importante, para que por medio de sus pronunciamientos, sea la Honorable Corte quien fije derroteros orientados a garantizar el equilibrio procesal, estableciendo además consecuencias jurídicas para la o las partes que no se adecúen a ellos.

En ese orden de ideas, se reitera en esta oportunidad la preocupación que ha venido manifestando el Estado colombiano[11], respecto de la repetición de las mismas irregularidades y yerros procesales, en varias de las peticiones y casos que cursan ante la H. Comisión, sin que existan mecanismos efectivos tendientes a modificar las prácticas de la Comisión que, a pesar de no afectar estrictamente la competencia del Honorable Tribunal, sí generan desequilibrios procesales en el trámite ante la H. Comisión.

Finalmente, el Estado solicita respetuosamente a la H. Corte, incorporar en su sentencia un pronunciamiento, al menos con carácter declarativo, por medio del cual se invite a la CIDH a reglamentar las consecuencias jurídicas derivadas de asuntos como los ocurridos en el caso que nos ocupa, especialmente en lo que tiene que ver con el traslado tardío de piezas procesales, el cómputo de los términos en casos en que esto ocurra, así como de la imposibilidad de adoptar decisiones cuándo no se le ha permitido a la partes controvertir la totalidad de la información que reposa en el expediente.

III. EXCPECIÓN PRELIMINAR: FALTA ABSOLUTA DE REPRESENTACIÓN Y *LOCUS STANDI* EN CASOS CONTENCIOSOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado presenta la excepción preliminar de ausencia absoluta de representación y actuación en el trámite del presente caso contencioso de tres presuntas víctimas. Esto con el fin de que se excluyan del conocimiento de la H. Corte los alegados hechos violatorios de las CADH en relación con estas personas.

El Reglamento de la Corte Interamericana establece las reglas en materia de representación de las víctimas en el trámite de casos contenciosos en su sede. De esta manera el artículo 39.1.d) señala que la Secretaría de la Corte, una vez un caso contencioso sea sometido por la CIDH o por un Estado, comunicará del

[11] Contestación al escrito de sometimiento del caso y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Caso Yarce y otras Vs. Colombia.

mismo a "la presunta víctima, sus representantes, o el Defensor Interamericano, si fuere del caso". De esta norma se pueden extraer dos conclusiones: i) no es necesario que las presuntas víctimas estén obligatoriamente representadas en el trámite de casos contenciosos ante la Corte, es decir, si las víctimas, así lo quieren, podrán representarse a sí mismas; y ii) en caso de no tener representación y necesitar una, se les asignará un defensor interamericano.

En efecto, las presuntas víctimas pueden acudir y representarse a sí mismas ante la CorteIDH. De hecho, esto ocurrió en el caso *Barbani Duarte*, en el cual las señoras Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia Farro actuaron como presuntas víctimas, se representaron a sí mismas y a un grupo de las demás presuntas víctimas[12]. Esta circunstancia se presentó entre otras por la naturaleza accesible del Sistema Interamericano. Al respecto la CorteIDH ha señalado que "[e]l acceso del individuo al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no puede ser restringido con base en la exigencia de contar con representante legal"[13]. De esta forma, la falta de representación legal no afecta la jurisdicción de la Corte para conocer de un caso, toda vez que "[s]i no se admitiera una demanda porque se carece de representación, se incurriría en una restricción indebida que privaría a la presunta víctima de la posibilidad de acceder a la justicia"[14].

Por otro lado, es de anotar que en el pasado la eventual falta de representación de una víctima en un caso contencioso ante la H. Corte se subsanaba con la representación que la Comisión Interamericana ejercía. De acuerdo con el Reglamento de la Corte del año 2003, la CIDH asumía la representación legal de las víctimas que carecieran de ella, toda vez que señalaba en su artículo 33.3 que "la Comisión será la representante procesal de [las presuntas víctimas] como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las mismas"[15].

Sin embargo, tras la reforma reglamentaria de 2009 dicha disposición desapareció y en su lugar se creó la figura del "Defensor Interamericano". El artículo 37 del actual Reglamento de la CorteIDH señala que: "en caso de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal

[12] CorteIDH. *Caso Barbani Duarte y Otros v Uruguay*. Sentencia del 13 de octubre de 2011. Serie C, No 234. Párr. 5
[13] CorteIDH. *Caso Furlan y familiares v Argentina*. Sentencia del 31 de agosto de 2012. Serie C, No 246. Párr. 82.
[14] CorteIDH. *Caso Furlan y familiares v Argentina*. Sentencia del 31 de agosto de 2012. Serie C, No 246. Párr. 86.
[15] CorteIDH. Reglamento Aprobado por la Corte en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003 [On line http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/2003.pdf]

podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación del caso". Esta norma es concordante con lo dispuesto por la Asamblea General de la OEA, la cual mediante Resolución AG/RES/ 2426 de 3 de junio de 2008 dispuso la "Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", el cual fue reglamentado posteriormente por el Consejo Permanente de la misma organización.[16] Adicionalmente fue desarrollada por la Corte mediante el Reglamento sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia a Víctimas[17]. De acuerdo con esta normatividad, para que una presunta víctima que carezca de representación en un caso ante la Corte pueda obtener acceso al Fondo de Asistencia a Víctimas y, consecuentemente, la asignación de representación legal para el trámite contencioso, debe:

"hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Deberá demostrar, mediante declaración jurada y otros medios probatorios idóneos que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la Corte Interamericana e indicar con precisión qué aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas."[18]

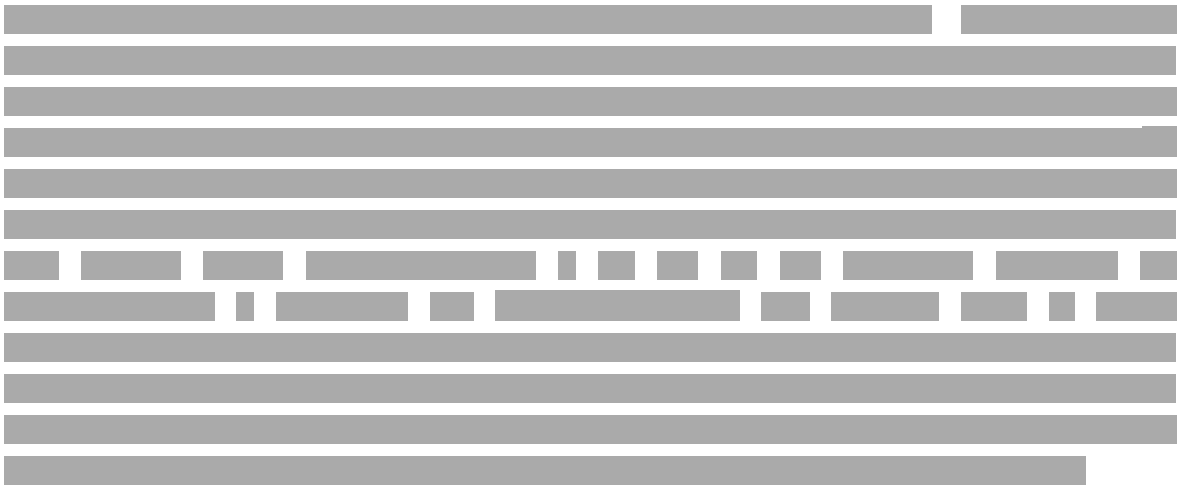
De esta manera, aquellas presuntas víctimas que expresamente lo soliciten y que cumplan con los requisitos, podrán optar por acceder al Fondo de Asistencias a Víctimas y a la asignación del defensor interamericano, tal como ha ocurrido ya en algunos casos contenciosos[19].

Este marco normativo define entonces que: i) no es un requisito para las presuntas víctimas acudir ante la CorteIDH en un caso contenciosos mediante representante legal; y ii) aquellas víctimas que carezcan de representación legal podrán solicitarle a la Corte la asignación de un Defensor Interamericano.

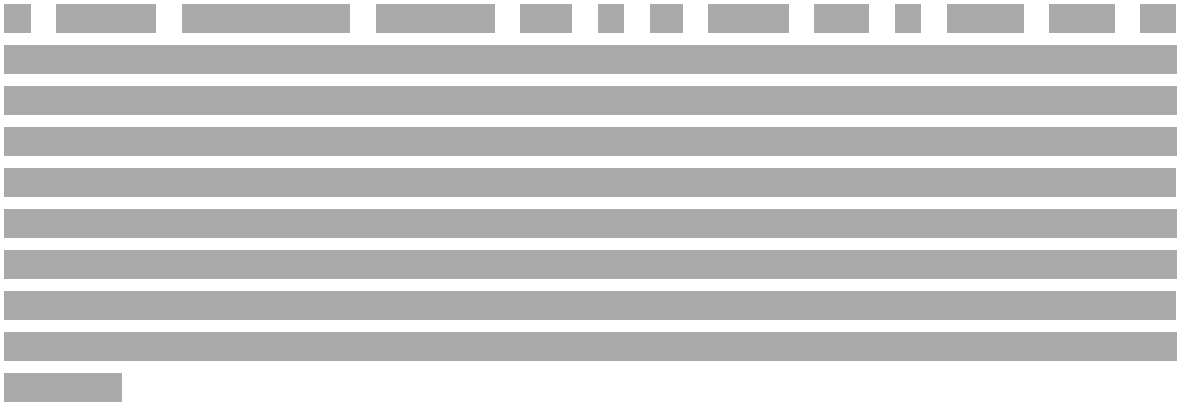
Es así como el acceso al trámite ante la Corte Interamericana parte del hecho de que las víctimas deseen o acudan a esta luego de que la Comisión someta el

[16] OEA. Consejo Permanente Consejo "Reglamento para el funcionamiento del fondo de asistencia legal del sistema interamericano de derechos humanos" . Resolución OEA CP/RES. 963 de 11 de noviembre de 2009.
[17] Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia a Víctimas. Adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica el día 4 de febrero de 2010, y vigente a partir del 1 de junio de 2010. [On line http://www.corteidh.or.cr/docs/regla_victimas/victimas_esp.pdf]
[18] Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia a Víctimas. Artículo 2.
[19] CorteIDH. *Caso Furlan y familiares v Argentina.* Sentencia del 31 de agosto de 2012. Serie C, No 246. Párr. 82; Caso *Mohamed v Argentina*. Sentencia del 23 de noviembre de 2012. Serie C, No 255. Párr. 6 y 7; *Caso defensor de Derechos Humanos y Otros v Guatemala.* Sentencia del 28 de agosto de 2014. Serie C, No 283. Párr. 36-41, y; Caso *Familia Pacheco Tineo v Bolivia.* Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C, No 272. Párr 4.

caso. En otras palabras, la Corte actúa -para estos efectos- a solicitud de parte en ejercicio de los casos contenciosos.



De acuerdo con la Convención (Artículo 61.1), únicamente los Estados Parte y la Comisión pueden someter un caso a la decisión de la Corte, por lo que en materia de casos contenciosos la Corte cobra competencia *ratone personae* si, y solo si, el caso es sometido por uno de dichos actores. Por su parte, una vez el caso es sometido a la Corte, las presuntas víctimas o sus representantes adquieren *locus standi* a lo largo del procedimiento, permitiéndoles participar activamente a través del ESAP, la intervención en las audiencias, el escrito de argumentos finales, entre otros. De esta manera el Sistema Interamericano garantiza la participación de las presuntas víctimas. Sin embargo, ninguna de las disposiciones de la Convención o del Reglamento de la Corte señala que esta pueda actuar de oficio o *motu proprio* para conocer de un caso o respecto de presuntas víctimas que no hayan acudido al procedimiento del caso contencioso.



[20] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas. Pág 9, pie de página 11.
[21] CIDH. Nota del sometimiento del caso No. 12.251, *Vereda La Esperanza v Colombia.* 13 de diciembre de 2014.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IV. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD: LOS HECHOS COMETIDOS POR MIEMBROS DE LAS AUTODEFENSAS ILEGALES -TERCEROS PARTICULARES- NO CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Desde años atrás, el Estado colombiano ha venido informando a la Honorable Corte, respecto de la génesis del conflicto armado y de cómo éste se ha venido

[22] Por ejemplo el Barrons Law Dictionary define *appearance* como: "*to come into court, upon being summoned*".

acrecentado, no solamente con la participación de nuevos actores, sino además con el recrudecimiento de las acciones delictivas, la aparición de nuevos métodos de guerra, la capacidad armamentística de los GAOML, y la frecuencia cada vez mayor de episodios dolorosos para el país.

A partir de lo anterior, la Honorable Corte ha dedicado importantes líneas de sus pronunciamientos, a describir algunos capítulos de dicho conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con las acciones delictivas de los grupos de autodefensas ilegales. De esta manera, el Estado ha sido condenado en casos en los cuales se ha evidenciado la responsabilidad internacional de Colombia, como consecuencia de una concreción o materialización de una situación de riesgo; o bien, en eventos en los que a partir del material probatorio recabado, se ha logrado demostrar una participación –por acción u omisión- en la comisión de los hechos.

Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que tanto los ilustres peticionarios[23], como la distinguida Comisión[24], refieren en sus escritos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá extrapolar los efectos del "vínculo" encontrado en causas pasadas[25], a los hechos del caso Vereda La Esperanza, sin detenerse en un análisis que demuestre, o mejor, justifique las razones por las cuales ello es procedente, a continuación el Estado demostrará que la argumentación de la H. Comisión configura lo que sería una imputación de responsabilidad objetiva, contraria a los estándares del Derecho Internacional público, y en contravía del régimen de responsabilidad internacional de los Estados.

Con ese derrotero trazado, el presente acápite abordará diferentes cuestiones, todas encaminadas a evidenciar cómo las providencias de este Honorable Tribunal en los casos colombianos, y los pronunciamientos en ellas esbozados, no tienen aplicación en el presente sumario. Para esos efectos, se comenzará por abordar lo concerniente a: **A.** el desmantelamiento de los grupos de autodefensas; **B.** luego de ello, se procederá con el análisis de la responsabilidad del Estado de conformidad con el Derecho Internacional Público; **C.** finalmente, se demostrará que en el presente caso no existe un fundamento del que emane la responsabilidad internacional del Estado colombiano.

A. El fenómeno de las autodefensas en Colombia: desde su creación de manera autónoma, hasta su desmonte por parte del Estado.

[23] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 130
[24] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escrito de sometimiento. Párr. 196
[25] Caso de los 19 comerciantes, Masacre de la Rochela, Masacre de Pueblo Bello, entre otros.

A partir de la década de los años sesenta del siglo XX, comenzaron a surgir en Colombia diversos grupos guerrilleros que se consolidaron progresivamente y afectaron la seguridad y el orden público del país. Debido a esta situación, el Estado tuvo que implementar medidas normativas que por diversas circunstancias, ajenas a la voluntad de la administración, y alejadas de cualquier política estatal, despuntaron en el surgimiento de grupos delincuenciales autodenominados como autodefensas. No obstante, y en aras de conjurar su proliferación, el Estado colombiano ha desarrollado las siguientes acciones:

El 19 de abril de 1989, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 813 "por medio del cual se dictaron disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares y creó una comisión coordinadora y asesora para este propósito".[26] Esta comisión estaba conformada por el Ministro de Gobierno, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa Nacional, el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional. La disposición en cuestión fue adoptada como legislación permanente mediante el Decreto 2254 de 3 de 1991[27].
En el mismo año, el Gobierno expidió el Decreto 814 mediante el cual "se creó el cuerpo especial armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, o grupos de autodefensa o justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares" integrado por cerca de mil efectivos armados que formaban parte del personal activo de la Policía Nacional. Esta disposición fue adoptada como legislación permanente mediante el Decreto 2253 del 3 de octubre de 1991[28].

Así mismo, el 3 de diciembre de 1997, se expidió el Decreto 2895 a través del cual se creó el "Bloque de Búsqueda" de los Grupos de Justicia Privada, considerando que los mencionados grupos habrían incrementado y que constituían un grave factor de alteración del orden público que atentaba seriamente contra los derechos de la población civil[29].

[26] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006. (Anexo 1)
[27] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[28] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[29]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración

Igualmente, el 25 de febrero de 2000, se expidió el Decreto 324 mediante el cual se creó el Centro de Coordinación de la Lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, así como una comisión intersectorial dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de coordinar las políticas de persecución contra dichos grupos[30].

Ahora bien, además del marco normativo aludido, al interior de las Fuerzas Militares se establecieron diversas órdenes con la finalidad de contrarrestar el actuar de los grupos de autodefensas. Así, el 20 de noviembre de 1996, se expidió el oficio No. 18289 por medio del cual se emitieron órdenes de carácter permanente relacionadas con la implementación efectiva de la política institucional de no aceptar, tolerar o apoyar a grupos u organizaciones de autodefensa o grupos de justicia privada[31].

En 1997, se expidió la Circular No. 16658 CGMF-EMCD3-PO-375, por medio de la cual se profirieron órdenes permanentes que buscaban controlar a los grupos de autodefensas y evitar su expansión territorial, y se reiteró la estrategia del Comando General de las Fuerzas Militares en el sentido de adelantar una ofensiva permanente contra los grupos que efectuaban actos de violencia tales como los narcoterroristas, las milicias, los narcotraficantes, y los grupos de justicia privada, entre otros[32].

En 1998, fue expedida la Directiva Transitoria 300-5 referida a las misiones que le fueron asignadas a cada una de las Fuerzas en el marco de la operación que desplegaba el Bloque de Búsqueda de los Grupos de Justicia Privada, en coordinación con los demás organismos del Estado[33].

En el mismo año, y en vista de la situación de orden público que se presentaba en el país como consecuencia de las acciones delictivas efectuadas, entre otros,

del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

[30]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

[31] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

[32] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

[33] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

por grupos de delincuencia organizada, equivocadamente denominados como "paramilitares"[34], se emitió la Directiva Operacional Transitoria No. 300-46/98, mediante la cual se ordenó incrementar la capacidad operativa y de combate en contra de los agentes generadores de violencia.

El 18 de enero de 1999, fue expedido el oficio No. 018062 CGFM-EMCD3-PO375, mediante el cual se impartieron instrucciones encaminadas a mantener una actitud defensiva permanente ante agentes generadores de violencia, evitando así afectaciones en el orden público a nivel nacional[35]. El 27 de enero del mismo año, se emitió el oficio No. 018126 CGMF- EMCD3-PO-375, con el cual se reiteró el rechazo institucional frente a los vínculos del personal militar con grupos de autodefensas ilegales, y se ordenó que en caso de que se advirtiera alguna relación de este tipo, los funcionarios deberían responder disciplinaria y penalmente[36].

Asimismo, fue expedida la Directiva Transitoria 300-18 mediante la cual el Comando General de las Fuerzas Militares, emitió directrices y normatividad, referentes a la lucha contra los grupos ilegales de autodefensa. Además, el 22 de julio de 1999, se emitió el oficio No. 019200 CGFM-EMCD3-PO-375 en el que se impartieron instrucciones para neutralizar las amenazas de los agentes generadores de hechos de violencia[37].

En el año 2000, se implementó la Directiva Transitoria No. 300-13 del 11 de enero, mediante la cual se establecieron normas y criterios operacionales para el empleo de las Unidades Militares en la lucha contra el narcotráfico, considerando el estrecho vínculo de las organizaciones de narcotraficantes con grupos armados al margen de la ley. Igualmente, el 27 de abril, fue emitida una Directiva Operacional Transitoria mediante la cual el Comando General de las Fuerzas Militares, complementó las órdenes e instrucciones impartidas anteriormente, con la finalidad de neutralizar las acciones efectuadas por agentes generadores de violencia, y señaló políticas operacionales permanentes

[34]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[35]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[36]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[37]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

tendientes a incrementar la acción ofensiva en contra de todos los grupos armados al margen de la ley que actuaban en el territorio nacional, incluyendo a los grupos de autodefensas[38].

El 24 de agosto del mismo año, fue expedida la Circular No. 20479 CGFM – EMCD3-PO-748 mediante la cual se impartieron instrucciones exigiendo especial diligencia a las Unidades Militares en su actuar frente a los grupos ilegales, evitando así posibles omisiones. Esta Circular fue reafirmada por la Circular No. 3489 CEIGE-CDO-748 del 23 de octubre. Del mismo modo, a través de la Circular 20545 CGFM-EMCD3-PO-375 de 6 de septiembre se exigió a los Comandos de las Fuerzas Militares el logro de resultados tangibles en el marco de la lucha con contra de los grupos de autodefensas[39].

El 12 de marzo de 2001 se emitió la Directiva Operacional Transitoria No 300-13, mediante la cual el Comando General de las Fuerzas Militares emitió normas y fijó criterios para la ejecución de operaciones estratégicas, en cumplimiento de la misión constitucional de combatir a los actores generadores de violencia. En igual sentido, el Comando de Infantería de Marina emitió la Circular No. 0445 CIMAR-EMIMI3-893, de 4 de abril de 2000, mediante la cual se impartieron instrucciones para fortalecer la lucha en contra de las autodefensas[40].

En este mismo año, se expidió la Directiva Operacional No. 300-37 de 10 de agosto, a través de la cual se impartieron instrucciones para contrarrestar cualquier escalada armada y terrorista en contra de sectores económicos e instalaciones públicas y privadas. En este mismo sentido, con la finalidad de reforzar la lucha en contra de los grupos armados ilegales, dentro de los cuales se encuentran los grupos de autodefensas, fueron emitidas la Circular No. 20545 CGFM-EMCD3-PO-375 de 6 de septiembre de 2001 y la Directiva Operacional Transitoria No. 300-51 del 29 de octubre[41].

[38]Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[39] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[40] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[41] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

El 11 de julio de 2002, fue emitida la Directiva Transitoria No. 300-39 A, con el objeto de establecer las acciones destinadas a contener y reprimir los actos terroristas ejecutados por diversos agentes, y así proteger a la población civil[42]. El 10 de octubre de 2003, se implementó la Directiva Operacional Permanente 300-68 del 10 de octubre, a través de la cual se impartieron órdenes encaminadas al fortalecimiento de las operaciones en contra de los grupos de autodefensas[43].

El 17 de agosto de 2004 fue expedida la Circular No. 7806 CGFM-ING-DH-DIH-725, mediante la cual el Comandante General de las Fuerzas Militares enfatizó que los miembros de las Fuerzas Militares no pueden tener ningún tipo de relación con los grupos de autodefensas, y deben combatirlos efectivamente[44]. El 31 de octubre de 2005, fue expedida la Directiva No. 8259 COE-ING-DH-DIH-725, a través de la cual se emitieron órdenes con el fin de fortalecer los esfuerzos realizados en el marco de la lucha en contra de las autodefensas. Asimismo, mediante la Directiva Operacional No 300-13 del 8 de septiembre del mismo año, se ordenó tomar el control territorial de las zonas despejadas por los grupos ilegales[45].

En el año 2006, se profirió la Directiva 300-12 CGFM-JEMC-JEOPC.JODOC-AS-375 de 5 de junio, mediante la cual se expidieron normas para las Fuerzas Militares, orientadas a combatir a los grupos de delincuencia organizada que no se acogieron a la ley de reincorporación. El mismo año, el 12 de septiembre, se emitió la Directiva Transitoria No. 300-20, por medio de la cual la Jefatura de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, emitió órdenes para fortalecer la inspección, empadronamiento y destrucción del material de guerra entregado por las autodefensas, y garantizar la seguridad en el traslado del mencionado material[46].

[42] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[43] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[44] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[45] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[46] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).

Ahora bien, la implementación de las órdenes y directrices citadas, generó importantes resultados operacionales que han sido reportados por la Central de Inteligencia Conjunta de las Fuerzas Militares. De esta manera, durante el año 2001, se reportaron 1.551 neutralizaciones y 6.359 capturas de miembros de las autodefensas. Entre los años 2002 y 2006, se reportaron 1.551 neutralizaciones, 6.359 capturas y 1.077 entregas voluntarias de miembros de los mencionados grupos ilegales[47].

Igualmente, se incautaron 3.030 armas de largo alcance, 3.581 armas de corto alcance, 435 armas de apoyo, 6.509 granadas, 1.649.965 municiones de diferentes tipos, 2.898 equipos de comunicación, 2.095 equipos de transporte como aeronaves, vehículos, motocicletas y lanchas, y 43.075 explosivos[48].

Específicamente, en el departamento de Antioquia durante el año 2002, fueron judicializadas 170 personas por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, homicidio y secuestro, entre otros. 48 personas fueron capturadas, 26 por el delito de rebelión, 12 por el delito de concierto para delinquir, 1 por homicidio y 9 por secuestro. Igualmente fueron liberadas 5 personas que habían estado secuestradas[49].

Asimismo, se decomisaron 68 armas de fuego de distintos calibres como fusiles, sub ametralladoras, lanza granadas, revólveres, pistolas y escopetas, y munición correspondiente a 6.677 cartuchos de diferentes calibres. De igual modo, se incautaron 560 kilos de explosivos entre R1, barras de indugel, y nitrato de amonio, entre otros[50]. Dentro del material de intendencia y apoyo logístico se encontraron uniformes camuflados de las Fuerzas Militares, uniformes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y radios de comunicación de distintas referencias[51].

Por su parte, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre el contexto normativo y la responsabilidad de Colombia por haber emitido en el marco de la lucha contra grupos

[47] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[48] Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006 (Anexo 1).
[49] Ministerio de Defensa Nacional, Oficio Radicado No. OFI14-72837 MDN –DVPAIDH de 20 de octubre de 2014.
[50] Ministerio de Defensa Nacional, Oficio Radicado No. OFI14-72837 MDN –DVPAIDH de 20 de octubre de 2014.
[51] Ministerio de Defensa Nacional, Oficio Radicado No. OFI14-72837 MDN –DVPAIDH de 20 de octubre de 2014.

guerrilleros, disposiciones normativas[52] a través de la cuales se habría propiciado la creación de grupos de autodefensa[53], que posteriormente derivarían en grupos delincuenciales[54].

Sobre el particular, la Corte y la CIDH en sus pronunciamientos han reconocido las medidas que ha tomado el Estado con la finalidad de contrarrestar los nuevos fenómenos delictivos. Por su parte la H. Corte ha señalado que el 27 de enero de 1988 "Colombia empezó a tomar medidas, entre ellas legislativas, para "contrarrestar" las nuevas modalidades delictivas que realizaban tales grupos"[55]. Al respecto, ha resaltado la Honorable Corte que "[e]n abril de 1989 se emitió el Decreto 0815, mediante el cual se suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto Legislativo 3398 de 1965 […], el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que en la parte considerativa de dicho Decreto, se indicó que "la interpretación de[l Decreto legislativo 3398 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968,] por algunos sectores de la opinión pública ha causado confusión sobre su alcance y finalidades en el sentido de que se puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes"[56].

[52] Se trata del Decreto Legislativo 3398 de 1965, el cual fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, emitidos en el marco de la lucha contra grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró "turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional". Los artículos 25 y 33 del Decreto Legislativo 3398 dieron fundamento legal para la creación de "grupos de autodefensa". El referido artículo 25 estipuló que "[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad". Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que "[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas". Cfr. Caso 19 Comerciantes, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 84.a.

[53] El objetivo de dichos grupos era movilizar a la población civil para auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. Cfr. Caso 19 Comerciantes, nota 33, párr. 84.b).

[54] Cfr. Caso 19 Comerciantes, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.c) y 115 a 124.

[55] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.f y 120; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.4; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.5 y 125; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.3; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.84 y ss.

[56] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.g y 120; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.5; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.4; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.86.

Asimismo, el Tribunal ha destacado que "mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró "inexequible" el referido parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965"[57].

En igual sentido, la Corte ha resaltado que "[e]l 8 de junio de 1989 el Estado expidió el Decreto 1194 "por el cual se adiciona el Decreto legislativo 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público". En la parte considerativa de esta norma se expuso que "los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país, han demostrado que existe una nueva modalidad delictiva consistente en la comisión de actos atroces por parte de grupos armados, mal llamados "paramilitares", constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción afectan gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos"[58].

De acuerdo a lo reconocido por la propia Corte "[e]n este Decreto se tipificó la promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de actos "tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares. También se tipificó la vinculación y pertenencia a dichos grupos, así como el instruir, entrenar o equipar "a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de las actividades delictivas" de los referidos grupos armados"[59].

Así mismo, el Tribunal ha estimado importante resaltar que el Decreto en cuestión "estipuló como agravante de las anteriores conductas, el hecho de que fueran cometidas por miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional o de organismos de seguridad del Estado"[60].

[57] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.g y 120; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.4; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr.87.

[58] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.h y 121; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.6; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.12 y 125; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.5.

[59] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 84.h y 121; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.6; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.12 y 125; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.5.

[60] Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 121; Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.6; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia

Luego de la implementación de todo el marco normativo referido, el Estado continuó tomando medidas para controlar el actuar de los grupos de autodefensas mediante la creación de organismos encargados de investigar y sancionar las conductas cometidas por éstos, y a través de la progresiva implementación de un marco normativo que propendía por la desarticulación de los grupos mencionados y su reinserción a la vida civil.

En este orden de ideas, la Corte ha reconocido que el Estado colombiano creó mediante el Decreto 324 de 25 de febrero de 2000, el Centro de Coordinación de la Lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley[61].

Asimismo, ha resaltado que, en respuesta a la manifestación de algunos de los principales líderes de las autodefensas sobre su voluntad de iniciar conversaciones con el Estado con la finalidad de buscar la desmovilización, el Estado implementó diversas disposiciones que buscaron lograr la desarticulación de estos grupos, garantizado los derechos de las víctimas[62].

Al respecto, el Tribunal ha reconocido que "[e]l 22 de enero de 2003 el Estado expidió el Decreto 128, "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil", según el cual se establecen "beneficios jurídicos socioeconómicos" y de otra índole para las "organizaciones armadas al margen de la ley" que se hayan sometido al programa de desmovilización. El artículo 13 del Decreto contempla que […] tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las Armas –CODA– expida la certificación […][63]"

de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.12 y 125; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.5.

[61] Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.11; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.19; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.15.

[62] Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 96.12 y ss; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.19; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.15.

[63] Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 96.13; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.17.

A su vez, ha resaltado que "el artículo 21 de dicho Decreto excluye del goce de estos beneficios a […] quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios"[64].

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el 24 de noviembre de 2003 el Estado expidió el Decreto 3360 "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002", con la finalidad de fijar condiciones de procedimiento específicas para facilitar la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional[65]; y ha señalado igualmente que el 31 de agosto de 2004, el Estado emitió el Decreto 2767 "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil" que buscó fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitieran establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los beneficios a que se refiere la Ley 418 de 1997, una vez iniciado el proceso de desmovilización voluntaria[66]. Aunado a lo anterior, y con fundamento en estudios realizados por diversos organismos internacionales, la H. Corte ha señalado algunos de los resultados logrados mediante la implementación de los acuerdos a los cuales llegó el Gobierno con las autodefensas. Al respecto, el Tribunal ha destacado que el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo "en el cual el Gobierno y las AUC convinieron la desmovilización total de las fuerzas de éstas antes del 31 de diciembre de 2005. En 2003, las AUC contaban con aproximadamente 13.500 miembros. El 25 de noviembre de 2003, entregaron armas 874 integrantes del "Bloque Cacique Nutibara" de las AUC. A inicios de diciembre de 2004, fueron desmovilizados alrededor de 1.400 miembros del Frente "Catatumbo" e, incluyendo este número, a finales de 2004 se había realizado la desmovilización

[64] Cfr. Decreto 128 emitido el 22 de enero de 2003, "por el cual se reglamenta la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 43, folio 3832), y peritaje del señor Federico Andreu rendido ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el día 7 de marzo de 2005. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 96.13; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.17.

[65] Cfr. Decreto 3360 emitido el 24 de noviembre de 2003 "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002". Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 96.14; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.18; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.19.

[66] Cfr. Decreto 2767 emitido el 31 de agosto de 2004 "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil". Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.15; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.18; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.20.

de alrededor de 3.000 miembros de la AUC. En el año 2005, aproximadamente 7.000 integrantes de varios bloques de las AUC dejaron sus armas, con lo cual a la fecha han sido desmovilizados un total de alrededor de 10.500 miembros de las AUC"[67].

Finalmente, el Tribunal ha reconocido que "[e]l 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley No. 975, llamada "Ley de Justicia y Paz", "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", la cual fue sancionada y publicada el 25 de julio de 2005"[68].

Por su parte, en el informe anual de 1998 y 1999 la CIDH reconoció "el combate, desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares y demás grupos proscritos que operan en Colombia"[69] y posteriormente, en su informe anual de 2004, manifestó que "reconoc[ía] los esfuerzos desplegados por el Estado a fin de combatir a los actores armados y terminar con la violencia en la República de Colombia"[70], dicho reconocimiento fue reiterado en el informe de 2005[71], y posteriormente en el informe anual de 2006 donde enfatizó que "sólo resta indicar que durante el 2006 el Estado colombiano adelantó esfuerzos para acordar la desmovilización de otros grupos armados al margen de la ley, demostrando su intención de alcanzar la pacificación"[72] (Subrayas fuera de texto).

[67] Cfr. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párr. 13; Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Diálogos y Negociación, Grupos de Autodefensa, en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm; Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia del 13 de diciembre de 2004, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, párrs. 56, 75 y 94, e Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, introducción. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre d 2005. Serie C No. 134, párr. 96.16; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.21.

[68] Cfr. Ley 975 emitida el 25 de julio de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" (expediente de anexos al escrito presentado por los representantes en relación con 'un hecho superviniente configurado por la aprobación de la Ley 975 de 2005'). Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.17; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 95.20; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 125.22.

[69] CIDH. Informe de seguimiento del cumplimiento con las recomendaciones de la CIDH en el tercer informe sobre la situación de los derechos Humanos en Colombia (1999). párr. 7.

[70] CIDH. Informe Anual 2004. Capítulo IV, párr. 8.

[71] CIDH. Informe Anual 2005, Capítulo IV, párr. 6.

[72] CIDH. Informe Anual 2006, Capítulo IV, párr. 21.

Aunado a lo anterior, el Estado presentará a lo largo de este escrito, los avances en materia de justicia transicional, especialmente después de proferida la Ley 975 de 2005, su reforma a través de la Ley 1592 de 2012, y la forma en la que ésta permitió corregir algunos de los problemas que surgieron en la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

De conformidad con todo lo previamente expuesto, se puede evidenciar que:

i) Si bien el Estado, a través de sus instituciones, creó disposiciones normativas que desafortunadamente promovieron la creación de grupos de autodefensas que derivaron en grupos delincuenciales, ha implementado medidas de diversa naturaleza con la finalidad de controlar el actuar de los grupos mencionados y sancionar efectivamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por los mismos;

ii) Efectivamente el Estado: **a)** ha excluido de su ordenamiento jurídico las disposiciones que promovían la creación y el funcionamiento de estos grupos; **b)** ha creado organismos especiales encargados de la persecución, investigación y sanción de las conductas cometidas por estos; y **c)** ha implementado un marco normativo con la finalidad de promover la desarticulación de esta clase de grupos, su reinserción a la vida civil y la investigación y sanción de sus conductas delictivas, logrando resultados significativos;

iii) Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido las medidas tomadas por el Estado para combatir el fenómeno de las autodefensas ilegales, resaltando incluso algunos de los logros obtenidos mediante su implementación.

A la luz de lo anterior, ha quedado absolutamente claro que si bien las medidas normativas adoptadas por el Estado, con el fin de contrarrestar la proliferación de los grupos guerrilleros, mutaron en grupos de autodefensas ilegales, por razones ajenas a la voluntad del Estado, de ninguna manera puede sostenerse que todas y cada una de las acciones desplegadas por esta clase de grupos, son automáticamente atribuibles al Estado, convirtiéndose así en fundamento de responsabilidad para éste, sin siquiera hacer un análisis juicioso de los elementos de la responsabilidad internacional. De admitirse este planteamiento, se aceptaría entonces un régimen ilimitado y objetivo de responsabilidad, inadmisible desde cualquier punto de vista, y contrario a los estándares que

sobre la materia ha fijado expresamente el Derecho Internacional Público, los cuales se procede a exponer.

Desde esa perspectiva, es necesario analizar los presupuestos del caso Vereda La Esperanza, a la luz del régimen de responsabilidad en el Derecho Internacional Público, en aras de determinar si la pretensión de los peticionarios y de la H. Comisión, tiene cabida y procedencia según los estándares que sobre la materia ha fijado expresamente la legislación internacional y los tribunales internacionales.

B. La responsabilidad del Estado de conformidad con el Derecho Internacional Público.

El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en el año 2001, concebido como fuente esencial en materia de responsabilidad de los Estados, dispone como **principio general** que "todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional"; entendiendo por hecho internacionalmente ilícito aquel incumplimiento o desconocimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados mediante la ratificación de tratados o convenios de naturaleza internacional.
No obstante lo anterior, el hecho internacionalmente ilícito debe comportar ciertas características para gozar de tal condición y, al mismo tiempo, para que traiga como consecuencia la responsabilidad del Estado. Por ello, el Proyecto de Artículos es claro en determinar sus elementos, estipulando que para que ésta –la responsabilidad- se configure, es necesario que **(i)** los hechos además de constituir la violación de una obligación internacional, **(ii)** sean atribuibles al Estado en cuestión.
Sobre el particular, sostiene el profesor Franceso Messineo, haciendo alusión al libro *"The Law of International Responsibility"*:

> *"As such, attribution of conduct is only one step in the line of argument required to determine that an internationally wrongful act has been commited by a state or IO: it is also necessary to show that an obligation owed by that state or IO has been breached by the conduct in question. In other words, an internationally wrongful act is an act which is both attributable to a state or an international organization and which constitutes a breach of an international obligation owed by that state or international organization."*[73]

[73] MESSINEO, Francesco. Multiple Attribution of conduct. En: SHARES Research Project on shared responsibility in international law. SHARES Research Paper No. 2012-11, disponible en: www.sharesproject.nl

Ahora bien, analizando el contenido de dichos conceptos bajo la óptica del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tenemos que se configurará un hecho internacionalmente ilícito, siempre que el Estado incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas en la Convención Americana, y dicho incumplimiento le sea atribuible. Si bien parecería una fórmula sencilla, como se demostrará más adelante, es en la "atribución" en dónde se torna compleja la ecuación, sobre todo en aquellos eventos en los cuales ha sido un particular quien –en principio- cometió la violación.

Así las cosas, el factor "atribución" se convierte en requisito *sine qua non* para endilgar responsabilidad internacional a un Estado. Lo que en efecto resulta, no solamente sensato, sino además, jurídicamente necesario, bajo el entendido que el ámbito de responsabilidad no puede descansar en un universo indefinido e ilimitado, en el cual se responda por cualquier hecho, independientemente de quien lo cometa o de las circunstancias en las que se cometa; sino que debe restringirse a aquellos eventos en los cuales exista un criterio claro y certero de imputación.

De conformidad con lo anterior, y de cara a evidenciar cómo se articulan los dos requisitos ya señalados, es oportuno detenernos en lo preceptuado por el artículo 47, literal b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que evidencia cómo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, desde el inicio del trámite ante la Honorable Comisión, exige –al menos *prima facie*- la atribución de las presuntas violaciones al Estado del que se trata. Al respecto estatuye la norma citada:

> "Artículo 47. La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
> (…)
> b. No exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención; (…)"

Como se observa, esta norma convencional consagra importantes criterios para que la Honorable Comisión proceda con la admisibilidad de una petición. En ese orden de ideas, el literal b) acabado de transcribir, exige que los hechos que dieron origen a la petición obedezcan al incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la ratificación de la Convención, esto es, que se traduzcan en una violación de los derechos humanos.

Sobre el particular, se ha pronunciado la Honorable Comisión estableciendo que: "No corresponde a la Comisión en esta etapa del procedimiento [admisibilidad] decidir si se produjeron las alegadas violaciones a los artículos de la Convención

Americana de la presunta víctima. A efectos de la admisibilidad, la Comisión debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos, que de ser probados, podrían caracterizar violaciones a la Convención, según lo estipula el artículo 47.b de la Convención Americana, y si la petición es 'manifiestamente infundada' o es 'evidente su total improcedencia' según el inciso (c) del mismo artículo.

El criterio para la apreciación de estos extremos es distinto al requerido para pronunciarse sobre el fondo de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención, pero no establecer la existencia de dicha violación. El examen que corresponde efectuar en este momento es simplemente un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo del asunto. El propio Reglamento de la Comisión al establecer dos etapas claras, una de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la evaluación requerida para establecer una violación." [74]

Nótese entonces, cómo la atribución de los hechos comporta una regla *iuris* que debe ser observada desde el trámite de admisibilidad, pero que se acentúa en la etapa de fondo, y mucho más, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera, y con el fin de establecer si en un determinado caso existe responsabilidad, es necesario verificar no solamente el incumplimiento de una obligación internacional, sino que también se requiere la atribución de dicho incumplimiento al Estado.

En ese orden de ideas, como se mencionó párrafos atrás, la atribución de los hechos al Estado no resulta controversial cuando éstos son cometidos directamente por agentes estatales; sin embargo, cuando son cometidos por terceros particulares, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, el asunto se torna un poco más complejo.

Lo anterior es así, toda vez que por tratarse de obligaciones generales, como son las de protección y garantía, la Corte Interamericana se ha encargado de extender los efectos *erga omnes* de estas obligaciones, proyectándolos más allá de la relación agente estatal – particulares, con el fin de cobijar situaciones en las que –en principio- no está inmerso el Estado, es decir en el campo estrictamente particular, escenario en el cual se configura la denominada "responsabilidad indirecta", bajo el entendido que el hecho internacionalmente

[74]Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No 29/07 Elena Téllez Blanco, 26 de abril de 2007, Petición 7112-03.

ilícito no le es imputable al Estado o a alguno de sus agentes. Ante esta hipótesis, la Corte Interamericana ha manifestado que:

> "(…) la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales."[75]

Así, se evidencia cómo la respetada Corte ha reconocido que la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos, no se agota con las actividades de agentes estatales, sino que se extiende a las actuaciones de los particulares. No obstante, es importante precisar que no toda actuación de los particulares que degenere en una violación de los derechos humanos, puede ser fundamento de responsabilidad para el Estado, de ninguna manera. De ser así, se estaría en presencia de un régimen de responsabilidad, según el cual el Estado responde por toda actuación de aquellos que fungen como sus agentes, como de aquellos que no tienen tal calidad, lo cual desde ninguna óptica es admisible.

Para ilustrar de una mejor manera el planteamiento anterior, son pertinentes las palabras del Tribunal Interamericano cuando señaló que:

> "Si bien la atribución de responsabilidad internacional del Estado por hechos de particulares se realiza con base en el Derecho Internacional, este orden normativo no puede definir en forma taxativa todas las hipótesis o situaciones de atribuibilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales acciones u omisiones de agentes estatales o de particulares, ni las diversas formas y modalidades que pueden asumir los hechos en situaciones violatorias de derechos humanos"[76], y en consecuencia "la atribución de responsabilidad internacional a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso[77], así como a los correlativos

[75] Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. Párr. 85

"[76]Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 2009. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 118."

"[77]Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", párr. 113; Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 78; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, párr. 123."

deberes especiales aplicables al mismo".[78] (Se mantienen citas del texto original. Subraya por fuera del texto original)

A la luz de lo anterior, se han identificado dos supuestos en los cuales se configura la responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de hechos cometidos por terceros: **i)** por tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado frente a las actuaciones de los particulares, y **ii)** por la falta de diligencia para evitar que un acto de un particular vulnere los derechos contenidos en la Convención.

En el primer escenario, la responsabilidad internacional surge por la acción u omisión de agentes del Estado, respecto de las actividades de los particulares que desembocan en la vulneración de los derechos humanos. Bajo esta hipótesis se enmarcan todos aquellos actos de particulares que contienen algún grado de participación, así sea de manera omisiva, por parte del Estado, de tal manera que no pueden ser catalogados como actos meramente de particulares.

En el segundo escenario, el concepto determinante será el de la "debida diligencia", a partir del cual se medirá la responsabilidad internacional del Estado. De esta manera, si el Estado falta a su deber de actuar con la debida diligencia, en la prevención de aquellos actos de los particulares que puedan configurar la violación de los derechos humanos, deberá responder en la esfera internacional.

Ante esa hipótesis, los Estados asumen un deber general de prevención, el cual recae sobre todas y cada una de las actuaciones de los particulares, evitando así que con éstas se generen violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención. Surge entonces el concepto de debida diligencia, especialmente en lo que tiene que ver con la prevención razonable que debe hacer el Estado frente a las actuaciones de aquellos que están sometidos a su jurisdicción. Al respecto señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su primera providencia que:

> "Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos

"[78]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 129.

derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención".[79] (Subraya por fuera del texto original)

Siguiendo este mismo análisis, estableció la Corte en el caso de la Masacre de Mapiripán:

"(…) [S]e debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares […]. De esta manera, la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, también proyecta sus efectos en las relaciones individuales".[80]

Así las cosas, la Honorable Corte estableció que un hecho violatorio de los Derechos Humanos que no resulte directamente imputable a un Estado, por ser obra de un particular, puede acarrear la responsabilidad internacional de dicho ente, no por ese hecho en sí mismo, sino por faltar a la debida diligencia para prevenir la violación[81] (deber de prevención). En consecuencia, la imputación puede partir de dos eventos: **i)** cuando la violación de derechos humanos perpetrada por un particular no fue prevenida por el Estado, a pesar del conocimiento previo de la existencia de un riesgo cierto, inmediato y determinado; y **ii)** en las ocasiones en que es perpetrada por entidades privadas a las que el Estado ha delegado la prestación de servicios públicos.[82]

[79]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172
[80]Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 2005. Caso de la Masacre de Mapiripán contra Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párr. 112.
[81]Ver, por ejemplo, las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172; Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182.
[82] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Párr. 96

Bajo ese entendido, la falta de aplicación de las medidas positivas de protección y prevención frente a los actos de particulares que resulten violatorios de los Derechos Humanos, conlleva al incumplimiento de las obligaciones de garantía de los Estados. Al respecto, la Corte IDH ha afirmado que el deber de prevención frente a las relaciones de los particulares, entre sí, se encuentra condicionado: **i)** al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo determinado y **ii)** a la posibilidad razonable de prevenir o evitar ese riesgo[83]. En relación con esa "predictibilidad" de las violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano acoge lo afirmado por la Corte Europea de Derechos Humanos en su jurisprudencia, en los siguientes términos:

> "[…] [L]a Corte Europea de Derechos Humanos ha entendido que el artículo 2 del Convenio Europeo también impone a los Estados una obligación positiva de adoptar medidas de protección, en los siguientes términos:
>
> 63. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas en las sociedades modernas, la impredictibilidad de la conducta humana y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, dicha obligación positiva debe ser interpretada de forma que no imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Por consiguiente, no todo alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación convencional de tomar medidas operativas para prevenir que aquel riesgo llegue a materializarse. Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo (ver la sentencia de Osman […]:3159, párr. 116) (Traducción de la Secretaría)[84]"[85]. (subraya por fuera del texto original)

De conformidad con lo anterior, son varios los presupuestos que se deben verificar para imputar responsabilidad internacional a un Estado, como

[83] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luna López Vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Párr. 120

[84]Cfr. European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, judgment of 28 March 2000, Application No. 22492/93, paras. 62 and 63; Osman v. the United Kingdom judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, paras. 115 and 116.

[85]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 123 y ss.

consecuencia de las actuaciones de un particular, a la luz del concepto de la debida diligencia:

i) La violación es consecuencia directa de los actos de un particular;

ii) Falta de diligencia, por parte de las autoridades, en la prevención o impedimento de dichos actos;

iii) Las autoridades sabían, o debían haber sabido, sobre la existencia del riesgo que comportaban dichos actos.

En ese orden de ideas, riesgo, prevención y debida diligencia son los conceptos que definirán la responsabilidad internacional del Estado en tratándose de actividades de terceros. De tal manera que ésta sólo puede surgir cuando se ha demostrado la aquiescencia o tolerancia de sus agentes o cuando se ha inobservado el deber de debida diligencia respecto de las actividades estrictamente de particulares. Ahora bien, dando aplicación de dicho análisis al caso materia de estudio, el Estado demostrará que a la fecha no se ha logrado establecer que los hechos acaecidos durante el segundo semestre del año 1996 en la Vereda La Esperanza, son atribuibles al Estado colombiano, así como tampoco se pueden aplicar en este caso, los pronunciamientos de la Honorable Corte citados por los representantes y por la CIDH, en sus escritos.

C. Los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza, no configuran el fundamento de responsabilidad en el caso bajo estudio.

Como quiera que la Honorable Comisión, en su informe de fondo No. 85/13, dedica el capítulo denominado "vinculación entre grupos paramilitares y el Ejército colombiano relacionados a violaciones de derechos humanos"[86], a elaborar un "recuento" de los pronunciamientos de este Tribunal, con la intención de aplicar en este caso, los efectos jurídicos de las providencias en las que se encontró responsable al Estado colombiano, a continuación se expondrán las razones que demuestran cómo dicha pretensión no es procedente, en la medida en que se trata de supuestos de hecho absolutamente diferentes, cuyas consecuencias no podrán ser trasladadas al caso bajo estudio.

Sobre el particular, sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe:

[86] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Admisibilidad y fondo. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Pág. 59, párr. 191 y ss.

> "Asimismo, a través de la jurisprudencia de la Corte, se ha podido determinar el vínculo entre grupos paramilitares y el Ejército colombiano en relación con violaciones a derechos humanos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Es así como dicho vínculo y la consecuente responsabilidad del Estado se ha manifestado a través de i) acciones directas de apoyo, colaboración y coordinación; u iii) omisiones de integrantes de la fuerza pública que han favorecido las acciones de grupos paramilitares."[87]

Debe tenerse en cuenta, que en todos los casos aludidos por la Honorable Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un análisis minucioso de las circunstancias propias en las que acaecieron los hechos, así como de las características particulares que revestía cada uno de los casos. Para ello, fue indispensable el estudio del material probatorio que reposaba en el expediente, no de manera aislada, sino haciendo una valoración en conjunto de todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, centrando su atención especialmente en las sentencias proferidas por las autoridades del ordenamiento jurídico interno. Así, por ejemplo, en el Caso de los 19 Comerciantes, el Tribunal estableció:

> "Por otra parte, es preciso entrar a considerar, en términos generales, cuál era la relación entre los altos mandos de la Fuerza Pública de Puerto Boyacá y el grupo "paramilitar" que tenía gran dominio en la zona en la época en que ocurrieron los hechos de este caso, así como también establecer específicamente si agentes estatales participaron directamente en el planeamiento y ejecución de las violaciones cometidas contra las presuntas víctimas. Para ello, la Corte ha valorado la totalidad del acervo probatorio de este caso, el cual incluye entre otras pruebas los testimonios rendidos ante fedatario público, los testimonios rendidos ante la Corte, los informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y los informes de Naciones Unidas, y tomó especial cuidado en lo que concluyeron las autoridades judiciales en los procesos internos."[88] (Subraya por fuera del texto original)

Luego de ello, y con fundamento en las decisiones que fueron adoptadas por los Jueces de la República de Colombia, procedió la Corte a dar por probada la participación de agentes estatales en los hechos, en los siguientes términos:

[87] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Admisibilidad y fondo. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Párr. 191

[88] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. Párr. 125

> "Esta Corte tuvo por probado (*supra* párr. 86.b) que miembros de la Fuerza Pública apoyaron a los "paramilitares" en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas. Ha quedado demostrado (*supra* párr. 85.b) que los altos mandos militares y "paramilitares" creían que las primeras 17 presuntas víctimas vendían armas y mercancías a los grupos guerrilleros de la zona del Magdalena Medio. Esta supuesta relación con los guerrilleros y el hecho de que estos comerciantes no pagaban los "impuestos" que cobraba el referido grupo "paramilitar" por transitar con mercancías en esa región, llevaron a la "cúpula" del grupo "paramilitar" a realizar una reunión, en la cual se tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías y vehículos. Ha quedado también demostrado (*supra* párr. 85.b) que esta reunión se realizó con la aquiescencia de algunos militares, ya que éstos estaban de acuerdo con dicho plan. Inclusive hay elementos probatorios que indican que en dicha reunión participaron algunos militares."[89]

Con base en lo anterior, lo que el Estado se permite recalcar, es que la atribución no es un aspecto que se debe analizar a la ligera, sino que por el contrario deberá ser objeto de estudio y detalle por parte del Tribunal, quien deberá arribar a un grado de certeza tal, que le permita concluir, con fundamento en el caudal probatorio, que los hechos objeto de conocimiento le son atribuidos al Estado, de conformidad con el Derecho Internacional Público, en coherencia con los criterios ya expuestos.

En ese orden de ideas, no basta con una narración de hechos, o con la formulación de ciertas aseveraciones y señalamientos, sino que –en cualquier caso- será necesario demostrar jurídicamente que lo que se afirma contiene un sustento probatorio que conduce al convencimiento de la Honorable Corte. De lo contrario, serán apenas especulaciones u opiniones, que no podrán tener trascendencia en el mundo jurídico y mucho menos, efectos en perjuicio del Estado. Por ello, aun cuando en eventos como en este se predique la inversión de la carga de la prueba, será necesario que la Corte en su análisis probatorio establezca un grado de certeza que le permita crear la convicción de los hechos.

En el caso de la masacre de Mapiripán, para la Corte IDH no fue suficiente con el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, sino que éste tuvo que ser analizado junto con el material probatorio arrimado al expediente, de manera tal que haciendo un análisis integral, se pudiera corroborar que efectivamente los

[89] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. Párr. 135

hechos le eran imputables al Estado y, por esa vía, declarar su responsabilidad, veamos:

> "En síntesis, una vez establecida la vinculación de las Fuerzas Armadas con ese grupo de paramilitares al perpetrar la masacre cometida con base en el reconocimiento estatal de los hechos y en el conjunto de pruebas allegadas al expediente, la Corte ha llegado a la conclusión de que la responsabilidad internacional del Estado se ha generado por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y de particulares realizadas en forma coordinada, paralela o concatenada con el propósito de perpetrar la masacre."[90]

A partir de lo anterior, nuevamente se encuentra un criterio de atribución sustentado en el expediente internacional y efectuado a partir de pruebas que llevaron a la convicción de que en efecto, los hechos le eran imputables al Estado. Así, no se hace una imputación automática, sino que por el contrario se cimienta en el reconocimiento efectuado por el Estado, en las pruebas recaudadas, así como en los hechos y circunstancias propias del caso.

Con base en esta argumentación, lo que quiere significar el Estado en el presente acápite, es que la atribución de responsabilidad no debe efectuarse a partir de conjeturas o especulaciones, ni mucho menos, sustentarse en pronunciamientos proferidos en el marco de casos que hacen parte de la historia de Colombia, que por demás no pueden convertirse en objeto del presente litigio, sino que por el contrario, deberá tener cimientos jurídicos que conduzcan al convencimiento de que los hechos ocurridos durante el segundo semestre del año 1996, en la Vereda La Esperanza, son imputables al Estado colombiano.

En ese orden de ideas, no es suficiente con citar, como lo hacen los ilustres peticionarios, y la Honorable Comisión, los casos en los cuales se ha declarado la responsabilidad de Colombia; tampoco lo es, citar los extractos en los que esta distinguida Corporación se ha referido al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, pretendiendo con esto que cualquier hecho perpetrado por este grupo ilegal, sea automáticamente imputable al Estado, configurando entonces lo que sería un régimen objetivo de responsabilidad.

La Honorable Corte podrá apreciar, cómo en el presente caso se intenta concebir el fundamento de responsabilidad en hechos aislados y diferentes de los que ahora ocupan nuestra atención. Basta con revisar el literal "A", del capítulo VIII del ESAP, titulado "consideración general sobre atribución de responsabilidad", en donde se

[90] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134. Párr. 123

evidencia que de las pruebas arrimadas al proceso no se desprende un grado de convicción que permita concluir la atribución de los hechos al Estado:

> "(…) esta representación considera que está probado el vínculo y la colaboración entre las Autodefensas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional en la zona y en la época en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, los órganos del Sistema Interamericano han tenido oportunidad de pronunciarse a través de su amplia jurisprudencia e informes sobre la relación entre el Estado de Colombia y la creación de grupos paramilitares[91].

La Corte ha sostenido que, pese algunos intentos más recientes de impulsar medidas legislativas orientadas a prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares, estas medidas no han sido efectivas en desactivar efectivamente el riesgo que el propio Estado ha contribuido a crear[92]. Así, los lazos del paramilitarismo con el Estado colombiano ´han permanecido históricamente a diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos con el entendido de que no serían objeto de investigación o juzgamiento ni sanción[93].

Con base en la constatación de este vínculo, la Corte ha fallado la responsabilidad internacional del Estado de Colombia en varios casos en los que agentes estatales participaron, colaboraron, o toleraron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Auto Defensas o fuerzas paramilitares, y faltaron a su deber de investigar adecuadamente estas violacioes[94] (sic).

En este sentido, nos adherimos a las consideraciones de hecho expuestas por la Ilustre Comisión en su informe de Admisibilidad y Fondo No. 85/13, el cual reitera la basta jurisprudencia de la Corte IDH[95] y refiere a la necesidad de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones denunciadas teniendo en cuenta el

[91] Cfr. Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 75; CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. 102Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Cap. I, párrs. 7 – 19

[92] Cfr. Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 80

[93] Cfr. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. 102Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Cap. I, párrs. 7 – 19; CIDH, Informe No. 75/06, Caso 12.415, Fondo, Jesús María Valle Jaramillo, Colombia, 16 de octubre de 2006, párr. 62. Véase también: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia. Abril 2000, párr. 30

[94] Cfr; Corte I.D.H., Caso 19 comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 135; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 120; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 140; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Ituango Vs. Colombia. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 125.57; Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 78.

[95] Cfr; CIDH. Informe No. 85/13. Caso Vereda La Esperanza v CO, párrs. 188 y ss.

contexto en que ocurrieron los hechos, así como atendiendo a una visión de los hechos en su conjunto. (…)"[96]

Con fundamento en lo previamente expuesto, queda claro que el análisis de atribución realizado por los ilustres peticionarios en el ESAP, así como por la CIDH en el Informe No. 85/13, se reduce a presentar un relato histórico de casos que conoció esta Honorable Corte, sin justificar o exponer las razones por las cuáles los precedentes jurisprudenciales establecidos en el marco de dichos casos, deberán ser aplicados en el presente proceso.

Por esa razón, de manera respetuosa el Estado insiste en su solicitud, en virtud de la cual deberá ser la Honorable Corte, quien evidencie las falencias en las que incurrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el análisis de atribución, como quiera que ha quedado ampliamente demostrado que la responsabilidad internacional no puede encontrar su fundamento en providencias judiciales de casos que fueron fallados previamente. Ello, a pesar de que en las sentencias citadas por la CIDH, la Honorable Corte haya encontrado la responsabilidad de Colombia, como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensas, inclusive, en la misma región en la que acaecieron los hechos.

En consecuencia, no basta con demostrar que en este caso actuaron grupos ilegales sobre los cuales ya se ha pronunciado el Tribunal Interamericano, ni mucho menos con demostrar que en la región donde ocurrieron los hechos existía presencia de las Fuerzas Militares; tampoco será suficiente reiterar lo que ha dicho esta Honorable Corte sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y sus efectos en los casos que ésta ha conocido. Será necesario, demostrar la efectiva participación de agentes estatales en los hechos, de manera que por esa vía se configure el fundamento de responsabilidad del Estado.

A propósito de esto, la Corte Internacional de Justicia ha dicho que el hecho de que un Estado deba ejercer control sobre su territorio, no significa que necesariamente conoció, o debió haber conocido, de todos los hechos ilícitos perpetrados en su territorio. Por esa razón, ese hecho en sí mismo, e independientemente de otras circunstancias, no involucra ni su responsabilidad *prima facie,* ni el desplazamiento de la carga de la prueba[97].

En esa misma línea, si bien el Estado es consciente del tratamiento de la prueba en casos de desaparición, considera que este Honorable Tribunal no debe perder de vista que para concluir la responsabilidad del Estado deberá superar la barrera de

[96] Escrito se Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 129 y 130.
[97] Caso del Estrecho de Corfú, CIJ, 1949. Pág. 18

la duda, de manera que su convicción frente a la ocurrencia de los hechos sea razonable. Al respecto sentenció esta respetada Corte:

> "La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados."[98]

Por las razones ya expuestas, se concluye que en el presente caso no existe la convicción de que agentes del Estado hayan participado en los hechos perpetrados por los miembros de las autodefensas ilegales y, por lo tanto, se trata de una cuestión que está siendo dilucidada por la justicia colombiana. Esto, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad que efectuado por el Estado colombiano.

V. CONTEXTO

El Estado considera pertinente resaltar que en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, si bien el contexto puede ser utilizado para lograr una adecuada comprensión de los hechos, no es posible derivar de éste responsabilidad internacional estatal, pues no se trata de hechos específicos del caso que se esté estudiando, y en consecuencia no puede ser así valorado. Al respecto, la H. Corte ha sostenido que:

> "(…)El Tribunal enmarca los hechos objeto del presente caso dentro del contexto para su adecuada comprensión y en aras de determinar la responsabilidad estatal por esos hechos específicos, pero no pretende con ello emitir un pronunciamiento sobre el fenómeno global del paramilitarismo ni juzgar las diversas circunstancias comprendidas en ese contexto". (subraya fuera de texto original)[99].

En este sentido, el contexto por sí mismo no genera responsabilidad internacional del Estado. De acuerdo a ello, la CorteIDH ha señalado la

[98] Ver: Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, párrs 131 y 132.

[99] CorteIDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 32.

importancia del contexto en los términos citados "pero no como una cuestión para resolver por la Corte"[100].

Asimismo, y debido a las posibles consecuencias jurídicas que pueda tener el contexto en un determinado caso, es necesario hacer especial referencia a los requisitos probatorios que se deben surtir cuando se alega un determinado contexto. Así, las afirmaciones contextuales deben ser debidamente probadas en el procedimiento ante los órganos del Sistema Interamericano, exigencia que se hace más necesaria respecto de aquellos contextos que se presentan por parte de los peticionarios con el fin de alegar la presunta existencia de políticas estatales o prácticas generalizadas de alegadas violaciones a los derechos humanos, supuestamente toleradas por el Estado. Así lo ha afirmado la H. Corte en reiteradas ocasiones al señalar que:

> "no es posible ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de violaciones a los derechos humanos, y que ello "obliga a la corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados"[101].

En este sentido, se debe tener en cuenta que al considerar un presunto contexto, la CorteIDH debe analizar si el peticionario efectivamente logra probar -o no- el nexo causal entre éste y los hechos concretos de cada caso, pues de lo contrario estaría pretendiendo que la H. Corte declarara la responsabilidad internacional estatal a la luz de un contexto y no de hechos concretos, para lo cual no está facultada.

Así pues, la existencia de un presunto contexto no implica *per se* la existencia de responsabilidad internacional en todos los casos que se relacionen hechos cometidos bajo ese supuesto contexto, pues los peticionarios deben probar el nexo entre los hechos alegados y el presunto contexto que ha sido previamente identificado.

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que cuando se presenta un contexto específico como fundamento de hecho para imputar la responsabilidad internacional de un Estado en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es necesario: i) probar efectivamente los hechos que constituirían el mismo y la sistematicidad con la cual éstos se estarían

[100] CorteIDH. Caso Pueblo Saramaka. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 16
[101] CorteIDH. Caso Escue Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 45 y Caso Godínez Cruz Vs Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C. No. 5, párr. 135

presentando; ii) demostrar la responsabilidad directa de agentes del Estado, o la ausencia de respuesta estatal en la materia; y iii) establecer el nexo de causalidad que existiría entre el contexto presentado y los hechos de caso concreto[102].

Cumplidos los anteriores requisitos, y de acuerdo a los estándares ya citados, fijados por H. Corte Interamericana, los hechos presentados como contexto deben interpretarse asignándoles un valor jurídico limitado, sin que de los mismos se pueda derivar la responsabilidad directa del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza de las competencias que tienen los órganos del Sistema relacionadas con la supervisión del cumplimiento de la obligaciones establecidas en la CADH en el marco de procesos contenciosos.

El presente capítulo expondrá a la H. Corte el contexto en el cual ocurrieron los hechos del caso bajo estudio. Esto en atención a que, tal como señalan los peticionarios en el ESAP, los alegados hechos no pueden desligarse del conflicto armado interno. Sin embargo, el contexto expuesto por los peticionarios es limitado a efectos de explicar la complejidad de la violencia armada en el Magdalena Medio, en especial la multiplicidad de actores y elementos presentes en dicha región de Colombia desde la década de los 70s.

Los hechos ocurridos en la vereda La Esperanza no son ajenos al conflicto armado, por el contrario hacen parte de capítulos dolorosos por los que han tenido que atravesar colombianos y colombianas, y sobre los cuales se ha expresado el profundo rechazo en diferentes escenarios. En esa medida, los hechos que nos ocupan deberán ser comprendidos en el marco de dicho contexto, incluyendo dentro de éste todos sus factores, circunstancias, actores y demás situaciones que lo caracterizan.

Dentro del contexto citado, existe un elemento de especial atención y que debe ser objeto de análisis por parte de la Honorable Corte, y es lo atinente al entorno de la autopista Bogotá - Medellín. Esta vía, dada su ubicación geográfica, se convirtió en un corredor disputado por todos los grupos armados organizados al margen de la ley –GAOML-, quienes en su afán de dominarla emprendieron una lucha violenta, caracterizada por atentados, retenes ilegales, secuestros, extorsiones, entre otros.

[102] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras ("campo algodonero") vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. párr., 112-164; Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr., 177 y ss.

De conformidad con lo anterior, en el presente acápite el Estado ilustrará a este Tribunal respecto de la difícil y compleja situación de violencia en la que ocurrieron los hechos objeto del presente caso, de manera que tenga en consideración todas las variables y actores del mismo y no sólo algunas como es sugerido por el contexto expuesto por los representantes en el ESAP.

Como consideración general, el Estado destaca la forma en que los representantes en el ESAP realizan afirmaciones infundadas o sumamente imprecisas en relación con el contexto, en especial en relación con el grupo de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). En este sentido, por ejemplo, los representantes afirman que dicha organización criminal se encontraba compuesta por "ex soldados, ex policías, ex guerrilleros, mercenarios a sueldo y guías activos del Ejército Nacional" quienes habrían recibido una remuneración en dinero "por cada guerrillero muerto". Esto lo afirman con base en una pieza del proceso penal que adelanta el Estado[103], la cual no ha sido considerada de manera definitiva como prueba y que en cualquier caso deberá ser respaldada por otros elementos probatorios adicionales. Por lo tanto, el Estado rechaza todas aquellas afirmaciones incluidas dentro del contexto expuesto en el ESAP que carezcan de sustento probatorio, incluyendo aquellas que se soporten únicamente en documentos que no hayan sido valorados judicialmente en el orden doméstico o en declaraciones de los familiares de las víctimas.

Adicionalmente, los Representantes utilizan como pieza probatoria, en relación con el contexto, el Informe de Artículo 50 de la Comisión Interamericana en el presente asunto. Sobre el particular el Estado expresa su preocupación por esta situación, dado que el mencionado informe es un documento producido por uno de los actores dentro del presente procedimiento, el cual contiene consideraciones de hecho y de derecho, pero que de ninguna manera puede dar fe de los hechos objeto del caso ante la H. Corte. Lo anterior teniendo en cuenta que la CIDH no ha sido testigo de ninguno de los hechos objeto del presente caso y a lo sumo ha conocido de ellos a través de las comunicaciones y documentos expuestos por las partes en el trámite de la petición individual.

Considerar el Informe de Artículo 50 como prueba autónoma de los hechos de un caso contencioso sometido ante la H. Corte, no sólo la prevendría de llevar un análisis del caso autónomo -toda vez que dicho informe recoge la opinión de la Comisión-, sino que actuaría en contravía del Reglamento de la Corte. El artículo 35.1(e) señala que al momento de someter el caso ante la H. Corte, la

[103] Informe No 032. Dirección Seccional Cuerpo Técnico de Investigación. Oficina Información, análisis y apoyo técnico de la Fiscalía General de la Nación. Informe de inteligencia sobre grupo de autodefensas. 28 de junio de 1996.

CIDH debe entregar "las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. Se hará indicación de las pruebas que se recibieron en procedimiento contradictorio".

De esta forma el Reglamento califica como pruebas únicamente aquellas presentadas por las partes en el procedimiento ante la CIDH y de ninguna manera el Informe de Artículo 50. En ese sentido, el Estado solicita a la Corte Interamericana que no tenga en cuenta el Informe No. 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como material probatorio del contexto y/o de los hechos del presente caso y que, en consecuencia, se desestimen como ciertas todas las afirmaciones conceptuales o fácticas realizadas con base probatoria en dicho informe.

Tras estas consideraciones generales, a continuación se describirá: **A.** el contexto de violencia en el Magdalena Medio en general, y en especial, se reseñará el asentamiento de los actores armados en la región; **B.** la carretera Bogotá – Medellín y los factores que la convertían en objetivo de posicionamiento estratégico para los actores armados que delinquían en la región; **C.** la situación del Oriente Antioqueño, región donde se ubica el municipio del Carmen de Viboral y más concretamente la Vereda La Esperanza; **D.** la disputa por la autopista Bogotá-Medellín y las razones por las cuales fue necesaria la creación de la Fuerza de Tarea Águila; **E.** a doctrina del enemigo interno y el contexto del conflicto armado bajo la Constitución de 1991. Finalmente, se presentará **F.** el marco normativo de justicia transicional aplicado en Colombia y **G.** los mecanismos nacionales para enfrentar el delito de desaparición forzada.

A. Presencia de los distintos Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley –GAOML-: surgimiento, expansión y asentamiento en el Magdalena Medio.

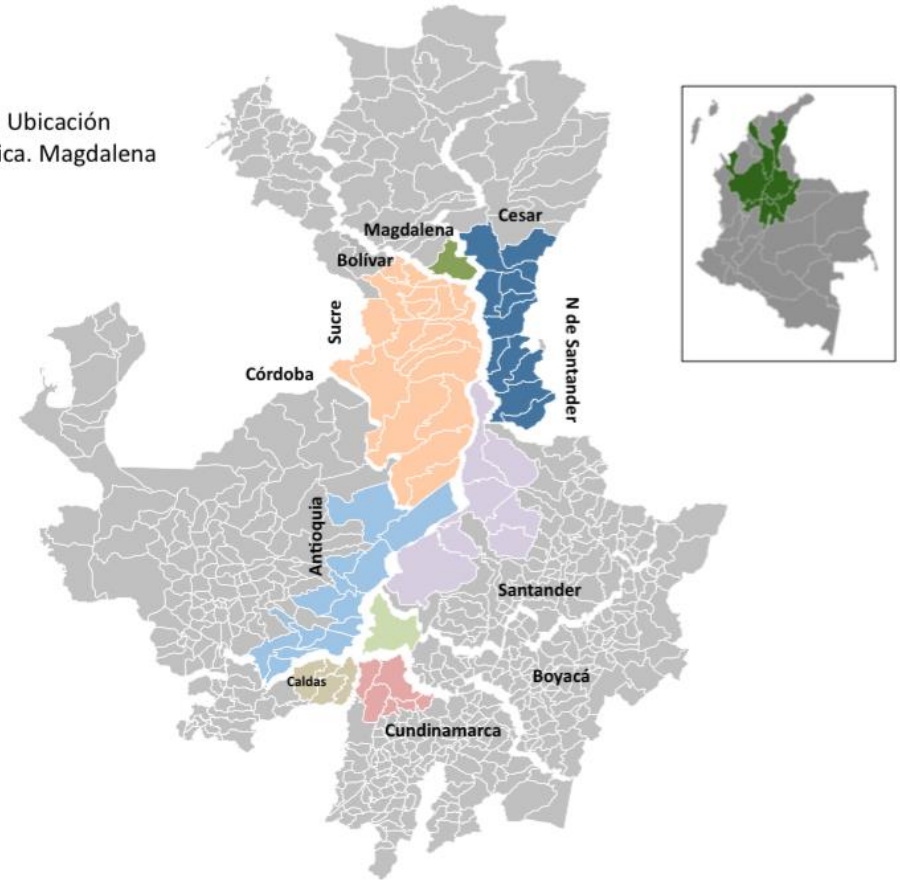
El Magdalena Medio es la denominación que se le da a la zona central de la ribera del río Magdalena, y que abarca territorios de 8 departamentos y dentro de éstos los territorios de 63 municipios de Colombia[104] (ver Mapa no 1). A pesar de no ser una unidad político administrativa de acuerdo con la legislación colombiana, el Magdalena Medio se encuentra identificado geográficamente (ver Mapa no 1) y en esta región se ha forjado también una identidad social y cultural como

[104] Observatorio de Derechos Humanos, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. *Panorama actual del Magdalena Medio.* Introducción. [On Line, accesado el 20 de agosto de 2015. Disponible en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/0403_regiones/magdalenamedio/index.htm]

región, caracterizada por la diversidad y las luchas por el control territorial[105]. Adicionalmente, dada su posición geográfica, el Magdalena Medio es el engranaje o corredor migratorio y económico entre el norte y el centro del territorio colombiano. Esta característica ha originado la presencia de diversos actores armados en la región, toda vez que se considera eje estratégico para el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley[106].

Con ese panorama, en el presente acápite se describirá en general la forma como distintos actores armados han tenido presencia en la región, en particular a mediados de la década de los años noventa, periodo en el cual se presentaron los alegados hechos violatorios de las obligaciones consagradas en la CADH.

Mapa 1. Ubicación Geográfica. Magdalena Medio.



[105] Archila, Mauricio. "Las identidades del Magdalena Medio". Pg. 475-477. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. pgs. 467-506.
[106] Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 323. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. Págs. 316.

1. Las FARC en el Magdalena Medio

Desde sus primeros años de existencia (1964), las FARC consideraron dentro de su expansión la zona del Magdalena Medio. En 1966 se creó el IV frente de dicha organización armada ilegal en la región entre Barrancabermeja y la Dorada, el cual se expandió hacia el sur de la región (Boyacá, Santander, Cundinamarca y Antioquia) durante la década de los 70s[107]. Sin embargo, fue en los años ochenta cuando las FARC llevaron a cabo su plan de expansión armada[108], y desdoblan distintos frentes para llevar su accionar armado en el Magdalena Medio, dentro de los cuales se encuentra el frente IX con presencia en Antioquia[109].

La presencia de grupos de autodefensa ilegal en la región desde mediados de los ochenta, produjo por parte las FARC -en la primera mitad de los años noventa- la creación de nuevos frentes o el reforzamiento de la presencia de otros frentes en el Magdalena Medio. Adicionalmente, la presencia del narcotráfico en la zona produjo un reacomodo geográfico de los grupos armados de izquierda en la región, dado que estos, en especial Gonzalo Rodríguez Gacha, llevó a cabo acciones en contra de organizaciones de izquierda, tanto legales como ilegales[110]. De esta forma, las FARC se reubicaron en la Serranía de San Lucas, el valle del río Cimitarra y las montañas del Oriente Antioqueño en la década de los noventa. De esta manera, para 1995, "[l]a distribución de los frentes es la siguiente: frente IV en los límites del valle del río Cimitarra y nordeste antioqueño, el XXIV en el sur de Bolívar, el XX en el sur del Cesar y los frentes XLVI, XII, XXIII en el Magdalena Medio santandereano"[111].

Es así como el Magdalena Medio ha sido zona de presencia activa de las FARC, la cual se agudizó en la década de los noventa, y a la fecha de los alegados hechos, varios frentes de dicha organización delictiva actuaban en la región.

[107] Presidencia de la República. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos. *Panorama actual del Magdalena Medio.* [Informe On line, accesible en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/0403_regiones/magdalenamedio/index.htm. Ver También Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 323. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. págs. 467-506, y; Dávila Saad, Andrea. *La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial.* Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 33.

[108] Pizarro León Gómez, Eduardo. Las FARC (1949-2011), de guerrilla campesina a maquina de guerra. Bogotá: Norma. 2011. Pg. 201-204.

[109] Dávila Saad, Andrea. *La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial.* Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 34.

[110] Dávila Saad, Andrea. La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial. Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 35.

[111] Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 325. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. págs. 467-506, y; Dávila Saad, Andrea. La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial. Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 35.

2. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Magdalena Medio

El ELN tiene sus orígenes en San Vicente de Chucurí, en el Magdalena Medio[112]. Además de ser la zona en la cual se gesta este grupo armado ilegal en los años sesentas, entre 1990 y 1997 el ELN fue el principal responsable de la acciones armadas en la región del Magdalena Medio, dado que cerca de la mitad de los actos de violencia armada en dicha región fueron cometidos por dicho grupo armado en la primera mitad de la década de los noventa[113]. Entre 1985 y 1995, este grupo armado ilegal adelantó un proceso de expansión político y militar, con el fin de aprovecharse de los recursos de transferencias del petróleo. Para 1996, el ELN tenía distintos frentes con presencia en el Magdalena Medio:

"en el sur del cesar los frentes Claudia Isabel Escobar Jerez, Armando Cacua, Camilo Torres y Manuel Gustavo Chacón (este último actúa sobre las zonas de aguacha, hacia Barrancabermeja y su contorno); en el sur de Bolívar, los frentes Héroes de Santa Rosa y José Solano Sepúlveda; en el Magdalena Medio antioqueño, los frentes María Cano, Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago; en el Magdalena Medio santandereano, los frentes Manuel Gustavo Chacón, resistencia Yariguíes, Capitán Armenio, Luis Guillermo Gonzalez y Gustavo Vasquez Bernal."[114]

De acuerdo con Vásquez, entre 1990 y 2002, el ELN fue el responsable del mayor número de acciones armadas ilegales cometidas en el Magdalena Medio (superando por el doble a las FACR y en diez veces el actuar de los grupos de autodefensa ilegal)[115]. Esto se explica por la alta presencia de sus frentes en la región, lo cual además complejizó el mapa de actores armados en el Magdalena Medio.

3. El Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Magdalena Medio

El EPL nace al norte de la región del Magdalena Medio, en el departamento de Córdoba en los años setenta, para la década de los ochenta consolidó su presencia y penetración no sólo en comunidades campesinas, sino también en

[112] Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 326. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. págs. 467-506.
[113] Dávila Saad, Andrea. La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial. Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 57.
[114] Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 329. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. págs. 467-506. Ver también: República de Colombia. Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. MP. Eduardo Castellanos Rosso. Mayo veintinueve (29) de dos mil catorce (2014). Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS. párr. 715.
[115] Vásquez, Teófilo. Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. pg. 326. En: CINEP. *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001*. Bogotá: CINEP. 2006. págs. 352 y 353.

organizaciones políticas, juveniles y obreras. En esta época consolidó también "nuevos frentes guerrilleros en distintas regiones –Sierra Nevada, Montes de María, Nudo de Paramillo, Urabá, noroccidente y suroeste de Antioquia, Valle de Aburrá , el Eje Cafetero, norte de Tolima, Putumayo, Catatumbo, Provincia de Ocaña y parte norte del Magdalena Medio-"[116].

A inicios de los años noventa parte de esta agrupación llegó a un acuerdo de paz y desmovilización con el gobierno de Colombia. Sin embargo, un sector del EPL continuó en la lucha armada. Esta disidencia tuvo presencia activa en el Magdalena Medio y en el Oriente Antioqueño, y fue precisamente –como se detallará adelante- sus acciones delincuenciales las que motivaron la creación de la Fuerza de Tarea Águila en la autopista Bogotá-Medellín.

4. Los grupos de autodefensas ilegales en el Magdalena Medio

En primer lugar, y antes de exponer las consideraciones respecto del actuar de los grupos de autodefensas ilegales en el Magdalena Medio, el Estado colombiano objeta las afirmaciones contextuales de los representantes que podrían interpretarse o sugerir que el fenómeno "paramilitar" fue producto de una política generalizada del Estado colombiano. La existencia del paramilitarismo y su desventurada y aislada connivencia con algunos miembros de las fuerzas de seguridad es algo que ya ha sido reconocido por la H. Corte Interamericana[117], pero en ningún caso se ha considerado la existencia de una política institucional del Estado dirigida a favorecer o fortalecer el paramilitarismo. Por el contrario, lo que se ha puesto de presente es la implementación de diversas medidas para contrarrestarlo.

El fenómeno paramilitar en Colombia se encuentra rodeado de múltiples y variados elementos, de carácter político, sociológico, económico y cultural, entre otros, propio de cada zona geográfica y momento en el tiempo, en que se originó y desarrolló en las distintas partes del territorio del Estado. Por lo tanto, apreciaciones como las presentadas por los peticionarios, en las cuales se responsabiliza al Estado colombiano del paramilitarismo como una estrategia institucional contrainsurgente e irregular, son objetadas y rechazadas por el Estado.

[116] Villarraga Sarmiento, Álvaro. *Ejército de Liberación Popular (EPL): del alzamiento campesino y la guerra civil al acuerdo de paz y la constituyente.* (On line disponible en http://fundacionculturademocratica.org/publicaciones/El%20Ejército%20Popular%20de%20Liberación%20(EPL).pdf)

[117] *Cfr.* CorteIDH. Casos: "*Masacre de la Rochela".* Sentencia del 11 mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 96 a 98; *"Masacre de Mapiripán".* Sentencia del 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 96.2 y siguientes; "*Masacres de Ituango"*. Sentencia del 1 de julio de 2006, Serie C. No. 148, párr. 125.2 y ss; y; *19 Comerciantes*. Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 84.c y ss.

Ahora bien, respecto de la conformación de las Autodefensas del Magdalena Medio, grupo del cual se constituyó como líder el señor Ramón María Isaza Arango, debe advertirse que no recibió apoyo o entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario, nació bajo el argumento de que aquellas no podían garantizar la seguridad en los territorios. Por ello, el Estado rechaza categóricamente la afirmación de los representantes, de acuerdo con la cual "las ACMM recibieron ayuda por parte del Ejército Nacional mediante armas, entrenamiento y respaldo de sus operaciones"[118], con base en el Informe de Artículo 50 de la CIDH y en la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en contra de Ramón Isaza.

Esta afirmación es contraria a lo que sostiene el señor Ramón Isaza y lo corroborado y concluido por el mencionado Tribunal. Está corporación judicial reseña en su decisión, citando explícitamente al condenado Ramón Isaza, que las autodefensas del Magdalena Medio se originaron precisamente por las alegadas limitaciones estatales para garantizar la seguridad en la zona.

En ese orden, y en aras de comprender el surgimiento de las ACMM, es necesario presentar a la Honorable Corte los resultados a través de los cuales la actividad investigativa ha permitido determinar una probable línea de tiempo, la cual permite explicitar de mejor forma las diversas épocas del grupo armado y sus características así[119]:

4.1 Periodo 1977-1984

Las ACMM son el resultado del fenómeno gestado en el último trienio de la década de los 70, en que, de la mano de su fundador y ex comandante Ramón María Isaza Arango alias EL VIEJO, MONCHO O EL PATRÓN y en respuesta social a la presencia, auge y dominio del Frente 9 de las FARC en el sur oriente del Departamento de Antioquia y la escasa respuesta estatal frente a su acometida, que se expresa en secuestros, extorsiones, chantajes, boleteos, hurtos y homicidios, deciden organizarse para contrarrestar dichas acciones.

Solicitan a ganaderos y madereros de la zona su apoyo para crear un grupo de autodefensas en el año 1977 quienes admiten financiarlo, ofertando la consecución y entrega de comida para el grupo que se conformara, lo mismo que armamento, a cuyo efecto entregan a Ramón María Isaza la suma de un millón de pesos, dinero con el cual este último le compra a campesinos de la región las primeras 8 escopetas, con las que conforma un grupo de 8 contrarrevolucionarios liderado por él, en cuyo asocio inician en el mes de

[118] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas. Pág. 19.
[119] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 29 de julio de 2015. Radicado No. 20155800013323

septiembre del mismo año emboscadas al Frente 9 de las FARC, logrando entre ese mes y el de febrero del año 1978 la baja de un número aproximado de 10 insurgentes, en acciones que le permitirían la obtención de armamento y municiones, logrando acrecentar el grupo, que para inicios del año 1978 contaba ya con 24 integrantes, conocidos como "Los Escopeteros".

Entre los años de 1978 a 1984, se dio un crecimiento al interior del grupo y una modificación en su estructura básica así: Ramón María Isaza en la cabeza con 12 hombres, tres comandantes de patrulla; Helmer Antonio Hernández alias "COTA", Omar de Jesús Isaza Gómez alias "TENIENTE" y Jose Gabriel González alias "CAMPEON"; todos ellos con diez hombres bajo su mando para un total de 42 integrantes con igual número de armas obtenidas en enfrentamientos con la guerrilla y hasta allí mantienen su nombre de los "ESCOPETEROS".

Esa estructura armada se rige por unos códigos de comportamiento –estatutos no escritos- según los cuales su enemigo natural es la subversión a quienes combaten o emboscan para asesinarlos (guerra de guerrillas). Los oponentes abatidos son abandonados en el mismo teatro de los acontecimientos, practica ejecutada con uniformidad hasta que en el año 1984 aproximadamente año en el cual con ocasión de la fusión con la estructura de Puerto Boyacá se genera una variante que implica lanzar los cuerpos al lecho de los ríos enteros y el desmembramiento de cuerpos humanos con el fin de evitar la investigación y persecución por parte de las autoridades. Se generan directrices de grupo que atienden la solicitud de parte de las comunidades donde empezaron a ser reconocidos y tenían injerencia, convirtiendo así en objetivo militar: ladrones, violadores, expendedores de vicio, secuestradores y extorsionistas, esta es la primera expresión de política de grupo denominada limpieza social. Dicho grupo hace presencia y tiene incidencia en Puerto Triunfo, Puerto Nare, San Luis, San Francisco y Sonsón – Antioquia -

4.2 Periodo 1984-1991

Mientras ello sucedía en Antioquia, en el municipio de Puerto Boyacá, se gesta un proceso de organización y arme de la población civil para enfrentar el asedio a campesinos, ganaderos y agricultores de la región, generado por los Frentes 4, 11, 22 de las FARC.

Con el fin de procurar armas para la población civil se decide la creación y funcionamiento de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio "ACDEGAM", que se constituiría en fachada para el tránsito de dineros, logística, pago de sueldos, armas y municiones de las nacientes Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, razón por la cual para el año 1984 Ramón Isaza

por razones de orden económico y logístico, admite fusionar su grupo ("Los Escopeteros"), con las nacientes Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), y ambas se valen de la ya existente "ACDEGAM".

Es importante destacar que existe evidencia según la cual, las mencionadas ACPB, nacen también como grupo de escopeteros, lo que hace creer que crecieron con mayor rapidez en hombres, armas y logística, apoyados en una secundaria fuente de financiación que proviene del narcotráfico, permitiendo liderar, confederar y organizar diversos grupos con ideales antisubversivos conocidos indistintamente para inicios de los ochentas como "Masetos" y "Escopeteros", desbordando el territorio primigenio y extendiendo a nivel nacional el fenómeno paramilitar y la injerencia de la agrupación armada ilegal. El grupo unificado extiende su accionar por todo el magdalena medio, logrando presencia y dominio en territorios de los Departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Santander, Cundinamarca, el municipio de Puerto Boyacá – Boyacá, Putumayo, Caquetá y Sur de Bolívar.

Para la época, capos del narcotráfico como Gonzalo Rodríguez Gacha alias "EL MEXICANO" se interesan en el apoyo militar de los grupos de autodefensas de la región, en cuanto que, libraban también ellos luchas contra la subversión, que amparados en su ilícita y lucrativa actividad, obtenían dividendos económicos mediante vacunas, chantajes, extorsiones, secuestros, etc. y se disputaban además territorios estratégicos que se constituían en interés común por cuanto eran ya "rutas del narcotráfico ".

Amparados los unos y los otros en el argumento del enemigo común, se produce la segunda conjunción de fuerzas, que vincula ahora a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, con grupos dedicados al narcotráfico, entre ellos el de Gonzalo Rodríguez Gacha. Esa unión entre grupos paramilitares y grupos de narcotráfico da lugar a la idea y propósito de constitución de las llamadas escuelas de formación o instrucción para la lucha armada y el sicariato, financiadas con dinero del narcotráfico y de las autodefensas de Puerto Boyacá. Las primeras escuelas ubicadas en jurisdicción de Puerto Boyacá se denominan "CERO UNO", "EL CINCUENTA" y "EL TECAL". Luego surgen otras como "CERO OCHENTA Y UNO" y "GALAXIAS". El primer curso se adelanta en la escuela "EL TECAL" ubicada en la finca LA PAZ de Puerto Boyacá.

A dichas escuelas se convocan instructores militares extranjeros y mercenarios británicos quienes viajan desde Londres a Colombia para entrenar paramilitares. Su primera misión, contratados con dineros de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, consistía en atacar la sede principal de las FARC ubicada en las selvas denominada casa verde y la segunda, contratada ahora por el cartel

de las drogas de Cali ubicar y dar de baja al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en la hacienda Nápoles. A los cursos de formación ingresan militantes de las organizaciones armadas ilegales, dando lugar tras la terminación y graduación de alumnos a grupos especializados de seguridad, choque y sicariato.

4.3 Periodo 1991-1994

Ramón María Isaza Arango continuaba su guerra con Pablo Escobar Gaviria, lucha que afronta al mando un grupo disidente de la desmovilización de 1991, el cual pasaría a denominarse como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Esa guerra le permite obtener armas de los oponentes abatidos e incrementar por lo mismo el píe de fuerza de su grupo, que para finales del año 1993 contaba ya con más de 100 integrantes, reclutados unos de la desmovilización de 1991, y otros de grupos de desertores de su oponente Pablo Escobar.

4.4 Periodo 1994-2000

Entre los años 1994 y 2000 se genera una nueva estructura liderada por Ramón María Isaza así: Alias "TENIENTE" (Omar de Jesús Isaza Gómez) con el grupo especial de los Halcones en Antioquia en el año 1996, y para 1997 en la zona de la Dorada, Caldas como comandante hasta su muerte, ocurrida en el mes de diciembre de 1998. Alias "VASO" (Jorge Enrique Echeverry) se mantiene en la zona de San Miguel que traía desde el año 1991; Alias "CANARIO o MIGUEL N" se mantiene en la zona de puerto Triunfo que lideraba desde el año 1991: Alias "GUERRILLO" a partir del año 1995 en la zona de Puerto Perales y estación Cocorná (Antioquia); alias "CAMPEON"(José Gabriel González) en la zona de las Mercedes desde el año 1991, remplazado en el año 1994 por alias "ROQUE"; alias "JULIAN" (Jesús Antonio N.) en la zona de Puerto Nare desde el año 1995 remplazado en el año 1998 por "TERROR" (Oliverio Isaza Gómez); alias "PEDRUCHO" (Pedro Ángel Quintero) años 1999 a 2000 en la zona de Guaduas y Cambao; alias "ROQUE" (Ovidio Isaza Gómez) en la zona de la Danta en los años 1991 a 1994, en las Mercedes de 1994 a 1995, en Antioquia en el año 1995.

4.5 Periodo año 2000 hasta la desmovilización

A partir del año 2000 se introducen nuevas modificaciones, esta vez basadas en la imposibilidad material del excomandante Ramón María Isaza, de controlar los extensos territorios que dominaba y en la necesidad de descentralizar ese control. Es así como surgen los frentes Omar Isaza –FOI- comandado por Walter Ochoa Guisao, alias "EL GURRE" en lo político y Luis Fernando Herrera Gil alias

"MEMO CHIQUITO o JUAN CARLOS" en lo militar; Frente Jhon Isaza comandado por Ovidio Isaza alias "ROQUE" y Frente Jose Luis Zuluaga comandado por Luis Eduardo Zuluaga Arcila alias "MAGGUIVER". En enero de 2002 surge el Frente Isaza Héroes Del Prodigio comandado por Oliverio Isaza alias "TERROR" y en el mes de junio del mimo año el Frente Celestino Mantilla comandado por Jhon Fredy Gallo Bedoya alias "PAJARO".

No obstante, la independencia económica y logística de esos frentes, inclusive hasta la fecha de la desmovilización colectiva se mantuvo Ramón María Isaza como comandante general de la estructura y comandante del Frente Central, siendo reconocida su jerarquía por todos los demás comandantes. Es preciso referir que en la parte política cada frente designaba un integrante a quien era conocido como "Político", encargado de relacionarse con las autoridades locales.

También era conocido como político, la persona que daba instrucción o charlas de tipo político en las escuelas de formación. Los nuevos frentes reciben del comandante general elemento humano y logístico para iniciar actividades, el comandante general se mantiene como tal y en esa condición recibe constantes reportes de los comandantes de Frente y de Zona.

En resumen, si bien el grupo de Ramón Isaza tuvo relaciones con las autodefensa ilegales de Puerto Boyacá durante los años ochenta[120] (las cuales tuvieron desafortunadas relaciones con algunos agentes estatales y quienes han sido perseguidos por el propio Estado colombiano por sus delitos), esta agrupación cobró autonomía en la década de los noventa. De esta forma, desde 1994 el grupo de autodefensa ilegal liderado por el señor Ramón Isaza actuó de forma autónoma, y desde entonces hasta su desmovilización en 2005, llevó a cabo su accionar en la región del Magdalena Medio, financiado por el producto de la extorsión a finqueros y comerciantes de la región, el hurto de hidrocarburos y el narcotráfico[121].

Ese surgimiento y consolidación fue abordado por el Tribunal Superior de Bogotá, Corporación que en búsqueda de la verdad judicial, identificó la estructura de las ACMM y documentó múltiples actos criminales de esta organización armada al margen de la ley, por los cuales miembros de las ACMM (en especial sus líderes y mayores responsables) fueron condenados. En palabras del Tribunal:

[120] República de Colombia. Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. MP. Eduardo Castellanos Rosso. Mayo veintinueve (29) de dos mil catorce (2014). Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS. párr. 529, 533 y 535.
[121] República de Colombia. Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. MP. Eduardo Castellanos Rosso. Mayo veintinueve (29) de dos mil catorce (2014). Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS. párr. 529, 533 y 535.

"De acuerdo a los temas abordados y al plan temático establecido inicialmente, la Sala ha podido constatar la forma como se originaron, fortalecieron y expandieron las ACMM, su estructura y algunos de los patrones de conducta a través de los cuales desarrollaron su accionar criminal. De lo anterior, la Sala puede colegir que está plenamente establecido que RAMÓN MARÍA ISAZA, desde finales de la década de los setenta hasta el momento de su desmovilización lideró un grupo organizado al margen de la ley que en principio se denominó "Los Escopeteros" y que durante el último quinquenio de su existencia se consolidó como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, (…).

717. La Sala también ha podido confirmar que esta organización tuvo una influencia armada y política en la región del Magdalena Medio, para lo cual se valieron de la realización de acciones delictivas que produjeron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, sobre la población civil, de las cuales, la Fiscalía 2 de Justicia y Paz amparada en las versiones libres de los postulados y en el proceso investigativo, ha documentado alrededor de 1000 hechos y para el presente control de legalidad priorizó y presentó 100 de los mismos, los cuales son objeto de análisis por parte de la Sala en la presente decisión."[122] (Subraya fuera del texto)

En particular, la justicia penal colombiana ha condenado, entre otros, al señor Ramón Isaza Arango por sus crímenes y abusos de los derechos humanos como parte de las ACMM, en especial por los delitos de homicidio agravado; homicidio en persona protegida; desaparición forzada; reclutamiento ilícito de menores; acceso carnal violento en persona protegida; tortura en persona protegida, y; desplazamiento forzado[123].

De esta manera, fue la intervención del narcotráfico (entre otros elementos, dependiendo de la zona geográfica y el momento), y no la ejecución de una política institucional del Estado, la que deformó el espíritu de auxilio y *self-protection* de las autodefensas en la década de los ochenta. La propia CorteIDH ha encontrado como probado que dichos grupos tenían como "objetivo […] movilizar a la población civil para auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros."[124] Paralela a esta

[122] República de Colombia. Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. MP. Eduardo Castellanos Rosso. Mayo veintinueve (29) de dos mil catorce (2014). Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS. párr. 716 y 717.
[123] [123] República de Colombia. Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. MP. Eduardo Castellanos Rosso. Mayo veintinueve (29) de dos mil catorce (2014). Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS. párr. 1413, Resuelve Cuarto.
[124] *Cfr.* CorteIDH, Casos: *19 Comerciantes*, Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 84.b), y; "*Masacre de La Rochela"*, Sentencia del 11 mayo de 2007. Serie C No. 163, nota al pie 51.

distorsión, terceros organizaron grupos antisubversivos, con el fin de enfrentar a la guerrilla. Estos dos elementos exógenos a la institucionalidad estatal, aunados a muchos más según el caso particular, es decir: la desviación de la naturaleza de los grupos de autodefensa provocada por la intromisión del narcotráfico, y la creación por parte de terceros de grupos armados para combatir a la guerrilla, se conjugaron junto con dinámicas locales particulares, para producir el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

Así pues, el espíritu original de las normas legales fue deformado en algunos casos en su aplicación, y aprovechado para conformar grupos paramilitares. Al respecto, es pertinente resaltar la diferencia ontológica y teleológica de los grupos de autodefensa y las agrupaciones paramilitares. Aquellos, como asociaciones campesinas o ganaderas organizadas con un fin de autoprotección frente a las acciones que en su contra cometían las guerrillas, y éstas, como organizaciones ilegales promovidas y financiadas principalmente por el narcotráfico y en algunos otros casos por otros sectores sociales, creadas para llevar acciones de contrainsurgencia y/o desalojar, asesinar y justificar las actividades de la industria narcotraficante[125]. Infortunadamente, y Colombia no descansa en rechazarlo ni de expresar su repudio por ello, los grupos paramilitares sedujeron a algunos miembros de la fuerza pública con los cuales adelantaron aisladas acciones militares conjuntas, haciéndose denominar equivocadamente como autodefensas.

De conformidad con lo previamente expuesto, no es apropiado, y por el contrario es falso, atribuir a una política institucional estatal el origen y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En razón a lo anterior, se hace necesario que en los casos contenciosos sometidos a la jurisdicción de la H. Corte en relación con violaciones a los derechos humanos que involucren miembros de los grupos paramilitares en Colombia, se pruebe de manera concreta y directa la participación, colaboración, aquiescencia o connivencia de agentes del Estado en cada uno de los hechos que se alegan como violaciones.

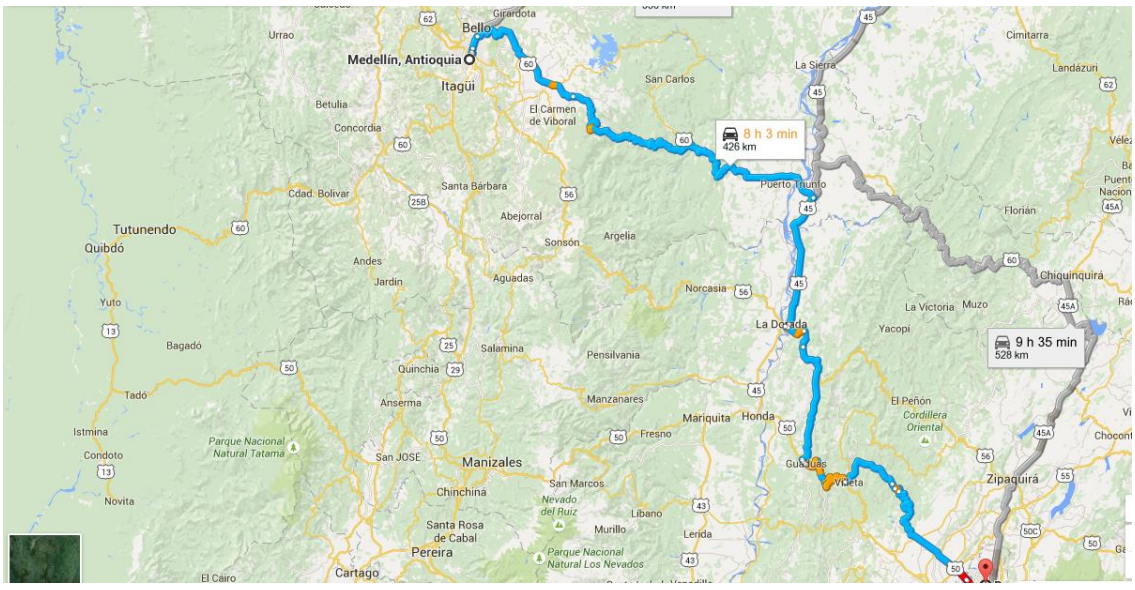
Por lo anterior, se solicita a la H. Corte desestimar todas las consideraciones que aluden a una política institucional de apoyo al paramilitarismo, así como las afirmaciones y hechos presentados en las diferentes comunicaciones de los peticionarios como contexto, que no sean debidamente probadas para el caso en particular que nos ocupa (tanto en tiempo como en lugar), y centrar su análisis en los hechos puntuales del presente caso.

[125] El análisis detallado de las discrepancias entre las autodefensas y los paramilitares ha sido suficientemente documentado. Solo por citar algunos ejemplos se pueden consultar los textos de Medina Gallego, Carlos. *Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación: el caso de Puerto Boyacá.* Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos. 1990. pg. 170 a 186, y; CorteIDH, Casos: *19 Comerciantes*, Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.

B. La carretera Bogotá – Medellín: su ubicación geográfica como objetivo estratégico para el asentamiento de los actores armados en la región.

Como se ha venido mencionando, uno de los factores que deberá ser objeto de análisis por parte de la Honorable Corte, es la especial situación de la carretera Bogotá – Medellín para la época de los hechos. Dicho análisis, no puede efectuarse sin tener en cuenta los factores que determinaron la importancia de este trayecto vial, los cuales configuraron las razones que motivaron la presencia de grupos armados ilegales en la región, generando confrontaciones orientadas al posicionamiento territorial, y de esta manera garantizar el tránsito de armas y narcotráfico hacia diferentes regiones del país. Por estas razones, son múltiples los intereses que representaba la carretera Bogotá – Medellín para los actores del conflicto, veamos:

Mapa 2. Carretera Bogotá-Medellín



- **Obras de infraestructura**

El Oriente Antioqueño, como eje potencial estratégico, comenzó a tener importancia a partir de la década del 70, con la construcción y puesta en funcionamiento de tres importantes obras de infraestructura: i) El Aeropuerto

Internacional José María Córdova (Rionegro); ii) las represas de San Carlos 1 y 2, Jaguas y Calderas, y la extensión de las líneas de transmisión de energía; y iii) la autopista Bogotá – Medellín[126]. Estas obras de infraestructura fueron esenciales para la llegada de grupos armados ilegales, generando nuevos y complejos escenarios de violencia sobre la población civil de los diferentes municipios circundantes a estas construcciones.

En relación con el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro), éste ha tenido un valor estratégico para la guerrilla dada su importancia como terminal aéreo y alta demanda de pasajeros. Este terminal aéreo ha sufrido ataques contra equipos de VOR y DME (radioayudas a la navegación aérea) por parte de grupos guerrilleros.

Por otra parte, en el Oriente Antioqueño existen seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, y Calderas) que generan el 29% de la energía nacional y el 73% del total departamental, lo cual hizo que la guerrilla identificara esta zona como un territorio estratégico para desarrollar atentados contra varias centrales hidroeléctricas; como por ejemplo: las centrales de Guatapé, Jaguas y Calderas, así como contra las torres de conducción, campamentos y oficinas.

Respecto a la autopista Bogotá – Medellín, debe recalcarse que ésta ha tenido una relevancia estratégica en la región, por cuanto es la tercera obra vial del país y ha sido escenario de la pugna entre la guerrilla y los grupos de autodefensas ilegales, quienes combaten por ejercer control en la zona. Con ese propósito, dentro de las acciones delincuenciales perpetradas en la carretera, se encuentran las siguientes: atentados dinamiteros contra la Fuerza Pública, extorsiones a las empresas de transporte, cobro de 'peajes' ilegales a los pobladores que transportaban sus productos, montaje de 'retenes' ilegales para realizar 'pescas milagrosas', bloqueos, entre otras acciones ilegales.

- **Área metropolitana del Valle de Aburrá.**

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está integrada por los municipios de Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado y Caldas. Este territorio desde 1970 comenzó a evidenciar un fenómeno de conurbación, es decir, la vinculación de grupos urbanos entre sí, debido a las relaciones de orden físico, económico, social y ambiental.

[126] Ver mapa 2.

Este aspecto, fue importante para que los grupos armados ilegales buscaran consolidar su hegemonía en el Oriente Antioqueño, debido a que reunía un número importante de municipios, entre ellos Medellín, que por sus características les permitía tener una presencia de núcleos urbanos para extender sus acciones armadas y buscar otras fuentes de financiación mediante la extorsión y el secuestro.

- **Corredores de movilización de armas, municiones e insumos.**

El Oriente Antioqueño se encuentra en un territorio que permite transitar hacia el Urabá, hacia la costa Atlántica y hacia Bogotá, por tanto, se constituye en un corredor de movilización de armas y municiones para los grupos armados ilegales debido, entre otros aspectos, a que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasaban por allí. "A los elenos los conecta con el sur de Bolívar, donde tradicionalmente han manejado su comando central, y a las Farc con el Bloque Noroccidental, hoy por hoy, uno de los más importantes de esa organización", aseguró uno de los oficiales de Inteligencia del Ejército con sede en Medellín.[127]

- **Zona agroindustrial del Oriente Antioqueño.**

Para finales de la década del noventa, en cuanto a la producción agropecuaria, el Oriente Antioqueño se convirtió en la principal fuente de alimentos básicos del departamento, con una participación del 60%. Así mismo, es la principal fuente abastecedora de materia prima de origen minero y forestal para la industria de bienes de consumo corriente (locería, artículos de vidrio, muebles) y bienes intermedios (cemento, derivados del petróleo y gas, papel, refractarios, pinturas, maderas para la construcción, entre otras).

Por otra parte, a finales de los noventa el Oriente Antioqueño se convirtió en un polo de producción industrial de bienes manufacturados y es proveedor de divisas debido a las exportaciones de flores, textiles y café.

Bajo este contexto, para los grupos armados ilegales, este desarrollo económico se convirtió en una fuente para la obtención de recursos derivados de los secuestros, el cobro de "vacunas" a importantes empresas instaladas en la región y a los propietarios de tierras y fincas de recreo. Entre 1997 y 1998 ocurren 138 secuestros en el Oriente Antioqueño atribuidos a la guerrilla, los

[127] Semana (2000). Camino culebrero. Recuperado en http://www.semana.com/nacion/articulo/camino-culebrero/44360-3. Párrafo 12

cuales corresponden al 29,11% del total de secuestros cometidos por la insurgencia en el Departamento.[128]

Otro aspecto a resaltar, ante el impacto que generó el narcotráfico en esta zona, fue el fenómeno del aumento desproporcionado del valor de las tierras, tanto en el área rural como urbana, llegando a ser uno de los más costosos por metro cuadrado del país.

Con fundamento en los aspectos antes identificados, la Honorable Corte podrá apreciar que el área que comprende la carretera entre Bogotá y Medellín, en el departamento de Antioquia, se encuentra en el Oriente Antioqueño y se ha caracterizado por ser el eje estratégico para los grupos armados ilegales, específicamente, desde 1990. Las variables que generaron que esta región se convirtiera en una zona donde el conflicto armado alcanzó los mayores índices de violencia son: i) ubicación geográfica, ii) obras de infraestructura, iii) área metropolitana del Valle de Aburrá, iv) Corredores de movilización de armas, municiones e insumos, v) zona agroindustrial del Oriente Antioqueño y vi) cultivos de coca.

C. La situación del Oriente Antioqueño en el marco de la disputa territorial.

La región del Oriente Antioqueño es una de las que conforma el departamento de Antioquia. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2007), hoy Consejería Presidencial para los Derechos Humanos:

"El departamento de Antioquia se caracteriza por poseer un gran valor estratégico por sus condiciones geopolíticas, sociales, económicas y ambientales. Su territorio está compuesto por las cordilleras Central y Occidental, los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato y el mar Caribe. Cuenta con una desarrollada infraestructura vial, que comunica al país a través de importantes carreteras, como son las troncales del Magdalena, el Caribe y la Occidental. Su posición le permite tener influencia sobre la región del Atrato, el Eje cafetero, el Magdalena Medio, la Mojana y la región del Urabá.

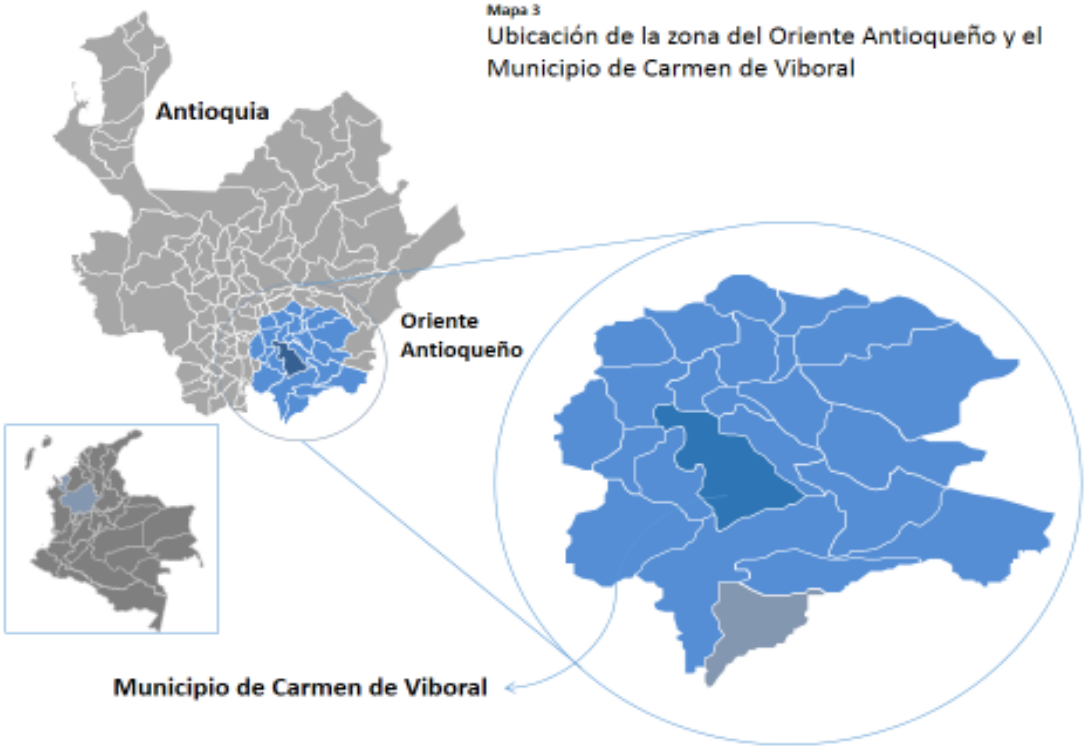
Estas características geoestratégicas, sumadas a la convergencia de múltiples grupos de guerrilla, autodefensas, narcotraficantes, traficantes de armas y delincuentes comunes, en buena parte de las regiones del departamento,

[128] Jaramillo, A. (s.f*). El Oriente Antioqueño*. Recuperado de http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=19314. Página 3.

hicieron que Antioquia estuviera asociada durante cuatro décadas a una violencia significativa, que se expresó a través de altas tasas de homicidio, múltiples casos de desplazamiento forzado, numerosas víctimas de minas antipersona e intensas acciones armadas por parte de los grupos armados irregulares.” [129]

Como se mencionó, la subregión del Oriente Antioqueño es una de las nueve regiones de Antioquia y se encuentra localizada en el sur oriente de este departamento (Ver Mapa No. 3). Tiene una extensión territorial de 7.021 Km^2, es decir, el 11% del territorio antioqueño, y comprende 23 municipios. Además, es la segunda subregión más poblada del departamento (después del Valle de Aburrá) y está dividida en cuatro zonas, que por sus características históricas, geográficas, económicas y sociales, se encuentran bien diferenciadas entre sí. Altiplano: (Guarne, San Vicente, Marinilla, Rionegro, El Santuario, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, y La Unión); Embalses: (El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Alejandría, Concepción y Granada); Bosques: (Cocorná, San Francisco y San Luis) y Páramo: (Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño).

Mapa 3
Ubicación de la zona del Oriente Antioqueño y el Municipio de Carmen de Viboral



[129] Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2007). *Diagnóstico Departamental de Antioquia.* Recuperado el 7 de febrero de 2014, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/antioquia.pdf. Páginas 1-2

La dinámica del conflicto armado en la zona donde se encuentra el municipio de El Carmen de Viboral se ha caracterizado, debido a que este municipio se encuentra en la Subregión del Oriente Antioqueño, por ser un área estratégica y de importancia económica para la consolidación de grupos armados al margen de la ley. Al respecto es pertinente resaltar que:

> "Entre los factores que determinaron la localización de las guerrillas en el Oriente Antioqueño hacia comienzos de los años ochenta tuvo especial importancia en su enorme potencial estratégico. La región comienza a adquirir importancia económica a partir de la década del setenta con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, las represas de San Carlos 1 y 2, Jaguas y Calderas y la extensión de las líneas de transmisión de energía. El Oriente es también una de las principales despensas agropecuarias del departamento, abastece la tercera parte de la energía hidroeléctrica generada en el país, es asiento de un importante complejo industrial y una moderna estructura de comunicaciones; además posee una incalculable riqueza en biodiversidad, potenciada por la variedad de sus climas que van desde los territorios más cálidos hasta los páramos, lo que la predispone por ser una zona especial para investigaciones biogenéticas, el ecoturismo y la prolongación de la vida útil de los embalses."[130]

La presencia de los grupos guerrilleros comienza en las zonas estratégicas de la región para continuar con su proceso de consolidación:

> "En este momento las acciones más frecuentes son las incursiones en la autopista Medellín-Bogotá, los asaltos y combates con el Ejército en las áreas rurales de los municipios donde se ha extendido el grupo insurgente. Hacia comienzos de los años noventa, el ELN hace presencia con el frente Carlos Alirio Buitrago en la zona de embalses (área rural de San Carlos y Granada) y desde allí se expande a San Luis y Cocorná hasta el vértice de confluencia con las Farc. Hacia finales de la década, el ELN creó en la región, a partir del "frente de guerra Noroccidental", la llamada "área industrial" con influencia de los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe. Esta región se caracteriza por la industria del cemento, las hidroeléctricas y la existencia de una compleja infraestructura de

[130] Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2004). *Panorama Actual del Oriente antioqueño. Recuperado* el 7 de febrero de 2014, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/orienteantioqueno.pdf

torres que han sido objeto de continuos sabotajes (…).”[131] (subraya fuera de texto original)

Para el año de 1996 la disidencia del EPL realizaba aún presencia en el Oriente Antioqueño, registrándose la recuperación de un campamento con caleta de 150 uniformes de la Policía Nacional y 4700 cartuchos de munición para fusil[132], crímenes colectivos, voladura de puentes, secuestros, extorsiones, piratería, homicidios de hacendados en el Departamento con daños totales en bienes civiles y hurto de ganado[133], e incluso masacres en conjunto con el grupo FARC en Antioquia, así como que se sirvieron del narcotráfico para financiar sus actividades[134]. El EPL, llevó a cabo su desmovilización en septiembre de 1996.

Para 1996 eran constantes los enfrentamientos entre la guerrilla y grupos “paramilitares”[135], la guerrilla ejercía una enorme presión en esta región recurriendo insistentemente a los paros armados y bloqueos de la autopista Medellín-Bogotá[136], y se presentaban hechos de violencia contra la población civil de parte de la guerrilla alrededor del país[137].

En suma, siguiendo al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2004) se concluye que:

> “No resulta extraño corroborar (…) que toda la riqueza del Oriente Antioqueño constituye el telón de fondo de la realización de masacres y enfrentamientos entre grupos irregulares que de manera calculada han ocasionado el desplazamiento de la población. El conflicto armado y las manifestaciones de violencia se han intensificado debido a que la zona ha sido objeto de la disputa armada entre cuatro frentes guerrilleros y tres estructuras de las autodefensas. No cabe duda de que la competencia entre los protagonistas del conflicto armado en el Oriente Antioqueño se relaciona con las expectativas sobre la apropiación y uso de su enorme

[131] Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2004). *Panorama Actual del Oriente antioqueño. Página 4. Recuperado* el 7 de febrero de 2014, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/orienteantioqueno.pdf
[132] El Tiempo (1996). *Combates*. Recuperado en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-423879
[133] El Tiempo (1996). *EPL Asesina a Ganadero en Turbo*. Recuperado en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-384284
[134] El Tiempo (1996). *Gonzalo es sindicado de 79 asesinatos*. Recuperado en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-519231
[135] Rutas del Conflicto (2015). *Masacre de Pueblo Bello 1996.* Recuperado en http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=125
[136] Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2004). *Panorama Actual del Oriente antioqueño. Recuperado* el 7 de febrero de 2014, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/orienteantioqueno.pdf
[137] En abril de 1996 una niña de 16 años quien pertenecía al EPL fue fusilada por los mandos del grupo al pedir ropa interior a un campesino. En Antioquia, una familia con dos niños de 3 y 5 años fueron heridos por disparos del ELN cuando éstos disparaban contra soldados del Batallón Juan del Corral (El Tiempo, 1996).

> potencial estratégico y económico. Es en este contexto donde las respuestas de los diferentes actores, buscando garantizar su permanencia y control de la zona, se dirigen contra los civiles, generando una de las más preocupantes situaciones en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional."[138]

La presencia de estos actores del conflicto armado generó diversas formas de violencia contra la población civil que se vio reflejada en secuestros, amenazas, boleteo, quema de vehículos, paros armados, desapariciones, homicidios selectivos, torturas y tratos crueles, es decir, violando los derechos humanos y cometiendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La situación de violencia armada era tan compleja en la década de los noventa en el Oriente Antioqueño que inclusive miembros de la Misión Electoral de la OEA (quienes llegaron al zona para realizar una inspección pre-electoral en la elecciones que se llevaban a cabo en octubre de 1997) fueron secuestrados en el oriente antioqueño el octubre de 1997 por miembros del ELN[139].

Es así como varios grupos armados se disputaron el control territorial del Magdalena Medio, razón por la cual el llamado Oriente Antioqueño (del cual varios municipios hacen parte del Magdalena Medio) fue azotado por las acciones armadas de múltiples actores del conflicto armado.

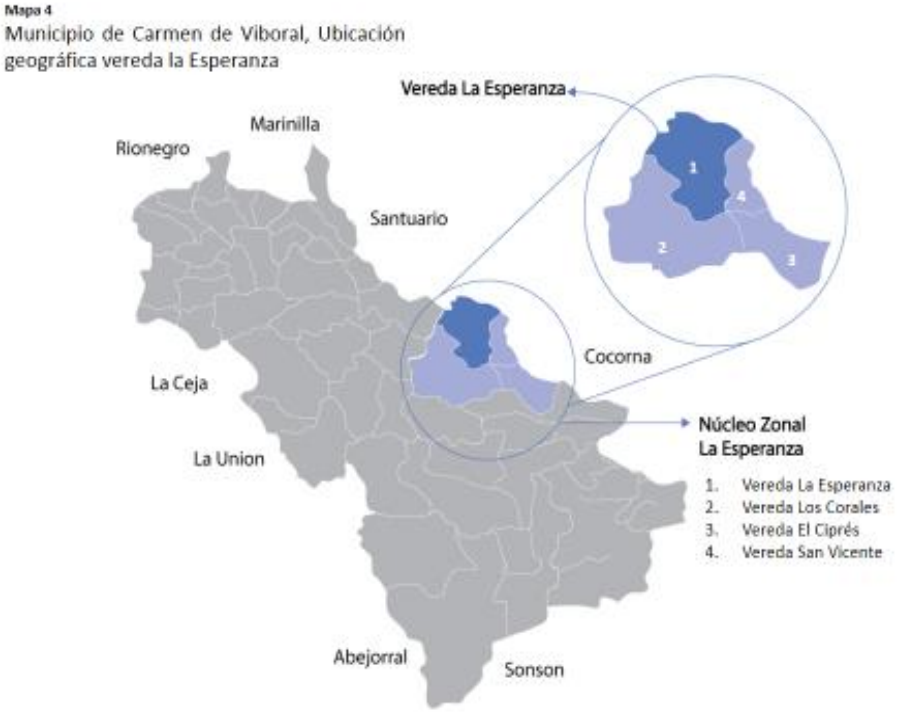
Dentro de esta subregión, y dado que los alegados hechos violatorios ocurrieron en el municipio de Carmen Viboral, es pertinente reseñar algunos aspectos de este. El Carmen de Viboral está localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Marinilla, Cocorná y El Santuario; por el este con el municipio de Cocorná; por el sur con el municipio de Sonsón y por el oeste con los municipios de La Unión, La Ceja y Rionegro.

Por su parte, el municipio del Carmen de Viboral está integrado por los siguientes núcleos zonales (corregimientos) así: Aguas Claras, Las Garzonas, La Aurora, Campo Alegre, La Chapa, La Madera, Santa Inés, El Retiro, Santa Rica y La Esperanza. En relación con éste último núcleo zonal, La Esperanza, está integrado por cuatro veredas a saber: La Esperanza, San Vicente, Corales y El Ciprés (ver mapa 4).

[138] Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2004). *Panorama Actual del Oriente antioqueño. Recuperado* el 7 de febrero de 2014, en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/orienteantioqueno.pdf. Página 3

[139] El Tiempo. 2 de noviembre de 1997. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-700074

La extensión total del municipio –Carmen de Viboral- es de 448 Km^2 y la altitud de la cabecera municipal es de 2.150 metros, sobre el nivel del mar. La temperatura media es 17º C y la distancia de referencia es de 54 Km de la Ciudad Medellín. A su vez, la Vereda La Esperanza presenta las siguientes características geográficas: sus tierras son muy variadas, con grandes accidentes geográficos, desde pequeñas llanuras, pasando por tierras levemente pendientes, hasta tierra con voladeros, peñascos etc.



La mayor parte de estas tierras están compuestas por un relieve fuertemente quebrado, con pendientes largas y cañones en V, las montañas más destacadas son: el alto de Úrsula, el picacho y la hundida. Es muy abundante en aguas, pues la limitan tres grandes fuentes como son el río Cocorná, la Quebrada y La Hundida, además es dividida por otras cuatro importantes quebradas como son el Viadal, la Cadavid, la Florida y la Cascada. De esta vereda nacen también múltiples fuentes y pequeños nacimientos de agua. Los caudales de ríos y quebradas, son propicios para actividades de pesca, baño, generación de energía, entre otros.[140]

[140] El Carmen de Viboral (2014). El Carmen de Viboral La perla azulina del Oriente Antioqueño. Recuperado el 6 de febrero de 2014, en http://elcarmendeviboral.com/index.php/Nuestro-Territorio/Monograf%C3%ADas.html.

El siglo XX trajo un acelerado desarrollo vial para el Departamento de Antioquia tanto en carreteras como ferrocarriles, muchos de ellos iniciados en el siglo anterior. En los años veinte se trazó la carretera Medellín-Rionegro por Santa Elena, y en los treinta la carretera Sonsón-Dorada. En 1955 dan al servicio las carreteras Medellín-Cartagena y la carretera al mar (Urabá). En 1978 se puso en funcionamiento la autopista Medellín-Bogotá.[141]

Como se denota, el municipio de Carmén Viboral, dada su ubicación geográfica y estratégica, fue objeto de las disputas territoriales que los actores armados ilegales llevaron a cabo en la región del Oriente Antioqueño.

Tal y como se ha descrito en éste acápite, tanto la región del Magdalena Medio como la subregión del Oriente Antioqueño (y en ella el municipio de Carmen Viboral) han vivido una realidad sumamente compleja en medio de distintos actores armados organizados al margen de la ley que han querido ejercer control sobre el territorio. Adicionalmente, otros factores como el narcotráfico y la delincuencia común complejizan aún más el contexto social, político y de violencia que atravesó la región en los años noventa. Evidentemente, las acciones de la fuerza pública para combatir los actos criminales de las distintas organizaciones han generado que la región haga parte del territorio en el cual el conflicto armado interno colombiano se ha desarrollado.

En especial, en la década de los noventa la situación de violencia armada se torna sumamente compleja en el Magdalena Medio. De acuerdo con la investigación de Dávila Saad, las acciones de los grupos armados ilegales en la región incluía acciones terroristas, emboscadas, enfrentamientos, asaltos a entidades, asaltos a la población civil, hostigamientos, piratería terrestre, arengas o panfletos, ataques a instalaciones y asaltos a propiedad privada.[142]

Las conclusiones de estudios respecto del Magdalena Medio evidencian como el accionar de los grupos guerrilleros en dicha región se incrementó e intensificó fuertemente en términos cuantitativos a mediados de los años 90s[143]. Igualmente cómo el accionar de los grupos de autodefensas ilegales se incrementó en dicha década en la región.

[141] Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) – Colciencias (1998). Colombia País de regiones. Tomo I, recuperado en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm
[142] Dávila Saad, Andrea. La violencia en el Magdalena Medio. Análisis de la dinámica espacial. Bogotá: Universidad de Los Andes. 2009. Pg. 56.
[143] Observatorio de Derechos Humanos, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. *Panorama actual del Magdalena Medio.* Conclusión No. 10. [On Line, accesado el 20 de agosto de 2015. Disponible en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/0403_regiones/magdalenamedio/index.htm]

Todas estas circunstancias evidencian el complejo contexto en el cual acaecieron los hechos que se presentan ante la H. Corte en el caso bajo estudio, y contrastan con las limitadas referencias contextuales expuestas en el ESAP por los peticionarios, las cuales parecieran desconocer la multiplicidad de actores y problemáticas de la región. Por tanto, de manera respetuosa se invita a la CorteIDH a tener en cuenta todos estos factores y actores en el análisis del presente asunto, y no únicamente los mencionados en el ESAP.

D. La lucha por la autopista Bogotá-Medellín y la Fuerza de Tarea Águila.

En respuesta al panorama delincuencial en el Magdalena Medio, el Estado adoptó medidas para contrarrestarlo. Dentro de estas medidas, las Fuerzas Militares, y específicamente el Ejército Nacional, decidió crear la Fuerza de Tarea Águila (en adelante FTA) como una fuerza especial destinada a controlar la Autopista Bogotá-Medellín y a proteger a la población civil que transitaba por esta vía, de las acciones de los distintos grupos armados al margen de la ley que se encontraban en disputa por este territorio de carácter estratégico.

De acuerdo con los registros documentales, la FTA fue creada para el mes de agosto de 1994. Mediante Radiograma N° 5241-DIV1-G3-PO-375 del 2 agosto de 1994 de la Primera División del Ejército Nacional, y mediante Radiograma del 5 de agosto de 1994 del Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se ordenó el desplazamiento que debía realizarse, desde el puesto de mando hacia la Base La Piñuela "para reestructurar el dispositivo control autopista Medellín-Bogotá". En este sentido, mediante comunicación N° BR4-B3-375 del 9 de agosto de 1994 el Comando de la Cuarta Brigada informó a la Primera División el cumplimiento del Radiograma indicando que a partir del 6 de agosto de 1994 se activó la FTA integrada por tropas del Batallón "Pedro Nel Ospina" y Batallón "Bárbula"[144].

Teniendo en cuenta que la FTA realizaba operaciones de control sobre la autopista Medellín-Bogotá, es posible observar la expedición de Planes de Control como el Plan N° DIV1-BR4-B3-PO-375 de 25 de junio de 1996[145] en el cual se expresa:

> "Durante el último bimestre la situación de orden público a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá se ha visto alterado gravemente por el incremento de actividades delincuenciales de las cuadrillas Narco-Terroristas Carlos Alirio Buitrago del UC-ELN [Unión Camilista del Ejército

[144] Radiograma N° 5241-DIV1-G3-PO-375 del 2 agosto de 1994 de la Primera División del Ejército Nacional, (Anexo 2)
[145] Planes de Control como el Plan N° DIV1-BR4-B3-PO-375 de 25 de junio de 1996. (Anexo 3)

de Liberación Nacional] y Elkin González del EPL [Ejército Popular de Liberación] quienes en su afán de tomar un control sobre esta vía de comunicación importante para el desarrollo socioeconómico del departamento de Antioquia y la necesidad de financiarse económicamente, están realizando retenes, quema de vehículos y la más preocupante el secuestro que actualmente arroja un alto número de personas en poder de éstas organizaciones subversivas".

Específicamente en las Instrucciones de Coordinación del Plan Operacional se señala: "No se acepta por ningún motivo cualquier tipo de acercamiento o relación con personas integrantes de los grupos de justicia privada (paramilitares), por el contrario la acción nuestra también debe ir encaminada a adelantar operaciones contra éstos bandidos"[146].

Así las cosas, la FTA surgió de la preocupación de las Fuerzas Militares por la situación persistente en el Oriente Antioqueño, en la que confluían distintos actores armados ilegales en una lucha por el control de éste territorio de importancia estratégica para sus actividades delictivas. En este sentido, la Honorable Corte puede apreciar que la pelea por el control de la autopista Medellín-Bogotá entre grupos guerrilleros y grupos de autodefensa o justicia privada como eran conocidos para la época, era latente.

Acciones del Ejército Nacional en el Oriente Antioqueño para la época de los hechos:

Los ataques a la Fuerza Pública de parte de la guerrilla eran constantes, así por ejemplo, para marzo de 1994, con anterioridad a la creación de la FTA, fue informado por el Comando del Batallón de Ingenieros N° 4 "Pedro Nel Ospina" mediante Radiograma, que el día 09 de marzo de 1994 fallecieron por emboscada guerrillera del ELN mediante explosivos "vía carreteable puesto La Piñuela", un (1) Capitán y cinco (5) Soldados Voluntarios del Batallón. De igual forma, es posible notar que el Ejército Nacional llegaba a realizar ocho (8) denuncias penales[147] en un mismo día, ante la Fiscalía por hechos como emboscadas al Ejército, homicidio de civiles, amenazas a empleados de los peajes, quema de vehículos articulados de carga, furgones, buses de transporte de pasajeros, el secuestro de dos (2) comerciantes nacionales y tres (3) extranjeros, un (1) fiscal, y el homicidio de un (1) periodista[148].

[146] Instrucciones de Coordinación del Plan Operacional (Anexo 5)
[147] Ver Denuncias 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 BR14-BIBAR-S2-252 del 12 de junio de 1996. (Anexo 5)
[148] Ver denuncias N°1313, 1312/ BR14-BIBAR-S2-722, de abril 22 de 1996. Denuncias N° 0978 del 22 de marzo de 1996 y 1413 de 26 de abril de 1996. (Anexo 5)

En este contexto era notable la presencia de guerrilleros del EPL en el municipio del Carmen de Viboral, grupo al que el Ejército combatía contundentemente obteniendo resultados que demostraban la alta peligrosidad del grupo del EPL en la zona.

E. La doctrina del enemigo interno y el contexto del conflicto armado bajo la Constitución de 1991.

En su contexto los peticionarios señalan que el presente caso se enmarca en la doctrina del enemigo interno, y que, de acuerdo con ello, los campesinos fueron estigmatizados y perseguidos por las autoridades. El Estado rechaza estas consideraciones y a continuación expondrá cómo los manuales y documentos de seguridad del Estado aportados por los peticionarios, como aparente prueba de ello, no reflejan dicha doctrina y que, en todo caso, para la década de los noventa no es posible afirmar la existencia de dicha doctrina en el interior de la fuerzas armadas de Colombia.

En primer lugar, los representantes de las presuntas víctimas se refieren al Decreto 1705 de **1960.** Al respecto, se debe precisar que dicha normatividad únicamente distribuye las competencias correspondientes al entonces Ministerio de Guerra. Adicionalmente, para la época de los hechos no se encontraba vigente, por haber sido modificado por disposiciones posteriores y principalmente porque a partir de la Constitución Política de **1991**, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, fue cambiada la estructura orgánica del Estado sustancialmente.

A su vez, en cuanto a la información que se presenta, es preciso observar, que la interpretación según la cual el Decreto 3398 de **1965** que fue convertido en legislación mediante la Ley 48 de **1968**, se habría convertido en el documento de la "Doctrina de Seguridad Nacional", es una interpretación subjetiva y sesgada de dichas normas. Es de tener en cuenta que en dicha legislación simplemente se hace referencia a la doctrina necesaria para que el Estado le garantice a sus sujetos la seguridad y la defensa nacional, concepto adoptado por todos los Estados de derecho en la modernidad.

Además de lo anterior, debe precisarse que el artículo 33 de la Ley 48 de 1968, según el cual presuntamente se pretendía conformar grupos armados privados, estuvo vigente hasta la penalización de dichas conductas mediante Decreto 180 de 1988 (como fue recabado en la sentencia de la Corte IDH La Rochela) y suspendido directamente en su aplicación mediante Decreto 815 de 19 de abril

de 1989, para posteriormente ser declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante fallo N° 022 del 25 de mayo de 1989.

Así las cosas, es posible observar que el estudio y afirmaciones respecto de los textos citados por parte de los representantes de las presuntas víctimas es descontextualizado y equivocado, tanto por la aplicabilidad que tenían los mismos para el año de 1996 como por la ausencia de análisis del origen de los textos y lo que realmente reflejaban, que era la organización y funcionamiento de los grupos guerrilleros que surgieron en el país.

Como corolario, en el contexto en el cual ocurrieron los hechos objeto del caso *sub judice*, no es posible afirmar que existía por parte de las fuerzas de seguridad del Estado la aplicación de la llamada "doctrina del enemigo interno", dado que ella no estaba incorporada dentro de los manuales y documentos que orientaban las operaciones militares para 1996, además de la obligación de todos los agentes estatales, incluidas las Fuerzas Militares, de actuar de acuerdo con la Constitución Política y el Estado social de derecho, circunstancia que hace que –aun cuando dicha doctrina existiere después de 1991- los miembros de la fuerza pública no pudieren llevar a cabo actuaciones como la de perseguir a la población campesina. En consecuencia, se solicita a la H. Corte no tener en cuenta las consideraciones contextuales que hacen los representantes en el ESAP tendientes a señalar la existencia de la mencionada doctrina dentro de las fuerzas de seguridad del Estado para la época de los alegados hechos.

F. Marco jurídico de justicia transicional en Colombia.

Como es de conocimiento de la H.Corte, Colombia lleva más de 50 años en guerra. Ha sido un conflicto armado caracterizado por la complejidad de actores, la masividad de víctimas y la ferocidad de las victimizaciones. Todos estos años nos han dejado, según el reciente informe del Centro de Memoria Histórica aproximadamente 220.000 muertos, cerca de 5.000.000 de desplazados, 25.000 desaparecidos, cerca de 2.000 masacres, y más de 27.000 secuestrados[149]. Hoy Colombia se encuentra ante la mejor oportunidad de ponerle fin a ese conflicto, y nada contribuiría más a la protección de los derechos humanos en el país.

Por eso el Estado ha puesto en marcha un proceso metódico para llegar a la paz. Un proceso que tiene como centro de gravedad la idea de terminar el conflicto armado para poder pasar a una fase de construcción de la paz. Se trata de cerrar

[149] Centro de Memoria Histórica, "*¡Basta ya!: Colombia, Memoria de Guerra y Dignidad*", Imprenta Nacional, Bogotá D.C., 2013.

definitivamente el conflicto armado para poder reconstruir las regiones afectadas por el conflicto y hacer frente a las consecuencias que las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH nos ha dejado. En últimas, el objetivo es fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Se trata posiblemente, como han señalado varios expertos nacionales e internacionales, de la opción más realista que ha tenido el país a todo lo largo de su historia de lograr la terminación del conflicto armado interno[150].

En los últimos años, el Estado ha venido construyendo y aplicando distintas herramientas de justicia transicional. La apuesta es la construcción de una estrategia integral de justicia transicional que le permita al país lograr la terminación del conflicto armado y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. La finalidad de esta estrategia integral de justicia transicional, más allá del resultado específico de una u otra medida, es precisamente el fortalecimiento del Estado de derecho como consecuencia de la aplicación integral de las distintas medidas. La investigación y sanción de los máximos responsables de crímenes internacionales, la creación de comisiones de la verdad, la reparación integral administrativa de todas las víctimas y la implementación de reformas institucionales, son instrumentos de justicia transicional, entre muchos otros, cuyo fin último no es sancionar a un número específico de perpetradores, ni publicar determinado número de informes de la verdad; sino la contribución colectiva de todas estas medidas para reconocer que hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, reafirmar que lo que le sucedió a Colombia como sociedad es condenable, y ratificar que no es admisible que se vuelva a repetir.

El Estado está comprometido, claro está, con una estrategia que sea compatible con sus obligaciones internacionales. De otra manera no sería sostenible ni

[150] Desde que el Presidente asumió su cargo el siete (7) de agosto de 2010, retomó los contactos que venían adelantándose entre delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Gobierno nacional, con miras a generar acercamientos que permitieran la terminación definitiva del conflicto armado interno. Entre febrero y agosto de 2012 se llevó a cabo la fase exploratoria de un proceso de diálogo directo y reservado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. Durante esta fase las delegaciones llegaron a un acuerdo sobre los puntos de la agenda, que tendrían que ser discutidos para lograr la terminación del conflicto. Como resultado de ello, el veintiséis (26) de agosto de 2012 se firmó el "*Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*" (en adelante, el "Acuerdo General"). A partir de entonces inició la segunda fase del proceso de diálogo, en la cual se busca llegar a acuerdos sobre los puntos establecidos en la agenda del Acuerdo General y así poder llegar a un Acuerdo Final que ponga fin al conflicto armado interno. Actualmente las delegaciones del Gobierno nacional y de las FARC-EP se encuentran en un intenso proceso de conversaciones en La Habana, Cuba, llegando a la fecha a tres principales acuerdos, el primero sobre tierra y desarrollo, el segundo sobre participación política y el más reciente e histórico realizado el 16 de mayo de 2014 sobre drogas ilícitas y narcotráfico, el cual se constituye en el tercer conceso logrado en medio de negociaciones en la Habana, estando pendiente el punto de víctimas, e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Adicionalmente, se han adelantado acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De llegar a acuerdos sobre estos puntos se iniciaría la tercera fase del proceso, a partir de la cual se daría terminación formal al conflicto y se iniciaría la implementación simultánea de todo lo acordado, incluyendo la dejación de las armas, la reintegración de las FARC a la vida civil, y los procesos de justicia transicional.

legítimo. Ahora bien, la situación del Estado es particular, porque el país se encuentra ante un conflicto armado interno y ante la posibilidad de terminarlo a través de una negociación política. Ello no hace que las violaciones a los derechos humanos sean menos graves, pero sí implica que sea necesario poner en práctica un conjunto de medidas distintas a aquellas propias de un contexto de paz y de "normalidad".

El más reciente proceso de justicia transicional en Colombia partió de la expedición de la ley 975 de 2005 -Ley de Justicia y Paz-, "[p]or medio de la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional"[151].

La implementación de esta disposición desde el año 2005, permitió la desmovilización de cerca de 32.000 hombres pertenecientes a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia[152]. De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de judicialización de ex integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley en atención a la ley 782 de 2002 –Ley de Incorporación a la Vida Civil-, la cual establece disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y convivencia pacífica[153].

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación asumió los procesos de investigación de 4.700 hombres de las AUC y 520 desmovilizados de distintos grupos subversivos postulados por el Gobierno Nacional para la aplicación del procedimiento judicial contemplado en la ley de Justicia y Paz[154]. Entre estos postulados se han identificado altos mandos de grupos armados ilegales tales como Ramón María Isaza Arango -comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio-, Arnubio Triana Mahecha -comandante de las Autodefensas de Puerto Boyacá-, y Ely Mejía Mendoza, alias "Martín Sombra", -comandante del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo-[155].

Hasta el 1 de julio de 2015, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz reportaba 57.883 hechos confesados por los postulados, en los cuales relacionaban a 84.354 víctimas. Así mismo, fueron confesadas 2.253 masacres, 40.161 homicidios, 2.574 casos de reclutamiento ilícito, 7.020 desapariciones

[151] Congreso de Colombia, ley 975 de 25 de julio de 2005.
[152] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 13 de junio de 2014. Radicado No. 20141700040101
[153] Congreso de Colombia, ley 782 de 23 de diciembre de 2002.
[154] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 13 de junio de 2014. Radicado No. 20141700040101
[155] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 13 de junio de 2014. Radicado No. 20141700040101

forzadas, 17.914 desplazamientos forzados, 2.874 extorciones, 5.017 secuestros, 135 casos de violencia sexual, 2.034 torturas, y 191 conductas delictivas relacionadas con el tráfico, la fabricación o porte de estupefacientes[156].

Del mismo modo, hasta julio de 2015, las versiones libres desarrolladas habían sido transmitidas en directo a 1.734 municipios sumando un total de 5.743 días de transmisión en directo[157].

Como consecuencia de la información obtenida en desarrollo del proceso de justicia y paz, fueron compulsados a la justicia ordinaria 1.297 casos de políticos, 1.211 de miembros de las Fuerzas Armadas y 12.983 de terceras personas y desmovilizados, parta un total de 15.491[158].

Para esa misma fecha se había presentado solicitud de audiencia de imputación respecto a 1.108 postulados y solicitud de audiencia de formulación de cargos respecto a 813 postulados; respecto a 1366 postulados se había celebrado audiencia de imputación; frente a 30 postulados se adelantaba incidente de reparación; y 116 postulados contaban con sentencia[159].

Asimismo, habían sido exhumadas 4672 fosas, se habían encontrado 6.017 cadáveres de los cuales 1.033 cuerpos contaban con identificación indiciaria – estando en espera de los resultados de las muestras de ADN- y 3.049 se encontraban planamente identificados.[160] Para julio de 2015 se habían entregado 2974 cuerpos.

[156] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[157] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[158] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[159] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[160] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de

Justicia Transicional

Grupo interno de Trabajo de Exhumaciones

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Cuerpos encontrados

Cuerpos entregados

- Zona Norte
- Zona Occidente
- Zona Oriente
- Zona Sur

Actualizado Entregas 31/07/2015

Fosas encontradas	Cuerpos encontrados	Cuerpos con posible identidad	Cuerpos entregados
4672	6017	1033	2974

En lo que se refiere a la contribución de las víctimas en los procedimientos de justicia y paz, se tiene que para julio de 2015, 93.011 víctimas habían participado en versiones libres y 44.199 habían formulado preguntas a los postulados, en desarrollo de las versiones[161].

En cuanto a este mismo aspecto, resulta importante señalar que durante el año 2006 se llevaron a cabo 18 Jornadas Generales de Atención a Víctimas contando con la participación de 1.802 víctimas; en el 2007, 89 jornadas con 15.704 víctimas; en el 2008, 104 jornadas con 24.865 víctimas; en el 2009, 162 jornadas con 42.456 víctimas; en el 2010, 188 jornadas con 28.868 víctimas; en el 2011, 179 jornadas con 26.606 víctimas; en el 2012, 59 jornadas con 11.849 víctimas; en el 2013, 5.624 víctimas con 31 jornadas; en el 2014, 24 jornadas con 6292 víctimas y en el 2015, 23 jornadas con 2655 víctimas . Todo lo anterior generando un total de 867 jornadas de atención celebradas, con la participación de 166.721 víctimas.

De igual modo, hasta el 2015 se habían llevado a cabo 880 Jornadas de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, en las cuales se brindó atención a 167.115[162] personas y se tomaron 17.230 muestras biológicas[163].

Ahora bien, luego de ocho de años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se hicieron evidentes los retos de pretender investigar simultáneamente a más de cuatro mil personas, por 356.322 hechos punibles, bajo un procedimiento en el cual 445.346 víctimas esperaban respuesta luego de haber denunciado 427. 628 delitos[164].

Ante este universo de víctimas, delitos y victimarios, los operadores judiciales adelantaron la investigación bajo un enfoque de casos individuales que dificultó la caracterización de los contextos de actuación y de los patrones de macro criminalidad así como la identificación de las relaciones existentes entre los grupos armados al margen de la ley y otros sectores sociales[165].

A la luz de las consideraciones anteriormente señaladas, el Estado adoptó una serie de medidas con el fin de efectivizar el sistema de administración de justicia, específicamente en lo que se refiere a los mecanismos penales de justicia

[161] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[162] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 4 de septiembre de 2015. Radicado No. 20155800015233
[163] Fiscalía General de la Nación, disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/sub-unidad-victimas/ , consultado el 16 de agosto de 2015.
[164] Ministerio de Justicia y del Derecho, ponencia presentada ante la Corte Constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1592 de 2012 mediante el documento de radicado
[165] Ministerio de Justicia y del Derecho, ponencia presentada ante la Corte Constitucional frente a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1592 de 2012 mediante el documento de radicado

transicional inicialmente implementados a través de la ley 975 de 2005. Lo anterior, buscando materializar, los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, al igual que propiciar una reintegración a la vida civil de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que se desmovilizaron y fueron postulados por el Gobierno Nacional[166].

En este sentido, se expidió el Acto Legislativo 001 de julio 31 de 2012 "[p]or medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", la Ley 1592 del 3 de diciembre del mismo año que introdujo modificaciones a la ley 975 de 2005, y la Directiva 0001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación "[p]or medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación".

Asimismo, con el fin de implementar las herramientas de investigación penal establecidas en las citadas disposiciones, se expidió la Resolución 01810 del 4 de octubre de 2012 que creó la Unidad de Análisis y Contextos[167], la Resolución 01811 del 4 de octubre de 2012 por medio de la cual se creó y reglamentó el Comité de Priorización de Situaciones y Casos en la Fiscalía General de la Nación[168], y el Acuerdo 001 de enero de 2013, a través del cual se expidió el reglamento interno del Comité de Priorización de Situaciones y Casos[169].

De igual modo, se crearon los instructivos para la elaboración de los Planes de Acción por parte de las Unidades Nacionales de Fiscalías, de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y de las Direcciones Seccionales de Fiscalías, y de acuerdo a esto, se emitieron las resoluciones 001 de 15 de enero de 2013 y 002 del 25 de junio de 2013, por medio de las cuales se ordenó a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a las Unidades Nacionales y a las Direcciones Seccionales de Fiscalía, la presentación de planes

[166] Fiscalía General de la Nación, Plan de Acción de Casos a Priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz", 2013.
[167] Fiscalía General de la Nación, **Resolución** 01810 del 4 de octubre de 2012, "*Por medio de la cual se crea la Unidad de Análisis y Contextos*", disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-01810-del-4-de-octubre-de-2012.pdf
[168] Fiscalía General de la Nación, Resolución 01811 del 4 de octubre de 2012, "Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Priorización de Situaciones y Casos en la Fiscalía General de la Nación" disponible en http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0-01811-del-4-de-octubre-de-2012.pdf
[169] Fiscalía General de la Nación, Acuerdo 001 de enero de 2013, "Por medio del cual se expide el reglamento interno del Comité de Priorización de Situaciones y Casos" disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Acuerdo-N%C2%B0.-001-de-enero-de-2012-Reglamento-Comit%C3%A9.pdf

de acción para la gestión de los criterios de priorización e implementación del nuevo sistema de investigación[170].

Así, a través del establecimiento de múltiples herramientas de investigación, la reforma mencionada buscó concentrar la investigación en los máximos responsables, en la identificación de los patrones de macrocriminalidad, y en los delitos de mayor trascendencia.

Este cambio estructural que se dio respecto a la forma de investigar en el marco del proceso transicional, ha generado resultados positivos. Efectivamente, a julio de 2015 han sido proferidas 34 sentencias por parte de los Tribunales de Justicia y Paz, en las cuales se condenó a 135 postulados, dentro de los cuales se encuentran 16 máximos responsables y máximos comandantes, 63 comandantes de bloque o frente, y 56 patrulleros[171].

Las decisiones mencionadas sancionan 19.050 conductas punibles dentro de las cuales se encuentran: 7.745 desplazamientos forzados, 1373 reclutamientos ilícitos, 213 accesos carnales en persona protegida, 13 actos sexuales violentos en persona protegida, 30 hechos de prostitución forzada o esclavitud sexual, 9 experimentos biológicos en persona protegida, 4 abortos sin consentimiento en persona protegida, 50 tratos crueles inhumanos y degradantes, 3791 homicidios en persona protegida, 1738 desapariciones forzadas, 525 torturas en persona protegida, 94 tentativas de homicidio en personas protegida, 40 lesiones personales en persona protegida, 296 actos de terrorismo, 555 secuestros, 5 toma de rehenes, 1511 hurtos calificados y agravados, 96 exacciones o contribuciones arbitrarias, 4 extorsiones, 79 detenciones ilegales y privaciones del debido proceso, 16 represalias, 602 actos de destrucción y apropiación de bienes desprotegidos, 11 actos de barbarie, 32 despojos en campo de batalla, 28 utilizaciones ilegales de equipos transmisores, un acto de utilización de métodos y medios de guerra ilícitos, 4 actos relacionados con el entrenamiento de actividades ilícitas, una destrucción de bienes sanitarios, una obstaculización de transporte sanitario, 45 violaciones a los derechos de asociación y reunión, un testaferrato, un hecho relacionado con el tráfico de estupefacientes y 278 conductas punibles de diversa naturaleza como amenazas, violación de

[170] Fiscalía General de la Nación, Resolución 001 de 15 de enero de 2013 "Por medio de la cual se ordena a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y las Unidades Nacionales, la presentación de planes de acción para la gestión de los criterios de priorización e implementación del nuevo sistema de investigación", disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0.-001-del-15-de-enero-de-2013.pdf ; Resolución 002 del 25 de junio de 2013, "Por medio de la cual se ordena a las Direcciones Seccionales de Fiscalías, la presentación de planes de acción para la gestión de los criterios de priorización e implementación del nuevo sistema de investigación", disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0.-002-del-25-de-junio-de-2013.pdf

[171] Fiscalía General de la Nación, disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/, consultado el 16 de agosto de 2015.

habitación ajena, constreñimiento ilegal, fuga de presos, uso de documento falso y otras[172].

F. Mecanismos nacionales para enfrentar el delito de desaparición forzada.

Colombia honrando sus compromisos internacionales, ha desarrollado mecanismos y herramientas tecnológicas con el fin de localizar e identificar a personas desaparecidas, así como para asistir a los familiares durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. A continuación el Estado profundizará sobre estos mecanismos:

1. Ley 589 de 2000

Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones[173], adicionalmente crea los siguientes mecanismos:

1.1 Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Es un órgano mixto encargado del impulso de las investigaciones de desaparición forzada y diseño de políticas públicas en el tema. Su objetivo es optimizar la articulación interinstitucional, con el fin de encontrar a las personas desaparecidas, a partir de la aplicación de herramientas nacionales e internacionales disponibles.

Esta comisión es presidida por el Defensor del Pueblo, la Secretaria está a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta Comisión la conforman las siguientes entidades y organizaciones:

- El Fiscal General de la Nación o su delegado permanente.
- El Procurador General de la Nación o su delegado permanente.
- El Defensor del Pueblo o su delegado permanente.
- El Ministerio de Defensa o un delegado de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
- El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos o su delegado permanente.

[172]Fiscalía General de la Nación, disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/, consultado el 16 de agosto de 2015.
[173] Ley 589 de 2000 (Anexo 6)

- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro o su delegado permanente.
- El Director del Instituto de Medicina Legal o su delegado permanente.
- Un Representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES.
- Un Representante de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos escogidas por ellas mismas.

1.2 Registro Nacional de Desaparecidos

El Registro Nacional de Desaparecidos[174], es un sistema de información referencial de datos suministrados por las entidades intervinientes de acuerdo con sus funciones, que constituye una herramienta de información veraz, oportuna y útil para identificar cadáveres sometidos a necropsia médicolegal en el territorio nacional, orientar la búsqueda de personas reportadas como víctimas de desaparición forzada y facilitar el seguimiento de los casos y el ejercicio del Mecanismo de Búsqueda Urgente.

El Registro Nacional de Desaparecidos es administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y está conformado por 3 aplicativos (Consultas Públicas, LIFE, HOPE) y 3 sistemas (SIRDEC, SICOMAIN, SINEI), con acceso público y restringido como aparece a continuación:

- CONSULTAS PUBLICAS: Es una aplicación disponible en la pagina www.medicinalegal.gov.co, la cual permite consultas alfabéticas y numéricas (número de documento de identidad) de cadáveres ingresados, cadáveres identificados no reclamados y personas reportadas como desaparecidas. Igualmente permite acceder a reportes estadísticos generales sobre personas desaparecidas y cadáveres ingresados al Instituto a nivel nacional.

- LIFE (Localización de Información Forense Estadística):Es un aplicativo de georeferenciación disponible en la página www.medicinalegal.gov.co, el cual permite conocer las estadísticas a nivel departamental y municipal actualizadas sobre:
    - Personas desaparecidas: se describen cifras por género y tipo de identificación.
    - Cadáveres no identificados: Se describen cifras por género y edad.

[174] Reglamentado por el Decreto 4218 de 2005. (Anexo 7)

    - Muertes violentas: Se describen cifras teniendo en cuenta la manera en que la persona murió (homicidio, accidental, suicidio, natural, indeterminada)
    - Lesiones violentas no fatales: incluye lesiones en accidente de tránsito, otros accidentes, maltrato a menores, violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia interpersonal.
    - Casos Convenio 01 de 2010: corresponde a las cifras de cadáveres identificados dentro del Convenio mencionado, correspondientes a personas fallecidas desde los años 70.

- HOPE(Hagamos obligatorio poder encontrarlos): Este aplicativo está disponible en la pagina www.medicinalegal.gov.co, y permite visibilizar los rostros de las personas reportadas como desaparecidas para lograr darles un lugar en la memoria de todos los colombianos y fortalecer el esfuerzo del Estado para proteger a sus ciudadanos.

- SIRDEC: Es un sistema de acceso restringido, implementado a partir del 1º de enero de 2007 en plataforma Web, en la cual se registran a nivel nacional y de manera permanente los reportes de personas desaparecidas e información obtenida del examen de cadáveres sometidos a necropsia medicolegal. En este sistema se registra la información de las necropsias realizadas por los médicos del Instituto de Medicina Legal y de los médicos que pertenecen al servicio social obligatorio en todos los municipios del país.

- SICOMAIN (Sistema de Información Consulta Masiva Internet): Es un sistema que permite consolidar la información sobre cadáveres y desaparecidos registrada en los archivos y bases de datos de las entidades intervinientes, desde 1919 a 2007.

- SINEI (Sistema Nacional de Estadística Indirectas): Es un sistema de acceso restringido, para el registro de la información sobre las necropsias indirectas, es decir, realizadas por médicos oficiales o en servicio social obligatorio a escala nacional. Fue implementado el 1º de enero de 2009, para lo cual se les suministró clave de acceso a los hospitales de los municipios del país donde no existen sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este sistema fue inhabilitado el 1 de septiembre del 2015, de acuerdo a la obligatoriedad de los médicos en servicio social obligatorio, de usar los sistemas SIRDEC y SICLICO, dirigidos a la información forense.

1.3 Mecanismo de Búsqueda Urgente

El Mecanismo de Búsqueda Urgente es un mecanismo para prevenir el delito de desaparición forzada, creado mediante la Ley 589 del 2000 y reglamentado por la Ley Estatutaria 971 del 2005[175]. El objetivo principal es encontrar a la persona que presuntamente ha sido desaparecida forzadamente, a partir de la aplicación de procedimientos urgentes por parte de las autoridades judiciales, quienes son los únicos que pueden activar el MBU.

1.4 Administración de bienes de los desaparecidos

Se trata de una disposición legal que permite a "[l]a autoridad judicial que conoce o dirige el proceso por el delito de desaparición forzada, (…) autorizar al cónyuge, compañero o compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y administración de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien sea autorizado, actuará como curador de conformidad con las leyes civiles sobre la materia"[176].

2. Plan Nacional de Búsqueda

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue elaborado por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y presentado como acuerdo interinstitucional el 15 de febrero del 2007. El Plan Nacional de Búsqueda es una metodología para la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye procedimientos judiciales, investigativos, forenses, psicosociales en el marco de estándares nacionales e internacionales y los derechos de las víctimas.

De acuerdo a lo anterior, todas las entidades del Estado competentes en la búsqueda de personas desaparecidas han incluido en sus sistemas de gestión de calidad, procesos y procedimientos para la búsqueda de personas desaparecidas. El Plan Nacional de Búsqueda es de obligatorio cumplimiento, según lo señalado en las leyes 1408 del 2010[177] y 1448 del 2011[178].

[175]Ley Estatutaria 971 de 2005. (Anexo 8)
[176] Ley 589 de 2000, Artículo 10.
[177] Ley 1408 de 2010 (Anexo 11)
[178] Ley 1448 de 2011 (Anexo 12)

3. Mecanismos de protección de los cadáveres en condición de no identificados inhumados en cementerios

La legislación colombiana ha tenido en los últimos años, avances importantes en materia de reglamentación de procesos de inhumación, exhumación, cremación de cadáveres en los cementerios del país. Dicha normatividad prevé que todos los cadáveres remitidos a cementerios deben cumplir con procedimientos previos de investigación (inspección a cadáver), necropsia medicolegal y estudios con fines de identificación.

Igualmente se señala la obligación de los administradores de los cementerios (de naturaleza pública, privada o mixta) para inhumar los cadáveres en condición de no identificados de manera individual, así como conservar, marcar y mantener las bóvedas o lugares finales de inhumación, permitiendo de esta forma la ubicación posterior de los cuerpos cuando deban ser entregados a los familiares.

4. Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas

El Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas fue creado mediante la Ley 1408 del 2010, sin embargo desde la década de los 90s, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con Laboratorios de Genética para la identificación humana. Actualmente el Instituto cuenta con 4 laboratorios a nivel nacional y de acuerdo al Decreto Reglamentario 303 del 2015[179], ostenta la administración nacional del Banco. En este momento el banco cuenta con un total de registros de 32.743 perfiles (de restos óseos 4.021 y familiares de desaparecidos 28.722), pero se dispone de estrategias implementadas para adelantar campañas para la obtención de muestras biológicas con fines de alimentar el banco de ADN y de esta forma hacer los cotejos correspondientes para lograr la identificación de los cuerpos, especialmente los esqueletizados

En esta materia, la reglamentación del banco, es el punto de partida para la construcción de las rutas de atención, la consolidación, acceso y disposición de los perfiles genéticos; así como de manera transversal, el alcance bioético en materia de identificación humana y búsqueda de personas desaparecidas, en concordancia con los derechos de las víctimas.

[179] al Decreto Reglamentario 303 del 2015, (Anexo 11)

5. Conmemoración

Los espacios de conmemoración de las víctimas de desaparición forzada y de sus familiares, hacen parte de los mecanismos de reparación integral que deben ser establecidos por las entidades del Estado encargadas.

Actualmente existen dos fechas de conmemoración, la última semana de mayo y el 30 de agosto, las cuales deben incluir jornadas de reflexión y visibilización del fenómeno de la desaparición por parte de las entidades, en particular las autoridades públicas responsables[180].

6. Estrategia Interinstitucional para la recuperación de cuerpos en cementerios

La estrategia interinstitucional para la recuperación de cuerpos en cementerios fue diseñada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2011, como necesidad para el abordaje de los cadáveres identificados en el marco del Convenio 01 del 2010. Esta metodología está diseñada en tres (3) fases de investigación y análisis, así:

- Fase I: Consiste en una fase de documentación, en donde se recopila la documentación existente de los cuerpos inhumados en los cementerios originada desde el Instituto de Medicina Legal, de las autoridades judiciales e investigativas, de los familiares o amigos de quien se sospecha que se trate y del mismo cementerio que se va a intervenir. En esta fase la información alimenta el sistema "Registro Nacional de Desaparecidos" en donde de forma ordenada se hacen cruces hacia el sistema de registro de cadáveres "SIRDEC", para su cotejo. En esta fase se incluye el "Censo de Cementerios" cuyo propósito es precisar de la forma más exacta la existencia de los cuerpos no identificados en él y su ubicación.

- Fase II: En esta fase se dan las acciones operativas científicas de exhumación técnica del cuerpo y un cotejo "in situ" con la información lograda en la Fase I, del cual se pueden obtener los primeros indicios acerca de la identidad del cuerpo para continuar con los análisis hasta la plena identidad. Adicionalmente esta fase contempla el traslado de los cuerpos a los laboratorios de antropología forense para aplicar el protocolo de identificación humana, que contempla normativa científica de aplicación internacional; estos estudios en

[180] Ley 1408 de 2010, art. 14.

osteopatología, antropología, odontología y genética, tienen como propósito lograr la plena identificación de los cuerpos.

- Fase III: Esta fase se inicia a partir de los resultados de los estudios, y contempla:
  - En caso de cadáveres identificados, se ubican a los familiares para iniciar el proceso de la "entrega digna" de los cuerpos.
  - En caso de cadáveres identificados no reclamados, el Instituto de Medicina Legal, dispone de la guarda y custodia de los cuerpos en sus propios "repositorios" técnicamente diseñados para su cuidado "in eternun".
  - En caso de cadáveres no identificados a pesar de haberse realizados todos los procedimientos científicos para su identificación, se dispone de la guarda y custodia de los cuerpos en los "repositorios" del Instituto, técnicamente diseñados para su cuidado "in eternun".

Esta estrategia implica procesos de verificación (judicial y forenses), análisis, procesamiento y entrega de cuerpos, definidos en diferentes procedimientos, los cuales en su conjunto deben ser articulados en el marco de las competencias de diferentes entidades del Estado responsables.

7. Asistencia a familiares

En agosto de 2010, el Congreso de la República aprobó la Ley 1408, cuyo objeto es rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados.

Adicionalmente, en el 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció que el Gobierno Nacional deberá realizar todas las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Bajo ese entendido consideró como medida de satisfacción la búsqueda de los desaparecidos, así como la identificación de cadáveres y su posterior inhumación.

Por su parte, el articulo 22 del Decreto 303 de 2015, establece que "La atención psicosocial dirigida a los familiares de las víctimas que resulten identificadas, se proporcionará durante todo el proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar y se realizará acorde con los enfoques, principios y criterios

establecidos en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta atención deberá coordinarse con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y representantes de los familiares de las víctimas. Adicionalmente, incluirán estrategias de articulación con las organizaciones no gubernamentales especializadas en atención psicosocial."[181]

En este mismo decreto se consagró que se otorgaría un apoyo económico a los familiares de la víctima, para solventar los gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar. Esta medida se encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Es de anotar que desde que la Unidad para las Víctimas entró en funcionamiento en el 2012, la entidad ha acompañado la entrega de restos a 1.579 familias con víctimas de desaparición forzada y homicidio, en 26 departamentos del país. Este acompañamiento se convierten en una medida de satisfacción, parte de la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado.

Además, la Unidad para las Víctimas viene implementando una estrategia de recuperación emocional a nivel grupal con el propósito de contribuir al proceso de reparación integral de las víctimas. En ese contexto, se han atendido 1.919 familiares de personas desaparecidas, con corte a junio de 2015.

II. HECHOS

En el presente acápite, el Estado se pronunciará sobre cada uno de los hechos que fueron expuestos por la Comisión Interamericana en su escrito de sometimiento, teniendo en cuenta que sobre éstos se ha fijado el objeto de litigio, razón por la cual cualquier cuestión que desborde el marco fáctico expresamente planteado en el escrito de la CIDH, deberá ser desestimada por este Honorable Tribunal. En ese orden de ideas, la estructura que a continuación seguirá el Estado colombiano, se hará de conformidad con el relato que se

[181] Decreto 303 de 2015, art. 22

presenta en el Informe No. 85/13[182], haciendo claridad en que los asuntos concernientes a las cuestiones previas, excepciones preliminares y el reconocimiento de responsabilidad, deberán ser armonizadas con las consideraciones que sobre los hechos efectuará el Estado.

Para esos efectos, y antes de proceder con el análisis trazado, es pertinente señalar que si bien la Honorable Comisión incluye el "contexto"[183] dentro del capítulo denominado "hechos probados", se trata de una cuestión que deberá ser examinada de manera independiente, tal y como lo presentó el Estado en capítulos anteriores, de manera que la atención en este punto se concentre únicamente en la información contenida en los párrafos 99 a 182. De cualquier manera, no está demás señalar que cada una de las cuestiones abordadas por la CIDH dentro de su denominado "contexto", ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Estado en el acápite correspondiente.

A. Capítulo denominado por la CIDH como "Los hechos ocurridos entre junio diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza."

Sostiene la Honorable Comisión, con fundamento en la diligencia de indagatoria de Ramón Isaza, que Omar –hijo de Ramón Isaza- recibió una lista, por parte de militares, de al menos 78 personas que habitaban al borde la autopista Medellín – Bogotá, a raíz de lo cual "trabajaron unidos Omar, el costeño [o a lisas Fredy] y los muchachos de Omar y los del Ejército". Para ello, según el planteamiento de la Comisión, "Omar junto con miembros de las Autodefensas del Magdalena Medio, se alojaron en la base militar La Piñuela al menos veinte días antes de realizar los operativos."

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron. Asimismo, se han podido evidenciar múltiples contradicciones en relación con la narración que de los hechos hacen los declarantes en el proceso penal, las cuales deberán ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

[182] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Informe No. 85/13. Pág. 13 y ss.
[183] Dentro del contexto formulado se incluyen cuestiones relativas a: "creación y funcionamiento de las Autodefensas del Magdalena Medio, la Fuerza de Tarea Águila (FTA) creada por el Comando Ejército y presencia del Ejército Nacional, vínculo entre Autodefensas del Magdalena Medio y el Ejército Nacional, situación de la Vereda La Esperanza, presencia militar en la Vereda La Esperanza y presencia paramilitar en la Vereda La Esperanza e información sobre vínculos con el ejército".

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado se permite señalar que a la fecha la Fiscalía General de la Nación ha adelantado su investigación, teniendo en cuenta dos posibles hipótesis sobre las causas que originaron la ocurrencia de los hechos: la primera de ellas descansa sobre la presunta entrega por parte de miembros del Ejército, a miembros de las ACMM de una lista de aproximadamente 75 personas que harían parte del EPL o apoyarían la guerrilla de la zona. Sin embargo, la Fiscalía deja constancia de que no hay certeza sobre la existencia de tal listado; la segunda, se ha elaborado con base en las declaraciones de otros postulados que han declarado sobre los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza[184], quienes afirman no haber conocido tal lista, y que por el contrario los hechos se desencadenaron como consecuencia de la retención, por parte de la guerrilla del ELN, de varios paramilitares cuando se encontraban cumpliendo una misión de acompañamiento a Omar Isaza.[185]

B. Capítulo denominado por la CIDH como "La desaparición de Aníbal de Jesús Castaño Gallego y el niño Oscar Zuluaga Marulanda el 21 de junio de 1996".

Señala la CIDH que el día 21 de junio de 1996 alrededor de las 7:30 p.m., hombres armados y vestidos de civil llegaron a la Vereda La Esperanza, ingresaron a la tienda de Aníbal Castaño y retuvieron a Aníbal Castaño y a Oscar Hemel Zuluaga Marulanda. Según testigos, se retiraron del lugar en camionetas y fueron llevados a la base militar La Piñuela.

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron. Asimismo, se han podido evidenciar múltiples contradicciones en relación con la narración que de los hechos hacen los declarantes en el proceso penal, las cuales deberán ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, la Honorable Corte deberá tener en cuenta que frente a los hechos del 21 de junio de 1996, los familiares señalaron que los vehículos en los que las víctimas fueron trasladadas, correspondían a aquellos que eran utilizados por miembros del Ejército, describiéndolos como una camioneta blanca, otra de color verde, y taxis de color amarillo[186]. No obstante, esto difiere de otras declaraciones en las que se sostiene que solo se observó el día de la

[184] Luis Eduardo Zuluaga Arcila, Camilo Zuluaga y Walter Ochoa Guisao.
[185] Fiscalía General de la Nación. Comunicación de 29 de julio de 2015. Rad. No. 20155800013323
[186] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas. Pág. 40

desaparición de Aníbal y Oscar Hemel un carro de color blanco[187]. Además señalan que el día en que se llevaron a Aníbal y a Oscar Hemel fue el 17 de julio, mientras que en lo establecido en el ESAP se toma como fecha el 21 de junio.

C. Capítulo denominado por la CIDH como "La desaparición de los niños Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Ancízar Cardona Quintero, y de alias Fredy y su esposa el 22 de junio de 1996".

La CIDH sostiene que según testigos, el 22 de junio de 1996 a las 5:00 a.m., un grupo de civiles armados ingresaron a la vivienda de Dioselina Quintero y retuvieron a sus hijos Juan Crisóstomo Cardona Quintero, de 12 años de edad y Miguel Ancízar Cardona Quintero, de 15 años de edad. [redacted]

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron.

D. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de María Irene Gallego Quintero el 26 de junio de 1996"

El 25 de junio de 1996 se dio inició a la Operación Rayo por parte de la FTA. Según la orden de operaciones el objetivo era realizar operaciones de registro y control militar en el municipio de El Carmen de Viboral con el fin de capturar y/o dar de baja a bandoleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN.

Según testimonios, militares de la FTA llegaron a la casa del señor José Eliseo Gallego Quintero, disparando hacia el interior de ésta, amenazando a su habitantes y en compañía de una persona encapuchada. Agregan que alrededor de las 7:00 a.m., cuatro militares salieron hacia la casa de Pedro Pablo Muñoz, donde encontraron a María Irene Gallego Quintero. Según las declaraciones, los militares regresaron a la casa de José Eliseo Gallego Quintero con María Irene y estando allí la desvistieron y le pusieron uniforme del Ejército, botas y un bolso verde con munición.

[187] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 1, folios 154 y 155.

Indica además la CIDH, que según la versión del Mayor Guzmán, una vez llegaron los militares a la casa de José Eliseo, personas no identificadas comenzaron a disparar y por lo tanto se produjo un enfrentamiento, del cual resultó herido el Capitán Cárdenas, de lo cual no habría registros. Respecto de María Irene, el Mayor reconoció que fue encontrada en una casa ubicada en la parte alta de la autopista y sacada de allí por militares. El 28 de junio de 1996 María Irene es puesta a disposición de la Fiscalía, justificando la demora para trasladarla en razones operacionales.

Finalmente, un testigo señaló que algunos militares le contaron que María Irene fue llevada a la base militar La Piñuela y posteriormente entregada a los paramilitares, quienes la habrían matado. Otro testigo, señaló que el 15 de julio de 1996 vio a María Irene en compañía de militares.

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron. Asimismo, se han podido evidenciar múltiples contradicciones en relación con la narración que de los hechos hacen los declarantes en el proceso penal, las cuales deberán ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Lo primero que se debe mencionar es que el 26 de junio de 1996 se presentó un enfrentamiento producto del cual el Capitán César Augusto Cárdenas resultó herido, tal y como consta en la historia clínica No. 7993494[188] de 30 de junio de 1996, expedida por el Hospital Militar Central, en donde se refleja que el paciente sufrió herida con arma de fuego con proyectil de alta velocidad a nivel del húmero derecho. Esta situación dista del dicho de la Honorable Comisión, según la cual no existiría prueba que demuestre el enfrentamiento que se presentó en la casa de José Eliseo.

En segundo término, respecto de María Irene Gallego, se le solicita a la Honorable Corte remitirse al capítulo correspondiente en el que el Estado efectuará un análisis detallado de las contradicciones encontradas sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de María Irene Gallego, con el fin de que sean tenidas en cuenta dentro del análisis fáctico que haga este Tribunal[189].

[188] Historia clínica No. 7993494 de 30 de junio de 1996 (Anexo 12)
[189] Infra, pág. 248.

E. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de Juan Carlos Gallego Hernández y Jaime Alonso Mejía Quintero; y muerte de Javier Giraldo Giraldo el 7 de julio de 1996".

- **Sobre Juan Carlos Gallego**

La CIDH señala que según testimonios, durante los días previos a la desaparición de Juan Carlos, éste habría sido víctima de intimidaciones y amenazas por parte del Ejército Nacional. Para el 7 de julio de 1996, al finalizar una reunión comunitaria, llegaron unas camionetas de las cuales se bajaron un grupo de hombres armados y encapuchados, quienes se acercaron a Juan Carlos y lo introdujeron en la camioneta.

- **Sobre Jaime Alonso Mejía Quintero**

Testigos señalaron que el 7 de julio de 1996, Jaime Alonso se encontraba en un billar junto a la autopista Bogotá – Medellín, y que el mismo grupo de personas que retuvo a Juan Carlos Gallego lo sacó del lugar y lo introdujo a una camioneta. Su hermana señaló que el Ejército lo tildaba de guerrillero.

- **Sobre Javier Giraldo Giraldo**

Testigos manifiestan que las mismas camionetas en las que se llevaron a Juan Carlos Gallego y Jaime Alonso Mejía, pasaron por su lado y le indicaron que se subiera, a lo cual él se negó, razón por la cual una de las camionetas pisó la llanta de la moto en la que se dirigía y lo subieron al vehículo. Otro testigo señaló que Javier fue golpeado dentro de la camioneta; otros más, sostuvieron que le dispararon y dejaron su cuerpo en la carretera. El inspector de Policía de Cocorná emitió el acta de levantamiento del señor Giraldo.

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron. Asimismo, se han podido evidenciar múltiples contradicciones en relación con la narración que de los hechos hacen los declarantes en el proceso penal, las cuales deberán ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, debe observarse que en el ESAP[190] se afirma que el día de los hechos Javier de Jesús Giraldo Giraldo se encontraba con Carlos Estrada a quien le estaba enseñando a conducir motocicleta. En ese momento, se encontraron con los captores de Juan Carlos Gallego transitando por la autopista Bogotá – Medellín a la altura de la Vereda La Esperanza, quienes posteriormente habrían causado la muerte de Javier Giraldo. No obstante, se lee en la declaración de Carlos Arturo Estrada[191] que para el momento en que detuvieron a Juan Carlos, los mismos captores ya habrían retenido a Javier Giraldo.

En vista de lo anterior, la Honorable Corte podrá apreciar que en el primer caso Javier Giraldo habría sido detenido después de Juan Carlos, mientras que en el segundo habría sido detenido con anterioridad.

[redacted]

- **Sobre Octavio de Jesús Gallego Hernández**

[190] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 53
[191] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 2 folio 204

Según el dicho de un testigo, Octavio de Jesús se encontraba al borde la autopista Bogotá – Medellín cuando llegaron cuatro vehículos de los cuales se bajaron dos hombres vestidos de civil armados y lo subieron a uno de los carros. Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron. Asimismo, se han podido evidenciar múltiples contradicciones en relación con la narración que de los hechos hacen los declarantes en el proceso penal, las cuales deberán ser objeto de análisis por parte de este Tribunal.

Sobre el particular, la Honorable Corte debe apreciar que en declaración rendida por Florinda Gallego[192] se señala que estando en la casa de su hermana Aurora Gallego llegaron varios hombres en una camioneta y se llevaron a Octavio. Por otra parte, María Florina Gallego[193] afirma que su esposo Octavio se había ido para la casa de una hermana que vivía en la Vereda El Tesoro, lugar al cual llegaron dos taxis en uno de los cuales se habrían llevado a Octavio. Asimismo, Juan Fredy Gallego Castaño[194] afirma que se encontraba en la casa de su madre con su tío Octavio, cuando llegaron cuatro carros, en uno de los cuales se llevaron a Octavio. Finalmente, Héctor Manuel González[195] afirma que el 9 de julio de 1996 Octavio estaba esperando en la autopista Medellín – Bogotá, momento en el cual fue abordado por cuatro vehículos y obligado a subir a uno de ellos.

G. Capítulo denominado por la CIDH como "Desaparición de Andrés Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo el 27 de diciembre de 1996".

Testigos indicaron que el 27 de diciembre de 1996 a las 8:30 p.m., alrededor de diez hombres armados vestidos de civil, quienes se identificaron como paramilitares, llegaron al domicilio de Leonidas Cardona en dos camionetas, preguntaron por Inés Muñoz y al ver que no se encontraba le dijeron a Leonidas que los acompañara y que "en la base La Piñuela solucionaban el problema".

Por su parte, la esposa de Andrés Gallego señaló que el mismo día varios testigos vieron cuando tres hombres armados tumbaron la puerta de la casa de éste y se lo llevaron indicando que se dirigían a la base La Piñuela. Según los testigos,

[192] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno No. 1. Folio 5 a 11
[193] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno No. 1. Folios 91 y 92
[194] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno No. 2. Folio 172 a 174
[195] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno No. 2. Folio 197 a 199. Cuaderno No. 1. Folio 167 y 168

las víctimas fueron trasladadas en camionetas, luego de lo cual la esposa de Leonidas vio "dos volquetas llenas de Ejército detrás de las camionetas.

Frente a los hechos anteriormente mencionados, y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado *supra*, el Estado se permite reiterar que los hechos del caso bajo estudio, están siendo investigados por las autoridades colombianas y por lo tanto a la fecha no se tiene certeza sobre las circunstancias en que éstos ocurrieron.

H. Procesos internos

1. Procesos penales

1.1 Jurisdicción ordinaria

Este proceso penal[196] cursa actualmente ante la Fiscalía 80 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por las desapariciones forzadas de Anibal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Fredy, su esposa, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Mejía Gallego, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, [redacted], Andres Antonio Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero, Leonidas Cardona Giraldo y el homicidio de Javier Giraldo Giraldo.

El día 28 de junio de 1996 la señora Irene Gallego Hernández fue presentada ante la Unidad Seccional de Fiscalías de El Santuario, Antioquia por el señor Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana quien puso en conocimiento de las autoridades que la señora Irene indicó haber pertenecido al Ejército Popular de Liberación (en adelante EPL) y que su vida estaba en peligro por haber desertado. Se deja constancia que la señorita Irene le solicitó protección al Mayor por lo que él la condujo fuera de la zona donde fue encontrada (la cual era escenario de constantes enfrentamientos entre la fuerza pública y fuerzas disidentes) para brindarle protección[197].

Ese mismo día, compareció ante la Personería Municipal de El Carmen de Viboral, previa citación, la señora Maria Edilma Giraldo Castaño, quien manifestó que por comentarios se enteró de las desapariciones de Aníbal de Jesús Castaño Gallego;

[196] Se aportará la totalidad del expediente (Anexo 19)
[197] Cuaderno Anexo 1 folio 25 radicado 233 de la UNDH – DIH.

Oscar Hemel Zuluaga Marulanda; Fredy y su esposa; y tres jóvenes de la casa de Dioselina Quintero[198].

El día 30 de junio de 1996 el señor Juan Carlos Gallego Hernandez se acerca a la Personería Municipal de Cocorná y pone en conocimiento de las autoridades los hechos del 26 de Junio de 1996 donde soldados del Ejército, aparentemente en un enfrentamiento con grupos disidentes, causaron daños a la propiedad de su padre, José Eliceo Gallego Quintero. En la misma declaración narró las presuntas desapariciones de Anibal de Jesús Castaño; Oscar Hemel Zuluaga; Miguel Ancizar Cardona Quintero y Juan Crisostomo Cardona Quintero.

El día 8 de julio de 1996, la Personería Municipal de Cocorná recibió declaraciones de Hernando de Jesús Castaño Castaño[199] y Javier Enrique Fox Quintana[200] sobre la desaparición de Juan Carlos Gallego. Ese mismo día, el señor José Eliseo Gallego Hernández formuló una denuncia[201] ante la Unidad Local de Fiscalía de Cocorná por los hechos anteriormente mencionados y por lo ocurrido en su casa el día 26 de Junio de 1996.

El día 11 de julio de 1996 la señora Florinda de Jesús Gallego Hernandez formuló una denuncia ante la Personería Municipal de Cocorná[202] por la desaparición de Hernando de Jesús Castaño Castaño; Octavio Gallego Hernández [redacted] Ese mismo día, el señor Andrés Gallego Castaño formuló una denuncia ante el Juzgado Penal Municipal de Cocorná[203] por los mismos hechos y por la muerte de Javier Giraldo Giraldo.

El día 12 de julio de 1996 se recibió declaración de Luz Adriana González Quintero[204] donde narró la desaparición de su compañero permanente Orlando de Jesús Muñoz.

El día 17 de julio se ordenó abrir investigación previa y práctica de pruebas con respecto a las desapariciones ocurridas hasta la fecha[205], aportándose una lista de personas desaparecidas[206]

El día 19 de julio de 1996 la Unidad de Fiscalía de el Carmen de Viboral recibió una declaración, previa citación, de María Edilma Giraldo Castaño[207]. Ese mismo

[198] Cuaderno 1 folio 25 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[199] Cuaderno 1 folio 143 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[200] Cuaderno 1 folio 27 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[201] Cuaderno 1 folio 12 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[202] Cuaderno 1 folio 208 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[203] Cuaderno 1 folio 2 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[204] Cuaderno 1 folio 210 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[205] Cuaderno 1 folio 1 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[206] Cuaderno 1 folio 40 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[207] Cuaderno 1 folio 19 radicado 233 de la UNDH – DIH.

día, la Personería Municipal del Carmen de Viboral recibió declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández[208], María Florinda Gallego Hernández[209] y José Eliseo Gallego Quintero[210].

El día 30 de julio de 1996 se recibió la declaración de Uriel Antonio Gallego Hernández Hernández, quien indicó que "Alonso Quintero (…) debió haber sido liberado el martes que lo soltaron"[211]; ese mismo día se hizo remisión de la investigación a Unidad de Fiscalías Regionales de Medellín[212]. Asimismo, la fiscalía delegada ante UNASE RURAL abrió indagación preliminar "por el punible de secuestro, siendo ofendidos Aníbal de Jesús Castaño y 12 personas mas"[213]
El 31 de julio de 1996, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, recibió las declaraciones de María Oveida Gallego Castaño[214] y Florinda de Jesús Gallego Hernandez[215]
El día 4 de agosto se recibió, en la inspección municipal de policía y tránsito de Cocorná, declaración juramentada rendida por Carmen Muñoz Castaño[216], quien relató lo ocurrido en la casa del señor Eliseo Gallego Quintero, y posteriormente la presunta detención de Irene Gallego en su casa.
El 12 de agosto de 1996 se citó a declarar a Carlos Arturo Estrada Ramirez, quien narró los hechos de la muerte de Javier Giraldo Giraldo[217]; y a Nelly Soto, viuda del señor Giraldo.[218]
El 14 de agosto de 1996 se practicó examen balístico a las vainillas encontradas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Javier Giraldo.[219]
El 22 de agosto de agosto de 1996 se realizó visita especial a la IV Brigada del Ejército[220], al comando del Batallón "Héroes de Barbacoa"[221] y al Batallón de Ingenieros "Pedro Nel Ospina"[222]. Ese mismo día, se tomó la declaración del Mayor Jairo Hurtado Olaya. Igualmente, el 23 de agosto del citado año se realizó visita especial a la base militar "La Piñuela"[223].

El 13 de septiembre de 1996 se recibió declaración de Octavio de Jesús Gallego Gallego sobre la muerte de Javier Giraldo, indicando que no había presencia del

[208] Cuaderno 1 folio 34 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[209] Cuaderno 1 folio 37 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[210] Cuaderno 1 folio 39 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[211] Cuaderno 1 folio 163 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[212] Cuaderno 1 folio 43 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[213] Cuaderno 1 folio 47 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[214] Cuaderno 1 folio 154 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[215] Cuaderno 1 folio 157 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[216] Cuaderno 1 folio 170 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[217] Cuaderno 1 folio 170 radicado 233 de la UNDH – DIH
[218] Cuaderno Anexo 1 folio 44 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[219] Cuaderno Anexo 1 folio 39 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[220] Cuaderno Anexo 1 folio 95 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[221] Cuaderno Anexo 1 folio 200 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[222] Cuaderno Anexo 1 folio 97 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[223] Cuaderno 2 folio 29 radicado 233 de la UNDH – DIH.

Ejército cerca del lugar de los hechos[224]. Así mismo, el 25 de septiembre se citó a declarar al Mayor Hugo Abondano Mican[225].

El 25 de octubre de 1996 acudió el señor Andrés Gallego Castaño a las oficinas del Cuerpo Técnico Investigativo (en adelante CTI) para ampliar su denuncia[226]; Ese mismo día, ante ese mismo órgano, se recibió declaración, previa citación, de la señora María Florinda Gallego Hernández[227].

El día 10 de diciembre de 1996 se realizó Inspección judicial al radicado 20947 para trasladar pruebas a la investigación de las desapariciones mencionadas[228]. De igual manera el 11 de Diciembre del mismo año se realizó inspección judicial al expediente 5382 de 1996 en las oficinas de investigaciones especiales de la Procuraduría de Medellín[229] con el fin de aportar mas pruebas al proceso.

El día 30 de diciembre de 1996, previa citación, compareció para declarar sobre la desaparición de Leonidas Cardona Giraldo y Andres Gallego Castaño, ocurrida el 27 de diciembre de dicho año, el señor Gabriel de Jesús Cardona Fernández [230].

El 20 de Marzo de 1997 se presentó un informe con las actividades tendientes a ubicar al Mayor Guzmán Lomabana[231].

El 1 de abril de 1997 la fiscal Olga María Ruiz Angarita respondió un cuestionario que le fue enviado con el fin de conocer su versión sobre los hechos relacionados con Irene Gallego[232].

El 13 de mayo de 1997 se citó a declarar al señor Edgar Mario Alzate García, Personero Municipal de Cocorná, quien puso en conocimiento de las autoridades un informe de Pascal Jequier, delegado de la Cruz Roja Internacional, en el que confirmaba la muerte de los desaparecidos [redacted]. Así mismo, indicó que dicha información estaba consignada también en el informe entregado por Ramón Isaza al periodista Hollman Morris[233].

[224] Cuaderno Anexo 1 folio 47 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[225] Cuaderno 4 folio 158 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[226] Cuaderno 1 folio 89 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[227] Cuaderno 1 folio 91 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[228] Cuaderno 1 folio 116 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[229] Cuaderno 1 folio 122 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[230] Cuaderno 5A folio 76 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[231] Cuaderno 1 folio 188 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[232] Cuaderno 2 folio 163 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[233] Cuaderno 1 folio 214 radicado 233 de la UNDH – DIH.

El 23 de junio de 1997 el conocimiento de los casos es remitidos a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos[234]

El 16 de septiembre de 1997 se consiguió y adjuntó una copia de una entrevista realizada a Ramón Isaza[235]. De igual manera, el 26 de septiembre se realizó un emplazamiento a Ramón Isaza para que acudiera a rendir indagatoria por los delitos de conformación de grupos ilegales y homicidio[236].

El 31 de octubre de 1997 se citó a declarar al Mayor Guzmán Lombana sobre la Operación Rayo, la entrega de Irene Gallego a la Fiscalía y las operaciones de la Fuerza de Tarea Águila (FTA)[237].

El 19 de noviembre se practicó inspección judicial al proceso disciplinario llevado en la procuraduría[238] y en los archivos del ejército para buscar información sobre el personal perteneciente a la FTA[239]. Igualmente, se aportó la valoración médica, con fecha 24 de noviembre de 1997, practicada al Capitán Cárdenas González Cesar Augusto por lesiones sufridas durante el servicio[240].

En diciembre de 1997 se aportaron al proceso fotografías de Ramón Isaza[241], reproducciones de su Tarjeta Decadactilar y su índice derecho[242], reproducciones de su entrevista[243] y una declaración de Alonso de Jesús Baquero, quien hizo una descripción de las operaciones de Ramón Isaza[244]. Por último, se presentó un informe con los datos personales de Ramón Isaza y se le definió su situación jurídica mediante escrito 049.[245]

El 25 de marzo se realizó inspección judicial al expediente con radicado P-230[246] para encontrar pruebas e incluirlas en el proceso, así como inspección judicial en la Registraduría Nacional del Estado Civil[247].

El 26 de marzo fue llamado a declarar el Mayor Guzmán Lombana, con el fin de que aportara datos de quienes ostentaron el mando en la base militar "La

[234] Cuaderno 1 folio 241 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[235] Cuaderno 1 folio 265 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[236] Cuaderno anexo 2 folio 569 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[237] Cuaderno 4 folio 7 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[238] Cuaderno 2 folio 11 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[239] Ibídem.
[240] Cuaderno 5A folio 95 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[241] Cuaderno 2 folio 53 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[242] Cuaderno 2 folio 50 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[243] Cuaderno 2 folio 64 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[244] Cuaderno 2 folio 56 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[245] Cuaderno 4 folio 128, 132 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[246] Cuaderno 2 folio 116 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[247] Cuaderno 2 folio 135 radicado 233 de la UNDH – DIH.

Piñuela"[248]. De igual manera, el Mayor Guzmán aportó documentos solicitados previamente por la fiscalía[249]

El día 6 de abril de 1998, la Unidad Seccional de Fiscalías de El Santuario aportó copias de la investigación 1030 adelantada por la muerte de Javier Giraldo Giraldo[250].

Entre el 14 y el 16 de abril de 1998 se recibieron, previa citación, declaraciones de un testigo con identidad protegida código VB-1[251]; María Rocío Cardona[252]; Florinda de Jesús Gallego Hernández[253]; Héctor Manuel González Ramírez[254]; Carlos Arturo Estrada Ramírez[255]; María Engracia Hernández Quintero[256]; Jhon Freddy Castaño Gallego[257] Y Miguel Alpidio Quintero González[258]. Así mismo, se practicó inspección judicial al expediente 23294[259] sobre la investigación de 5 homicidios del 28 de diciembre de 1996 y se anexaron pruebas del mismo. Igualmente el 17 de abril se practicó inspección judicial en el expediente con radicación P1742 de la Fiscalía Seccional de Medellín, el cual contenía la investigación por las muertes de Néstor Iván Castro García y Héctor Libardo Osorio[260].

En el mes de mayo de 1998 se aportó un listado del personal del Batallón "Héroes de Barbacoa" que prestó servicio en la base militar La Piñuela entre marzo y agosto de 1996, que integraban la FTA[261], así como del personal integrante de la misma fuerza de tarea que prestó servicio en la estación de policía de Cocorná entre 1996 y 1997[262].

El 22 de mayo se aportó información sobre Efraín González Hernández, recluso en la cárcel del distrito judicial de Medellín por los delitos de extorsión y porte de armas[263].

[248] Cuaderno 2 folio 118 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[249] Cuaderno 2 folio 151, 162 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[250] Cuaderno 2 folio 176 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[251] Cuaderno 2 folio 190 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[252] Cuaderno 2 folio 192 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[253] Cuaderno 2 folio 210 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[254] Cuaderno 2 folio 197 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[255] Cuaderno 2 folio 204 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[256] Cuaderno 2 folio 200 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[257] Cuaderno 2 folio 264 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[258] Cuaderno 2 folio 207 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[259] Cuaderno 2 folio 214 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[260] Cuaderno 2 folio 196 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[261] Cuaderno 3 folio 107 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[262] Cuaderno 3 folio 61 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[263] Cuaderno 3 folio 7 radicado 233 de la UNDH – DIH.

El 25 de junio de 1998 se realizó inspección judicial en el comando del departamento de Antioquia[264] para obtener hojas de vida del personal.

En el mes de julio de 1998 fueron citados a declarar los Mayores del Ejército Jairo Hurtado Olaya[265] y Hugo Abondano[266].

El 14 de Agosto de 1998 se tomó la declaración del señor Efraín Gallego Hernandez[267].

El 15 de Enero de 1999 se realizó un informe sobre presuntos vínculos de los desaparecidos con grupos guerrilleros[268].

En enero de 1999 se presentaron informes sobre los antecedentes de Aníbal Castaño[269] y de anotaciones con respecto a los desaparecidos[270]

El 1 de febrero de 1999 se hizo entrega de resultados de labores investigativas sobre la solicitud de práctica de pruebas de octubre 21 de 1998 sobre funcionarios del Ejército y altos mandos de grupos paramilitares[271]

El 31 de mayo de 1999 se obtuvo información sobre el personal integrante de la FTA[272]

El 23 de junio de 1999 se aportó al proceso un resumen de actividades delictivas en el departamento entre los años de 1995 y 1996.[273]

En el mes de junio también se realizaron inspecciones judiciales en la dirección regional de fiscalías[274], en el batallón de contraguerrillas "Héroes de Barbacoa"[275], en las oficinas de la IV brigada[276] y en los archivos del Ejército para determinar ubicación y datos del personal que perteneció a la FTA[277] y así mismo se realizó un informe con respecto al avance del proceso[278].

[264] Cuaderno Anexo 1 folio 287 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[265] Cuaderno 3 folio 47 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[266] Cuaderno 3 folio 65 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[267] Cuaderno 3 folio 101 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[268] Cuaderno 3A folio 2 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[269] Cuaderno 3A folio 4 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[270] Cuaderno 3A folio 6 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[271] Cuaderno 3 folio 158 a 402 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[272] Cuaderno 4 folio 21 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[273] Cuaderno 4 folio 61 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[274] Cuaderno 4 folio 104 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[275] Cuaderno 4 folio 92 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[276] Cuaderno 4 folio 215 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[277] Cuaderno 4 folio 25 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[278] Cuaderno 4 folio 87 radicado 233 de la UNDH – DIH.

En el mes de julio de 1999 se practicó inspección judicial a la indagación preliminar 117 adelantada en la 4 brigada del Ejército Nacional[279] y al batallón "Granaderos"[280].

El 7 de septiembre de 1999 se practicó inspección judicial en la primera división del Ejército Nacional[281] y se le recibió testimonio al Coronel Enrique Bernal Parada[282].

En el mes de octubre de 1999, mediante inspección judicial, se consiguieron las hojas de vida del personal perteneciente a la FTA[283].

El 9 de Mayo de 2000 se emitió orden de captura a Ramón Isaza[284], quien fue vinculado al proceso mediante edicto del 6 de junio de 2000[285]. Ese mismo día se ordena al Mayor Guzmán Lombana comparecer para rendir indagatoria[286].

El 11 de Agosto de 2000 se realizó inspección judicial en los archivos del Ministerio de Defensa con el fin de obtener información de soldados en una lista previamente aportada[287]. Del mismo modo, en agosto se hizo la inclusión en el proceso como parte civil de Florinda Gallego Hernández,[288] y se presentaron informes sobre las diligencias adelantadas para capturar a Ramón Isaza[289]

El 27 de octubre de 2000 se estableció una misión para capturar a Ramón Isaza[290]

Entre el 14 y el 28 de noviembre de 2000 se realizó inspección judicial al archivo general del Ministerio de Defensa[291]; al proceso con radicado No.008-010799-98[292]; al batallón no. 42 "Héroes de Barbacoa"[293]; al Batallón "Pedro Nel Ospina"[294]; a los informes de inteligencia de los años 1994, 1995 y 1996[295]; al Batallón No. 4 "Granaderos"[296]; a la Oficina de Personal de la IV Brigada[297]; a la

[279] Cuaderno 4 folio 67 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[280] Cuaderno 4 folio 68 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[281] Cuaderno 5 folio 51 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[282] Cuaderno 5 folio 51 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[283] Cuaderno 5 folio 55, 110 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[284] Cuaderno 3A folio 94 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[285] Cuaderno 3A folio 155 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[286] Cuaderno 5 folio 162 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[287] Cuaderno 5A folio 1 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[288] Cuaderno 3A folio 132 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[289] Cuaderno 5 folio 255 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[290] Cuaderno 3A folio 160 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[291] Cuaderno 6 folio 10 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[292] Cuaderno 6 folio 24 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[293] Cuaderno 6 folio 83 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[294] Cuaderno 6 folio 101 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[295] Cuaderno 6 folio 136 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[296] Cuaderno 6 folio 145 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[297] Cuaderno 6 folio 146 radicado 233 de la UNDH – DIH.

Oficina de Inteligencia B2 de la IV Brigada[298]; a la sede de la Brigada XIV[299]; a la Sección de Inteligencia de la IV Brigada del Ejército[300]; y a las órdenes de operaciones expedidas por la IV[301]. De igual forma se recibieron declaraciones de Ferney Alberto Cardona Acevedo[302] y Florinda Gallego Hernández[303].

En febrero de 2001 se practicó inspección judicial en la brigada XIV y se recibió declaración de los Mayores Guzmán Lombana[304] y Cesar Augusto Cárdenas[305].

El 13 de Agosto de 2001 se logró determinar la ubicación de los oficiales del jército solicitados durante el proceso[306]

Debido a la necesidad de determinar quién era el comandante y los soldados que desarrollaron actividades en la Fuerza de Tarea Águila (FTA) en el periodo de las desapariciones, hubo necesidad de concretar dicha información a través de la realización de una inspección judicial en la XIV Brigada del Ejército, la cual fue realizada el 16 de febrero de 2001[307]. Debido a los resultados encontrados, el 20 de febrero de 2011 se presentó información de las unidades a que pertenecieron los mayores GUZMÁN LOMBANA CARLOS ALBERTO y ROJAS ESPINOSA LUIS FERNANDO, entre 1994 y 1996,[308] y posteriormente la UNDH – DIH solicitó y le fue presentada la hoja de vida de los militares que tuvieron actividad en la zona durante la época de las desapariciones.[309]

Posteriormente, y con análisis de las pruebas anteriormente obtenidas, la UNDH – DIH ordenó la práctica de las pruebas de diligencia de declaración al MY JAIRO LEGUIZAMÓN y CARLOS ARTURO SUÁREZ[310]. Posteriormente, se solicitó al del Comando E-1 del Ejército, la ubicación del MY LUIS FERNANDO ROJAS[311]. Además, se solicitó la diligencia de declaración al MY. CARLOS MARIO JARAMILLO[312] y al Capitán JOSÉ LUIS AGUDELO JAIMES y diligencia de

[298] Cuaderno 6 folio 147 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[299] Cuaderno 6 folio 242 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[300] Cuaderno 6 folio 140 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[301] Cuaderno 6 folio 141 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[302] Cuaderno 6 folio 47 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[303] Cuaderno 6 folio 167 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[304] Cuaderno 8 folio 12 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[305] Cuaderno 8 folio 182 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[306] Cuaderno 9 folio 115 radicado 233 de la UNDH – DIH.
[307] Una inspección anterior, donde se pudo determinar a grandes rasgos cierta información fue el 23 de noviembre del 2000. Cuaderno 9 folios 41 a 46 Radicado 233 UNDH - DIH
[308] Cuaderno 9 Folio 1 Radicado 233 UNDH - DIH
[309] Anexo de hojas de vida de los señores: TC. JAIRO ENRIQUE HERNÁNDEZ ALONSO, MY NELSON VERA SALAMANCA, MY CARLOS MARIO JARAMILLO VARGAS y el MY CESAR AUGUSTO CÁRDENAS GONZÁLEZ. Cuaderno 9 Folios 4 a 35 Radicado 233 UNDH - DIH.
[310] El 27 de septiembre de 2002 se lleva a cabo diligencia de declaración del Coronel CARLOS ARTURO SUAREZ BUSTAMANTE. Cuaderno 9 folios de 125 a 130 Radicado 233 UNDH - DIH.
[311] cuaderno 9 folio 119 a 120 Radicado 233 UNDH – DIH.
[312] La parte civil solicita a la Fiscal que al interrogatorio que se le hará al My Carlos Mario Jaramillo, se le adelante 27 preguntas que envía en expediente, con el fin de profundizar en la información solicitada al My. cuaderno 9 folios 159 a 161 Radicado 233 UNDH - DIH. La declaración del My CARLOS MARIO JARAMILLO

Ampliación de declaración del MY. LUIS FERNANDO ROJAS[313] en la ciudad de Malambo – Atlántico.

Dentro de éste tiempo, se solicitó a diferentes entidades revisar si existían actas de exhumación o de cadáveres con los nombres de las presuntas víctimas.[314] Y dada la información remitida y obtenida hasta el momento, la UNDH – DIH, emitió órdenes de captura en contra de los señores CARLOS CASTAÑO GIL y de RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO. En virtud de la calidad de estos personajes dentro de los grupos armados al margen de la ley (AUC), y los pocos recursos logísticos de la institución, se imposibilitó el desplazamiento a los lugares en que posiblemente se encontrarían.[315]

De manera oportuna, respecto a la información recolectada y analizando tanto testimonios como pruebas documentales realizadas por la UNDH - DIH y aportadas por las partes, el 30 de abril de 2003 la UNDH – DIH decidió acusar al Mayor del Ejército Nacional CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA y al señor RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO frente a los hechos investigados, haciendo un sucinto análisis de las pruebas y de las conductas en las que incurrieron los dos procesados. Resolvió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra del Mayor del Ejército Nacional CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA. Además, no accedió a la solicitud de preclusión de la Investigación respecto del Mayor del Ejército Nacional CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA impetrada por su defensor, atendiendo a lo manifestado en la parte considerativa de la providencia y decretar medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra del señor RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO.[316]

tomada en la UNDH y DIH de Bogotá se lleva a cabo el 27 de enero de 2003. Cuaderno 9 folio 189 a 201 Radicado 233 UNDH – DIH.

[313] Declaración que rinde el señor LUIS FERNANDO ROJAS en la Fiscalía Cuarta especializada UNDH y DIH de Barranquilla el día 31 de enero de 2003. Cuaderno 9 folios 207 a 220 Radicado 233 UNDH – DIH.

[314] La forense de la Unidad Local de Medicina Legal de Puerto Berrio, informa que no se encontró que se hubiera recibido algún cadáver con los nombres de las presuntas víctimas. Cuaderno 9 Folio 39 Radicado 233 UNDH – DIH. Tampoco en la Alcaldía Municipal de Puerto Berrio, se halló registro en los archivos, respecto a las licencias de inhumación de las personas especificadas en el oficio de pregunta, presentada el 21 de marzo de 2001. Cuaderno 9 folio 58 Radicado 233 UNDH – DIH. Por su parte en el municipio de Puerto Triunfo, en el archivo de Registros civiles de Defunción, no se encontraron las actas de defunciones de las presuntas víctimas. Cuaderno 9 folio 61 a 62 Radicado 233 UNDH – DIH.

[315] Cuaderno 9 folio 81 a 83 Radicado 233 UNDH – DIH.

[316] **Respecto al MY. CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA**, la UNDH-DIH establece que en las declaraciones rendidas por las personas que fueron testigos de las desapariciones de sus familiares o conocidos, señalan que quienes ejecutaron estos hechos fueron hombres armados vestidos de civil y otros uniformados que generalmente se movilizaban en camionetas, sin que hubieran logrado identificar a alguno de ellos. Igualmente las personas que tuvieron conocimiento de las desapariciones por comentarios hacen esta misma afirmación. Del análisis de los testimonios recibidos en la actuación se tiene que en los mismos sobre la participación del Mayor GUZMÁN QUINTERO en los hechos investigados, no puede deducirse indicios graves que comprometan su responsabilidad. **Respecto al señor RAMÓN MARIA ISAZA ARANGO:** se lo determina como como presunto autor del delito de secuestro simple contemplado en el artículo 269 del Código Penal anterior, agravado por el artículo 270 numerales 1 y 3 del mismo estatuto, en concurso homogéneo, respecto de los menores de edad OSCAR HEMEL ZULUZAGA MARULANDA, MIGUEL ANCISAR CARDONA y JUAN CRISÓSTOMO CARDONA QUINTERO, y por los delitos de secuestro simple consagrado en el artículo 269 del Código Penal anterior agravado por el artículo 270 numeral primero, en concurso homogéneo, respecto de

El 18 de diciembre de 2003, la parte civil hizo una solicitud de pruebas, a lo cual la UNDH-DIH accedió el 19 de abril de 2004, junto con otras pruebas decretadas de oficio, y las cuales se realizaron en distintas fechas.[317] Asimismo, negó a solicitud presentada por el abogado defensor del My. GUZMAN LOMBANA de cerrar la investigación.

Debido al tiempo transcurrido en la recaudación de las pruebas solicitadas anteriormente, la UNDH – DIH procedió con las siguientes actuaciones hasta el 4 y 8 de noviembre de 2004, fecha en la cual realizó una nueva solicitud de pruebas, las cuales arrojaron resultados positivos.[318]

El 29 de marzo de 2005 la Fiscalía decretó la práctica de pruebas adicionales[319], las cuales fueron realizadas entre el 5 de abril y el 2 de mayo de 2005[320]. A su vez, negó la solicitud de cierre de la investigación formulada por el abogado defensor de CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA quien se encontraba vinculado al proceso penal.

Por resolución de la Presidencia de la República, se estimó reconocer el carácter de miembro representante de las AUC, al señor RAMON ISAZA ARANGO, hasta

ANIBAL de JESÚS CASTAÑO, FREDDY N, IRENE GALLEGO QUINTERO, JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ, JAIME ALONSOMEJÍA QUINTERO, HERNANDO de JESÚS CASTAÑO CASTAÑO, OCTAVIO de JESÚS GALLEGO HERNANDEZ, y por el delito de homicidio del señor JAVIER de JESÚS GIRALDO GIRALDO, contemplado en el artículo 103 del Código Penal actual agravado por el numeral 7 del artículo 104 ibídem, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad y en razón a las consideraciones enunciadas en esta providencia. Cuaderno 9 folio 251 a 302 Radicado 233 UNDH – DIH

[317] Solicitud de la parte civil, en la cual se refiere a: 1. Escuchar en diligencia de declaración a los señores ANTONIO MEJIA, APOLINAR GALLEGO, EDILMA GOMEZ, ARGIRO GALLEGO, CARMEN MUNOZ CASTANO, ELADIO GALLEGO, OBEIDA GALLEGO CASTAÑO y ELVIA FERNÁNDEZ de CARDONA. 2. Ampliar declaración de MARÍA ROCIO CARDONA, MARIA ENGRACIA HERNANDEZ y MARIA FLORINDA GALLEGO. 3. Comisionar al Cuerpo Técnico de Investigación, Grupo de DDHH y DIH, ubiquen a los señores ARLEY de JESÚS ARANGO, FERNEY CARDONA, CARLOS MARIO ESCUDERO CANO. 4. Solicitud de copia la investigación preliminar No. 1015, relacionada con la detención de IRENE de JESUS GALLEGO. Cuaderno. 10 folio 38 a 40 Radicado 233 UNDH – DIH. Las pruebas fueron realizadas el 20 de agosto de 2004 (Cuaderno 10 folio 53 a 65 Radicado 233 UNDH – DIH), el 27 de octubre de 2004 (Cuaderno 10 folio 66 a 63 65 Radicado 233 UNDH – DIH), del 8 de noviembre de 2004 (Cuaderno 10 folio 64 al 76 Radicado 233 UNDH – DIH), 10 de noviembre de 2004 (Cuaderno 10 folio 77 a 125 Radicado 233 UNDH – DIH).

[318] Cuaderno 10 folio 128 a 172 Radicado 233 UNDH – DIH

[319] Pruebas entre las cuales están: 1.Efectuar labores de inteligencia en la vereda la Esperanza, Municipio del Carmen de Viboral, con el fin de ubicar a los señores EDILMA GOMEZ, al Sacerdote OLIMPO GIL GOMEZ, RAMELIA MARULANDA, CARLOS MUÑOZ, BLANCA ESTELA LOPEZ RAMIREZ, ELADIO GALLEGO QUINTERO, CARLOS ARTURO ESTRADA, ANTONIO MEJIA, PEDRO PABLO MUÑOZ y NORBERTO SOTO QUINTERO. Lo anterior con el fin de escucharlos en diligencia de declaración durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2.005. 2. Indagar en el DAS, SIJIN CTI, de Medellín, sobre la documentación que tengan respecto a los grupos paramilitares que operaron para el año de 1.996 en el Departamento de Antioquia. 3. Averiguar en la Fiscalía Especializada de Antioquia, que investigaciones cursan o cursaron por la conformación de grupos al margen de la ley de los comúnmente denominados paramilitares para el año de 1.996, procesos a los cuales se les realizará inspección judicial. 4. Establecer si para el año de 1.996, laboró en el Municipio de Cocorná, Antioquia, un Agente de la Policía de apellido VIAÑE. 5. Escuchar en diligencia de declaración el día 8 de abril de 2.005 a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m.) al señor FERNEY ALBERTO CARDONA ACEVEDO, recluido en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Itaguí, Antioquia (Cuaderno 10 folio 185 a 189 Radicado 233 UNDH – DIH).

[320] Cuaderno 10 folio 150 a 235 Radicado 233 UNDH – DIH.

el 31 de diciembre de 2005, término que se prorrogó, suspendiendo la orden de captura que existía contra él[321].

La UNDH – DIH dispuso citar a diligencia de indagatoria al señor RAMÓN ISAZA ARANGO[322], quien se había desmovilizado el 7 de febrero de 2006. A su vez, el abogado defensor del desmovilizado solicitó a la UNDH-DIH realizar la declaración en el corregimiento Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo, lugar de domicilio del procesado. Pero debido a condiciones de salud y al esperar la decisión judicial respecto de la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, el defensor de RAMÓN MARIA ISAZA solicitó el aplazamiento de dicha indagatoria en varias ocasiones.[323] En consideración de la enfermedad del señor RAMÓN MARIA ISAZA se solicitó a Medicina Legal revisar su historia clínica, para que indicara si padece de enfermedad grave y por ende se debiera buscar otra medida de aseguramiento[324].

A través de resolución 248 del 02 de octubre de 2006 de la Presidencia de la República, se levantó la suspensión de orden de captura de RAUL ISAZA[325], y la UNDH – DIH presentó la solicitud de mantener privado de la libertad al antes mencionado a disposición del despacho.[326] Por ende, para el 23 de abril de 2007 se llevó a cabo la diligencia de indagatoria que rindió el señor RAMON MARÍA ISAZA ARANGO[327].

La parte civil allegó copia de la declaración de la señora ELVIA ROSA FERNANDEZ DE CARDONA rendida ante el Juzgado Civil Municipal del Carmen de Viboral dentro de la actuación contenciosa administrativa Radicada, así como la solicitud de levantamiento de la reserva de la identidad de testimonio con código 001[328]. Dicho levantamiento se llevó a cabo cumpliendo con las exigencias legales.[329]

El 30 de octubre de 2007, el Juzgado 4° Penal de Circuito Especializado de Bogotá, profirió sentencia de condena en contra de RAMON MARIA ISAZA ARANGO.[330]

En concordancia con la indagatoria del señor RAMON ISAZA, la UNDH –DIH declaró el 11 de enero de 2008, la realización de diferentes diligencias encaminadas a determinar la veracidad de aspectos relevantes informados por

[321] Expresada el 8 de julio y 19 de diciembre del 2005. Cuaderno folio 246 a 250 Radicado 233 UNDH – DIH.
[322] Cuaderno 10 folio 251 a 252 Radicado 233 UNDH – DIH
[323] Cuaderno 10 folio 261 a 263, 265 y 278 Radicado 233 UNDH – DIH
[324] Cuaderno 11 folio 126 a 127 Radicado 233 UNDH – DIH
[325] Cuaderno 11 folio 9 a 10 Radicado 233 UNDH – DIH
[326] Cuaderno 11 folio 11 a 12 Radicado 233 UNDH – DIH
[327] Cuaderno 11 folio 223 a 239 Radicado 233 UNDH – DIH
[328] Cuaderno 10 folio 298 a 301 Radicado 233 UNDH – DIH
[329] Cuaderno 13 folio 216 a 218 Radicado 233 UNDH – DIH
[330] Cuaderno 12 folio 3 Radicado 233 UNDH – DIH.

el procesado[331]. Dichas pruebas fueron allegadas al proceso el 21 de enero de 2008[332].

El día 11 de octubre de 2008 se llevó a cabo diligencia de ampliación de indagatoria que rindió RAMÓN ISAZA ARANGO frente a la fiscal especializada 80 de la UNDH y DIH[333]. La Parte Civil mediante escrito del 26 de noviembre de 2008, agregó pruebas documentales al expediente.[334]

Teniendo en cuenta el marco de búsqueda de la paz que ha caracterizado al Estado colombiano, se inició en el año 2008 – 2009 el proceso de desmovilización paramilitar bajo la Ley de Justicia y Paz. Esto conllevó a que el 22 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia y Paz ordenara a la Fiscalía de la UNDH – DIH que suspendiera la investigación con respecto al imputado RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO ya que él se acogió como postulado a los beneficios jurídicos de la Ley 975 de 2005.[335]

La Fiscalía 53 delegada ante el Gaula Rural Oriente Antiqueño, a través del informe No. 322 de fecha 27 de julio de 2009, realizó solicitud de unificación de las actuaciones llevadas en su despacho respecto a las desapariciones forzadas de la Vereda La Esperanza ocurridas entre el 21 de junio y el 9 de julio de 1996[336], la cual fue respondida por la UNDH- DIH exponiendo que no hay ninguna circunstancia que acredite el enlace entre las dos investigaciones[337].

[331] Las actuaciones solicitadas por la UNDH- DIH son: 1. Allegar la plena identificación del señor OMAR ISAZA GOMEZ, hijo del comandante paramilitar RAMONMARIA ISAZA ARANGO. 2. Indagar si en el Batallón Bárbula ubicado en Puerto Boyacá y en el Batallón Patriota con sede en Honda, presto servicio militar el señor OMAR ISAZA GÓMEZ. 3. Averiguar si mientras prestó servicio militar OMAR ISAZA fue comandante de compañía un Mayor de apellido HERNANDEZ. 4. Establecer que información reposa en los organismos de Policía Judicial tales como DAS, SIJIN, CTI con sede Medellín respecto al señor OMARISAZA GOMEZ. 5. Determinar quién era el Obispo de Rionegro para los meses de junio y julio de 1.996. 6. Establecer si durante los meses de mayo, junio y julio de 1.996 laboró un General del Ejército Nacional de apellido MANOSALVA en el Departamento de Antioquia. 7. Indicar si en la Cuarta Brigada con sede en Medellín, entre los meses de abril, mayo, junio de 1.996 se presentó una emboscada a miembros del Ejército por parte de subversivos 8. Indagar si para los meses de Abril, Mayo, Junio o Julio estuvo en la base de la Piñuela ubicada en el Municipio de Cocorná, un mayor de apellido HERNANDEZ y si el mismo en el año de 1.998 e ingresó al grupo paramilitar de JORGE CUARENTA. 9. Averiguar si reposa algún registro de las personas que se entregaron a miembros del Ejército Nacional en la Población de Carmen de Viboral. Cuaderno 12 folio 7 a 10 Radicado 233 UNDH – DIH.

[332] Cuaderno 12 folio 11 a 57 Radicado 233 UNDH – DIH.

[333] Cuaderno 12 folio 123 a 132 Radicado 233 UNDH – DIH.

[334] La parte civil controvierte la aseveración esbozada por los militares para "justificar" el ataque a la vivienda de JUAN CARLOS GALLEGO HERNÁNDEZ ya que en los registros del Hospital San Juan de Dios no se encontró ninguna anotación sobre atención en salud del Señor CESAR AUGUSTO CARDENAS GONZALEZ. Cuaderno 12 folio 157 a 159 Radicado 233 UNDH – DIH.

[335] Lo anterior por cuanto se hicieron imputaciones de cargos, donde se encuentra relacionados los hechos de las desapariciones llevadas a cabo en la Vereda La esperanza en 1996, motivo por el cual se ordenó que en la UNDH - DIH se suspenda la Investigación. Cuaderno 12 folio 206 a 207 Radicado 233 UNDH – DIH

[336] Cuaderno 12 folio 222 a 226 y Cuaderno 13 folio 3 Radicado 233 UNDH – DIH.

[337] Respuesta del 22 de junio de 2010. Cuaderno 13 folio 101 a 103 Radicado 233 UNDH – DIH.

El 7 de septiembre de 2009, la parte civil realizó solicitud de readecuación de la tipificación de los hechos punibles que se investigan en el curso del trámite procesal y en particular en relación con la medida de aseguramiento impuesta al procesado RAMÓN MARÍA ISAZA.[338] A lo cual la UNDH-DIH respondió estableciendo que se debía esperar la respuesta por parte del Despacho del señor Magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá para estudiar la solicitud[339].

El 17 de agosto de 2010, la UNDH –DIH decretó varias diligencias encaminadas a generar pruebas que ayudaran en el curso del proceso,[340] las cuales fueron realizadas y aportadas entre el 22 de junio y 25 de noviembre de 2010.[341]

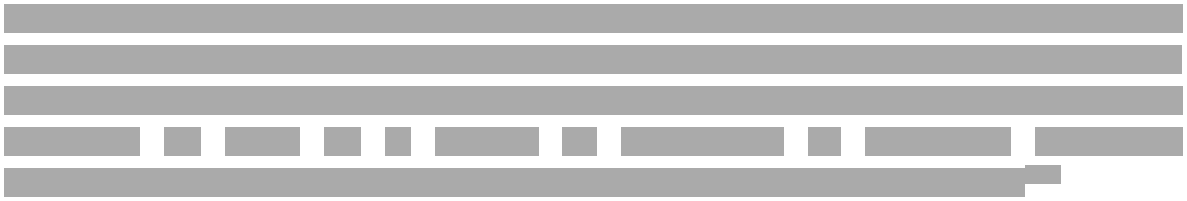
Atendiendo a lo reglado en el artículo 394 del C.P.P y en virtud de que el término de instrucción se encuentra vencido, la UNDH – DIH decidió el 25 de marzo de 2011 cerrar parcialmente la investigación en relación con el sindicado CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA.[342] Sin embargo, teniendo en cuenta la solicitud presentada por la parte civil, [343] la UNDH el 1 de junio de 2011, resolvió revocar la resolución de fecha 25 de marzo mediante la cual se cerró la investigación y resolvió la petición de readecuación de tipificación de las conductas punibles elevada por la apoderada de la parte civil.[344]

El 21 de junio de 2011, la Fiscalía ordenó la práctica de algunas pruebas que permitieran identificar lo dicho por RAMON ISAZA[345], las cuales fueron allegadas

[338] Cuaderno 12 folio 233 a 254 Radicado 233 UNDH – DIH.
[339] Cuaderno 13 folio 110 Radicado 233 UNDH – DIH
[340] Las diligencias fueron: 1. sobre el estado actual del señor RAMON MARIA ISAZA, se procederá a remitir el dictamen ante el Tribunal de Justicia y Paz junto con el escrito del interno antes citado. 2. oficiara a la Dirección Nacional del INPEC con el objeto de que se realicen las correspondientes anotaciones en relación que el señor RAMON MARIA ISAZA ARANGO, se encuentra a disposición del despacho del señor Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz. 3. Establecer en el municipio del Carmen de Viboral, la ubicación actual de las siguientes personas para tomarles ampliación de declaración: DIOSELINA QUINTERO, familiares del señor ANIBAL DE JESUS CASTAÑO y del menor OSCAR HEMEL ZULUAGA MARULANDA, familiares d FREDY SUAREZ, ubicar a IRENE GALLEGO QUINTERO y/o familiares de la misma, familiares de los señores JUAN CARLOS GALLEGO HERNANDEZ, JAIME ALONSO MEJIA QUINTERO, JAVIER DE JESUS GIRALDO GIRALDO, HERNANDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO, FLORINDA DE JESUS GALLEGO HERNANDEZ y ORLANDO MUÑOZ y OCTAVIO DE JESUS GALELGO HERNANDEZ. Cuaderno 13 folio 122 a 124 Radicado 233 UNDH – DIH.
[341] Cuaderno 13 folio 125 a 131 y folios 143 a 165 Radicado 233 UNDH – DIH.
[342] Cuaderno 13 folio 166 a 170 Radicado 233 UNDH – DIH
[343] Solicitud de revocatoria de resolución de cierre de investigación del 23 de mayo de 2011. Cuaderno 13 folio 190 a 191 Radicado 233 UNDH – DIH.
[344] Cuaderno 13 folio 192 a 205 Radicado 233 UNDH – DIH.
[345] Principalmente se solicita: 1. Librar misión de trabajo al investigador asignado del CTI a fin de verificar por los medios pertinentes, quien o quienes eran los comandantes del Batallón Pedro Nel Ospina del ejército que hacia parte de la IV brigada, para el año de 1996. 2. Determinar que militares se encontraban bajo el mando del Mayor JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO en la base militar la piñuela del municipio de Cocorná en el mes de junio del año de 1996. 3. Allegar la cartilla decadactilar de ALFONSO GUIZADO SUAREZ, conocido con el alias del Costeño. 4. Verificar por medios idóneos, la veracidad de la información suministrada por RAMON ISAZA ARANGO sobre la presunta muerte de OMAR ISAZA alias Teniente, ABELARDO GALEANO alias COCUYO, ESPARCO DE JESUS SANCHEZ, alias Bayron, PEDRO PABLO GONZALEZ alias Puño YANCY YANCES AREVALO alias CHACO, PEDRO ANGEL QUINTERO alias Pedrucho, RAMON GOMEZ PRIOEO alias GUERRILLO ELMER ANTONIO RENAO alias COTA y alias RUBIANO, CESAR Ruíz AREVALO alias Cesar. 5. Allegar la prueba sobre el deceso del general ALFONSO MANOSALVA FLOREZ Y del MAYOR JAIRO HERNANDEZ. 6. Entrevistar a

el 14 de octubre de 2011,[346] y de las cuales cabe rescatar la diligencia de entrevista a WALTER OCHOA GUIZAO y la diligencia de entrevista a ALVARO MURILLO FLOREZ.

El 11 de octubre de 2011 la UNDH-DIH, se dispone ampliación de declaración de RAMON MARIA ISAZA y ampliación de indagatoria a CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA,[347] diligencia a la cual la apoderada de la parte civil remitió cuestionario para interrogarlo, el cual se aplicó en su declaración, que por motivos de salud[348] fue realizada solo hasta el 6 de agosto de 2012[349]. Por su parte, la ampliación de indagatoria a CARLOS ALBERTO GUZMAN LOMBANA fue realizada el 5 de diciembre de 2011.[350]



El 7 de febrero de 2013 se recibió oficio de la Coordinadora del grupo investigativo señalando que en cumplimiento de la solicitud de la Directora Nacional de Derechos Humanos, y debido a la incidencia que este caso tiene y su importancia, se nombraron un grupo de funcionarios de policía judicial que estarán dispuestos para adelantar las actuaciones necesarias.[352]

El 13 de agosto de 2013, se ordenó la práctica de nuevas pruebas que ayudaran a determinar a postulados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que hubieran hecho referencia a la desaparición forzada ocurrida en la Vereda La Esperanza en el año 1996, así como la proyección en materia de labores de policía judicial con el fin de establecer el paradero de los cuerpos, y la plena identificación de las víctimas.[353] Pruebas que se llevaron a cabo el 15 de noviembre de 2013 con resultados parciales.[354]

los postulados WALTER OCHOA GUISAO Y ALVARO MURILLO FLOREZ ante el Despacho 2° de Justicia y paz. Cuaderno. 13 folio 206 a 208 Radicado 233 UNDH – DIH.
[346] Cuaderno 13 folio 232 a 236 Radicado 233 UNDH – DIH.
[347] Cuaderno 13 folio 223 Radicado 233 UNDH – DIH.
[348] Cuaderno 13 folio 290 Radicado 233 UNDH – DIH
[349] Cuaderno 13 folio 296 a 297 Radicado 233 UNDH – DIH
[350] Cuaderno 13 folio 270 a 285 Radicado 233 UNDH – DIH
[351] Estas actuaciones obran en cuaderno 14 folios 1, en cuaderno 16 folios 171 a 174, en cuaderno 18 sin foliar pág. 262 a 263, y en cuaderno 19 Folios 146-147 y 283 a 283 del Radicado 233 UNDH – DIH. Encontrando entre ellas hasta la misma declaración del joven en mención.
[352] Cuaderno 14 folio 28 Radicado 233 UNDH – DIH
[353] Cuaderno 14 folio 32 a 33 Radicado 233 UNDH – DIH
[354] Cuaderno 14 folio 135 a 149 - 164. Cuaderno 15 folio 114 a 158. Radicado 233 UNDH – DIH

El 30 de diciembre de 2013, se ordenó la práctica de nuevas pruebas.[355] El 12 de febrero de 2014, la Fiscalía ordenó vincular como coautores del delito de Desaparición Forzada y Homicidio Agravado a LUIS EDUARDO ZULUAGA ARCILA y WALTER OCHOA GUISAO y para el efecto, se programaron diligencias de indagatoria, que fueron realizadas los días 17 y 18 de febrero de 2014[356].

Con el interés por parte de la UNDH-DIH de obtener mayor información que ayudara en el avance del proceso, el 21 de febrero de 2014, emitió resolución que determinó practica de pruebas tales como obtener la plena identificación de las víctimas, obtener la identidad de los integrantes del E.P.L. que se desmovilizaron el día 30 de septiembre de 1996, e identificar el alias de PITUFO y JOTA M, así como del señor GERARDO VALLEJO MARTINEZ. Al igual que ubicar a algunos familiares de los desaparecidos para tomar muestras de sangre para posteriores pruebas de ADN[357]. Solicitud que no se pudo llevar a cabo, debido a la falta de ayuda presentada por la parte civil quien se opuso a que la Fiscalía adelantara dichas pruebas de ADN[358]. El resto de las pruebas fueron anexadas al proceso entre el 6 de mayo y 6 de junio de 2014.[359]

La Fiscalía dentro del proceso ordinario emitió una nueva resolución de pruebas el 22 de junio de 2014[360] y otra el 7 de julio de 2014 donde el fiscal ordenó la extracción de información de los CDS de las versiones libres de RAMON ISAZA, alias GURRE Y MC GUIVER; con el fin de extraer toda la información que conduzca a determinar aspectos relevantes respecto a las desapariciones de las víctimas[361]. El 21 de julio de 2014 se dio respuesta a la solicitud.[362]

La solicitud de pruebas formulada por la Parte Civil desde el 9 de octubre de 2012 y reiterada el 3 de octubre de 2013, fue respondida el 25 de julio de 2014, donde ordena su práctica con las formalidades legales correspondientes[363], pruebas que se desarrollaron el 27 de agosto de 2014.[364]

El 3 de septiembre de 2014, la Fiscalía emitió resolución de práctica de pruebas, encaminadas a la individualización de los militares que pudieran estar comprometidos en las desapariciones forzadas, así como la búsqueda de la plena

[355] En las cuales consta: Escuchar en diligencia de declaración al señor LUIS EDUARDO ZULUAGA, WALTER OCHOA GUISAO y CAMILO DE JESUS ZULUAGA ZULUAGA Cuaderno 14 folio 153 y 165. Radicado 233 UNDH – DIH.
[356] Cuaderno 14 folio 167 a 170 Radicado 233 UNDH – DIH.
[357] Cuaderno 14 folio 171 a 174 Radicado 233 UNDH – DIH.
[358] Cuaderno 14 folio 203 Radicado 233 UNDH – DIH.
[359] Cuaderno 14 folio 192 y 199 a 207 Radicado 233 UNDH – DIH.
[360] Cuaderno 15 folio 95 a 96 Radicado 233 UNDH – DIH
[361] Cuaderno 14 folio 272 a 275 y Cuaderno 15 folio 79 a 80 Radicado 233 UNDH – DIH.
[362] Cuaderno 15 folio 81 a 94 Radicado 233 UNDH – DIH
[363] Cuaderno 15 folio 101 a 108 Radicado 233 UNDH – DIH
[364] Cuaderno 17 folio 233 a 252 Radicado 233 UNDH – DIH

identificación de las personas que ostentan los alias de Alias PUNO, MUELON, JULIAN, BAYRON, COCUYO, GUERRILLO MUELON, PIRRINGO, CORROZO, CAGALINDO, GALLETA, CHACO, COTA. [365] De dichas diligencias, el informe policial fue anexado el 25 de noviembre, el 10 de diciembre de 2014 y el 11 de diciembre de 2014.[366]

El 3 de septiembre de 2014, se emitió resolución que resolvió la situación jurídica de los procesados LUIS EDUARDO ZULUAGA ARCILA, CAMILO DE JESÚS ZULUAGA ZULUAGA, Y WALTER OCHOA GUISAO. Además decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de secuestro simple que mutó en desaparición forzada, y homicidio agravado.[367] Contra esta decisión se interpusieron, recursos de reposición y en subsidio apelación los días 29 de septiembre de 2004[368] y el 6 de octubre de 2014.[369]

La Fiscalía determinó escuchar al señor WALTER OCHOA GUISAO, CAMILO ZULUAGA ZULUAGA y LUIS EDUARDO ZULUAGA ARCILA, en diligencia de versión libre el día 10 de noviembre de 2014.[370] Diligencias que se allegaron al proceso el día 19 de enero de 2015[371].

A través de resolución de fecha 27 de octubre de 2014 se ordenó la práctica de pruebas tendientes a identificar autores intelectuales y materiales de los hechos, ubicación e identificación de los restos óseos que se puedan encontrar.[372] El 11 de noviembre de 2014 la Fiscalía ordenó la práctica de pruebas con relación a las versiones de los paramilitares vinculados al proceso penal.[373]

De dichas diligencias se anexo el reporte de policía judicial de fechas 10 de diciembre de 2014,[374] 2 de febrero de 2015,[375] y el 15 de abril de 2015.[376] El 26 de febrero de 2015, se allegó oficio mediante el cual se hizo entrega de

[365] Cuaderno 15 folio 175 a 177 y Cuaderno 16 folios 151 a 152 Radicado 233 UNDH – DIH.
[366] Cuaderno 16 folio 85 a 170, Cuaderno 16 folio 175 a 302 y Cuaderno 18 folio 1 al 230 Radicado 233 UNDH – DIH.
[367] Cuaderno 15 folio 178 a 259 Radicado 233 UNDH – DIH.
[368] Cuaderno 16 folio 5 Radicado 233 UNDH – DIH.
[369] Cuaderno 16 folio 7 Radicado 233 UNDH – DIH.
[370] Cuaderno 15 folio 178 a 259 y Cuaderno 16 folio 30 Radicado 233 UNDH – DIH.
[371] Diligencia de versión libre del señor LUIS EDUARDO ZULUAGA ARCILA, (Cuaderno 18 folio 241 a 244). Diligencia de versión libre del señor CAMILO ZULUAGA ZULUAGA, (Cuaderno 18 folio 245 a 247) y diligencia de versión libre del señor WALTER OCHOA GUISAO (Cuaderno 18 folio 248 a 250).
[372] Cuaderno 16 folio 51 a 53 Radicado 233 UNDH – DIH.
[373] Cuaderno 16 folio 68 a 69 Radicado 233 UNDH – DIH.
[374] Aporte de contacto de MARIA DELFA ISAZA, solicitud de inspección judicial y entrevista a RAMON ISAZA respecto a su lugar de residencia. Cuaderno 16 folio 171 a 174 Radicado 233 UNDH – DIH.

[376] Cuaderno 20 folio 14 a 39 Radicado 233 UNDH – DIH.

información relevante sobre los militares que operaron en la zona de la Fuerza de Tarea Águila.[377]

Entre el 7 y 26 de noviembre de 2014, la UNDH-DIH ordenó la práctica de pruebas que fueron aportadas en las fechas 26 de marzo y 15 de abril de 2015.[378] Cabe resaltar, que en atención a lo solicitado por la fiscalía y para brindar un acompañamiento especializado a las víctimas que no conlleve a una posible re-victimización y dentro del marco de las garantías judiciales pertinentes, el día 30 de abril de 2015, la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas, remitió un informe sobre las acciones de atención psicosocial realizadas durante la diligencia ejecutada los días 13 y 14 de marzo del 2015 a las víctimas.[379]

Posteriormente y con el análisis de la información aportada por la policía judicial, el 6 de marzo de 2015, la fiscalía decretó la realización de varias pruebas que conllevaran al esclarecimiento más cercano de los hechos, culpables y ubicación de los desaparecidos.[380] Dichas diligencias fueron aportadas al proceso el 25 de marzo de 2015.[381]

El 21 de mayo de 2015, la Fiscalía 47 Delegada remitió un informe ante el Tribunal Superior de Bogotá, por considerarlo útil, conducente y pertinente a la investigación de la referencia, se ordenó anexarla al expediente de manera legal, para ser valorada en el momento procesal oportuno.[382]

1.2 Justicia y Paz

A continuación se presentan las principales actuaciones adelantadas en la Jurisdicción de Justicia y Paz, respecto de los hechos ocurridos durante el segundo semestre de 1996 en la Vereda La Esperanza:

El hecho es confesado inicialmente por Ramón Isaza el 16 de octubre de 2008, quien atribuye la responsabilidad directa de los hechos a su hijo Omar Isaza, alias Teniente (fallecido), quien presuntamente habría recibido un listado con los nombres de las person as que habitaban en sectores aledaños a la autopista Medellín – Bogotá, a quienes se les señalaba de guerrilleros. En ese orden de ideas, Ramón Isaza asume su responsabilidad en los hechos por "línea de

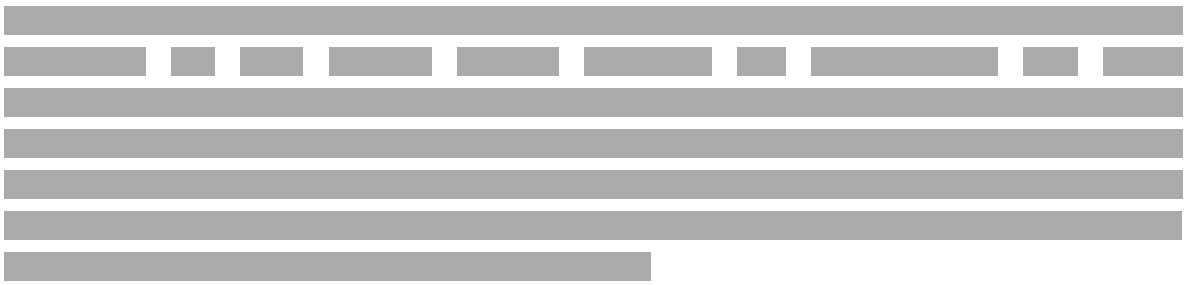
[377] Cuaderno 19 folio 1 a 144 Radicado 233 UNDH – DIH.
[378] Cuaderno 19 Folios 267 a 274 y 285-310, Cuaderno 20 Folios 60 a 304, Cuaderno 21 folios 1 al 104. Radicado 233 UNDH – DIH.
[379] Cuaderno 20 folios 48 a 59 Radicado 233 UNDH – DIH.
[380] Cuaderno 21 folio 130 a 131 Radicado 233 UNDH – DIH.
[381] Cuaderno 21 Folios 132 a 138 Radicado 233 UNDH – DIH.
[382] Cuaderno 21 folio 127 a 129 Radicado 233 UNDH – DIH.

mando", en su condición de comandante general de la Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

En vista de lo anterior, el 1 de abril del año 2009 la Fiscalía Segunda de la Unidad de Justicia y Paz formuló imputación en contra de Ramón María Isaza Arango como determinador de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y secuestro extorsivo agravado por los hechos delictivos perpetrados en la Vereda La Esperanza del Carmen de Viboral, los cuales hoy ocupan la atención de esta Honorable Corte.

El 29 de noviembre de 2011, se realiza audiencia de formulación de cargos ante el Magistrado de Control de Garantías, en cuyo desarrollo la Fiscalía 47 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz formuló acusación en contra del ex comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, señor Ramón Isaza, como determinador de los hechos acaecidos en la Vereda La Esperanza durante el segundo semestre del año 1996, cuya adecuación típica, si bien en un principio fue por el delito de secuestro, se procedió con una variación readecuándola al delito de desaparición forzada agravada, en concurso con homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, y destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Durante la misma audiencia pública, la Fiscalía retiró la acusación en contra de Ramón Isaza por el delito de homicidio respecto del Personero del Carmen de Viboral, señor Helí Gómez Osorio, por cuanto la ejecución de éste fue admitida por el también postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, Ricardo López Lora alias "el marrano", quien reconoció que fue asesinado por hombres de las ACCU bajo sus órdenes, siguiendo a su vez la directriz impartida por el comandante de esa estructura, Vicente Castaño Gil.



Sobre el particular, es importante resaltar que tanto el postulado Ramón Isaza como otros de los excomandantes de las ACMM reconocen que el padre del menor, una vez secuestrado por esa agrupación ilegal bajo el señalamiento de pertenecer a una célula del Ejército de Liberación Popular –EPL-, se incorporó a las filas de las Autodefensas y "colaboró" con sus objetivos de lucha

antisubversiva, abandonando el movimiento antes de su desmovilización en febrero de 2006 (hacia el año 2004).

Los hechos relacionados con el asunto indagado, que al interior del despacho se conoce como "masacre de la Vereda La Esperanza", fueron incluidos en una primera etapa de imputaciones al Comandante General de las ACMM, Ramón María Isaza Arango, en el año 2009. Se tenía previsto incluirlos como hechos priorizados en una segunda fase relacionada con masacres, pero tal pretensión se vio truncada por el tránsito de legislación.

Además del señor Ramón Isaza, en los hechos relacionados con la Vereda La Esperanza, han aceptado participación parcial otros excomandantes y exintegrantes de las ACMM, como Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa Guisao y Camilo de Jesús Zuluaga, contra quienes se radicará próximamente las solicitudes de imputación.

Al respecto, resulta pertinente señalar que desde el día de su primera diligencia de versión libre – a saber el 30 abril de 2007-, Ramón Isaza ha participado en ciento setenta y cuatro (174) diligencias de versión libre y confesión, de las cuales cuarenta y dos (42) han sido individuales y ciento treinta y dos (134) colectivas. En dichas versiones se han tratado dos mil cuatrocientos diecinueve (2.419) hechos delictivos con más de cinco mil quinientas sesenta y siete (5.567) víctimas entre directas e indirectas. A la fecha, el postulado ha aceptado su autoría directa en cuarenta y seis (47) hechos delictivos, que corresponden a ciento dieciocho (119) víctimas.

Finalmente, es importante informarle a la Honorable Corte durante el mes de agosto de 2015, se adelantó audiencia concentrada en la que participaron los excomandantes de las ACMM ya señalados.

2. Proceso disciplinario No. 008-10799-98, adelantado por los hechos que conforman el caso en cuestión.

Mediante oficio PM-045 de 12 de junio de 1996, el Personero del municipio de El Carmen de Viboral puso en conocimiento de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en la ciudad de Medellín, la situación de orden público que se estaba presentando en su jurisdicción, con el fin de solicitar la apertura de la indagación preliminar sobre los hechos denunciados.[383]

[383] Personería Municipal de El Carmen de Viboral, Informe de Orden Público PM-045 de 12 de Junio de 1996. (Anexo 13)

De acuerdo a lo consignado por el Personero, un grupo armado ilegal se encontraba ejecutando acciones violentas, dentro de lo que había corrido del año, en contra de varias personas, a quienes –al parecer- tenían previamente identificadas.[384]

El 24 de junio del mismo año, el Director Nacional de Investigaciones Especiales de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación de la ciudad de Bogotá dispuso adelantar la correspondiente indagación preliminar por los hechos alegados, y para ello comisionó a la Seccional de Antioquia de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el apoyo del Agente de Seguridad Rafael Cifuentes Pinzón.[385]

La indagación preliminar inició con la visita al municipio de El Carmen de Viboral, llevada a cabo el día 12 de julio de 1996, con el propósito de evaluar la situación de orden público, para lo cual los funcionarios de la Procuraduría se reunieron con el Alcalde del municipio, el Personero, el Secretario de Gobierno e inspectores de la Policía Nacional.[386]

En dicha reunión la comisión de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría –Seccional Antioquia- tomó nota de la gravedad de la situación presentada en la vereda La Esperanza.[387] De acuerdo a lo indicado en dicho informe "(…) hay presencia guerrillera en todo el territorio del municipio, asimismo se presentan constantes movimientos de tropa por parte de miembros del Ejército Nacional, lo cual ocasiona enfrentamientos continuos entre ambos bandos y en muchos casos se pone en peligro a la población civil (…)"[388]

En el marco de la labor adelantada por la Seccional de Antioquia de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, el 23 de julio de 1996, el Coordinador de dicha Seccional ofició a los Personeros Municipales de los municipios de Alejandría, San Rafael, San Carlos, San Luis, Guarne, Rionegro, El Retiro, La Ceja, La Unión, Sonsón, Nariño, San Francisco, San Vicente, El Peñol, Marinilla, El Santuario, Granada, Guatapé, Corconá, El Carmen de Viboral, y Abejorral, con el fin de obtener información sobre la aparición de cadáveres N.N., durante el último mes y medio en cada una de las jurisdicciones en mención; y en caso tener hallazgos, solicitó remitir las fechas en las cuales habrían sido encontrados, el sexo, la edad, fichas dentales, actas de

[384] Ibídem. (Anexo 13)
[385] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Auto 0503 de 24 de junio de 1996.
[386] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Seccional Antioquia-, Informe Evaluativo de Visita realizada al municipio de El Carmen de Viboral, 17 de julio de 1996. (Anexo 13)
[387] Ibídem. (Anexo 13)
[388] Ibídem. (Anexo 13)

levantamiento de cadáveres, el nombre del fiscal que conoció del asunto, y las diligencias adelantadas con el fin de identificar los cadáveres.[389]

Mediante oficio de 31 de julio de 1996, el Personero Municipal de El Carmen de Viboral remitió al Coordinador de la Seccional de Antioquia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, las declaraciones recibidas, en donde se involucró al Ejército Nacional en presuntas violaciones a los derechos humanos, en la vereda Belén Chaverras, por hechos ocurridos el 22 de julio a las 3:00 pm, aproximadamente.[390]

Teniendo en cuenta las diligencias efectuadas en El Carmen de Viboral y municipios aledaños, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría dispuso, mediante auto No. 699 de 14 de agosto de 1996, iniciar indagación preliminar por los hechos de orden público que venían ocurriendo en el municipio en mención y todos aquellos en los cuales se practicó visita por parte de la Seccional de Antioquia.[391]
Con el fin de llevar a cabo la indagación, se comisionó a una funcionaria –Técnica en Criminalística- y a un funcionario –Técnico Investigador-, quienes debían desplazarse a El Carmen de Viboral y municipios vecinos, por el término de cuatro días; al final de los cuales debían rendir un informe evaluativo sobre la situación objeto de investigación.[392]

Los funcionarios comisionados contarían con facultades de Policía Judicial, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional, la ley 200 y 201 de 1995, por los que las autoridades del lugar debían prestarles la colaboración requerida.[393]

El día 22 de agosto del mismo año, los funcionarios visitaron la Cuarta Brigada del Ejército con el fin de obtener los INSITOP, entre los días 19 de junio y 27 de julio de 1996, correspondientes a los batallones que operaron en la zona comprendida entre El Carmen de Viboral y Corconá, así como los boletines de prensa de los positivos realizados en esos días.[394]

Como resultado de dicha visita, se obtuvieron los INSITOP del Batallón de Contraguerrillas No. 42 Héroes de Barbacoas –completos-.[395] Los INSITOP del

[389] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Seccional Antioquia, Oficio Circular D.N.I.E. 1001-1, 23 de julio de 1996, dirigido a cada uno de los municipios en mención.
[390] Personería Municipal de El Carmen de Viboral, Oficio PM-075, 31 de julio de 1996. (Anexo 13)
[391] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Oficio 0699, 14 de agosto de 1996. (Anexo 13)
[392] Ibídem. (Anexo 13)
[393] Ibídem. (Anexo 13)
[394] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Acta de visita especial practicada en la Cuarta Brigada, 22 de agosto de 1996.
[395] Ibídem. (Anexo 13)

Grupo Mecanizado No. 4 Juan del Corral, Pedro Nel Ospina, y los de la Unidad de Granaderos, no se encontraban completos, por lo que dicha información sería enviada a la Seccional de Antioquia de Investigaciones Especiales; así como los comunicados de prensa No. 58, 60, 62, 65, 66, y 67.[396]

El 22 de agosto de 1996, los funcionarios también visitaron el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en donde solicitaron los nombres y apellidos de los agentes que se encontraban en la Base La Piñuela, ubicada en el municipio de Corconá y que habrían participado en la Operación Emperador.[397] Dicha información fue aportada por el Cabo Primero López Díaz Wilson Mario de manera inmediata.[398]

Del mismo modo, la comisión encargada efectuó la visita al Comando del Batallón Héroes de Barbacoa, ubicado en el municipio de Bello-Antioquia, en el cual solicitaron –igualmente- los INSITOP, desde el 19 de junio hasta el 28 de julio de 1996; así como el listado de personal que se encontraba durante dicho periodo en la Fuerza de Tarea Águila, información que fue remitida a la Procuraduría.[399]

Asimismo, los funcionarios visitaron, el día 23 de agosto de 1996, la Base Militar La Piñuela, ubicada en jurisdicción del municipio de Corconá, en donde se encuentran acantonadas dos compañías del Batallón Héroes de Barbacoas y un pelotón del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, donde estuvieron indagando sobre los vehículos utilizados para transportar a los soldados puesto que en las declaraciones efectuadas por los habitantes, las cuales reposan en la indagación, se describían varios vehículos en los cuales se habrían transportado hombres armados a los lugares de los hechos.[400]

El 19 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales –Seccional Antioquia- de la Procuraduría General de la Nación, rindió un informe evaluativo del expediente, radicado bajo el No. 3282, sobre los hechos denunciados.[401] Ahora bien, teniendo en cuenta los testimonios recibidos por los Personeros de El Carmen de Viboral y Corconá, las visitas especiales efectuadas

[396] Ibídem. (Anexo 13)
[397] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Acta de visita especial practicada en el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, 22 de agosto de 1996. (Anexo 13)
[398] Ibídem.
[399] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Acta de visita especial practicada al Comando del Batallón Héroes de Barbacoa. 22 de agosto de 1996. (Anexo 13)
[400] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Acta de visita especial practicada a la Base Militar la Piñuela, 23 de agosto de 1996. (Anexo 13)
[401] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Seccional Antioquia, Informe Evaluativo del Expediente Radicado bajo el número 3282, 19 de diciembre de 1996. (Anexo 13)

a la Cuarta Brigada, al Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina y a la Base Militar La Piñuela -las cuales fueron practicadas con el fin de recolectar los respectivos INSITOP de ubicación de la tropa, y el sitio exacto en el que se encontraban los militares al momento de la ocurrencia de las desapariciones denunciadas-; y además de ello, teniendo en cuenta que se reportó el homicidio del Personero del municipio de El Carmen de Viboral, ocurrido el día 27 de noviembre del mismo año, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación –Seccional Antioquia- consideró que el expediente debía ser remitido a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, en la ciudad de Bogotá, con el fin de dar apertura a la investigación disciplinaria correspondiente.[402]

En virtud de lo anterior, la Seccional Antioquia ordenó, mediante auto de fecha 13 de enero de 1997, la devolución del expediente a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales –Unidad de Derechos Humanos- de la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Bogotá.[403]

Mediante auto de 27 de agosto de 1997, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales -Unidad de Derechos Humanos- de la de la Procuraduría General de la Nación resolvió remitir la indagación preliminar radicada con el No. 3282/96 a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.[404]

El 19 de junio de 1998, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó a la Seccional Antioquia aclarar el informe de fecha 19 de diciembre de 1996 respecto a las recomendaciones efectuadas en relación a un presunto nexo causal que podrían comprometer a las tropas del Ejército en los hechos investigados, dentro del radicado No. 3282/96 -el cual ante esta instancia se le asignaría el radicado No. 008-010799/98-.[405]

Respecto a los hechos investigados se registraba un grupo de 15 personas, sobre quienes se desconocía su paradero y -a su vez- no se tenía certeza si habían sido secuestradas, desaparecidas de manera forzada o si dicha situación encuadraba dentro de la figura del desaparecimiento civil voluntario o

[402] Ibídem. (Anexo 13)
[403] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Seccional Antioquia, Auto de 13 de enero de 1997. (Anexo 13)
[404] Procuraduría General de la Nación – Dirección Nacional de Investigaciones Especiales- Unidad de Derechos Humanos, Auto de 27 de agosto de 1997. (Anexo 13)
[405] Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficio de 19 de junio de 1998. (Anexo 13)

involuntario.[406] Para ello, el Despacho remitiría el expediente por el término de 10 días a la Dirección de Investigaciones Especiales –Seccional Antioquia-.[407] Asimismo, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ofició a la Fiscalía General de la Nación con el fin de tener conocimiento sobre el estado de las investigaciones penales adelantadas por los hechos denunciados y la posible vinculación de servidores estatales en dichas actuaciones.[408]

En el mismo sentido, este mismo Despacho ofició al Ministerio del Interior, al Comando de las Fuerzas Militares, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Dirección del DAS, con el fin de tener conocimiento de las acciones tomadas para evitar y erradicar los síntomas de violencia denunciados.[409]

El 11 de septiembre de 2000, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió, de acuerdo a la información remitida por la Fiscalía, Ministerio del Interior, Comando de las Fuerzas Militares, Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección del DAS, inhibirse de abrir investigación disciplinaria contra de funcionario o servidor estatal alguno al considerar que: "(…)en razón de las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron los oscuros y tenebrosos hechos, era difícil concretar conductas activas o pasivas de funcionarios públicos, llámese militar o policial, que originaran responsabilidad por causales de indisciplina, más cuando los acontecimientos dejaban entrever un enfrentamiento entre paramilitares y la guerrilla por el dominio de la jurisdicción del municipio de Carmen de Viboral y sus alrededores (…)"[410]; y en este sentido, ordenó el archivo provisional de las averiguaciones.[411]

Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, en el curso de la investigación penal sobre los hechos en cuestión –denominada Caso Carmen de Viboral e identificada con el radicado No. 233-, vinculó al jefe paramilitar Ramón María Isaza Arango y al Oficial del Ejército Nacional MY. Carlos Alberto Guzmán Lombana, la Procuraduría asignó la investigación disciplinaria, el día 30 de

[406] Entre las personas que, presuntamente, habían sido calificadas como simpatizantes, auxiliadoras y colaboradoras de la guerrilla, y de las cuales no se volvió a conocer su paradero, están: 1. Cardona Quintero Juan Crisóstomo, 2. Cardona Quintero Miguel Ancizar, 3. Castaño Castaño Hernando de Jesús, 4. Castaño Gallego Aníbal de Jesús, 5. Gallego Hernández Juan Carlos, 6. Gallego Hernández Octavio de Jesús, 7. Giraldo Javier (Asesinado), 8. Mejía Gallego Jaime, 9. Morales Cardona Geovany Abad, 10. Morales Hernández Julio Cesar, 11. Muñoz Castaño Orlando de Jesús, [redacted], 13. Zuluaga Marulanda Oscar Hemel, y tres personas no identificadas. (Anexo 13)
[407] Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficio de 19 de junio de 1998. (Anexo 13)
[408] Ibídem. (Anexo 13)
[409] Ibídem. (Anexo 13)
[410] Procuraduría Delegada Disciplinaria para Derechos Humanos, Auto de archivo provisional, 11 de septiembre de 2000. (Anexo 13)
[411] Ibídem. (Anexo 13)

noviembre, al Dr. Edgar Orlando Pinilla con el fin de proferir la decisión correspondiente respecto a la continuación o no de la investigación.[412]

Mediante decisión de 2 de septiembre de 2003, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos decidió mantener el archivo de la investigación No. 008-10799/98.[413] Dicha decisión se sustentó en las normas que regulan la materia,[414] y además de ello, se basó en las actuaciones adelantadas por la Unidad Nacional de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, las cuales estuvieron dirigidas contra el líder del grupo armado ilegal de autodefensas, Ramón Isaza Arango, en su calidad de presunto responsable de los hechos que hacen parte de la investigación, quien, al no considerarse sujeto disciplinable, no debía ser investigado por la Procuraduría General de la Nación.[415]

3. Proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, adelantado por los hechos que conforman el caso en cuestión.

3.1 Proceso acumulado 2002-00528

- **Radicado No. 820020484**

En escrito presentado el 24 de enero de 2002, a través de apoderada judicial, los padres y hermanos del señor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda presentaron demandan en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con ocasión a la desaparición forzada del joven Zuluaga

[412] Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Informe Secretarial de 30 de noviembre de 2000. (Anexo 13)
Sobre la investigación penal identificada con el radicado No. 233, adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría realizó, el 8 de mayo de 2001 y el 27 de noviembre de 2002, dos visitas especiales en la Secretaría Común de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía con el fin de extractar los elementos de juicio necesarios que permitieran resolver o no el desarchivo del registro disciplinario radicado bajo el No. 008-10799-98. (Anexo 13)
[413] Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Auto de archivo de indagación preliminar, 2 de septiembre de 2003. (Anexo 13)
[414] La Procuraduría tuvo en cuenta el artículo 11 de la ley 200 de 1995 – Código Disciplinario Único-, el cual contemplaba que: "COSA JUZGADA. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando a esta se le dé una nominación diferente." Dicha disposición fue recogida por la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único vigente para la fecha de la decisión y aplicable según lo establecido en los artículos 7 y 223 del mismo compendio normativo-, el cual dispone que: "Ejecutoriedad. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta. Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en el Capítulo IV del Título V del Libro IV de este Código." (Anexo 13)
[415] Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, Auto de archivo de indagación preliminar, 2 de septiembre de 2003. (Anexo 14)

Marulanda el día 21 de junio de 1996[416]. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda a través de auto del 16 de agosto de 2002[417].

Una vez surtido el trámite de notificación, la entidad demandada por intermedio de apoderada judicial contestó la demanda el 20 de noviembre de 2002[418] mediante la cual indicó que no había lugar a declarar la responsabilidad del Estado toda vez que los hechos fueron cometidos por grupos armados, ajenos a la institución configurándose de esta manera la eximente de responsabilidad consistente en el "hecho de un tercero".

Vencido el término de fijación en lista, a través de auto del 6 de diciembre de 2002[419], El Tribunal a – quo decretó las pruebas del proceso[420]; en cumplimiento de lo anterior, el Despacho Sustanciador comisionó el 12 de febrero de 2003 al Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral para que se rindieran unos testimonios[421], no obstante que sólo compareció la señora Obeida Gallego Castaño quien una vez cumplió con la referida diligencia aportó al proceso el Registro Civil de Nacimiento de la víctima[422]. A través de proveído del 6 de agosto de 2004[423] se puso en conocimiento a las partes del Despacho Comisorio sin que se manifestara ninguna de éstas al respecto.

Finalmente, encontrándose el proceso en etapa probatoria, mediante decisión del 23 de junio de 2005[424] por medio del cual se remitió el expediente a otro Despacho del Tribunal con el propósito de que estudiara la posibilidad de decretar la acumulación del proceso con otros.

- **Radicado No. 720020483**

A través de escrito radicado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 24 de enero de 2002, la madre y hermana del señor Juan Carlos Gallego

[416] Folios 18 – 25 cuaderno No. 8. (Anexo 14)
[417] Folio 27 cuadernos No. 8. (Anexo 14)
[418] Folios 30 – 35 cuaderno No. 8. (Anexo 14)
[419] Folio 39 cuaderno No. 8. (Anexo 14)
[420] Obran en el proceso los siguientes medios probatorios: Actuaciones adelantadas por la personería de Carmen de Viboral: 1. Declaración de Javier de Jesús Quintero Martínez 2. Declaración de Leonel de Jesús Lopez Martínez 3. Denuncia ante la Fiscalía por la menor Sandra Milena Henao por abuso sexual 4. Declaración ante la Fiscalía de la Madre Margarita 5. Declaración de José Luis Arcila Vargas 6. Declaración de Fabio de Jesús Ramírez 7. Declaración de Héctor Alfonso Hernández 8. Declaración de Denis Omaira Arias; Indagación Preliminar adelantada en Juzgado de Instrucción Penal Militar en la que obran los siguientes testimonios: José Uriel Hoyos Vargas. Javier de Jesús Quintero Martínez, Héctor Alonso Hernández, Fabio de Jesús Ramírez Alzate; Auto del 2 de diciembre de 1997 que abre investigación preliminar por presunta falta disciplinaria y decreta pruebas en el proceso; Proveído del 19 de mayo de 1999 suscrito por el Comandante de la Cuarta Brigada por medio del cual se abstuvo de abrir investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar. (Anexo 14)
[421] Folio 94 cuaderno No. 8 (Anexo 14)
[422] Folios 96 – 98 cuaderno No. 8 (Anexo 14)
[423] Folio 101 cuaderno No. 8 (Anexo 14)
[424] Folio 196 cuaderno No. 8 (Anexo 14)

Hernández presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la desaparición forzada de éste el día 7 de julio de 1996 al salir de la iglesia de la vereda La Esperanza[425].

En decisión del 14 de marzo de 2002 el Despacho sustanciador admitió la demanda y acumuló el proceso con el 020489 el cual se presentó por la desaparición forzada de Orlando de Jesús Muñoz Castaño[426]. En escrito del 20 de noviembre de 2002 la apoderada del Ejército Nacional contestó la demanda y anexó memorial mediante el cual solicitó decretar la acumulación del proceso con el 020-487[427]. Tal solicitud fue desestimada por el Tribunal a través de auto del 20 de enero de 2003 toda vez que no se expusieron los motivos por los cuales consideraba necesario dar curso a tal trámite[428].

En auto del 5 de diciembre de 2002[429] se abrió el proceso a pruebas[430] y, encontrándose en dicha etapa procesal, la parte actora en memorial radicado el 15 de septiembre de 2003 solicitó la acumulación de los radicados 020484, 020527, 020488, 020528 al 020483. Con el propósito de surtir el trámite al anterior requerimiento, se profirió auto del 6 de octubre de 2004[431] a través del cual se solicitó a la parte actora allegar copias de las demandas y escritos de contestación de los procesos que se quiere acumular para efectos de su estudio.

Tal requisito fue cumplido satisfactoriamente por lo que se profirió auto el 9 de septiembre de 2005[432] por medio del cual se remitió el expediente a otro Despacho del Tribunal con el propósito de que estudiara la posibilidad de decretar la acumulación de los expedientes.

- **Radicado No. 6 20020487**

Actuando a través de apoderada judicial, la señora María Florinda Gallego Hernández en representación de sus menores hijos, presentó demanda el día 24 de enero de 2002 con el propósito de que se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con ocasión a la desaparición forzada del señor Octavio de Jesús Gallego Hernández el día 9

[425] Folios 13 – 19 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[426] Folios 21 – 26 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[427] Folios 29 – 35 y 40 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[428] Folios 42 – 43 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[429] Folios 38-39 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[430] **Pruebas Obrantes en el proceso**: Documentos remitidos por el Subdirector de Personal y Servicios Generales de la Administración Municipal de Carmen de Viboral en los que se encuentra la declaración del señor Javier Enrique Fox Quintana ante la personería de tal municipio. Declaración de Hernando de Jesús Castaño. (Anexo 14)
[431] Folio 95 cuaderno No. 7 (Anexo 14)
[432] Folio 158 cuaderno No.7. (Anexo 14)

de julio de 1996[433] por lo que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió proveído admisorio con fecha del 20 de mayo de 2002[434].

Encontrándose en término para ello, la entidad demandada radicó escrito de contestación el 20 de noviembre de 2002[435]; debido a que no se aportó el poder conferido por el jefe de la oficina jurídica a la abogada para que representara los intereses litigiosos de la entidad, el Tribunal corrió traslado de 5 días a la parte interesada para subsanar tal circunstancia a través de auto del 28 de noviembre de 2002[436] la cual fue corregida oportunamente.

En consecuencia, el Tribunal abrió el proceso a pruebas mediante decisión del 22 de mayo de 2003[437] entre las cuales se encuentran: Actuaciones adelantadas por la personería de Carmen de Viboral; oficio del Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar en el que se manifestó que no se tenía registro de actuaciones adelantadas por la presunta desaparición de Octavio de Jesús Gallego; Oficio del Juzgado 22 de Instrucción penal Militar en el que se manifestó que no se adelanta investigación por hechos ocurridos en la vereda La Esperanza entre el 25 de junio y el 18 de julio de 1996.

El Tribunal Administrativo de Antioquia comisionó el 26 de junio de 2003[438] al Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral para que se rindieran los testimonios de los señores Héctor Manuel González Ramírez; María Aurora Gallego Hernández y Jhon Fredy Castaño Gallego[439]. En consecuencia, en auto del 13 de octubre de 2004 se puso en conocimiento a las partes del Despacho Comisorio tramitado y frente al cual se guardó silencio[440].

La entidad demandada radicó solicitud para que se decretara la acumulación del proceso a otros expediente el 5 de noviembre de 2004[441] motivo por el cual mediante auto del 11 de abril de 2005[442] se programó sorteo del trámite de la acumulación, el cual se llevó a cabo el 22 de abril de 2005[443] y en el cual se decidió que éste le correspondía al Magistrado Jairo Jiménez Aristizabal quien decretó la acumulación de los procesos 2002 – 0487, 2002-0483 (acumulado

[433] Folios 15 – 22 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[434] Folio 24 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[435] Folios 26 – 30 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[436] Folio 34 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[437] Folio 37 Cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[438] Folio 61 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[439] Folios 66 – 68 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[440] Folio 70 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[441] Folio 78 cuaderno No 6. (Anexo 14)
[442] Folio 84 cuaderno No 6. (Anexo 14)
[443] Folio 86 cuaderno No. 6. (Anexo 14)

2002 – 0529), 2002 – 0486,2002-0485, 2002 – 0484 en proveído del 6 de marzo de 2006[444].

La apoderada de los demandantes solicitó acumular al proceso de la referencia los radicados 2002-00484,2002-0488,2002-00527, 2002-00528[445] no obstante tal petición fue rechazada en decisión del 27 de noviembre de 2006[446] toda vez que no se cumplían los requisitos legales para ello.

Por último, el auto del 20 de abril de 2007 ordenó el envío del expediente de oficio al Despacho del Magistrado Omar Enrique Cadavid en el que se tramitó el proceso 2002 -00528 para que determine la procedencia o no de una posible acumulación de procesos[447].

- **Radicado No. 5 2002-0488**

En ejercicio de la acción de reparación directa, actuando por intermedio de apoderada judicial, la señora Florinda de Jesús Gallego Hernández en representación de sus menores hijos radicó libelo introductorio de demanda el 24 de enero de 2002 con el propósito de que se declarara administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la desaparición forzada de Hernando de Jesús Castaño Castaño el día 9 de julio de 1996[448]; verificados los requisitos de Ley, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto del 9 de agosto de 2002[449] por medio del cual admitió la demanda.

Una vez surtido los trámites correspondientes a la notificación, la entidad vinculada contestó la demanda mediante escrito del 14 de mayo de 2003[450] mediante el cual indicó que no había lugar a imputársele la desaparición del señor Castaño bajo ningún título toda vez que fue un grupo subversivo el que perpetuó tan reprochable hecho, circunstancia que se probaría a lo largo del proceso[451].

Posterior a ello, en auto de 11 de julio de 2003[452] se decretaron las pruebas en el proceso[453]; en cumplimiento de esto el Tribunal Administrativo de Antioquia

[444] Folios 89 – 92 cuaderno No 6. (Anexo 14)
[445] Folios 93 – 94 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[446] Folios 102-104 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[447] Folio 108 cuaderno No. 6. (Anexo 14)
[448] Folios 14 – 21 cuaderno No. 5. (Anexo 14)
[449] Folio 23 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[450] Folios 27 – 31 cuaderno No. 5. (Anexo 14)
[451] Folios 27 – 31 cuaderno No. 5. (Anexo 14)
[452] Folios 36 – 37 cuaderno No. 5. (Anexo 14)
[453] **Pruebas Obrantes en el proceso:** Proveído del 19 de mayo de 1999 suscrito por el Comandante de la Cuarta Brigada por medio del cual se abstuvo de abrir investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar**:** Actuaciones adelantadas por la personería de Carmen de Viboral: Declaraciónes de José Eliseo Gallego, Florinda de Jesús Gallego Hernández, Florinda Gallego Hernández, María Edilma Giraldo

comisionó el 29 de agosto de 2006[454] al Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral para que se rindieran sus declaraciones los señores Héctor Manuel González Ramírez, Hernando Castaño y Miguel Antonio Gallego Castaño[455]; se puso en conocimiento de las partes tal diligencia en providencia del 12 de marzo de 2007[456].

Una vez concluida la etapa probatoria, el Despacho Sustanciador del proceso profirió auto del 11 de abril de 2007[457] mediante el cual se corrió traslado a las partes para presentar sus alegaciones finales.

Contra tal decisión la parte actora presentó recurso de reposición el 20 de abril siguiente[458] con el fin de que previo a tal trámite se pronunciara sobre una posible acumulación del expediente.

Igualmente, en memorial del 19 de abril de 2007, la Procuraduría Treinta y dos solicitó dejar sin efectos el proveído en los mismos términos de la solicitud presentada por la parte actora. En consecuencia se profirió proveído del 4 de mayo de 2007[459] mediante el cual se dejó sin efectos la decisión que corrió traslado a las partes.

- **Radicado No. 4 2002-0500**

A través de escrito del 24 de enero de 2002, las señora Alba Rosa, Oliva del Socorro, Luz Dary y Marta Edilma Mejía Quintero presentaron demanda de reparación directa con el fin de que se condene a pagar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional todos los perjuicios causados a ellas en calidad de hermanas del señor Jaime Alonso Mejía Quintero con ocasión de la desaparición forzada de la que fue víctima el día 7 de julio de 1996[460]. La anterior demanda fue admitida a través de auto del 20 de mayo de 2002[461] y, contestada por la entidad demandada el 9 de julio de 2003[462].

Castaño y Nicanor Velasquez; Auto del 19 de marzo de 199 por medio del cual el Juzgado 22 de Instrucción Penal Militar se abstiene de abrir investigación por la desaparición de Argemiro Posada y Bertulio Ocampo (13 de abril de 1996); Oficio remitido por el Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar por medio del cual manifestó que no se registran anotaciones por investigaciones adelantadas por la muerte de Hernando de Jesús Castaño.
[454] Folio 38 cuaderno No. 5. (Anexo 14)
[455] Folios 97 – 100 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[456] Folios 108 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[457] Folio 109 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[458] Folios 114 – 115 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[459] Folios 116 – 118 cuaderno No. 5 (Anexo 14)
[460] Folios 45 – 53 cuaderno No. 4. (Anexo 14)
[461] Folio 55 cuaderno No. 4. (Anexo 14)
[462] Folios 58 – 63 cuaderno No. 4. (Anexo 14)

En cumplimiento del trámite correspondiente, el Tribunal profirió auto del 23 de julio de 2003[463] mediante el cual abrió el proceso a pruebas[464] entre las cuales se encuentran las declaraciones de los señores Miguel ángel Castaño Soto, Manuel Tiberio Castaño Soto y Alfonso de Jesús Gallego Castaño ante el Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral[465] con ocasión del Despacho Comisorio ordenado por el Tribunal de origen el día 21 de julio de 2005[466] y el cual fue dado a conocer a las partes el 6 de febrero de 2006[467] con el fin de que se pronunciaran al respecto. Las partes guardaron silencio.

Encontrándose el proceso en etapa probatoria, en decisión del 3 de mayo de 2007[468] se remitió el proceso al Despacho del Magistrado Omar Enrique Cadavid Morales para que estudie posible acumulación.

- **Radicado No. 3 2003-2084**

En escrito presentado el 4 de junio de 2003, a través de apoderada judicial, la esposa e hijos del señor Leonidas Cardona presentaron demandan en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con ocasión a la desaparición forzada perpetuada el 27 de diciembre de 1996[469].

Por defectos de forma, la demanda fue inadmitida a través de proveído del 27 de junio de 2003[470] para lo cual se ordenó subsanar la confusión de los nombres de los demandantes la cual fue corregida oportunamente por la apoderada de los demandantes[471] por lo que a través de auto del 24 de julio de 2003[472] se admitió la demanda.

Surtido el trámite de notificación, se dio contestación a la demanda por la apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional el día 2 de

[463] Folio 68 cuaderno No. 4. (Anexo 14)
[464] Telegrama del Segundo Comandante y JEM de la Cuarta Brigada por medio del cual manifestó que no aparecía registro preliminar de investigación disciplinaria por hechos ocurridos en la vereda La Esperanza en los meses de junio y julio de 1996 la cual se encuentra archivada; Certificación del Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar en la que se manifestó que una vez revisados los libros radicadores del Despacho no se habían encontrado datos respecto de los hechos de la demanda.
[465] Folios 79 – 82 cuaderno No. 4 (Anexo 14)
[466] Folio 77 cuaderno No. 4 (Anexo 14)
[467] Folio 83 cuaderno No. 4 (Anexo 14)
[468] Folio 88 cuaderno No. 4 (Anexo 14)
[469] Folios 15 – 23 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[470] Folio 25 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[471] Folio 26 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[472] Folio 28 – 29 cuaderno No. 3. (Anexo 14)

diciembre de 2003[473]; el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió el proceso a la etapa probatoria mediante proveído del 16 de enero de 2004[474].

El Tribunal Administrativo comisionó el 18 de febrero de 2004[475] al Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral para que se rindieran las declaraciones de los señores José Octavio Gonzalez, Manuel Tibero Castaño y María Hemelina Castaño[476] diligencias que se llevaron a cabo el 15 de abril de 2004. En auto del 22 de junio de 2004 se puso en conocimiento a las partes del Despacho Comisorio.[477]

En proveídos del 26 de enero[478] y 24 de febrero del 2005[479], el Despacho Sustanciador requirió a la parte actora para que pagara las copias de los procesos penales y disciplinarios que quería hacer valer en el proceso a lo que añadió que dado a que no se había decretado la acumulación tal como lo había manifestado la apoderada de los demandantes, el proceso continuaba su curso.

Una vez cumplida la etapa probatoria del proceso, el Tribunal profirió auto del 18 de julio de 2005[480] por medio del cual se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. La entidad demandada presentó sus alegaciones finales en escrito del 30 de agosto de 2005[481].

El 8 de marzo de 2007 se remitió el proceso de oficio a la Sala Tercera del Tribunal para que estudiara la acumulación del proceso[482].

- **Radicado No. 2 2002-00528**

Por intermedio de apoderada judicial, los padres y los hermanos de la joven Irene de Jesús Gallego presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional el día 24 de enero de 2002[483] con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la desaparición de ella el día 26 de junio de 1996 en la vereda La Esperanza.

[473] Folios 32 – 37 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[474] Folios 42 cuaderno No. 4. Obran en el proceso: Actuaciones adelantadas por la personería de Carmen de Viboral; Proveído del 19 de mayo de 1999 suscrito por el Comandante de la Cuarta Brigada por medio del cual se abstuvo de abrir investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar. (Anexo 14)
[475] Folio 59 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[476] Folios 64 – 66 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[477] Folios 67 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[478] Folio 76 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[479] Folio 84 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[480] Folio 85 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[481] Folios 86 – 89 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[482] Folio 91 cuaderno No. 3. (Anexo 14)
[483] Folios 10 – 17 cuaderno No. 2. (Anexo 14)

En auto del 30 de enero siguiente[484], el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y notificó a la entidad demandada la cual presentó su escrito de contestación el 30 de julio de dicha anualidad[485]. Siguiendo el proceso su curso regular, el Despacho de conocimiento profirió auto el 29 de noviembre de 2002[486] por medio del cual decretó las pruebas solicitadas por las partes entre las cuales obran las declaraciones de Javier de Jesús Quintero Martínez, Leonel de Jesús Lopez Martínez, Denuncia ante la Fiscalía por la menor Sandra Milena Henao por abuso sexual, declaración de José Luis Arcila Vargas, Fabio de Jesús Ramírez, Héctor Alfonso Hernández y Denis Omaira Arias[487] al interior del proceso adelantado en la Personería de Carmen de Viboral.

Igualmente se comisionó el 12 de febrero de 2003[488] al Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral para que se tomara las declaraciones de la señora Florinda de Jesús Gallego Hernández y Jhon Fredy Castaño Gallego[489] y, se puso en conocimiento del mismo a las partes a través de proveído del 7 de julio de 2003[490].

La Procuraduría General de la Nación radicó solicitud de acumulación del proceso el 5 de mayo de 2006[491] por lo que mediante auto del 10 de octubre de 2006[492] se envió proceso para estudio de acumulación al Despacho del Magistrado Jairo Jiménez Aristizábal. El proceso se devolvió dado que se negó tal trámite en proveído del 27 de noviembre de 2006.

Por su parte se radicó solicitud de acumulación por la apoderada de la parte actora el 6 de diciembre de 2006[493] a lo cual se accedió en proveído del 16 de mayo de 2007[494].

- **Radicado No. 1 2002-00485**

Por intermedio de apoderada judicial, la esposa, el padre y los hermanos del señor Anibal de Jesús Castaño Gallego presentaron demanda de reparación directa el día 24 de enero de 2002 con el fin de que se declarara administrativamente responsable la Nación – Ministerio DE Defensa – Ejército Nacional por la desaparición forzada de éste en hechos ocurridos el 21 de junio

[484] Folio 19 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[485] Folios 22 – 26 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[486] Folios 33 – 34 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[487] Folios 52 – 83 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[488] Folio 88 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[489] Folios 91 – 94 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[490] Folio 95 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[491] Folios 99 – 100 cuaderno No. 2 (Anexo 14)
[492] Folio 104 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[493] Folios 107 – 109 cuaderno No. 2. (Anexo 14)
[494] Folios 121 – 125 cuaderno No. 2. (Anexo 14)

de 1996[495]. La demanda se inadmitió el 13 de agosto de 2002[496] en consideración a que no cumplía con los requisitos formales pues no eran claros los nombres y apellidos de los demandantes. Igualmente, se requirió a la demandante para que aportara medio probatorio adecuado con el fin de realizar el cómputo de la caducidad de la acción.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición[497] en virtud del cual manifestó que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado la desaparición forzada contaba con un régimen especial para efectos del término de la caducidad dado que se trata de un delito continuado. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió decisión el 26 de agosto de 2003[498] por medio de la cual se repuso el auto de 13 de agosto de 2002 y admitió la demanda presentada.

Una vez la entidad demandada presentó contestación el día 9 de marzo de 2004[499], se remitió el proceso para su posible acumulación el 23 de junio de 2005 [500]sin que se accediera a tal petición motivo por el cual se abrió la etapa probatoria en proveído del 28 de junio de 2007[501].

Como parte del acervo probatorio[502] se tienen los testimonios rendidos por el señor José Octavio González Ramírez y Alirio de Jesús Gallego Muñoz ante el Juzgado Civil Municipal de Carmen de Viboral en ocasión a la comisión ordenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 12 de febrero de 2003[503]. En proveído del 6 de diciembre de 2007[504] se puso en conocimiento a las partes de la referida diligencia sin que se presentara objeción alguna de la misma.

Vencido el período probatorio, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió auto del 25 de septiembre de 2008[505] mediante el cual se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión las cuales fueron presentadas el

[495] Folios 17 – 25 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[496] Folio 23 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[497] Folios 31 – 33 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[498] Folios 35 – 38 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[499] Folios 42 – 48 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[500] Folio 53 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[501] Folios 56 – 58 cuaderno No. 1 (Anexo 14)
[502] Igualmente obran en el proceso Certificación del Juzgado 24 de Instrucción Penal Militar en el que se indicó que no se registran investigaciones adelantadas por denuncias presentadas en la vereda La Esperanza entre el 25 de junio y el 18 de julio de 1996; Certificación del Juzgado 22 de Instrucción Penal Militar en el que se indicó que no se registran investigaciones adelantadas por denuncias presentadas en la vereda La Esperanza entre el 25 de junio y el 18 de julio de 1996; Actuaciones adelantadas por la personería de Carmen de Viboral entre las cuales se encuentran las declaraciones de María Edilma Giraldo Castaño (Inspectora Departamental de Policía de la vereda La Esperanza) (Anexo 14)
Nicanor Velasquez Martínez (Inspector Departamental de Policía de la vereda La Esperanza), Florinda de Jesús Gallego Hernández, Florinda Gallego Hernández, Javier Enrique Foz Quintana
[503] Folio 59 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[504] Folio 111 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[505] Folio 115 – 116 cuaderno No. 1. (Anexo 14)

20 y 23 de octubre por la entidad demandada y la apoderada de la parte actora respectivamente[506].

La apoderada de los demandantes presentó solicitud de prelación a través de escrito del 28 de julio de 2009[507] y la expedición de copias del proceso el día 27 de abril de 2010[508] con el fin de remitirlas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- **Sentencia**

Una vez adelantado el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 15 de junio de 2010 por medio de la cual declaró la responsabilidad de la entidad demandada a título de falla en la prestación del servicio POR OMISIÓN por las desapariciones forzadas de las siguientes personas:

1. Irene de Jesús Gallego Quintero
2. Leonidas Cardona Giraldo
3. Jaime Alonso Mejía Quintero
4. Hernando Castaño
5. Octavio de Jesús Gallego Hernández
6. Juan Carlos Gallego Hernández
7. Oscar Hemel Zuluaga Marulanda
8. Aníbal de Jesús Castaño Gallego
9. Andres Antonio Gallego Castaño
10. Orlando de Jesús Muñoz Castaño

Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal manifestó que para la época en que ocurrieron los hechos era de público conocimiento la presencia de grupo paramilitares en la zona y que a pesar de dicha circunstancia, el Ejército no adelantó ningún tipo de medida para evitar las desapariciones ni mucho menos para determinar el paradero de las víctimas todo lo cual evidenciaba la falta de prestación del servicio de seguridad a favor de la población.

La decisión se notificó por Edicto el cual se fijó en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2010 y se desfijó el 13 siguiente. Inconformes con la sentencia, las partes presentaron memorial en el que manifestaban presentar recurso de apelación sin que contara con la sustentación requerida por la legislación vigente

[506] Folios 117 – 140 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[507] Folios 142 – 143 cuaderno No. 1. (Anexo 14)
[508] Folio 145 cuaderno No. 1. (Anexo 14)

para época de la interposición del recurso. No obstante lo anterior, a través de auto (sin fecha) se concedieron los recursos ante el Consejo de Estado.

En proveído del 4 de febrero de 2011, la Magistrada Ponente devolvió el expediente al Tribunal de origen comoquiera que i) no se sustentaron los recursos de apelación y ii) no se dio trámite a la audiencia de conciliación que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.

En auto (sin fecha) proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se dejó sin efectos la decisión que ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado y, por el contrario se declararon desiertos los recursos presentados comoquiera que no fueron sustentados oportunamente. Por último, se dejó en firme la sentencia del 15 de junio de 2010 según constancia secretarial del 9 de septiembre de 2011.

4.2 Proceso 2002-00527

En escrito presentado el 24 de enero de 2002, a través de apoderada judicial, la madre y los hermanos de los señores Miguel Ancizar y Juan Crisóstomo Cardona Quintero presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con ocasión a la desaparición forzada de las personas señaladas, por hechos ocurridos el 21 de junio de 1996. El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda por haber caducado la acción, a través de auto del 2 de mayo de 2002[509].

El 9 de mayo de 2002, la parte demandante presentó recurso de reposición contra la decisión del Tribunal debido a que por tratarse de hechos de desaparición forzada, la situación que generó el daño permanecía en el tiempo. Mediante Auto del 19 de Febrero de 2003, la demanda fue admitida.

Mediante Auto del 26 de julio de 2005 se dio traslado para que las partes presentaran sus respectivos alegatos de conclusión.

Una vez presentados los alegatos de conclusión, se profirió sentencia de primera instancia.

- **Sentencia primera instancia**

[509] (Anexo 15)

En sentencia de primera instancia del 2 de marzo de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

"(…) *debe concluirse que no se probó que el daño fuera atribuible al Estado, como tampoco se acreditaron irrefutablemente las circunstancias de modo en que sucedieron los hechos narrados en la demanda, carga que le correspondía a los demandantes*".

La sentencia anterior fue apelada mediante recurso presentado el 27 de abril de 2007.

Mediante Auto del 23 de noviembre de 2007, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la petición presentada por parte de la actora en el escrito de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, relacionado con la solicitud de que se practicaran pruebas de oficio, lo cual fundamentó de la siguiente manera:

"(…) *la oficiosidad es precisamente la iniciativa que tiene el juez de decretar una prueba que, a su juicio, es necesaria para el esclarecimiento de la verdad y no nace de la petición de las partes de manera que induzcan al juez a que realice determinada actuación*".

A la fecha el proceso se encuentra pendiente de que se profiera fallo de segunda instancia.

VII. FONDO

A. El Estado no es responsable por la presunta vulneración de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial supuestamente derivadas del procedimiento de Justicia y Paz adelantado para esclarecer los hechos del caso objeto de análisis

Tanto la Comisión Interamericana como los representantes de las víctimas señalan que en el marco del procedimiento de Justicia y Paz que se está adelantando en el caso concreto, se han presentado irregularidades que habrían desconocido los derechos de las víctimas. Específicamente afirman que el proceso en cuestión ha vulnerado su derecho a la verdad, ha presentado un retardo injustificado, y finalmente, establece mecanismos de alternatividad penal que restringen el derecho a la justicia.

Antes de referirse a los alegatos específicos relacionados con cada uno de los aspectos señalados, el Estado se referirá en general a contenido del deber de investigar, resaltando que en el caso concreto se han observado las obligaciones derivadas de este deber.

De acuerdo a la Corte Interamericana la obligación de investigar "implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos"[510].

De igual modo ha señalado que esta obligación "se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención[511]. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios"[512]. En este sentido, ha resaltado que es necesario esclarecer la existencia de las estructuras criminales complejas que hicieron posible las violaciones[513].

A su vez, el tribunal ha afirmado que "la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las normas convencionales de derecho internacional, imperativas para los Estados Parte, sino que además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar

[510] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 140; Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, , párr. 166; Caso González y otras ("Campo Algodonero"), párr. 236, y Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 234.
[511] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párrs. 166 y 167; Caso Fernández Ortega y otros, párr. 191, y Caso Rosendo Cantú y otra, párr. 175.
[512] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, pár. 138; Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párr. 177; Caso Fernández Ortega y otros, párr. 191, y Caso Rosendo Cantú y otra, párr. 175.
[513] Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 194.

procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos"[514].

De acuerdo a lo anterior, el Estado se permite resaltar que el procedimiento en cuestión se ha desarrollado a la luz de la normatividad transicional que ha creado e implementado el Estado con la finalidad de "facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación"[515].

Lo anterior, ha implicado un esfuerzo institucional significativo, evidenciado entre otros, en la creación de unidades especiales de investigación, y en la implementación de herramientas de investigación que permitan esclarecer a profundidad, el fenómeno criminal.

Asimismo, es importante señalar que en el caso concreto, tal y como se señalará en detalle más adelante, se han implementado todas las medidas necesarias y adecuadas con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza. En efecto, la investigación ha estado encaminada no solo a identificar a los responsables de las violaciones que se presentaron, sino también, a develar el contexto en el cual ocurrieron, las estructuras criminales que las ejecutaron, los patrones de criminalidad a los cuales obedecieron y los máximos responsables implicados.

En el mismo sentido resulta necesario aclarar que las víctimas durante todo el proceso de Justicia y Paz, y de acuerdo a la normatividad que regula la materia, han tenido la oportunidad de participar activamente y en esta medida, aportar la información que han considerado relevante, así como exponer sus críticas y cuestionamientos frente al proceso. Efectivamente, los hechos han sido investigados por autoridades competentes, independientes e imparciales, las cuales con la participación de expertos en diversas materias y teniendo en cuenta los pronunciamientos de las víctimas, han desarrollado líneas de investigación con la finalidad de corroborar diversas hipótesis sobre la comisión de los hechos, establecer lo ocurrido en el caso concreto, y contribuir a la sanción de los responsables.

Partiendo de los presupuestos anteriormente mencionados, a continuación el Estado se referirá a cada uno de los alegatos concretos que hacen las víctimas

[514] **Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 139.**
[515] Ley 975, Art. 1.

respecto a la investigación que se ha adelantado en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, demostrando que en el mismo no se han presentado hechos ilícitos que permitan atribuirle la responsabilidad internacional al Estado colombiano, y resaltando que en todo momento se han garantizado los derechos de las víctimas.

Para tal fin se hará referencia a: **1.** la garantía del derecho a la verdad en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, y específicamente; **1.1** el contenido y alcance del derecho a la verdad en relación con la obligación de investigar con debida diligencia, **1.2.** la debida diligencia en la corroboración de la información obtenida en el marco de las versiones libres, **1.3.** la debida diligencia en la verificación de la permanencia de Ramón Isaza como postulado en el marco de la Ley de Justicia y Paz, **1.4.** la potestad en cabeza de la Fiscalía de solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de los postulados; **1.5.** el acceso a la información contextual y de patrones de macrocriminalidad relacionados con el caso concreto, **1.6.** la presentación del caso concreto como un caso connotado ante la Magistratura; **2.** la garantía del plazo razonable en el procedimiento e Justicia y Paz; y **3.** la proporcionalidad de la pena impuesta en el marco del procedimiento de Justicia y Paz.

1. Garantía del derecho a la verdad en el marco del procedimiento de Justicia y Paz

En su escrito, los representantes de las víctimas señalan que "[e]l Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la verdad, en la medida en que ha ocultado información relevante al caso, restringe la participación de las víctimas, y no ha provisto procesos y mecanismos necesarios para esclarecer la verdad de lo ocurrido, en violación de los artículos 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento[516]".

Específicamente, afirman que no se observa en el proceso la existencia de un programa metodológico que direccione las actividades investigativas a la verificación de lo establecido por el postulado Ramón Isaza, sobre los hechos objeto de análisis. Así mismo, señalan que aunque han existido contradicciones en las narraciones de los hechos realizadas por los postulados que se han referido a los hechos respecto a las versiones emitidas por Ramón Isaza, la Fiscalía no ha tomado medidas en relación con la posible exclusión de este postulado de los beneficios de justicia y paz. En el mismo sentido, afirman que los derechos de las victimas estarían siendo afectados puesto que sólo la Fiscalía

[516] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 171.

puede solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz, y la exclusión de los postulados. Finalmente, afirman que ven limitado su acceso al expediente del caso, puesto que la información que es proporcionada por la Fiscalía solo hace referencia a la afectación particular que han sufrido, y no a los patrones de macrocriminalidad y contexto en el marco de los cuales se presentaron las violaciones.

Al respecto, el Estado se permite aclarar que si bien en el caso concreto aún no se cuenta con una decisión definitiva, esto no significa que se haya vulnerado el derecho a la verdad de las víctimas. Lo anterior, teniendo en cuenta en el marco de la investigación que se ha adelantado hasta la fecha ha se han adoptado todas las medidas adecuadas y necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas.

En este sentido, el Estado demostrará que el procedimiento objeto de análisis se ha desarrollado con debida diligencia, y ha estado encaminado a establecer la verdad, y que en esta medida, no existen elementos que permitan atribuir la responsabilidad internacional al Estado colombiano por presuntas violaciones derivadas de la investigación realizada en el marco del procedimiento transicional.

Para tal fin, hará referencia: **1.1** el contenido y alcance del derecho a la verdad en relación con la obligación de investigar con debida diligencia; **1.2.** la debida diligencia en la corroboración de la información obtenida en el marco de las versiones libres*;* **1.3.** la debida diligencia en la verificación de la permanencia de Ramón Isaza como postulado en el marco de la Ley de Justicia y Paz; **1.4.** la potestad en cabeza de la Fiscalía de solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de los postulados; **1.5.** al acceso a la información contextual y de patrones de macrocriminalidad relacionados con el caso concreto; y **1.6** la presentación del caso concreto como un caso connotado ante la Magistratura.

1.1 Contenido y alcance del derecho a la verdad en relación con la obligación de investigar con debida diligencia.

Los representantes de las víctimas afirman que el derecho a la verdad debería ser entendido como un derecho autónomo e independiente ya que "[s]i bien no aparece explícitamente declarado en el texto de la Convención Americana, el derecho a la verdad se desprende del conjunto de las protecciones consagradas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la CADH"[517].

[517] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 171.

Al respecto, el Estado se permite señalar que más allá del debate sobre la independencia del derecho a la verdad, teniendo en cuenta las hipótesis fácticas que se analizan, así como los alegatos concretos que exponen los representantes de las víctimas al respecto –todas relacionadas con la debida diligencia en las investigaciones-, en el caso concreto éste si se encuentra subsumido en el derecho de acceder a la justicia.

En ese sentido, a continuación el Estado hará referencia al contenido del derecho a la verdad y señalará que en ciertas hipótesis –como la del presente caso- la atribución de responsabilidad internacional a un Estado por la presunta violación del derecho en cuestión, solo puede efectuarse analizando la responsabilidad del Estado frente a la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, por lo cual, el Alegato del Estado respecto a la no vulneración del derecho a la verdad en el marco del procedimiento de Justicia y Paz estará formulado en este sentido.

Ahora bien, en lo que se refiere al contenido del derecho a la verdad, la Corte Interamericana ha señalado que éste "se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención[518] […]". Así mismo ha afirmado que "[l]a satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades"[519].
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el derecho a la verdad implica "la posibilidad de conocer lo que sucedió y (…) buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real"[520], de manera que se exige "revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos"[521].

[518]Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr.. 291; Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 78, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 206.
[519] Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221, párr. 192; Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 195; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, párr. 158, y Caso Chitay Nech y otros , párr. 234.
[520] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[521] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

Este derecho resulta particularmente importante en casos de graves violaciones de los derechos humanos[522] y comporta a su vez: i) el derecho inalienable a saber la verdad; ii) el deber de recordar; y iii) el derecho de las víctimas a saber[523]. En este orden de ideas, "[e]l primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima".[524]

Estos elementos también se encuentran señalados en el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad, los cuales han sido reconocidos e implementados por la Corte Constitucional, al señalar que"[l]as medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos"[525].

Adicionalmente a lo anotado, en relación con el derecho a la verdad**,** la Corte ha establecido diversos criterios que permiten la determinación de su alcance y contenido, a saber:

i) El fundamento del derecho a la verdad descansa en el principio de dignidad

[522] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia. Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[523] Corte Constitucional, sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[524] Corte Constitucional, sentencia C-454 de 2006, Jaime Córdoba Triviño.
[525] Corte Constitucional, sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

humana, el deber de memoria histórica y el derecho al buen nombre y a la imagen[526].

ii) Las víctimas por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho inalienable a conocer la verdad sobre los hechos victimizantes[527].

iii) Este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva[528].

iv) La dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad[529].

v) La dimensión colectiva del derecho a la verdad, supone que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una "memoria pública" sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos[530].

vi) El derecho a la verdad es un derecho imprescriptible, por lo que debe garantizarse en todo tiempo[531].

vii) La garantía del derecho a la verdad implica que se debe tener como finalidad en todas las investigaciones que se adelanten, la coincidencia entre la verdad procesal y la real[532].

[526] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[527] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[528] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[529] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[530] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[531] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[532] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.

viii) Además, está relacionado con el derecho a la reparación, pues el conocimiento de la realidad constituye en sí una medida de reparación para las víctimas[533].

Asimismo, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales antes mencionados[534].

Concretamente, respecto al marco jurídico de justicia transicional, ha establecido que éste contiene una gama de elementos que se conjugan armónicamente con el objeto de alcanzar la verdad. Al respecto el Tribunal ha señalado que: "[l]a justicia transicional implica la articulación de una serie de medidas, judiciales o extrajudiciales[535], y puede abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todas las anteriores[536], tal como ha reconocido el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[537]"[538].

Asimismo, ha sostenido que el conocimiento del pasado es fundamental en un proceso de justicia transicional, no solo para garantizar los derechos de las víctimas, sino como garantía de reconciliación real y de restablecimiento de la

[533] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[534] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[535] DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 63.
[536] FORER, Andreas: Justicia Transicional, Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, 19; MINOW, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil, en : Justicia Transicional, en : MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 90 y 91; El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 12; MALAMUD - GOTI, Jaime: Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 161; ELSTER, Jon: Rendición de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos Aires, 2006, 141; AMBOS, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 8; MINOW, Martha: Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil, en: Justicia Transicional, en: MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 105. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 4.
[537] Organización de las Naciones Unidas, ONU. Informe del Secretario General a solicitud del Consejo de Seguridad. "el Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las Sociedades que sufren o han sufrido conflictos". Párr. 4.
[538] Corte Constitucional, sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

confianza en el ordenamiento jurídico[539]. "El valor de la verdad es doble: es útil para identificar colaboradores y agentes del régimen previo para evitar que saboteen los esfuerzos de reconstruir la sociedad[540]. En este sentido, los Principios de Joinet han reconocido la doble naturaleza del derecho a la verdad señalando que tiene un valor individual y también uno colectivo[541]" [542].

Como se deriva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional anteriormente citada, el contenido del derecho a la verdad incluye elementos intrínsecamente ligados con las obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Esto ocurre por ejemplo con la garantía relacionada con el conocimiento de los autores de un crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió y el patrón criminal en el que se enmarcó; y con aquella que propende por buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.

Esta relación ha sido reconocida por la Corte Constitucional al afirmar que "[h]ay una relación estrecha entre el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, pues la verdad solo es posible a través de la proscripción de la impunidad, y la promoción de investigaciones serias, imparciales, integrales y sistemáticas por parte de los órganos estatales que lleven al esclarecimiento fáctico y la sanción pertinente a los responsables"[543].

En este punto es pertinente señalar que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana "la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención[544]. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas,

[539] CROCKER, David: El rol de la sociedad civil en la elaboración de la verdad, en: Justicia Transicional, en: MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI, Rama: Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, 2011, 114.
[540] ELSTER, Jon: Justice, Truth, Peace: en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva York, 2012, 81.
[541] "No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el "deber de la memoria" a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo".
[542] Corte Constitucional, sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[543] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, sentencia C-099 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[544] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párrs. 166 y 167; Caso Fernández Ortega y otros, párr. 191, y Caso Rosendo Cantú y otra, párr. 175.

de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios"[545].

Por su parte, la Ley 975 de 2005, señala que "[e]l proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados"[546]. De acuerdo a lo anterior, reconoce que "[l]a sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad*"[547].*

Igualmente señala que "[d]entro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos"[548].

[545] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr.138; Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177; Caso Fernández Ortega y otros, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 191, y Caso Rosendo Cantú y otra, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 175.

[546] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Art. 4.

[547] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Art. 7.

[548] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Art. 15.

Las disposiciones citadas anteriormente evidencian que una de las prioridades del procedimiento del Justicia y Paz es precisamente establecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos efectuadas por grupos armados al margen de la ley, y garantizar en esta medida, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Efectivamente, toda la regulación del procedimiento en cuestión, así como los mecanismos de investigación que se han integrado al mismo luego de la expedición de la Ley 975 de 2005, han buscado efectivizar la administración de justicia y lograr un conocimiento integral de los delitos cometidos por estos grupos, analizando no solo cuáles fueron los autores inmediatos de los mismos, sino también, las causas que llevaron a su comisión, los factores sociales y políticos que permitieron que se ejecutaran, las macroestructuras implicadas, y los patrones de criminalidad dentro de los cuales tuvieron lugar.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se concluye que:

i) El derecho a la verdad implica, entre otros, el conocimiento por parte de las víctimas y sus familiares de los hechos que generaron las violaciones que sufrieron, a través del establecimiento de la autoría de estas conductas, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, y el patrón criminal en el que se enmarcó la comisión de los hechos criminales; así como el conocimiento por parte de la sociedad sobre las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en su interior, de modo que se cuente con los presupuestos necesarios para elaborar un relato colectivo;

ii) El cumplimiento de estas garantías es posible a través de una investigación diligente de las violaciones a los derechos humanos que busque la coincidencia entre la vedad procesal y la verdad real;

iii) Efectivamente, los estándares internacionales en la materia así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, evidencian la relación intrínseca que existe entre el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia. Esta visión es reconocida igualmente por el marco normativo de justicia transicional implementado por el Estado colombiano y específicamente por la ley de Justicia y Paz;

iv) En esta medida, cuando se está evaluando si un Estado es responsable de la vulneración del derecho a la verdad como consecuencia de acciones u omisiones que han tenido lugar en desarrollo de procedimientos judiciales de investigación, es necesario hacer el análisis de atribución de responsabilidad a

la luz de las obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial;

v) De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que la obligación de investigar de acuerdo a la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos es de medio y no de resultado, resulta preciso evaluar todos los esfuerzos que ha realizado el Estado para llegar a la verdad y en esta medida, la diligencia con la cual ha conducido las investigaciones.

1.2. Debida diligencia en la corroboración de la información obtenida en el marco de las versiones libres

La Comisión Interamericana y los representantes afirman que en el marco del proceso de Justicia y Paz no se han adelantado diligencias a fin de aseverar la información proporcionada por Ramón Isaza y otros versionados, así como para esclarecer lo sucedido con las víctimas[549]. Al respecto, plantean cuestionamientos generales sobre la materia, y algunas críticas específicas sobre hechos concretos respecto a los cuales no se habrían realizado diligencias de investigación y corroboración.

Así pues, con la finalidad de desvirtuar las afirmaciones de los presentantes de las víctimas, el Estado responderá en primer lugar los cuestionamientos de carácter general y posteriormente responderá aquellos relacionados con hipótesis fácticas concretas.

En lo que se refiere a las críticas generales sobre la materia, la Comisión sostuvo que "la confesión de los imputados no puede eximir a las autoridades de un Estado de su obligación de investigar diligentemente los hechos. Tal como la CIDH estableció, en el contexto de Justicia y Paz la confesión no es suficiente para el pleno esclarecimiento de los sucesos por lo que el Estado debe agotar todas las medidas investigativa a su alcance a fin de asegurar la verdad. Estas actividades de investigación deben ser llevadas a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable. Ello se debe a que la investigación exhaustiva y diligente de los hechos es un presupuesto para la verificación efectiva de los requisitos de elegibilidad para acceder a la pena alternativa establecida en la Ley de Justicia y Paz, y para preservarla en el futuro […] En el presente caso la Comisión considera que el Estado no ha cumplido con esa obligación. La CIDH observa que no se desprende del expediente información relacionada a las diligencias realizadas en el marco de Justicia y Paz a fin de aseverar la

[549] CIDH, Informe No. 85/13, Caso 12.251, Admisibilidad y Fondo, Vereda La Esperanza, 4 de noviembre de 2013, párr. 283.

información proporcionada por Ramón Isaza, así como para esclarecer lo sucedido a las víctimas"[550].

En el mismo sentido los representantes de las victimas señalaron que "[e]l proceso no ha sido efectivo para avanzar en la identificación de los responsables y establecer lo ocurrido en las violaciones denunciadas. Casi la totalidad de las actuaciones procesales en este proceso se basan en lo dicho por el postulado, sin que las autoridades hayan impulsado investigaciones serias para constatar lo referido por el postulado con las diversas pruebas obrantes en el expediente, con nuevas pruebas que pudieran diligenciarse o incluso con lo establecido por las víctimas. En ese sentido, las valoraciones y exposiciones que son presentadas por las víctimas y sus representantes obre los cargos formulados no fueron tenidas en cuenta, y sus afirmaciones solo cuentan como fuente de información para el reconocimiento y registro como víctima[551]"

Al respecto, el Estado se permite señalar que las autoridades encargadas de la investigación de los hechos objeto de análisis, en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, han implementado las medidas adecuadas que han estado a su alcance con el fin de establecer el contexto en el cual ocurrieron los hechos, identificar patrones de criminalidad que pudieron dar lugar a los mismos, y establecer la circunstancias concretas en las cuales se presentó cada una de las violaciones alegadas.

Es importante aclarar en este punto, que si bien los entes investigadores han tenido en cuenta la información derivada de las versiones libres rendidas por los postulados que se han referido a los hechos del caso, éstas versiones en ningún caso se han constituido en el único elemento sobre el cual se han fundamentado la línea de investigación. Lo anterior, se evidencia en el material probatorio obrante en el proceso -dentro del cual, entre otros, se pueden identificar las declaraciones y entrevistas rendidas por las víctimas del caso-, y en la motivación de las diferentes decisiones que ha tomado el ente investigador.

Efectivamente, en el expediente reposan, entre otros, los siguientes documentos:

- Informe de 18 de julio de 1996 suscrito por el doctor Heli Gómez Osorio en su calidad de personero de municipio del Carmen de Viboral, dirigido al alcalde de ese municipio en relación a los hechos objeto de análisis[552];

[550] CIDH. Informe No. 85/13, Caso 12.551, Admisibilidad y Fondo, Vereda La Esperanza, Colombia, 4 de noviembre de 2013.
[551] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, 24 de abril de 2015, pág. 166.
[552] Personería Municipal Carmen de Viboral, 18 de julio de 1996, Rad. PM-060. (Anexo 16). Los documentos citados en las notas al pie del presente capítulo se encuentran en el Anexo 16.

- Informe 093 de agosto de 1996 presentado por la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Oficina de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación relacionada con las operaciones que efectuaba en la zona el grupo paramilitar comandado por Ramón Isaza[553];

- Informe 084 de 27 de noviembre de 1996 presentado por la Sección de Investigaciones de la Dirección Regional del Cuerpo Técnico de Investigaciones[554] en el que se hace referencia entre otras, a las entrevistas realizadas a María Florinda Gallego Hernández, Andres Antoni Gallego, Carlos Estrada -sobre los hechos relacionados con Javier Giraldo-; Nelly Soto; José Eliseo Gallego; Héctor González, cuñado de Octavio y Juan Carlos Gallego; y Florinda de Jesús Gallego Hernández; Así mismo fue entrevistada Maria Lucely Ramírez Gómez profesora de la escuela rural de La Esperanza; Maria Elcy, directora de la escuela; Ismenia Gallego, cuñada de Aníbal de Jesús Castaño; Romelia Castaño Muñoz; Aldemar Gallego; y Antonio Milán Gómez;

- Informe evaluativo de 17 de julio de 1996 de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación sobre la situación de orden público en el municipio del Carmen de Viboral[555];

- Informe 164 de la Oficina de Información, Análisis y Apoyo Operativo del Cuerpo Técnico de Investigación de 13 de noviembre de 1996 en el que se hace referencia entre otras a la diligencia de declaración de Javier de Jesús Quintero Martínez, Fabio de Jesús Ramírez Alzate; y Héctor Alonso Hernández Zuluaga[556];

- Comunicación de 4 de septiembre de 1996 presentada por la Corporación Jurídica Libertad a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos que se estaban presentando en la Vereda La Esperanza[557];

- Informe evaluativo de de diciembre de 1996 realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la

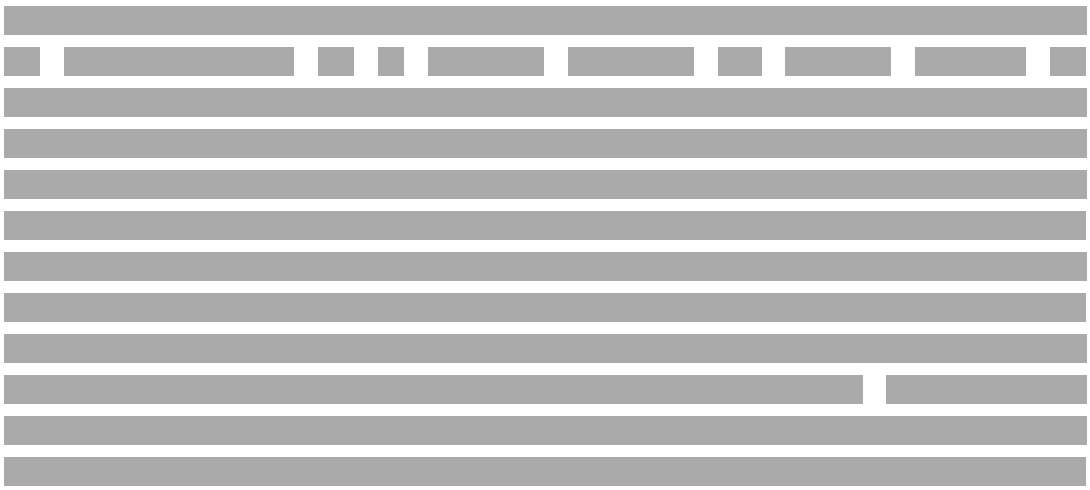
[553] Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional, Cuerpo Técnico de Investigación, Oficina de Información y Análisis, Informe No. 093, Agosto de 1996.
[554] Fiscalía General de la Nación, Dirección Regional, Cuerpo Técnico de Investigación, Sección de Investigaciones, Informe No. 084, 27 de noviembre de 1996.
[555] Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Seccional Antioquia, Informe Evaluativo Visita Realizadas al municipio del Carmen de Viboral, 17 de Julio de 1996.
[556] Fiscalía General de la Nación, , Dirección Seccional, Cuerpo Técnico de Investigación, Oficina de Información, Análisis y Apoyo Operativo, Informe No. 164, 13 de noviembre de 1996.
[557] Corporación Jurídica Libertad, comunicación dirigida a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, 4 de septiembre de 1996.

Nación, Seccional Antioquia sobre la situación de orden público en la vereda del Cármen de Viboral para la época de los hechos caracterizada entre otros por la presencia de diversos grupos armados al margen dela ley. En el informe se hace referencia a las declaraciones de Juan Carlos Gallego Hernández, Florinda de Jesús Gallego Hernández, y Jose Eliseo Gallego[558];

- Diligencia de declaración rendida por el señor Alonso de Jesús Baquero Agudelo, el 11 de diciembre de 1997[559];

- Informe 576 de 2 de diciembre de 1996 elaborado por la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín sobre hechos ocurridos en el mes de noviembre de 1996 en el municipio de Santuario en los que resultaron cinco personas muertas[560];

- Informe de Misión de 24 de abril de 1998 presentado por la Sección de Investigaciones de la División de Investigación del Cuerpo Técnico de Investigación en el cual se hace referencia a las declaraciones que escuchó el Fiscal comisionado de María Rocío Cardona, Florinda Gallego Hernández, Elvia Hernández, Carlos Ramírez, Héctor Manuel Gonzalez Ramírez, Maria Engracia Hernández, y Miguel Alipio Quintero. Así mismo se hace referencia a la declaración juramentada rendida por Jhon Fredy Castaño Gallego[561];

- 

[558] Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Seccional Antioquia, Informe Evaluativo del Expediente Radicado 3282, 19 de diciembre de 1996.
[559] Diligencia de Declaración del señor Alonso de Jesús Baquero Agudelo, ante el Fiscal Regional de la unidad Seccional de Fiscalía de Derechos Humanos, 11 de diciembre de 1997.
[560] Unidad Investigativa de Rionegro, Dirección Seccional, Cuerpo Técnico de Investigación, Medellín, Informe 576, 2 de diciembre de 1996.
[561] Cuerpo Técnico de Investigación, División de Investigación, Sección de Investigaciones, Grupo de Derechos Humanos, Misión de Trabajo No. 00984, 24 de abril de 1998.

[redacted]

- Informe 032 de 28 de 1996 elaborado por la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación sobre el grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas del Magdalena Medio[563];

- Informe de Misión de Trabajo 003285 de 18 de agosto de 2004 elaborado por la Dirección Nacional de Cuerpo Técnico de Investigación relacionado con diligencias tendientes a obtener declaraciones de familiares de las víctimas y habitantes del lugar[564];

- Informe 472145 de 7 de julio de 2009 elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Justicia y Paz relacionado con el análisis de la información emitida por el postulado Ramón Isaza en las que hace referencia al Mayor Hernández y al General Manosalva[565];

- Informe No. 380494 de 21 de enero de 2008, elaborado por la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación relacionado con las diligencias adelantadas para identificar plenamente a Omar Isaza Gómez hijo de Ramón María Isaza, establecer si Omar Isaza prestó servicio militar en el Batallón Bárbula, obtener la información que reposa sobre el mismo en los organismos de Policía Judicial tales como DAS, SIJIN y CTI con sede en Medellín, indagar si durante los meses de mayo y julio de 1996 laboró un General de apellido Manosalva Flórez en el Departamento de Antioquia, establecer si en la Cuarta Brigada del Ejército entre los meses de abril y julio se presentó una emboscada en la que habría fallecido un capitán y varios solados habrían resultado heridos, indagar si entre los meses de abril y julio de 1996 estuvo un Mayor Hernández en la Base Militar de La Piñuela del Municipio de Cocorná, y si un Mayor de apellido Hernández se fugó de Sonsón Argelia en 1998 ingresó al grupo paramilitar de Jorge Cuarenta, y finalmente si hay registros de personas pertenecientes al EPL que se hubieren entregado en la Cuarta Brigada para los meses de abril a julio de 1996[566];

[562] Cuerpo Técnico de Investigación, División de Investigación, Sección de Investigaciones, Grupo de Derechos Humanos, Misión de Trabajo No. 03383, 1 de febrero de 1999.
[563] Cuerpo Técnico de Investigación, Dirección Seccional, Oficina de Información, Análisis y Apoyo Operativo, Informe No. 032, 28 de junio 1996.
[564] Cuerpo Técnico de Investigación, Dirección Nacional, Misión de Trabajo 003285 de 18 de agosto de 2004.
[565] Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Justicia y Paz, Informe No. 472145 de 7 de julio de 2009.
[566] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación, Grupo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Informe No. 380494 de 21 de enero de 2008.

- Oficio DIV7-BRO4-GCMJO S 1 de 16 de enero de 2008 elaborado por las Fuerzas Militares en el cual se hace referencia al Mayor David Hernández a los registros de desmovilizados en el año 1996 y al atentado que se habría presentado entre los años 1996 y 1997 en contra de la Fuerza de Tarea Águila;

- Oficio 79202 CEDE1-OF-789 de 3 de mayo de 1999 en el que se adjunta la hoja de vida del Mayor David Hernández Rojas[567];

- Diligencia de versión libre rendida por Ricardo López Lora alias "el marrano" el 28 de septiembre de 2009[568];

- Sentencia emitida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el 15 de junio de 2012 respecto a Esther Julia Gallego y otros[569];

- Informe sobre misión de trabajo 8784 de 14 de octubre de 2011, elaborado por la Policía Judicial relacionado con el análisis de la información emitida en la versión libre de 16 de octubre de 2008[570];

- Ampliación de indagatoria rendida por Carlos Alberto Guzmán el 5 de diciembre de 2011[571];

- Informe de admisibilidad y Fondo No. 85/13 del Caso 12.251 Vereda La Esperanza de 4 de noviembre de 2013;

- Comunicación de Corporación Jurídica Libertad de 6 de mayo de 2014 en la cual se aporta información relacionada con diligencias practicadas con los postulados Luis Eduardo Zuluaga, Walter Ochoa Guisao[572];

- [redacted]

[567] Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Oficio No. 79202 CEDE1-OF-789 de 3 de mayo de 1999.
[568] Diligencia de versión libre rendida por Ricardo López Lora, alias "el marrano", Fiscalía delegada 17 ante el Tribunal de Justicia y Paz, 28 de septiembre de 2009.
[569] Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Reparación Directa, Esther julia Quintero Gallego y otros, M.P. Omar Enrique Cadavid Morales, 15 de junio de 2010.
[570] Policía judicial, Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, 14 de octubre de 2011.
[571] Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ampliación de indagatoria rendida por Carlos Alberto Guzmán Lombana, 5 de diciembre de 2011.
[572] Corporación Jurídica Libertad, Comunicación dirigida al Fiscal Segundo de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
[573] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Antioquia, Centro Zonal Magdalena Medio, Rad. 10900-135, 7 de mayo de 2014.

- Comunicación de la Corporación Jurídica Libertad de 29 de mayo de 2014 en la cual se hace traslado del informe de Admisibilidad y Fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Vereda La Esperanza al fiscal del caso[574];

- Oficio del Fiscal Sesenta y Dos Especializado, relacionado con postulados que formaron parte del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN que había presencia en la zona de Vereda La Esperanza en la época de los hechos[575];

- Constancia de diligencia de 31 de julio de 2014 relacionada con la identificación de alias "el costeño", suscrita por el técnico investigador IV del CTI[576];

- Diligencia de entrevista realizada a la señora Mónica María Arismendi quien habría sido compañera sentimental de alias "el costeño" ordenada por el Fiscal 47 Delegado de Justicia y Paz el 21 de agosto de 2014[577];

- Diligencia de georreferenciación de la Vereda La Esperanza respecto a lugares hito en el marco de la investigación llevada a cabo el 14 de agosto de 2014[578];

- Diligencia de referenciación de la Base Militar La Piñuela llevada a cabo el 14 de agosto de 2014[579];

- Diligencia de georreferenciación de la Base San Juan en donde de acuerdo a las versiones de los postulados que se han referido a los hechos del caso, podrían encontrarse algunos de los restos de los desaparecidos, llevada a cabo el 15 de agosto de 2014[580];

[574] Corporación Jurídica Libertad, Comunicación dirigida al Fiscal Cuarenta y Siete de la Unidad de Justicia y Paz, 29 de mayo de 2014.
[575] Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Fiscal 62 Especializado, Oficio No. 1249 de 30 de julio de 2014.
[576] Fiscalía General de la Nación, Técnico investigador IV, adscrito al Despacho 47 de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializada de Justicia y Paz, constancia de 31 de julio de 2014.
[577] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.
[578] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.
[579] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.
[580] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.

- Diligencia de identificación de Luis Alberto Briseño Ocampo llevada a cabo los días 14 y 15 de agosto[581];

- Diligencia de entrevista al desmovilizado alias "el gato" relacionada con el grupo paramilitar comandado por Ramón Isaza, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2014[582];

- Oficio del Fiscal 47 Delegado de Justicia y Paz dirigido al coordinador de la Sub Unidad de Exhumaciones de 15 de enero de 2015 informándole los datos sobre la posible ubicación de algunos de los restos de las víctimas del caso, de acuerdo a lo señalado por postulados en versiones libres[583];

- Diligencia de verificación de la información aportada por el postulado Walter Ochoa Guisao relacionada con a la hospitalización de Omar de Jesús Isaza Arango alias "el Teniente"[584];

- Oficio emitido por Técnico Investigador de apoyo a la Fiscalía 47 de Justicia y Paz de 3 de marzo de 2015, dirigido al Director del Hospital Universitario San Vicente de Paul, solicitando constancias sobre la atención médica que habría recibido Omar de Jesús Isaza Gómez de acuerdo a lo señalado por postulados[585];

- Diligencia de investigación sobre la situación de orden público y contexto en la época de los hechos llevada a cabo el 9 de marzo de 2015[586];

- Diligencia de búsqueda, ubicación y entrevista al señor Antonio José Guisao Suarez tío de alias "Fredy" con el fin de acceder a información sobre la identificación y ubicación de la esposa de alias "Fredy" llevada a cabo a partir del 10 de marzo de 2015[587];

[581] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.
[582] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, consecutivo 82262 de 2 de septiembre de 2014.
[583] Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Oficio No. 02362 de 15 de enero de 2015.
[584] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, Informe 5-258004 de 17 de marzo de 2015 presentado ante la Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, C.T.I, Grupo de Apoyo Justicia Transicional.
[585] Fiscalía General de la Nación, Técnico Investigador IV, Apoyo de Fiscalía Transicional, Oficio 094 de 3 de marzo de 2015;
[586] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, informe de 25 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
[587] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, informe de 25 de marzo de 2015 consecutivo 80005,

- Entrevista realizada al desmovilizado Ricardo López Lora con el fin de determinar la existencia de otro grupo armado al margen de la ley en 1996 en la zona de Carmen de Viboral, y verificar su georreferenciación y forma de operación, llevada a cabo el 12 de marzo de 2015[588];

- Entrevista del postulado Jose Luis Mejía Ramírez ex comandante del grupo armado ilegal, Ejército de Liberación Nacional, en la época de los hechos en la región en la que se encuentra el Carmen de Viboral, llevada a cabo el 13 de marzo de 2015[589];

- [redacted]

- Diligencia de Inspección al Hospital María Auxiliadora de Chogorodó, Antioquia realizada el 11 de marzo de 2015 con la finalidad de indagar si en sus instalaciones se atendió un parto de la señora Diana Patricia Cordero Cochero en el primer semestre de 1996[591];

- Registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, diligenciado por Jose Manuel Suarez Cochero realizada el 11 de marzo de 2015[592];

presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
[588] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, informe de 25 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
[589] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, informe de 25 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
[590] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, Oficio de 23 de enero de 2015.
[591] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, acta de inspección a lugares de 11 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Anexo 12.
[592] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, acta de inspección a lugares de 11 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Anexo 14.

- Registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, diligenciado por María Consuelo Guisao Suarez el 11 de marzo de 2015[593];

- Diligencia de investigación con la finalidad de concretar la información que tendría Luis Eduardo Zuluaga y otros postulados sobre la ubicación de las inhumaciones que se habrían realizado en la finca Los Mangos en Sonsón Antioquia[594].

Como se evidencia, contrario a lo manifestado por los representantes de las víctimas, el material probatorio que reposa en el proceso en cuestión permite señalar que en ningún momento la Fiscalía que conoce del caso en cuestión ha encaminado la línea de investigación solamente a partir de lo señalado por los postulados, sin realizar actividades adicionales de corroboración.

Más aún, en las decisiones principales que obran en el proceso, como la imputación parcial de hechos al postulado Ramón Isaza Arango del 21 de enero de 2009 y el escrito de Acusación en contra del mismo postulado de 1 de abril de 2009, el Fiscal que emite el pronunciamiento hace referencia explícitamente a numerosos elementos probatorios más allá de la información obtenida en las versiones, a partir de los cuales fundamenta su conclusión, dentro de los cuales se encuentran las declaraciones de los familiares de los desaparecidos y las denuncias que interpusieron ante las autoridades competentes cuando ocurrieron los hechos.

Ahora bien, en lo que se refiere a los cuestionamientos específicos, los representantes de las victimas señalaron que "[e]l postulado mencionó aspectos relacionados con la elaboración de listas por parte de los integrantes de la inteligencia militar de la Cuarta Brigada que fueron entregadas al grupo paramilitar "para que limpiara la autopista" sobre este aspecto, hay en el proceso ordinario existen una serie de evidencias de ese modus operandi dentro del accionar del paramilitarismo que no han sido analizadas por la Fiscalía de Justicia y Paz"[595].

Dentro de los elementos probatorios que sustentan la existencia de las mencionadas citas, los representantes señalan el Informe de Inteligencia elaborado por la oficina Información análisis y apoyo operativo de la Dirección

[593] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal, Sección de Justicia Transicional, acta de inspección a lugares de 11 de marzo de 2015 consecutivo 80005, presentado a la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, Despacho 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Anexo 16.
[594] Grupo Interno de Trabajo de Exhumaciones de Medellín, Dirección de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, Informe 1137834 de 9 de marzo de 2015.
[595] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, pág. 178.

Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación, número 032 sobre Grupos de autodefensa de 28 de junio de 1996.

Al respecto, el Estado se permite resaltar que la información señalada por Ramón Isaza en relación con la existencia de las mencionadas listas, ha sido tenida en cuenta por los fiscales de Justicia y Paz. Efectivamente, el documento citado por los representantes fue traslado del proceso ordinario al proceso de Justicia y Paz, teniendo en cuenta la importancia de elaborar líneas de investigación que permitieran establecer la veracidad de lo afirmado por el Postulado.

Asimismo, es importante señalar que como consecuencia de las actividades investigativas que se han realizado en el marco de los procedimientos de Justicia y Paz con el fin de corroborar el dicho de los postulados, la Fiscalía ha establecido preliminarmente algunos elementos característicos del actuar de los grupos de autodefensas en la región en la época de los hechos, dentro de los cuales se encuentra la utilización de listas.

Por otra parte los representantes de las víctimas afirman que "[s]obre la participación de agentes del ejército en las desapariciones se tienen evidencias en el proceso penal que no son tenidas en cuenta por la Fiscalía de Justicia y Paz", así mismo sostienen que "salvo la decisión judicial de remitir a la Unidad Nacional de Justicia y Paz la información pertinente para investigar al General Manosalva y al Mayor Hernández por los hechos declarados por Ramón Isaza en Versión Libre, no relaciona esa circunstancia como elemento esclarecedor de los hechos, así como tampoco investiga o explora la actividad conjunta entre militares y paramilitares develada por el Postulado para esclarecer los hechos y profundizar en la verdad para las víctimas y sus familiares"[596]. En el mismo sentido afirman que "[s]eñala además el postulado que la planeación de las desapariciones forzadas había sido convenida o acordada con el general Manosalva y un Mayor Hernández, sin embargo, tampoco se establece dentro del programa metodológico una línea de investigación que tienda a esclarecer el compromiso de esos militares en los hechos, ni de ganaderos y comerciantes del Magdalena Medio que estaban cansados del asedio de la guerrilla, y que podrían haber motivado la génesis de las desapariciones forzadas en la Vereda La Esperanza[597]".

Sobre este punto el Estado considera pertinente aclarar en primer lugar, que los fiscales y jueces que actúan en el marco del procedimiento de justicia y paz tienen una competencia limitada respecto a las personas que pueden procesar. Así pues, el artículo 2º de la ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de

[596] Escrito e Solicitudes Argumentos y Pruebas, pág. 178.0pñ
[597] Escrito e Solicitudes Argumentos y Pruebas, pág. 178.

2012 que establece el ámbito de aplicación de la ley, señala que "[l]a presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o participes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de a pertenencia a esos grupos que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y juzgamiento de esas conductas".

Como se evidencia, la norma en cita determina de manera taxativa quiénes pueden ser investigados, juzgados y sancionados en el marco de la ley de justicia y paz. La disposición citada se complementa con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 3011 de 2013, de acuerdo al cual los desmovilizados que manifiesten expresamente su voluntad de postularse al procedimiento especial de justicia y paz, deben ser incluidos en la lista presentada por el Gobierno Nacional a la Fiscalía General de la Nación, con lo que se da inicio a la etapa judicial.

En este sentido queda claro que la competencia asignada a la Fiscalía y a los Tribunales en el marco de la ley de Justicia y Paz, está reservada a la investigación y juzgamiento de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley que se postularon y manifestaron su voluntad de acogerse al trámite y beneficios establecidos en este marco normativo.

Por lo anterior, no corresponde a los operadores judiciales que actúan dentro del proceso especial, investigar y juzgar a los particulares o servidores públicos que no se encuentren en las situaciones anteriores, pudiendo sí ordenar compulsar copias para que se adelanten los correspondientes procesos en la justicia ordinaria a partir de la información que surja sobre su presunta vinculación con los grupos armados al margen de la ley o con los hechos atribuibles a los miembros de dichas organizaciones, obtenida en desarrollo del proceso especial.

En ese sentido, dentro del proceso que se ha desarrollado por los hechos del caso, la información obtenida en desarrollo de las versiones libres, la proporcionada por las víctimas y la acopiada durante el proceso de investigación que adelanta el despacho, ha sido remitida a quien conforme los lineamientos legales tiene la competencia para investigar a los terceros que aparecen vinculados con los hechos atribuibles a los grupos armados organizados al margen de la ley. Lo anterior a la luz del derecho fundamental del debido proceso que se concreta, bajo esta hipótesis, en la garantía del juez natural.

Ahora bien, habiendo dejado claro que la investigación y procesamiento de particulares y de agentes estatales no está en el marco de competencia de los fiscales y jueces de Justicia y Paz, el Estado se permite señalar que en todo caso

con el objeto de esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación integral que indague por las causas de las violaciones y establezca el contexto en el cual ocurrieron, la Fiscalía ha practicado diversas pruebas relacionadas con la vinculación de miembros de las Fuerzas Militares en los hechos objeto del caso. Así por ejemplo, como se mencionó anteriormente, obra en el expediente en cuestión, el informe de misión de 1 de febrero de 1999 elaborado por la Sección de Investigaciones de la División Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación en el cual se hace referencia entre otros, a investigaciones realizadas con la finalidad de identificar las disposiciones normativas que dieron origen a la Fuerza de Tarea Águila, las razones que motivaron su creación, los objetivos que persiguió, el tiempo en el que tuvo vigencia, su conformación, y la georreferenciación de las tropas para los días 21, 22, 26, y 27 de junio y 7 y 9 de julio de 1996. Así mismo, hace referencia a las actividades investigativas realizadas para establecer la existencia de la organización Tom Roger presuntamente conformada por agentes policiales - y de ser el caso su estructura y forma de operación-, y finalmente, obtener evidencias sobre las heridas en combate que habría sufrido el Capitán González[598].

Igualmente en el expediente se encuentra el informe de 7 de julio de 2009 elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Justicia y Paz relacionado con el análisis de la información emitida por el postulado Ramón Isaza en las que hace referencia al Mayor Hernández y al General Manosalva[599]; y el informe No. 380494 de 21 de enero de 2008, elaborado por la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, relacionado con las diligencias adelantadas entre otros, para indagar si durante los meses de mayo y julio de 1996, laboró un General de apellido Manosalva Flórez en el Departamento de Antioquia; establecer si en la Cuarta Brigada del Ejército entre los meses de abril y julio se presentó una emboscada en la que habría fallecido un capitán y varios solados habrían resultado heridos; indagar si entre los meses de abril y julio de 1996 estuvo un Mayor Hernández en la Base Militar de La Piñuela del Municipio de Cocorná, y si un Mayor de apellido Hernández se fugó de Sonsón Argelia en 1998 ingresó al grupo paramilitar de Jorge Cuarenta; y finalmente si hay registros de personas pertenecientes al EPL que se hubieren entregado en la Cuarta Brigada para los meses de abril a julio de 1996[600].

Igualmente, obra un oficio de 16 de enero de 2008 elaborado por las Fuerzas Militares en el cual se hace referencia, entre otros, al Mayor David Hernández a y al atentado que se habría presentado entre los años 1996 y 1997 en contra de

[598] Cuerpo Técnico de Investigación, División de Investigación, Sección de Investigaciones, Grupo de Derechos Humanos, Misión de Trabajo No. 03383, 1 de febrero de 1999.
[599] Cuerpo Técnico de Investigación de la Unidad de Justicia y Paz, Informe No. 472145 de 7 de julio de 2009.
[600] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación, Grupo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Informe No. 380494 de 21 de enero de 2008.

la Fuerza de Tarea Águila. Asimismo, se encuentra el oficio de 3 de mayo de 1999 en el que se adjunta la hoja de vida del Mayor David Hernández Rojas[601]. También se ubican en el expediente varias diligencias de declaración de Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana dentro de las cuales se encuentra la ampliación de indagatoria rendida el 5 de diciembre de 2011[602].Finalmente se puede encontrar la diligencia de referenciación de la Base Militar La Piñuela llevada a cabo el 14 de agosto de 2014[603].

Es evidente entonces que contrario a lo afirmado por los representantes de las víctimas, desde el comienzo de la investigación en sede de Justicia y Paz, los fiscales han tenido en cuenta como hipótesis y línea de investigación la posible participación de agentes estatales en los hechos, específicamente, de los reconocidos por el postulado como Mayor Hernández y General Manosalva.

Ahora bien, en lo que se refiere al cuestionamiento relacionado con la ausencia de líneas de investigación dirigidas a esclarecer la responsabilidad de ganaderos y comerciantes del Magdalena Medio en los hechos, es importante señalar si bien en el caso concreto no se han encontrado elementos que permitan dirigir la investigación en ese sentido, efectivamente la Fiscalía ha analizado la relación de estos sectores económicos con las actividades realizadas por el grupo de Autodefensas que fue comandado por Ramón Isaza. Efectivamente, gracias a la información presentada por la Fiscalía ante la Magistratura de Justicia y Paz, los Magistrados han establecido mediante sentencia que la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio creada en 1982 sirvió como fachada para el tránsito de dineros, logística, pago de sueldos, armas y municiones de grupos de autodefensas que emergían en la zona[604]. Bajo este supuesto factico contextual, se adelanta la investigación del caso concreto.

Por otra parte, los representantes afirman que no se han tenido en cuenta los cuestionamientos que han expresado en relación con la identidad del Mayor Hernández que de acuerdo con el postulado Ramón Isaza, estaría relacionado con los hechos objeto de análisis[605]. Al respecto el Estado se permite señalar que en el proceso en cuestión, obran varias diligencias que buscan establecer si en la zona de los hechos existieron otros mayores del Ejército de apellido Hernández. Así por ejemplo, en el informe de 21 de enero de 2008 elaborado por el Grupo de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la

[601] Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Oficio No. 79202 CEDE1-OF-789 de 3 de mayo de 1999.
[602] Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ampliación de indagatoria rendida por Carlos Alberto Guzmán Lombana, 5 de diciembre de 2011.
[603] Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas de Justicia Transicional, Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, Informe No. 11-28975 de 21 de agosto de 2014.
[604] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Rad. 11-001-60-00253-2007 82855 - Rad interno 1520 Sentencia - RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO y OTROS, párr. 529.
[605] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 180.

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigaciones, se informa que luego de realizar las actividades investigativas se concluyó que para la fecha de los hechos existían otros dos Mayores de apellido Hernández en la región, además del Mayor David Hernández Rojas, a saber el Mayor Jairo Enrique Alonso quien sería ejecutivo de la Compañía ASPC del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina con sede en Antioquia y el Mayor Javier Hernández Acosta que para ese entonces era jefe de operaciones del Batallón Pedro Nel Ospina[606].

Finalmente, los representantes afirman que no se han realizado actividades investigativas con la finalidad de ubicar los restos de las personas desaparecidas y que no se ha tenido en cuenta la información que han referido los postulados en relación con los ríos que los cuales podrían estar los restos de las personas desaparecidas. Al respecto, el Estado se permite señalar que de acuerdo con las versiones rendidas por los postulados dentro del trámite que se adelanta en el marco del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, no se tiene claridad sobre el destino final de las víctimas, ya que si bien Ramón Isaza ha señalado que los restos podrían haber sido arrojados a ríos de la región, existen versiones de otros postulados como la de Luis Eduardo Zuluaga, en la que se señala que la mayoría de las víctimas fueron inhumadas. En este sentido, se siguen desarrollando actividades investigativas con la finalidad de contar con más elementos que permitan ubicar los lugares en los cuales podrían estar ubicados los restos de las personas desaparecidas.

En este sentido, como se citó anteriormente, se han realizado diligencias con la finalidad de concretar la información emitida por Luis Eduardo Zuluaga y otros postulados sobre la ubicación de las inhumaciones que se habrían realizado en la finca Los Mangos en Sonsón Antioquia, a través de la realización de realizado inspecciones y los estudios en el lugar[607].

De lo anteriormente señalado se concluye que:

i) Contrario a lo afirmado por los representantes de las víctimas, en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, se han realizado numerosas diligencias investigativas para corroborar lo señalado por los postulados en las diligencias de versión libre y confesión;

ii) Lo anterior se evidencia en el material probatorio obrante en el proceso y en la motivación de las diferentes decisiones que ha tomado el ente investigador;

[606] Dirección Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación, Grupo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Informe No. 380494 de 21 de enero de 2008.
[607] Grupo Interno de Trabajo de Exhumaciones de Medellín, Dirección de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, Informe 1137834 de 9 de marzo de 2015.

iii) Específicamente, resulta importante destacar que los Fiscales han tenido en cuenta diversas declaraciones rendidas por las víctimas sobre los hechos del presente caso, para determinar las líneas de investigación a seguir;

iv) De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía ha sido cuidadosa en la realización de diligencias investigativas con la finalidad de esclarecer diversas hipótesis fácticas como la existencia de listas elaboradas por militares y entregadas a grupos paramilitares, la participación de miembros del Ejército en los hechos del caso, la existencia de vínculos entre comerciantes y ganaderos con los grupos paramilitares que operaban en la zona y su participación en los hechos del caso, y la ubicación de los restos de las personas desaparecidas;

v) De todo lo señalado se deriva que en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, se han implementado medidas adecuadas con el fin de establecer el contexto en el cual ocurrieron los hechos, identificar patrones de criminalidad que pudieron dar lugar a los mismos, y establecer la circunstancias concretas en las cuales se presentó cada una de las violaciones alegadas; y que de acuerdo a ello la labor investigativa en ningún caso ha estado limitada a la realización de versiones libres.

1.3 Debida diligencia en la verificación de la permanencia de Ramón Isaza como postulado en el marco de la Ley de Justicia y Paz

Los representantes de las víctimas señalan que el postulado Ramón Isaza Arango debería ser excluido del procedimiento de Justicia y Paz "toda vez que para hacerse merecedor de los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005 debe colaborar con la justicia en procura de que las víctimas puedan ver realizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación"[608], y en este caso el postulado no estaría colaborando efectivamente con el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos.

Al respecto, a continuación el Estado señalará las razones por las cuales considera que en el caso concreto la no exclusión de Ramón Isaza no se constituye en un hecho que vulnere los derechos de las víctimas y que en este sentido, permita atribuir la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Para tal fin, hará referencia a: el proceso de construcción de la verdad en el marco del procedimiento de Justicia y Paz; las obligaciones que surgen para los postulados relacionadas con su contribución con el esclarecimiento de los hechos que confiesan; y a las circunstancias del caso concreto relacionadas con el

[608] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 168.

postulado Ramón Isaza; para concluir que efectivamente a la luz de los estándares internacionales en la materia, en el caso concreto no han existido fundamentos para excluir a Ramón Isaza y que en esta medida no se configuran las alegadas violaciones de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas.

En primer lugar, el Estado considera pertinente señalar que dentro del proceso de Justicia y Paz la verdad es dinámica y se construye en la medida que se avanza, tanto en el desarrollo de las diligencias de versión libre, como en la investigación que adelanta la Fiscalía con participación de las víctimas, y en las audiencias que se realicen ante los tribunales competentes.

Si bien la versión libre es el escenario propicio para confesar los hechos, el proceso de construcción de la verdad no se agota en ella ni puede limitarse a la realización de una sola diligencia para determinar el incumplimiento de los presupuestos de verdad por parte del postulado, pues se deben adelantar otras etapas para afirmar o infirmar el dicho del postulado, de las víctimas o de terceros que puedan tener conocimiento de los hechos.

En esa medida, no resulta suficiente, para acreditar las circunstancias del hecho o para negarlas, la sola manifestación que se realice en las distintas diligencias, máxime, cuando se está frente a investigaciones sobre macrocriminalidad y aparatos organizados de poder en los que no siempre quien ejerce como comandante conoce la totalidad de los hechos ejecutados por sus subalternos, puesto que las estructuras jerarquizadas, existen políticas u órdenes impartidas de manera general que son conocidas por quienes ejercen algún tipo de mando en la organización y transmitidas a los subalternos. Esta hipótesis se presenta muy frecuentemente en los casos de conocimiento en el marco del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz.

Ahora bien, en lo que se refiere al deber de los postulados de contribuir con el esclarecimiento de la verdad, el Estado se permite señalar que de acuerdo a su legislación, la obligación de contribución con la verdad de quien pretende acceder a los beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005, se adquiere desde el momento en que ratifica su voluntad de acogerse al trámite establecido en la misma.

Para asegurar el cumplimiento de este compromiso, se deben desarrollar diferentes etapas, tanto procesales como de verificación, que permitan considerar si quien se postula, puede acceder al beneficio de la pena alternativa,

conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 975 de 2005[609].

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del mecanismo de alternatividad penal establecido en la ley de Justicia y Paz señalando que "[p]or las razones que han sido expresadas, en casos como estos, además de confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para asegurarse que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de penas alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos, colaboren eficazmente en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias víctimas. De esta manera, las personas que tendrán los beneficios que supone vivir en un Estado de derecho, tendrán también las cargas proporcionales que el derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho a la paz y los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad. De otra forma el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido[610]"

En el presente caso, de la información obtenida hasta el momento, se tiene que el postulado Ramón María Isaza, en su condición de máximo comandante de las denominadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, desarrollaba políticas trazadas al interior de la organización, encaminadas a la lucha antisubversiva y de control social, territorial y de recursos, con el fin de extender y consolidar al grupo en las distintas zonas de injerencia.

Estas políticas eran asumidas y materializadas por sus inferiores jerárquicos, a través de la ejecución de conductas que atentaron gravemente contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en muchos casos, sin el control directo del comandante.

Esta situación ha sido objeto de evaluación por parte de la Fiscalía dentro del trámite que se adelanta en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Efectivamente, aunque el postulado ha efectuado algunas manifestaciones que no resultan coincidentes con lo señalado por otros postulados, no existen elementos suficientes que brinden certeza para hacer una afirmación categórica sobre la intención de Ramón María Isaza de ocultar la verdad, o mentir dentro del

[609] De acuerdo a la disposición citada, el beneficio de alternabilidad consiste en la suspensión de la pena determinada en la sentencia, reemplazándola por una alternativa que se concede por la contribución en la consecución de la paz, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y la resocialización del condenado.
[610] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

proceso.

A medida que se avanza la investigación y se construye el contexto fáctico y grupal, se ha evidenciado que algunos de los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza, no fueron ejecutados de manera directa por el postulado. Esto se ha concluido, entre otros, a partir de la información suministrada por quienes ejercían como comandantes en la zona, conformaban el grupo especial de los halcones, o tuvieron conocimiento posterior de los hechos.

En ese sentido, de acuerdo con lo que hasta el momento ha encontrado la Fiscalía General de la Nación, las desapariciones y homicidios ocurridos en la Vereda La Esperanza, no están relacionados únicamente con el postulado como responsable directo. Lo anterior concuerda con el contexto geográfico temporal que hasta la fecha se ha venido estableciendo, que señala la confluencia de distintos actores armados legales e ilegales en la zona, que en un corto periodo de tiempo desarrollaron una serie de acciones que afectaron gravemente a la población.

En este sentido, teniendo en cuenta que no existen elementos suficientes que permitan la exclusión del postulado del procedimiento de Justicia y Paz y que las autoridades investigativas están implementando todas las medidas adecuadas y necesarias para establecer la verdad de lo ocurrido, no existen fundamentos para alegar la presunta violación de los derechos de las víctimas como consecuencia de la permanencia del postulado dentro del procedimiento en cuestión.

De lo expuesto se concluye que:

i) El deber de contribución con la verdad es asumido por los postulados desde el momento el cual manifiestan su voluntad de acogerse al marco jurídico de la ley de Justicia y Paz;

ii) Luego de este momento, se inicia un proceso dinámico de reconstrucción de la verdad a través del desarrollo de las diligencias de versión libre, y de la investigación que se adelanta con la participación de las víctimas;

iii) Como consecuencia de lo anterior, si bien la versión libre es el escenario propicio para confesar los hechos, el proceso de construcción de la verdad no se agota en ella;

iv) En el mismo sentido, la verificación del compromiso con la verdad del postulado no puede derivarse únicamente de las manifestaciones que emita en las audiencias, ya que es necesario realizar diversas diligencias probatorias que

permitan afirmar o infirmar el dicho del versionado. Lo anterior, más aún si se tiene en cuenta que quien ha ejercido como comandante de estructuras armadas ilegales, no siempre conoce en detalle todos los hechos delictivos cometidos por la organización;

v) Efectivamente, la Fiscalía ha realizado una significativa labor de verificación de la información suministrada por el postulado[611], y ha establecido preliminarmente que los hechos del caso concreto no fueron producto exclusivamente del actuar del grupo comandado por Ramón Izasa, sino que podrían estar relacionados otros grupos;

vi) De acuerdo a los presupuestos legales y a los requisitos establecidos en la Ley de Justicia y Paz, no existen en el caso concreto, fundamentos a partir de los cuales la Fiscalía pueda excluir al desmovilizado Ramón Izasa del proceso de Justicia y Paz;

vii) En este sentido, y teniendo en cuenta que la investigación se ha adelantado con debida diligencia y ha estado encaminada a esclarecer la verdad de lo ocurrido, no existen elementos que permitan atribuirle la responsabilidad internacional al Estado colombiano por desconocer los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, al no haber excluido al postulado Ramón Isaza de los beneficios otorgados por la Ley 975.

1.4 Potestad en cabeza de la Fiscalía de solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de los postulados

De acuerdo a lo señalado por los representantes de las víctimas el hecho de que sea la Fiscalía la que ostente la facultad de solicitar la terminación del proceso y la exclusión de los postulados del procedimiento de Justicas y Paz, limitaría la participación de las víctimas en el proceso y afectaría sus derechos[612].

Frente a lo anterior, el Estado demostrará que la citada potestad de la Fiscalía, se encuentra fundamentada en constitucional, legal y jurisprudencialmente, y no representa ninguna vulneración de los derechos de las víctimas.

La facultad para solicitar la terminación del proceso y la exclusión de la lista de postulados de Justicia y Paz, tiene sustento en el artículo 250 de la Constitución Nacional que otorga a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal. Esta disposición señala que "[l]a Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de

[611] Surpra párr.. XXX
[612] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 185.

los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo"[613].

Conforme a lo señalado en el mencionado artículo y a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012, corresponde al fiscal del caso la presentación de la solicitud una vez se establezca la existencia de una de las causales de expresamente señaladas en la ley para solicitar la exclusión del postulado del proceso de Justicia y Paz.

La Corte Suprema de Justicia en el Auto 45.520 del 22 de enero de 2014, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la Nación la determinación de la estrategia y la forma en que habrán de buscarse el cumplimiento de los propósitos del proceso transicional, lo que no está abierto a la todos los intervinientes en el proceso. De acuerdo a la Corte, "no todos los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz son los llamados a diseñar o planear los cauces procesales mediante los cuales se busca concretar los propósitos de la justicia transicional, sino solamente la Fiscalía General de la Nación. Así lo ha señalado la Sala en precedente que hoy reitera: En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del Fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica"[614].

En dicha decisión se precisa, en relación con el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de los compromisos frente al proceso que el Fiscal "[e]s el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado, las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005" [615].

[613] Constitución Política de Colombia, art. 250 inc. 1°
[614] Corte Suprema de Justicia, auto 45.520 del 22 de enero de 2014, M.P. José Luis Barceló Camacho.
[615] Corte Suprema de Justicia, auto 45.520 del 22 de enero de 2014, M.P. José Luis Barceló Camacho.

De allí, que como se establece normativa y jurisprudencialmente, es a la Fiscalía General de la Nación a la que le corresponde diseñar las vías procesales a través de las cuales se han de alcanzar los fines del régimen transicional. Es importante señalar que la decisión citada, de la Corte Suprema de Justicia deviene del análisis de constitucionalidad del Decreto Ley 261 de 2000 realizado por la Corte Constitucional en el cual se analiza a la luz de los principios constitucionales varias de las potestades que ostenta la Fiscalía, en las sentencias C-873 de 2003[616] y C-979 de 2005[617].

Como se evidencia, la facultad que tiene la Fiscalía de solicitar la exclusión de los postulados, no es arbitraria y tiene su fundamento en la constitución y en la legislación interna por medio de la cual se ha buscado garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, y lograr las demás finalidad que persigue el marco jurídico transicional como es esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos que se presentaron en el territorio nacional en el marco del conflicto armado, lograr la reconciliación y buscar la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan expresado su voluntad de contribuir en el proceso transicional y que cumplan todos los requisitos establecidos por la ley.

Además de lo anteriormente señalado, el Estado se permite resaltar que en el marco del procedimiento de Justicia y Paz, las víctimas cuentan con múltiples oportunidades procesales para participar y expresar sus posturas. En efecto, en el caso concreto ha habido una importante participación de las víctimas no solo a través de la presentación de escritos, sino en el marco de las versiones libres que rinden los postulados sobre los hechos objeto de análisis, en las cuales pueden cuestionar el dicho de los versionados ante la Magistratura y la Fiscalía. De acuerdo a lo anterior, no existen fundamentos para señalar que al no poder solicitar directamente la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de postulados, se le estén vulnerando los derechos a las víctimas.

De acuerdo a lo anteriormente señalado se concluye que:

i) El ejercicio de la acción penal en lo que se refiere a la investigación, está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación;

ii) Específicamente en el marco del proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene la obligación de velar porque se cumplan los propósitos perseguidos por el marco jurídico transicional;

[616] Corte Constitucional, sentencia C- 873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.
[617] Corte Constitucional, sentencia C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

iii) Por esta razón es precisamente esta Entidad la que puede solicitar la terminación del proceso de Justicia y Paz y la exclusión de los postulados de los beneficios otorgados por este marco normativo;

iv) Esta circunstancia no representa limitaciones a los derechos de las víctimas teniendo en cuenta que la Fiscalía por mandato legal y constitucional, debe garantizar que se cumplan los objetivos de la ley de Justicia y Paz, dentro de los cuales se encuentra la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y además, considerando las oportunidades procesales con las cuales disponen las víctimas para cuestionar ante las autoridades competentes, el dicho de los postulados.

1.5 Acceso a la información contextual y de patrones de macrocriminalidad relacionados con el caso concreto

Los representantes afirman en su escrito que a las víctimas "se les arrincona al conocimiento expreso de su caso concreto, dentro del universo de casos priorizados, pues la Fiscalía solo proporciona información, no con respecto a la consignada en el proceso de justicia y paz, relativa a los patrones analizados, sino exclusivamente, frente a aquella relacionada con su particular afectación.

Las víctimas no logran interpelar el contexto, las causas y motivaciones de los crímenes, entre los cuales, la Fiscalía circunscribió el suyo, pues se le niega el acceso a la totalidad de la carpeta[618]"

Al respecto, el Estado demostrará que contrario a lo afirmado por las víctimas, en el caso concreto éstas sí han tenido acceso a la información relacionada con el contexto, los patrones y estructuras criminales que de acuerdo a lo que hasta la fecha ha esclarecido la Fiscalía, rodearon los hechos objeto de análisis.

Efectivamente, tanto el contexto como la identificación de los victimarios y los patrones de macro criminalidad, son expuestos por la Fiscalía en desarrollo de la audiencia concentrada, que por definición es el escenario en el cual las víctimas pueden conocer toda la información sobre su caso particular, así como respecto de las circunstancias en que se presentó, las causas o móviles que llevaron a los perpetradores a la realización del hecho y las demás aspectos que rodearon su comisión. Como se ha definido por vía jurisprudencial, en ese mismo escenario las víctimas no sólo pueden debatir acerca de lo expuesto por la

[618] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 184.

Fiscalía, sino contribuir al esclarecimiento de los hechos que les afectaron individual o colectivamente.

De otra parte y contrario a lo que se aduce por la representación de las víctimas, la legislación nacional posibilita expresamente su la participación en los temas cuestionados, al puntualizar que "[l]as víctimas proveerán a la Fiscalía General de la Nación la información de la que dispongan con anterioridad a la audiencia de formulación de cargos, con el fin de que la fiscalía la tenga en cuenta al estructurar dicha formulación y pueda esclarecer el correspondiente patrón de macro-criminalidad[619]"

En el caso que nos ocupa, la Fiscalía presentó ante los Magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, el contexto en el que se desarrolló el accionar de las denominadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, construido a partir de la distintas fuentes de información obtenidas en desarrollo de la investigación, dentro de las cuales se encuentran: i) la Confesión de los Postulados; ii) los Registros de hechos Atribuibles a Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, diligenciado por las víctimas; iii) las denuncias recientes de las víctimas; iv) las entrevistas que se le han realizado a las víctimas; y) la documentación recopilada en los procesos de jurisdicción permanente; vi) fuentes Humanas; vii) fuentes Históricas escritas; viii) la información aportada por las víctimas en presentación de casos; y ix) el análisis de información de documentos públicos y privados respecto de la existencia de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.

Este contexto continúa siendo documentado y ampliado, de acuerdo con la información que dentro de la labor de verificación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se obtenga. Además, muchos de los elementos que conforman el mismo, son de conocimiento púbico puesto que forman parte de la sentencia emitida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en contra del postulado Ramón Isaza el 29 de mayo de 2014.

De acuerdo a lo anteriormente señalado se concluye que:

i) En el caso concreto se ha garantizado a las víctimas el acceso a la información que se ha obtenido sobre el contexto, las estructuras de macrocriminalidad y los máximos responsables en el marco de los cuales se presentaron los hechos objeto de análisis, de acuerdo a los momentos procesales establecidos por la normativa interna;

[619] Decreto 3011 de 2013, "Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012". art. 3°.

ii) Efectivamente, en la audiencia concentrada que se realizó y en la cual las víctimas participaron, la Fiscalía presentó ante la Magistratura el contexto que rodeó los hechos del caso, junto con los elementos anteriormente mencionados;

iii) Asimismo, los hallazgos obtenidos por la Fiscalía al respecto fueron tomados en cuenta por la Magistratura y expuestos en la Sentencia de 2004 que se profirió en contra del postulado Ramón Isaza, por lo cual son de público conocimiento;

iv) De acuerdo a lo señalado, es evidente que no existe ninguna intención por parte de las autoridades estatales, de ocultar información sobre las investigaciones que a la fecha se han adelantado;

v) Al contrario, como se señaló, los hallazgos que hasta la fecha se han obtenido, han sido socializados en la etapa procesal oportuna.

1.6 Presentación del caso concreto como un caso connotado ante la Magistratura

Los representantes de las víctimas afirman en sus alegatos, que el caso de Vereda La Esperanza, fue priorizado tanto en el marco de la justicia ordinaria, como de Justicia y Paz, a pesar de lo cual no conocerían "cuáles fueron los criterios y parámetros usados por el ente instructor para realizar la priorización"[620].

Frente a lo señalado, el Estado aclarará los fundamentos legales que sustentan la aplicación del mecanismo de priorización, señalará cuál de ellos podría relacionarse con el caso concreto, y finalmente, afirmará que el caso objeto de análisis fue presentado por la Fiscalía ante la Magistratura como un caso connotado con base en las razones expuestas en audiencia pública, por lo cual, las víctimas tienen conocimiento de los factores que fueron tenidos en cuenta para presentar el caso bajo esa figura.

El Acto Legislativo 01 de 2012 establece que "[t]anto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal", de acuerdo con la facultad otorgada por el Acto Legislativo, así como la que deviene del artículo 250 de la Constitución Nacional que determina que el ejercicio de la acción penal radica en la Fiscalía General de la Nación. A la luz de estas disposiciones, se profirió la Directiva 001 de 2012

[620] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 184.

por el señor Fiscal General de la Nación que creó un sistema de investigación penal y determinó los criterios de priorización de situaciones y casos al interior de la entidad.

De otra parte, el artículo 1° de la Ley 1592 de 2012, expresamente señala que deberán aplicarse criterios de priorización en la investigación y juzgamiento en el marco de dicha normatividad. En este sentido la norma establece que "la presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas"[621].

Así mismo, el artículo 13 de la ley, señala que "[c]on el fin de garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento"[622].

De acuerdo a lo anterior, la facultad de la Fiscalía de determinar los casos a priorizar tiene soporte constitucional y legal. Así mismo resulta pertinente señalar que al interior de la Fiscalía se ha elaborado un "Plan Integral de Investigación Priorizada", el cual permite que la determinación de los casos y situaciones a priorizar, se fundamente en una evaluación previa y en la consecuente decisión del Comité de Priorización al respecto.

Ahora bien, al interior de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, dentro del "Plan Integral de Investigación Priorizada" de los años 2013 y 2014, se priorizaron 16 máximos responsables, dentro de los cuales se encuentra Ramón María Isaza Arango, en aplicación del criterio subjetivo de priorización, referido a la calidad de máximo responsable en la comisión de crímenes de sistema[623].

[621] Ley 1592 de 2012, "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo 1°
[622] Ley 1592 de 2012, "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo. 13
[623] Supra pág. 220

Adicionalmente, a la luz del criterio objetivo[624], se priorizaron los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito, la violencia basada en género, así como algunos los hechos que, por la gravedad y representación social, tienen la denominación de connotados.

En desarrollo de dichos criterios, en el caso del postulado Ramón Isaza y cuatro comandantes de dicha estructura[625], se profirió sentencia condenatoria por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá[626].

En el caso específico de Vereda La Esperanza, debe señalarse que el 1° de abril de 2009 se realizó la imputación al postulado Ramón Isaza, el 29 de noviembre de 2011 se realizó la formulación de cargos y finalmente, en audiencia del 20 de agosto de 2015, se presentó para efectos de legalización de ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, precisando los elementos que reúne la investigación y que llevaron a considerar, el caso en cuestión, como connotado, pese a no encontrarse de manera expresa señalado en el Plan de Priorización.

De acuerdo a lo anteriormente señalado se puede concluir que:

i) De acuerdo a las prerrogativas establecidas en la constitución y en la ley, la Fiscalía General de la Nación debe establecer los criterios de priorización de la investigación penal;

ii) En desarrollo del "Plan Integral de Investigación Priorizada" de los años 2013 y 2014 fue priorizada la investigación del postulado Ramón Isaza Arango en aplicación del criterio subjetivo que valora la calidad de máximo responsable del procesado;

iii) Asimismo, a la luz del criterio objetivo que tienen en cuenta la gravedad de las conductas delictivas, fueron priorizados varios delitos dentro de los cuales se encuentra el de desaparición forzada;

iv) En consideración de los criterios señalados se profirió sentencia condenatoria por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en contra del postulado Ramón Isaza y cuatro comandantes de dicha estructura[627];

[624] Supra. pág 221.
[625] Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga, Jhon Fredy Gallo Bedoya y Oliverio Isaza Gómez
[626] Sentencia del 29 de mayo de 2014, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá
[627] Walter Ochoa Guisao, Luis Eduardo Zuluaga, Jhon Fredy Gallo Bedoya y Oliverio Isaza Gómez

v) En lo que se refiere al caso concreto de Vereda La Esperanza, el mismo fue presentado por la Fiscalía General de la Nación como un caso connotado ante la Magistratura, en la audiencia de legalización de cargos que inició el 20 de agosto del presente año, señalando las razones que llevaron al ente investigado a valorar el caso como tal;

vi) Por lo anteriormente mencionado, las víctimas y sus representantes conocieron las razones por las cuales el caso fue presentado como connotado.

2. Plazo razonable en desarrollo de la investigación de Justicia y Paz

La Comisión interamericana y los Representantes de las víctimas señalan que "[a] pesar de que Ramón Isaza se acogió a Ley de Justicia y Paz el 7 de febrero de 2006, hasta la fecha no se ha realizado la diligencia de legalización de cargos al postulado[628]",asimismo, "desde la desmovilización de Ramón Isaza transcurrieron i) más de 14 meses hasta su primera declaración ante una autoridad judicial; ii) un año y ocho meses hasta la audiencia pública de versión libre; y iii) casi dos años hasta la audiencia de formulación de imputación"[629]. En ese sentido señalan que ha existido una demora excesiva e injustificada en los procedimientos[630].

Al respecto, a continuación el Estado demostrará con base en los parámetros establecidos por la Corte Interamericana, que el transcurso de los lapsos de tiempo señalados por la CIDH y por los representantes se encuentra justificado y en esta medida no constituye un hecho ilícito internacional frente al cual se le pueda atribuir la responsabilidad al Estado colombiano. Así mismo aclarará que diligencia de legalización de cargos señalada por los representantes, se está adelantando desde el mes de agosto.

La Corte Interamericana ha afirmado que "el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables[631]. La falta de razonabilidad en el

[628] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág, 167.
[629] CIDH, Informe No. 85/13, Caso 12.251, Admisibilidad y Fondo, Vereda La Esperanza, 4 de noviembre de 2013, párr. 281; Véase también Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 167.
[630] CIDH, Informe No. 85/13, Caso 12.251, Admisibilidad y Fondo, Vereda La Esperanza, 4 de noviembre de 2013, párr. 281.
[631] Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; Caso Kawas Fernández, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 112, y Caso Ticona Estrada y otros, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 79

plazo para el desarrollo de la investigación constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales"[632].

De acuerdo a lo anterior, la Corte ha ubicado dentro de los elementos para determinar la razonabilidad del plazo, la complejidad del asunto, y conducta de las autoridades judiciales[633]. Partiendo de estos supuestos el Estado demostrará que teniendo en cuenta la magnitud de hechos que se la atribuyen a Ramón Isaza – la cual representa un alto grado de complejidad-, y la constante actividad investigativa que se ha llevado a cabo hasta la fecha, en el caso concreto no se ha presentado un retardo injustificado y por tanto, el Estado no ha vulnerado los derechos de las víctimas a las garantías judiciales y la protección judicial.

En primer lugar, el Estado considera pertinente aclarar que el modelo de Justicia Transicional implementado en Colombia bajo el cual se ha desarrollado la investigación del caso en cuestión, buscó preservar la independencia de la rama judicial en el trámite de los procesos y limitó la actividad del ejecutivo a la postulación de los candidatos a los beneficios penales que se conceden por la contribución del postulado a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización[634].

Lo anterior supuso el establecimiento de un esquema mixto administrativo y judicial. El primero de ellos, tendiente a propiciar el proceso de desmovilización y sometimiento a la ley por parte de los exintegrantes de los grupos armados organizados irregulares que decidan contribuir con la paz y la reconciliación nacional, el cual culmina con la postulación del reinsertado por parte del Gobierno Nacional; en tanto que el segundo, está sujeto a la ratificación ante el órgano judicial de la voluntad del aspirante a beneficios legales, por tratarse de un proceso eminentemente rogado que conlleva asimismo, obligaciones puntuales.

De acuerdo a lo anterior, aun cuando el señor Ramón María Isaza Arango se desmovilizó como integrante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena

[632] **Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr.133;** Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145; Caso Valle Jaramillo y otros, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 154, y Caso Heliodoro Portugal, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 148.

[633] Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77; Caso Kawas Fernández, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 112, y Caso Valle Jaramillo y otros, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155.

[634] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo 3º

Medio en febrero de 2006, su postulación a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz sólo se produjo hasta el 15 de agosto del mismo año, iniciándose a partir de la recepción de la postulación, la fase judicial del proceso especial. Efectivamente, a Ramón Isaza le fue reconocida su condición de miembro-representante como excomandante general de las desmovilizadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio para los diálogos con el Gobierno Nacional, mediante Resolución 172 del 8 de Julio de 2005, y fue postulado por el Gobierno Nacional a la aplicación de los trámites y beneficios de la Ley 975 de 2005, mediante Oficio del 15 de Agosto de 2006 suscrito por el señor Ministro del Interior y de Justicia dirigido al señor Fiscal General de la Nación.

En este mismo sentido, resulta pertinente aclarar que la remisión de la postulación no implica la inmediata recepción de versión libre puesto que, por mandato legal, previo a su realización, el Fiscal designado debe adelantar "las actividades tendientes a la averiguación de la verdad material, la determinación de los autores intelectuales, materiales y partícipes, el esclarecimiento de las conductas punibles cometidas, la identificación de bienes, fuentes de financiación y armamento de los respectivos grupos armados organizados al margen de la ley, así como los cruces de información y demás diligencias tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 durante el plazo razonable que se requiera para el efecto, que no podrá exceder del término de seis (6) meses previsto en el artículo 325 de la Ley 600 de 2.000"[635].

Esta labor de verificación reviste una especial complejidad teniendo en cuenta entre otros, que como consecuencia de la condición de Comandante General de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio del señor Ramón Iasaza, ha correspondido a la Fiscalía investigar no solo los hechos que le son directamente atribuibles, "las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales[636]"; sino también, las circunstancias que rodearon la comisión de los delitos atribuibles a los miles de hombres bajo su mando, durante su larga trayectoria criminal.

[635] Artículo 4º Decreto 4760 de 2005
[636] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo 15

Así pues, es de resaltar que a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, se le atribuyen más de siete mil hechos delictivos con un número superior a 12.000 víctimas. En este sentido, el término de siete meses que transcurrió entre la iniciación de la fase judicial y la primera versión libre del mencionado postulado en abril de 2007, a la luz de los instrumentos legales[637] y de los estándares internacionales, resulta más que razonable y apenas suficiente para la realización de actividades de verificación previas a la versión.

Ahora bien, en lo que se refiere al alegado plazo de casi dos años que transcurrió hasta la audiencia de formulación de imputación, el Estado se permite manifestar que durante el periodo en cuestión, se desarrolló una abundante actividad procesal, precisamente con la finalidad de contar con los elementos necesarios para realizar la imputación de las numerosas conductas delictivas en las cuales estaba involucrado Ramón Isaza. Lo anterior se evidencia entre otros, en la celebración de numerosas audiencias de versión libre y de confesión, y en la participación del postulado en diligencias de prospección, búsqueda y exhumación de restos óseos.

Al respecto, resulta pertinente señalar que desde el día de su primera diligencia de versión libre – a saber el 30 abril de 2007-, Ramón Isaza ha participado en ciento setenta y cuatro (174) diligencias de versión libre y confesión, de las cuales cuarenta y dos (42) han sido individuales y ciento treinta y dos (134) colectivas. En dichas versiones se han tratado dos mil cuatrocientos diecinueve (2.419) hechos delictivos con más de cinco mil quinientas sesenta y siete (5.567) víctimas entre directas e indirectas. A la fecha, el postulado ha aceptado su autoría directa en cuarenta y seis (47) hechos delictivos, que corresponden a ciento dieciocho (119) víctimas.

Asimismo, ha confesado y aceptado su participación y su responsabilidad penal, tanto a título de coautor material como de autor mediato –a la luz de la teoría de la autoría mediata por dominio de la voluntad en estructuras organizadas de poder-, en hechos delictivos cometidos con ocasión y en desarrollo de su militancia y comandancia en el grupo, constitutivos entre otros, de los delitos de concierto para delinquir agravado -y sus delitos conexos-, homicidio en persona protegida -consumado o en grado de tentativa-, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, tortura en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, amenazas, destrucción y apropiación de bienes protegidos, hurto agravado y calificado, exacciones ilegales y hurto de hidrocarburos, entre otros.

[637] Parágrafo, Artículo 1º Decreto 2898 de 2006; Artículo 1º Decreto 4417 de 2006

También se ha referido a aspectos inherentes a la historia de la violencia armada en el Magdalena Medio, y a la conformación, consolidación y expansión de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, sus fuentes de financiación, redes de apoyo, georeferenciación y cronología del accionar delictivo, estructuras, dinámicas de funcionamiento local y regional, apoyo del grupo a candidatos o funcionarios de elección popular, y colaboración o connivencia de la Fuerza Pública, entre otros.

De igual modo, el postulado ha participado directamente en cuatro (4) diligencias de prospección o búsqueda y en cuatro (4) de exhumación de restos óseos, que condujeron a la Fiscalía General de la Nación a la plena identificación de tres (3) personas víctimas del accionar violento del grupo que comandó.

A la fecha, le han sido Imputados mil doscientos cuarenta y seis (1.246) hechos, por los cuales se le impusieron medidas de aseguramiento por parte de la Magistratura con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz, en audiencias públicas llevadas a cabo los días 2 de abril de 2009; 1 de noviembre de 2010, 23 de marzo de 2011, 20 de marzo de 2012, 3 de agosto de 2012, 14 de febrero de 2013, 23 de abril de 2013, 17 de mayo de 2013, 9 de septiembre de 2013 y 15 de mayo de 2014. Antes de la modificación legislativa introducida por la Ley 1592 de 2012, le habían sido formulados cargos por un total de 724 hechos y habían sido llevados a audiencia de control formal y material de la formulación de cargos (legalización), un total de 96 hechos. Como consecuencia, han sido llevados a audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, un total de 322 hechos delictivos.

Asimismo, el postulado en cuestión ha aceptado ante Justicia y Paz su participación o su responsabilidad por línea de mando en múltiples hechos de connotación nacional que a su vez fueron o están siendo investigados por la justicia ordinaria o permanente, como por ejemplo la Masacre de la Esperanza (Carmen de Viboral, 1996), Masacre de Cazadores (Corregimiento de Méndez, Armero, Tolima, de enero 2003), Masacre de Frías (Falan, Tolima, de septiembre de 2001), Masacre de La Parroquia (Vereda La parroquia, en Fresno, Tolima de Julio de 2001); Masacre de Mangostinos (Mariquita, Tolima, de enero de 2001); Masacre de Guaduas (Guaduas, Cundinamarca de marzo de 2001); Masacre de Labriegos (Fresno, Tolima, de octubre de 2000), Masacre Rio Guarinó (Fresno Tolima, de noviembre de 2000), Masacre de Bucamba (La Dorada Caldas, de febrero de 2003); homicidio de los hermanos Carlos y Alirio Buitrago (Puerto Nare, Antioquia, de diciembre 1994), homicidio integrantes del DAS (Puerto Triunfo, de diciembre 1994), entre otros. Recientemente, ante el Fiscal 32 Delegado de Justicia Transicional con sede en Bucaramanga, también aceptó responsabilidad por línea de mando en la llamada Masacre de la Rochela,

ocurrida en enero 9 de 1989, en el corregimiento de La Rochela, del municipio de Simacota, Santander.

En este punto resulta importante resaltar, que recién se inició la fase judicial del proceso especial de Justicia y Paz no se posibilitaron las formulaciones parciales de imputación y/o cargos, ante lo cual, fenómenos tan complejos como el de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el actuar de su comandante Ramón Isaza, debían esperar la verificación del universo de delitos cometidos por el postulado o conocidos por éste, antes de ser llevados a audiencia ante los tribunales. Sólo a partir de las impugnaciones presentadas por los Fiscales de la entonces denominada Unidad de Fiscalías par la Justicia y la Paz ante la Corte Suprema, y ante la magnitud del fenómeno criminal investigado, esa corporación de justicia abrió la posibilidad de formulación parcial de imputación, condicionada en todo caso a criterios de racionalidad,[638] línea jurisprudencial que se amplió posteriormente a formulaciones parciales de cargos y sentencias, igualmente parciales.

Por esta razón, no resulta injustificado el lapso de "casi dos años", transcurridos desde el inicio de las versiones, hasta la audiencia de formulación de imputación a Ramón Isaza.

Ahora bien, en relación con el alegato de los representantes en el cual se cuestiona que hasta la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia de legalización de cargos en contra de Ramón Isaza, el Estado se permite informar que desde el 20 de agosto del presente año se ha venido desarrollando la audiencia en cuestión.

De todo lo anterior se concluye que:

i) Las versiones libres que hasta la fecha ha rendido el postulado Ramón Izasa exponen una gran cantidad de conductas delictivas que no solo involucran su actuar directo, sino que también hacen referencia a los miles de crímenes cometidos por los miembros del grupo armado al margen de la ley, que comandaba;

ii) Lo anterior, ha exigido que, con la finalidad de esclarecer el fenómeno de macrocriminalidad al cual se ha referido el postulado, la Fiscalía lleve a cabo numerosas diligencias de versión libre y confesión, individuales y colectivas, prospección y exhumación;

[638] CSJ. Auto de Julio 23 de 2008, Rad. 30120, M.P. Alfredo Gómez Quintero; Rad. 31.539, Julio 31 de 2009

iii) Así mismo a la luz de las obligaciones legales y constitucionales, la Fiscalía ha emprendido numerosas actividades investigativas con la finalidad e esclarecer lo referido por Ramón Isaza en sus versiones;

iv) Esta compleja actividad investigativa ha permitido que la fecha, le hayan sido imputados numerosos delitos y que incluso haya sido condenado mediante sentencia por algunos de ellos; así mismo, ha sido valiosa para establecer los contextos de macrocriminalidad y patrones delictivos que dieron lugar e estas conductas, y para identificar a los máximos responsables de los crímenes;

v) De acuerdo a lo anterior, el periodo de tiempo que ha tomado la investigación del postulado Ramón Isaza en ningún caso se constituye en un retardo injustificado que permita atribuirle la responsabilidad internacional al Estado colombiano.

3. Proporcionalidad de la pena impuesta en el marco del procedimiento de Justicia y Paz

Los representantes de las víctimas hacen referencia en su escrito al principio de proporcionalidad de la pena, cuestionando la duración de la misma en el marco del procedimiento de Justicia y Paz.

Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que "[…] no puede, ni lo pretende, sustituir a la autoridad nacional en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos en el derecho interno"[639], sin embargo, también ha señalado que "[…] la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados"[640].

Al respecto, el Estado se permite señalar que la duración de las penas que se imponen a quienes se desmovilizan y cumplen con las condiciones para recibir los beneficios que otorga la Ley 975, debe ser analizada de acuerdo al contexto en el cual es aplicada esta legislación, a saber, un contexto de transición de conflicto armado a la paz. En esta medida, al evaluar la proporcionalidad de las penas en cuestión, resulta necesario hacer un análisis de las finalidades que persigue el marco jurídico de justicia transicional, a saber, "facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de

[639] CorteIDH, caso Vargas Areco vs Paraguay, sentencia de 26 de septiembre de 2006, para. 108.
[640] Corte IDH, caso Heliodoro Portugal vs Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008, Fondo, Reparaciones y Costas, para. 203.

grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación"[641].

En este sentido se pronunció el Juez Diego García-Sayán en el voto concurrente de la sentencia de Caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños, adherido por otros cuatro jueces de la Corte Interamericana, al afirmar que "[e]l reconocimiento de responsabilidades por parte de los máximos líderes puede contribuir a promover un proceso de esclarecimiento tanto de los hechos como de las estructuras que hicieron posible esas violaciones. La reducción de penas, la concesión de penas alternativas, la reparación directa del perpetrador a la víctima, el reconocimiento público de responsabilidad, son otras vías que se pueden considerar"[642], más cuando se está en escenarios en los que se busca "que los actores armados opten por la paz y se sometan a la justicia"[643].

Bajo esta perspectiva la Corte Constitucional colombiana analizó la Constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, específicamente en lo que se refiere al mecanismo de alternatividad penal establecido en esta ley.

Luego de realizar el estudio pertinente, el Tribunal resaltó algunos de los elementos que caracterizan este mecanismo y que aseguran que su aplicación promueva el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones ocurridas, garantice los derechos de las víctimas, facilite el logro de la paz, e inhiba la repetición de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo al Tribunal, el mecanismo de alternatividad penal establecido en la Ley de Justicia y Paz: i) es un beneficio punitivo de suspensión condicional de la ejecución de una pena determinada consistente en una pena privativa de la libertad de 5 a 8 años sin posibilidades de rebajarse[644]; ii) tiene naturaleza judicial y sustituye la pena ordinaria, es decir, el juez de instancia impone la penas principales y accesorias que corresponderían a los delitos en el marco ordinario y luego las sustituye por la alternativa, que es la que tendría que cumplir el condenado[645]; iii) el beneficio es condicionado, pues deben concurrir ciertos presupuestos específicos relacionados con el cumplimiento de las

[641] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Artículo. 1.
[642] Corte IDH, caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, sentencia de 25 octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, Voto concurrente del juez Diego García-Sayán, para. 31.
[643] Corte IDH, caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, sentencia de 25 octubre de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas, Voto concurrente del juez Diego García-Sayán, para. 31.
[644] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[645] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

obligaciones de los postulados[646]; iv) una vez cumplida la pena alternativa se concede a la persona la libertad a prueba, por un término igual a la mitad del tiempo de reclusión, de manera que se verifique durante ese periodo el cumplimiento de sus compromisos, específicamente en cuanto a la no reincidencia, la presentación ante autoridades judiciales, y la actualización de la información relacionada con el lugar de residencia[647]; v) culminado el término de libertad a prueba, se declara extinta la pena ordinaria determinada en la sentencia de instancia[648]; vi) la pena alternativa se puede revocar cuando el beneficiario ha incumplido sus obligaciones, evento en el cual deberá cumplir con la condena impuesta ordinariamente[649].

Teniendo en cuenta las características señaladas, la Corte Constitucional resaltó que el mecanismo en cuestión no constituye un indulto encubierto, ya que en ningún momento se condona la pena que deberían recibir los postulados por la comisión de delitos que constituyen graves violaciones a derechos humanos, sino que la sanción a que haya lugar se impone y su aplicación permanece en suspenso mientras se verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el beneficiario de la pena alternativa[650].

Así las cosas, "la imposición de una pena alternativa no anula, invalida o extingue la pena originaria. La extinción sólo se produce una vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta, el período de prueba y cumplidas las obligaciones derivadas de todos los requisitos impuestos para el otorgamiento del beneficio"[651].

[646] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[647] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[648] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[649] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[650] *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[651] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández; La Corte Constitucional ha reunido estos requisitos en dos grupos. El primero de ellos referido a las desmovilizaciones colectivas, y el segundo, a las individuales. Frente al primer escenario se exige que: el grupo armado se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno; se entreguen todos los bienes producto de actividades ilícitas; se ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los menores de edad reclutados; cese toda interferencia en el ejercicio de derechos políticos y libertades públicas, así como toda actividad ilícita; no se haya organizado con fines de narcotráfico o enriquecimiento ilícito; y libere a todas las personas secuestradas en poder del grupo. En el segundo caso se requiere que: el desmovilizado entregue información y colabore con el desmantelamiento del grupo armado organizado al que pertenecía; suscriba un acta de compromiso con el Gobierno; haya dejado las armas; cese toda actividad ilícita; y entregue los bienes producto de su actividad ilegal en pro de la reparación de las víctimas. Además de estas obligaciones, la ley impone otras que son de carácter general consistentes en: dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los delitos en que participó antes de su desmovilización; permanecer privado de la libertad hasta que la autoridad competente decida lo contrario; asistir a las diligencias judiciales; cumplir con la pena impuesta; evitar faltas de comportamiento posteriores; y entregar al Estados los bienes

En este orden de ideas, "si el postulado satisface los requisitos de elegibilidad, y da estricto cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá en la transición y será beneficiario de la alternatividad" [652].

Resulta claro entonces para el tribunal constitucional colombiano, que la pena alternativa no es contraria ni desproporcionada en relación al valor justicia y a los derechos de las víctimas, pues con la imposición de la pena ordinaria y su ejecución en caso de que el beneficiario incumpla con sus compromisos es suficiente para garantizar las prerrogativas constitucionales y convencionales que tienen los afectados por el conflicto armado[653].

De lo expuesto se concluye que:

i) A la luz de los principios de subsidiariedad, coadyuvancia y complementariedad que limitan la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana no tiene competencia para sustituir a las autoridades internas en la determinación de las sanciones correspondientes a los delitos establecidos en el ordenamiento interno;

ii) En todo caso, de acuerdo al principio de proporcionalidad de la pena, las sanciones asignadas para las conductas delictivas, deben guardar relación con la gravedad del hecho del cual se trate;

iii) Ahora bien, el análisis de las disposiciones que establecen la duración de las penas, debe realizarse considerando el contexto en el cual éstas se aplican;
iv) En el caso concreto, se debe tener en cuenta que el mecanismo de alternatividad penal dispuesto en la Ley de Justicia y Paz, se aplica en el marco de una transición de conflicto armado a paz, y que en esta medida busca facilitar el proceso de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, y garantizar los derechos de las víctimas;

v) El mecanismo en cuestión, sólo es aplicable si se cumplen ciertas condiciones establecidas por la ley, dentro de las cuales se destaca la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad;

para la reparación de las víctimas. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-752 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[652] Corte Constitucional, sentencia C-752 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
[653] Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

vi) Si estos requisitos no son cumplidos, el postulado del que se trate, deberá cumplir la totalidad de la pena de acuerdo a los parámetros de la justicia ordinaria;

vii) En ese sentido, el mecanismo en cuestión no implica un indulto encubierto, ya que en ningún momento se condona la pena, sino que la sanción a que haya lugar se impone y su aplicación permanece en suspenso mientras se verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el beneficiario de la pena alternativa;

viii) A la luz de estas consideraciones, no existen fundamentos para señalar que el mecanismo de alternatividad penal establecido en la Ley de Justicia y Paz, desconoce los derechos de las víctimas.

***

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas anteriormente, se le solicita a la H. Corte que declare que el Estado colombiano no es responsable de la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en el marco del procedimiento de Justicia y Paz ya que:

i) La investigación desarrollada en el marco del procedimiento e Justicia y Paz, ha estado dirigida al esclarecimiento de la verdad de los hechos buscando no solo la identificación de los responsables, sino también el esclarecimiento del contexto en el cual se efectuaron, la determinación de las estructuras y los patrones de macrocriminalidad que dieron lugar a los mismos, así como los máximos responsables implicados;

ii) Desde el inicio del procedimiento se han garantizado los derechos de las víctimas;

iii) Todas las actuaciones y diligencias realizadas hasta la fecha, se han adelantado en observancia de las garantías del debido proceso;

iv) El periodo de tiempo que ha tomado el desarrollo de investigación es razonable a la luz de los estándares establecidos por la H. Corte, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos que se investigan, así como la diligente actividad investigativa;

v) Los beneficios de alternatividad penal establecidos por la Ley de Justicia y Paz, se adecuan a los estándares internacionales en materia de acceso a la

justicia y en esta medida su aplicación no desconoce el derecho a la justicia de las víctimas.

***

El Estado se permite resaltar que el objeto del litigio debe ser delimitado al análisis de los cuestionamientos realizados por los representantes de las víctimas al proceso de justicia y paz adelantado en el caso concreto. Si a pesar de lo anterior la Corte decidiera pronunciarse sobre las herramientas de investigación que se han implementado en el marco del proceso de transición, el Estado demostrará subsidiariamente que las mencionadas herramientas cumplen con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y superan un test de convencionalidad a la luz de los estándares interamericanos.

***

B. Convencionalidad de los mecanismos de racionalización de la acción penal implementados por el Estado colombiano

Como se señaló anteriormente, la ley 1592 de 2012 estableció una estrategia de priorización cuyo objetivo principal fue efectivizar el sistema de administración de justicia, específicamente en lo que se refiere a los mecanismos penales de justicia transicional inicialmente implementados a través de la ley 975 de 2005, a través del establecimiento de criterios de priorización de la investigación penal[654].

Específicamente, el artículo 16 A de la ley 975 modificado por la ley 1592 establece que "los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables[655]".

Sobre este punto, en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las víctimas afirman que la aplicación de los mecanismos de investigación establecidos a través de la disposición mencionada, desconocen el

[654] Supra pág. 86
[655] Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", Art. 16 A. modificada por la ley 1592 de 2012, "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones", Art. 13.

derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y generan impunidad.

Específicamente señalan que "[l]a Ley 1592 de 2012 introduce para el sistema de Justicia y Paz de 2012 unas obligaciones específicas a cargo de la Fiscalía, que implican que, a las conductas criminales que van a ser investigadas y judicializadas se les aplicarán criterios de priorización. Igualmente, que la Fiscalía deberá develar el patrón de macrocriminalidad de las acciones cometidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual se deben reconstruir los contextos, las causas y los motivos del patrón referido. Finalmente, llama la atención para que los esfuerzos se concentren sobre los máximos responsables[656] […] Al respecto, evidentemente preocupa que dicha priorización se transforme en una selección de casos y que, por tanto, los casos que no resulten priorizados, no sean investigados"[657]

Al respecto, con el fin de demostrar que las estrategias de investigación establecidas en la disposición objeto de análisis cumplen con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y más aún promueven la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, el Estado colombiano hará referencia: **1.** las prácticas de racionalización de la acción penal derivadas del derecho comparado y del derecho internacional; **2.** la convencionalidad de la racionalización de la acción penal; y **3.** los criterios de priorización implementados por el Estado colombiano; y **4.** concluirá demostrando la convencionalidad del mecanismo de priorización implementado a través de la Ley 1592 de 2012.

1. Prácticas de racionalización de la acción penal derivadas del derecho comparado y del derecho internacional

Como es de conocimiento de la H. Corte, la experiencia de los tribunales nacionales e internacionales que se han establecido para conocer de delitos que constituyen crímenes internacionales, ha llevado a la comunidad jurídica a aceptar la necesidad de focalizar la investigación penal mediante la priorización y selección, concentrando la persecución penal en los máximos responsables y en los crímenes más graves. La gran cantidad de casos, los amplios universos de víctimas, la sistematicidad de las violaciones, y la complejidad de enfrentar y esclarecer patrones de macro-criminalidad en un tiempo razonable y asegurando resultados que permitan la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas,

[656] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 184.
[657] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 181.

son algunos de los factores que han llevado a la comunidad internacional a avocar por la aplicación de criterios de racionalización de la acción penal.

Los retos mencionados han sido particularmente evidentes en la práctica de las jurisdicciones nacionales e internacionales, y en particular en contextos de transición en los que se hace frente a un legado de violaciones masivas a los derechos humanos.

Así por ejemplo, la priorización de los casos más graves no es una política novedosa en las jurisdicciones domésticas. Lo anterior se evidencia en la práctica de Estados como Canadá con el "Programa de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad" que permite concentrar el ejercicio de la jurisdicción penal sobre las personas que hayan cometido crímenes internacionales en terceros Estados; y Chile, que ha implementado un sistema de clasificación de delitos de alta, mediana y baja complejidad otorgándoles un tratamiento diferenciado.

El "Programa de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad" reúne distintas entidades del Estado que tienen la función de investigar y judicializar a los presuntos autores de crímenes internacionales, incluyendo autoridades migratorias, judiciales y jurisdiccionales. En torno a este mecanismo se reúnen los representantes del Departamento de Justicia, el Departamento de Nacionalidad e Inmigración, la Agencia de Servicios Fronterizos y la Policía Montada de Canadá, como miembros del Comité de Operaciones y Coordinación del Programa de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, para aplicar los criterios de priorización y selección a través del Subcomité de Revisión de Expedientes[658].

El Subcomité de Revisión de Expedientes formula recomendaciones de investigación, análisis o judicialización en los casos contra presuntos autores de crímenes internacionales que residan en Canadá. Hasta el año 2012 el subcomité había priorizado 57 casos a partir de criterios establecidos por el mismo órgano, a saber: i) el caso debe versar sobre la responsabilidad de comando; ii) el material probatorio debe estar corroborado; y iii) debe ser accesible. Si un caso no cumple con estas tres características pero existen razones de política pública, o de justicia internacional que lo justifiquen, el caso podría ser priorizado. Es importante destacar que inicialmente el proceso de priorización contaba con un catálogo más amplio de criterios dentro de los cuales se encontraba, la gravedad del delito, el impacto sobre las víctimas, y la posibilidad de expulsar al presunto responsable, del territorio canadiense.

[658] Beiter, Terry M; "Canada's Approach to the File Review inte Context of War Crimes Cases" en Criteria for Prioritizing and Selecting Core Internacional Crimes Cases (Morten Bergsmo ed.) p. 119.

En lo que se refiere al caso chileno, la priorización ha girado en torno a dos ejes. El primero de ellos se relaciona con la creación de las Fiscalías Especializadas de Delitos de Alta Complejidad y Fiscalías de Tratamiento de Causas Menos Complejas, las cuales deben asumir los procesos de manera diferenciada de conformidad con los criterios de priorización establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Chile. La complejidad de los delitos está dada principalmente por el tipo, la gravedad del delito y el acceso al materia probatorio.

El segundo eje está construido alrededor de la categorización temprana de causas, en virtud de la cual todas las noticias criminales son inicialmente clasificadas en cuatro grupos: i) causas para archivo definitivo -conducta atípica-, ii) causas para archivo temporal -conducta típica con autor desconocido-; iii) causas para aplicación del principio de oportunidad; y iv) reparto de casos viables. Esta categorización tiene como efecto que del 70% al 80% de las causas sean inicialmente desestimadas, restando solo un 20 % de denuncias para ser asignadas a los Fiscales Adjuntos.

Además de los mecanismos anteriormente expuestos, se han creado las Fiscalías Especializadas de Flagrancia que asumen todos los procesos en los cuales hay individuos capturados en las siguientes doce horas a la comisión del delito, que pueden ser judicializados en menos de un día. En esta medida, todos los procesos que son asignados a los fiscales para investigación, han sido objeto de un análisis previo que determina su prioridad, trámite y asignación.

Así pues, se puede afirmar que otros Estados -que no necesariamente se enfrentan a contextos de transicionalidad de conflicto armado a la paz-, han implementado mecanismos de racionalización de la acción penal y específicamente, de priorización, efectivizando la administración de justicia.

Ahora bien, a nivel internacional existen varios ejemplos de uso de herramientas de racionalización de la acción penal, dentro de los cuales se destacan: **i)** la aplicación de criterios de priorización y selección por parte de los Tribunales penales ad-hoc; y **ii)** la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Corte Penal Internacional.

En lo que se refiere al primer ejemplo, tribunales internacionales encargados de investigar los crímenes más graves han tenido la potestad de priorizar sus investigaciones e incluso de decidir qué hechos investigar[659]. Efectivamente, estos Tribunales han contemplado normas que permiten que los fiscales

[659] Ver por ejemplo: Daniel D. Ntanda Nsereko, *Prosecutorial discretion before national courts and international tribunals,* Guest Lecture Series of the Office of the Prosecutor, ICC, en: http://212.159.242.181/iccdocs/asp_docs/library/organs/otp/Nsereko.pdf

encargados de investigar los casos, estén facultados para decidir si se debe iniciar una investigación o no, o para seleccionar los casos que van a investigar.[660]

El Estatuto del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia[661] por ejemplo, estableció que el Tribunal se debía limitar a la investigación de las más serias violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La estrategia inicial de la Fiscalía fue empezar por los casos de los menos responsables para ir construyendo la investigación "hacia arriba". Sin embargo, rápidamente fue claro que esta estrategia iba a tomar demasiado tiempo y no permitiría esclarecer los patrones de macro-criminalidad y los sistemas de victimización, porque lo único que podía esclarecer era hechos aislados, que si bien eran graves, no eran los más graves y representativos de los que habían ocurrido en el conflicto. En 1995 la oficina del Fiscal adoptó por primera vez criterios de selección que incluyeron la posición jerárquica del perpetrador, el nivel de gravedad de los hechos, consideraciones políticas (como el valor simbólico del caso), consideraciones prácticas (como la disponibilidad de recursos de investigación) y otras consideraciones (como la forma en que el caso encaja dentro de un patrón de victimización), entre otros. Posteriormente, fue el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que, por medio de la Resolución 1329, ordenó al Tribunal concentrarse en la persecución penal de los líderes civiles, militares y paramilitares, por encima de los actores menores o de base. Cuatro años después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una nueva resolución haciendo énfasis en la importancia de que el Tribunal se concentrara estrictamente en los perpetradores del más alto nivel jerárquico.

En Ruanda se utilizó el criterio de representatividad con el objeto de que los crímenes investigados personificaran las violaciones cometidas durante la guerra. En este sentido, se utilizó el método de difusión geográfica (geographic spread) para asegurar que los casos seleccionados representaran todas las regiones de Ruanda[662]. Adicionalmente, el Fiscal decidió incluir procesos por cada uno los grupos sociales afectados por el delito de genocidio, con el objeto de que fueran suficientemente representativos y garantizar que los distintos tipos envueltos fueran cubiertos[663]. En relación con la gravedad, se seleccionaron

[660] Greenawalt, Alexander. Op.cit. Pg. 500
[661] ANGERMAIER, Claudia: Case Selection and Prioritization Criteria in the Work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, en: BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 32. pp. 27 – 43.
[662] OBOTE-ODORA, Alex: Case Selection and Prioritization Criteria at the International Criminal Tribunal for Rwanda, BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 60.
[663] OBOTE-ODORA, Alex: Case Selection and Prioritization Criteria at the International Criminal Tribunal for Rwanda, BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 56.

algunos crímenes especialmente graves como el acceso carnal contra las mujeres[664].

En el caso de Camboya, por su parte, el Estatuto que estableció el Tribunal para juzgar el Khmer Rouge, señaló en los artículos 1 y 2 que dicho Tribunal solo tendría competencia para investigar los casos de los mayores líderes de la Kampuchea Democrática y de los responsables de los crímenes más serios. En este orden de ideas, la selección de delitos tuvo en cuenta las diversas categorías de crímenes de acuerdo a su severidad, objetivos y naturaleza sistemática. Particularmente, indicó que se debían seleccionar los crímenes que resultaran más ilustrativos cometidos durante el periodo de la República Democrática de Camboya de acuerdo a los que hayan dejado un mayor número de víctimas, hayan generado un mayor impacto geográfico, y hayan afectado en mayor medida a sectores específicos de la población. [665]

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia relativa a la discrecionalidad de los fiscales internacionales se ha centrado en la necesidad de promover políticas de Estado consideradas esenciales para una comunidad – como la consecución de la paz– y de establecer, a la luz de estas políticas, las prioridades que se deben adoptar en la investigación de conductas delictivas, de cara a las limitaciones de recursos y a la necesidad de garantizar el derecho a la justicia[666].

Un segundo ejemplo de la aplicación de mecanismos de racionalización de la acción penal a nivel internacional, en particular frente a los crímenes más graves, es el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). Al respecto, el artículo 17 del Estatuto establece que un asunto es inadmisible cuando "*no sea de gravedad suficiente*" y el artículo 5(1) determina que "*la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto*." En este sentido la CPI, además de que solo puede enjuiciar a aquellos individuos que hubieren cometido crímenes internacionales cuando el Estado competente no está en capacidad de hacerlo o no tiene la voluntad para hacerlo, tiene posibilidades de evaluar la gravedad y trascendencia de los casos,

[664] OBOTE-ODORA, Alex: Case Selection and Prioritization Criteria at the International Criminal Tribunal for Rwanda, BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 59.
[665] AHMED, Anees / DAY, Margaux: Prosecution Criteria at the Khmer Rouge Tribunal, en BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 115.
[666] Ver: Bruce A. Green and Fred C. Zacharias, *Prosecutorial Neutrality,* 2004 Wis. L. Rev. 837 (2004); AHMED, Anees / DAY, Margaux: Prosecution Criteria at the Khmer Rouge Tribunal, en BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2010, 115.
Krug, *Prosecutorial Discretion and Its Limits,* **50** Am. J. Comp. L. 643, 650-56 (2002) (summarizing primary models of prosecutorial guidelines); Gerald E. Lynch, *Our Administrative System of CriminalJustice,*6 6 Fordham L. Rev. **2117,**
2136-41 (1998). En: Greenawalt, Alexander. Prosecutorial Discretion and the International Criminal Court. 39 NYU J. Int'l L. &Pol. 583 2006-2007 pg. 500

antes de asumir su competencia. Lo que no es otra cosa que la aplicación de un principio de oportunidad a nivel internacional.[667]

Así pues, el *Policy Paper on Preliminary Examinations* de la Corte Penal Internacional, señala como criterios de gravedad[668]: **(i)** la escala de comisión de los crímenes relacionada con el número directo o indirecto de víctimas, la extensión del daño causado, y su difusión geográfica o temporal (*geographical or temporal spread*) de acuerdo la intensidad de los crímenes en un periodo breve o a la intensidad de la violencia en un periodo prolongado; **(ii)** la naturaleza de los crímenes, de acuerdo con elementos específicos del delito como asesinatos, violaciones y otros crímenes que envuelvan violencia sexual o de género y crímenes cometidos contra niños, o la imposición de condiciones de vida sobre una comunidad con el objeto de ocasionar su destrucción; **(iii)** la manera de comisión de los crímenes teniendo en cuenta sus medios de ejecución, el grado de participación, su carácter sistemático como parte de un crimen o política o del abuso de poder y elementos de crueldad particular, incluyendo la vulnerabilidad de las víctimas, motivos de discriminación o el uso de la violación o la violencia sexual como medios para destruir comunidades y; **(iv)** el impacto de los crímenes, de acuerdo a las consecuencias generadas en la comunidad local o internacional[669].

La propia estrategia de persecución penal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional establece que la investigación se debe concentrar en aquellas personas que se encontraban "*en los más altos escalones de responsabilidad*."[670]

De acuerdo a lo anterior, resulta claro que la racionalización de la acción penal ha sido una herramienta implementada como una práctica internacionalmente aceptada, a través de mecanismos de priorización e incluso de selección, por diversos tribunales internacionales encargados de investigar los crímenes más graves. En este mismo sentido, el Estatuto y la práctica de la Corte Penal Internacional evidencian la utilización de criterios que limitan la competencia del Tribunal y concentran su actividad a la persecución de los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad internacional.

[667] Keller, Linda M. Achieving Piece with Justice: The International Criminal Court and Uganda Alternative Justice Mechanisms. 23 Conn. J. Int'l L. 209 2007-2008. At pg. 279.
[668] AMBOS, Kai / STEGMILLER, Ingaz: Investigando crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional: Existe una estrategia de enjuiciamiento coherente y comprensiva, Revista Penal No. 32, Julio de 2013.
[669] Policy Paper on Preliminary Examinations, Draft, 4 October 2010, The Hague, ICC, 70; Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[670] International Criminal Court, Prosecutorial Strategy 2009-2012, The Office of the Prosecutor, Febrero de 2010. En: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf Traducción libre.

Después de haber evidenciado la utilización y aceptación de la racionalización de la acción penal en los términos anteriormente señalados, el Estado demostrará, específicamente, que los mecanismos de concentración de la investigación en el esclarecimiento de los patrones de macro-criminalidad y de los crímenes más graves y en la sanción de los máximos responsables, han sido reconocidos por tribunales, organismos internacionales y doctrinantes, como herramientas que cumplen con los estándares en materia de acceso a la justicia, especialmente en contextos de transicionalidad.

1.1 Concentración de la investigación en los patrones de macro-criminalidad

Uno de los componentes del deber de investigar en contextos transicionales en los que un Estado se enfrenta a un legado de violaciones masivas a los Derechos Humanos, es la concentración de la investigación en el esclarecimiento de los patrones de macro-criminalidad. Así lo ha reconocido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la cual todas las iniciativas de enjuiciamiento deben "contar con una estrategia clara para hacer frente a las dificultades que suponen el gran universo de casos, el gran número de sospechosos, los limitados recursos y las expectativas contrapuestas."[671]

Al hacer una revisión de los retos estratégicos y técnicos que tienen los Estados en situaciones post-conflicto, el Alto Comisionado consideró que una de las prioridades de la persecución penal es lograr una comprensión de los patrones de macro-criminalidad, pues solo entendiendo su estructura criminal y *modus operandi* se entenderá la forma en la que los crímenes deben ser investigados[672]. Así, el ejercicio de la acción penal deberá indagar y considerar el fondo ideológico que facilitó que estos hechos atroces fueran perpetrados,[673] así como el vínculo entre quienes cometieron los crímenes, quienes los facilitaron, quienes los financiaron y quienes aseguraron su impunidad.[674] La práctica internacional ha acogido esta estrategia y sugiere que la investigación debe partir de la construcción precisa "del contexto histórico y actual (social, económico y político) del área de actuación criminal para determinar los conflictos locales, definir la

[671]ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. *Rule of Law Tools for Post-conflict States, Prosecution Iniatives*. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2006
[672] Ibídem.
[673] Baró. Martín. *Adaptación de los constitutivos de la violencia*. (1983) En: Martín Baró. Violencia y agresión social. (2003) Pg. 83-88
[674] Seils, Paul. *Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz*. Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2012) Pg. 1

lógica del proceso de la violencia y descubrir las políticas y prácticas que facilitaron la comisión de atrocidades."[675]

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la tarea "no se limita a describir la ejecución del acto criminal sino que debe dilucidar el funcionamiento de los elementos de la maquinaria (…) exige una exploración detallada del propio sistema, y no simplemente de los resultados, que se manifiestan en los crímenes subyacentes que constituyen los denominados componentes del crimen (asesinatos, torturas, violaciones, deportaciones)."[676] Lo anterior requiere que las instituciones encargadas de investigar los casos, así como los jueces, realicen un análisis exhaustivo de las pruebas y testimonios que se presenten en el marco de una investigación.

1.2 Concentración la investigación en los crímenes más graves

La posibilidad de centrar la investigación en los crímenes más graves, ha sido defendida por distintos doctrinantes, que insisten en la importancia de desarrollar criterios de carácter subjetivo y objetivo, que permitan priorizar la investigación de los responsables de los crímenes más graves y representativos677. Al respecto, la doctrina ha señalado que al momento de diseñar la estrategia de persecución penal es necesario tener en cuenta "la gravedad (bien sea de los crímenes y/o de la responsabilidad y rango de los sospechosos) y la representatividad (demostración de carácter sistémico y organizado de las violaciones para lo que se requieren análisis contextuales)."[678] De ahí que exista una relación directa entre la investigación de los crímenes más graves, y la posibilidad de realizar análisis contextuales que permitan develar los patrones de macro-criminalidad.

En este mismo sentido, en la formulación de las políticas de procesamiento penal a nivel internacional se ha insistido en la importancia de concentrarse en la persecución penal de los crímenes de guerra cometidos bajo un plan o política. Así lo establece el Estatuto de Roma, por ejemplo, al señalar que "*la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se*

[675] Judicialización de crímenes de sistema. Estudios de caso y análisis comprado. Editor, Michael Reed Hurtado. Centro Internacional para la justicia transicional (2008) Pg. 101 Ver también: M. Cherif Bassiouni, *From Versailles to Rwanda in Seventy-Five Years: The Need to Establish an International Criminal Court*, 10 HARV. HUM. RTS. J. 11, 19 (1997). En: Thomas Hethe Clark. The Prosecutor of the International Criminal Court, Amnesties, and the "Interests of Justice": Striking a Delicate Balance. Washington University Global Studies Law Review. Volume 4 Issue 2 (2005) pag. 405

[676] Ibídem. Pg. 13

[677] Ver entre otros: Kai Ambos, Morten Bergsmo, María Paula Saffon, Andreas Forer, Darryl Robinson, Dwight Newman y Mark Freeman

[678] FORER, Andreas. Justicia Transicional. Colección El Saber Penal No.1. Grupo Editorial Ibáñez. 2012. pág. 167 y 168.

cometan como parte de un plan o política".[679] Al respecto Cassese ha señalado que "*es recomendable que el artículo 8 haga hincapié en los crímenes de guerra que son cometidos como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala. (…) Esta habría sido una calificación útil tanto para el TPIY como para el TPIR, para evitar juicios de atrocidades aisladas, que no suponen una amenaza para el orden internacional tan grave como atrocidades que se cometen como parte de un plan o política o en gran escala*."[680]

Asimismo, en el proceso de transición de Timor-Leste se constituyó una Comisión de Recepción, Verdad, y Reconciliación que tenía competencia para otorgar amnistías condicionadas e investigar los crímenes menos graves, que funcionaba paralelamente con una Corte Penal Especial que conocía de los crímenes nucleares y graves[681]. Esta estrategia permitió enfocar los mayores esfuerzos de la administración de justicia en la investigación de las conductas delictivas de mayor trascendencia.

Por su parte, en Bosnia y Herzegovina se han implementado importantes esfuerzos institucionales con la finalidad de investigar los crímenes ocurridos entre 1992 y 1995 en la Antigua República de Yugoslavia, los cuales se materializaron, entre otros, en la formulación de criterios para la priorización de las investigaciones.

Lo anterior se realizó a través de la elaboración de varios documentos dentro de los cuales se destaca el denominado "Criterios de orientación para casos sensibles de las Rules of Road" adoptado el 12 de octubre de 2004, por el Colegio de Fiscales de Bosnia y Herzegovina[682], el cual estableció criterios de gravedad que permitieron, en la práctica, ofrecer razonamientos adecuados para una óptima priorización. El documento en cuestión hace énfasis en tres grupos de criterios principales, a saber: la naturaleza del presunto crimen, las circunstancias del presunto autor y otras consideraciones[683].

[679] Artículo 8(1), Estatuto de Roma.
[680] Antonio Cassese, *The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections. EJIL* 10 (1999), p.149. Traducción libre
[681] ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Instrumentos del Estado de derecho para sociedades que han sufrido un conflicto, "Iniciativas de enjuiciamiento", 2006,, "Iniciativas de enjuiciamiento", 2006, p. 10; HIRST, Megan y VARNEY, Howard, Int. Center for Transitional Justice, (2005): Justice abandoned? An assessment of the serious crimes process in East Timor, p. 5, 13. En: Kai Ambos y otros, Selección y Priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, estudio comparado. Publicado por: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, 2011, pág. 239.
[682] Ambos, Kai. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 36.
[683]López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 537.

En relación con el primer criterio, el documento organizó los delitos en dos grupos, a saber: altamente sensibles y sensibles. Dentro de los delitos altamente sensibles se encuentran el genocidio, el exterminio, los asesinatos múltiples, la violación y otras agresiones graves como parte de un sistema, por ejemplo, en campos o después de ataques, la esclavitud, la tortura, las persecuciones en una escala sistemática o generalizada, y las detenciones forzosas en masa en campos. Como crímenes sensibles se señalan los asesinatos cometidos como parte de, o después de un ataque, la violación y otros delitos graves, las agresiones graves cometidas como parte de un sistema, las deportaciones en masa o traslados forzosos, la destrucción o daño a instituciones religiosas y/o culturales de manera generalizada o sistemática, los tratos inhumanos o degradantes como parte de un sistema, la destrucción de la propiedad en escala generalizada o sistemática, y la negación de derechos humanos fundamentales como por ejemplo, a través de la no prestación de servicios médicos de manera generalizada y sistemática[684].

La Fiscalía de Bosnia y Herzegovina emitió un segundo documento denominado "Estrategia nacional sobre persecución de crímenes de guerra", el cual señaló criterios para seleccionar y distribuir casos en las jurisdicciones nacionales, y para priorizar su investigación y juzgamiento[685]. Este documento dividió los criterios de priorización y selección a partir de elementos similares a los desarrollados en el documento mencionado anteriormente, indicando los factores de: gravedad de los crímenes, capacidad y rol de los autores y otras circunstancias[686].

Finalmente, los Fiscales de Bosnia y Herzegovina emitieron un tercer documento denominado "Directrices para la presentación de cargos de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina", en el cual analizan con mayor profundidad los criterios de

[684]López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 538; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112.

[685] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 539; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112

[686] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 539; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112

selección y priorización. En este orden de ideas, el documento establece las circunstancias en las que se deben presentar cargos por parte de la Fiscalía y específicamente, aquellas en las que se deben implementar prioritariamente las labores investigativas[687]. Como factores a tener en cuenta estableció entre otros: las circunstancias y el impacto del crimen en las regiones o lugares donde fue cometido, y el impacto del caso sobre la víctima y las comunidades afectadas[688].

En lo que se refiere al primer factor, se estableció el impacto de los crímenes a través del análisis del número de civiles muertos, el número de desplazados internos, la población víctima -estudiando especialmente factores étnicos, religiosos y políticos-, el impacto porcentual en la región, la localización de la ocurrencia del delito y el área destruida, entre otros criterios[689]. En cuanto al segundo criterio se tuvo en cuenta los casos que generaran mayor impacto sobre una comunidad, una región o la nación en su conjunto[690].

1.3 Concentración de la investigación penal en los máximos responsables

El concepto de máximo responsable se ha venido constituyendo a partir de los elementos establecidos por tribunales y organismos internaciones como el Tribunal Penal para la antigua Ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Bosnia y Herzegovina y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional entre otros, los cuales a través de esta figura identifican a aquellas personas que tienen un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito.

Efectivamente, en la práctica internacional se puede identificar la utilización de esta herramienta de investigación penal. Así por ejemplo, en los Tribunales de Nüremberg solamente se juzgó a los máximos responsables, para lo cual se utilizó el parámetro de liderazgo (leadership requirement), el cual fue sintetizado por el Judge Powers en el Juicio Ministries[691] a través del siguiente cuestionamiento: ¿Su posición e influencia, o las consecuencias de su actividad,

[687] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 540.
[688] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 540.
[689] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 540.
[690] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 541.
[691] The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker, et al.

así como sus acciones, pueden propiamente tener alguna influencia o efecto en la guerra?[692] Este concepto fue desarrollado en el Juicio Farben[693] para evitar imponer una responsabilidad colectiva a todo el pueblo y centrar la responsabilidad en aquellas personas que planearon y dirigieron la guerra en los campos político, militar o industrial[694]. Posteriormente en el Juicio "High Command"[695] se amplió el concepto de líderes identificándolos como aquellas personas que tienen el poder de delinear o influenciar la política del Estado. En este orden de ideas se consideró necesario tener en cuenta cuatro aspectos a la hora de establecer el liderazgo en casos concretos: i) la calidad en cuestión no puede ser inferida solamente de la posición jerárquica; ii) el análisis debe hacerse teniendo en cuenta los elementos de cada caso concreto; iii) el sujeto debe haber tenido influencia en el plan o política de la organización; y en este sentido, iv) se puede incluir a personas que hayan tenido una influencia financiera, industrial o económica en la comisión de los crímenes[696].

Por su parte, en el Tribunal Militar para el Lejano Oriente también se juzgó solamente a los máximos responsables, dentro de los cuales se encontraban únicamente personas en posiciones de dirección como ministros[697], comandantes[698], gobernadores y otros miembros del gabinete[699].

Si bien en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia no se estableció directamente criterios de selección y priorización, la lentitud de los juicios y la sistemática impunidad que se estaba generando motivó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sesión 4817ª, celebrada el 28 de agosto de 2003, expidiera la Resolución 1503 (2003) concentrando su labor en el procesamiento de los más altos dirigentes de quienes se sospechará les cabía la mayor responsabilidad por los crímenes de la competencia del Tribunal Internacional[700].

[692] HELLER, Kevin Jon: The Nüremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, Oxford University Press, Nueva York, 2011, 184.
[693] The United States of America vs. Carl Krauch, et al.
[694] HELLER, Kevin Jon: The Nüremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, Oxford University Press, Nueva York, 2011, 185.
[695] The United States of America vs. Wilhelm von Leeb, et al.
[696] HELLER, Kevin Jon: The Nüremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, Oxford University Press, Nueva York, 2011, 185 a 187.
[697] Sadao Araki, Shunroku Hata y Yoshijirō Umezu (Ministro de guerra), Kiichirō Hiranuma y Hideki Tōjō (primer ministro), Okinori Kaya (Ministro de Finanzas), Takasumi Oka, Shigetarō Shimada (Ministro de Marina) y Mamoru Shigemitsu y Kōki Hirota, (Ministro de Relaciones Exteriores), embajadores (Hiroshi Ōshima, Toshio Shiratori Shigenori Tōgō).
[698] Heitarō Kimura, Iwane Matsui, Akira Mutō, Kenji Doihara y Jirō Minami.
[699] Kuniaki Koiso, Kingorō Hashimoto, Naoki Hoshino, Kōichi Kido, Kenryō Satō y Teiichi Suzuki.
[700] Sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en Yugoslavia: ANGERMAIER, Claudia: Case selection and prioritization criteria in the work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, en: BERGSMO, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Forum for International Criminal and Humanitarian Law (FICHL) / International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 29 y ss.

El Tribunal Penal para la antigua Ex Yugoslavia, determinó como factores para determinar el nivel de responsabilidad: la jerarquía del acusado junto con el alcance de su autoridad (de facto y de *iure*), el rol en la comisión de los crímenes[701] y el posible papel político que la persona pudiese jugar dentro de la organización[702].

Por su parte, en el caso de Bosnia y Herzegovina, se emplearon factores como *"la función política"* del autor, o su calidad de ser "un líder a nivel nacional, regional o municipal".[703]

Ahora bien, el establecimiento de un Tribunal Internacional especial para investigar los crímenes internacionales ocurridos entre 1992 y 1995 en la antigua República de Yugoslavia, así como la presión pública, nacional e internacional, para investigar los delitos cometidos en su territorio, evidenció la necesidad por parte de la Fiscalía de establecer criterios de priorización que permitieran la investigación y juzgamiento de algunas conductas delictivas de especial relevancia. En respuesta a esta situación, la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina emitió varios documentos estableciendo criterios de racionalización de la acción penal, tal y como se expuso anteriormente. En el primero de estos documentos incluyó como criterio de priorización, entre otros, las circunstancias del presunto autor. Bajo este elemento, incorporó dos tipos de listas de acuerdo a la posición que tenía el autor al momento de la ocurrencia del delito. Así, dividió a los presuntos responsables en: **i)** aquellos que ostentaban roles con poder militar, como paramilitares, policías, militares, líderes políticos, miembros del poder judicial, jefes de policía, comandantes de policía, comandantes de campo, y violadores múltiples; y **ii)** quienes cumplieron roles prácticos, por ejemplo, en ejercicio de funciones administrativas dentro del grupo ilegal[704].

El segundo documento emitido por la Fiscalía señaló entre los factores de priorización la capacidad y rol de los autores. En este punto, la Fiscalía estableció las siguientes categorías: **i)** deber dentro de la unidad - comandante en un

[701] Fiscalía vs. Ademic, *"Decisión para la remisión a las autoridades de Croacia conforme a las reglas 11bis"*, Caso No. IT-04-78- PT, Tribunal de Remisión, 14 de septiembre de 2005.
[702] Fiscalía vs. Dragomir Milosevic, Decisión sobre la remisión de caso, según la Regla 11bis, Caso No. IT-98-29/1-PT, Referral Bench, 8 de julio de 2005. Véase además el Memorando Interno de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia de 17 de octubre de 1995. *"Criterios para investigaciones y persecuciones"*.
[703] *"Criterios de orientación para los casos sensibles "Rules of the Road"*, adoptado el 12 de octubre de 2004 por el Colegio de Fiscales de Bosnia y Herzegovina.
[704] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 538; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112.

establecimiento militar, policial o paramilitar-; **ii)** posición de dirección en los campos y centros de detención; **iii)** función política; **iv)** titular de un cargo judicial -juez, fiscal, abogado del Estado, abogado-; **v)** formas y grados de participación más graves en la comisión de un crimen -tomar parte en la planificación y en la dación de la orden del crimen-; y **vi)** forma de comisión, responsabilidad intencional y particular en la planificación y en la dación de la orden de un crimen-[705].

Finalmente, en el tercer documento los Fiscales incorporaron dentro de los tres criterios especiales de racionalización de la acción penal, uno relacionado con las situaciones concretas del acusado propuesto, como su jerarquía, la mayor influencia que ejercía sobre otros, y su nivel de responsabilidad[706].

Por otra parte, si bien el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda no estableció criterios de selección y priorización, la Resolución 1534 (2004) adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 4935ª sesión, del 26 de marzo de 2004, respecto a Ruanda, señaló la necesidad de concentrar las imputaciones en los máximos líderes sospechosos de ser los máximos responsables de crímenes de competencia del tribunal[707].

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda también ha utilizado como criterio de selección de casos el relacionado con los *"mayormente responsable[s] por su nivel de participación y por su posición en la sociedad"*. Por esa razón, fueron procesados miembros del Gobierno Interino, miembros *senior* de las fuerzas armadas de Ruanda, propietarios, directores y algunos periodistas de los medios de comunicación que habían incitado a la violencia y asesinato en los albergues de los Tutsis, y algunos líderes religiosos, por su nivel de participación al prestar refugio a algunos civiles cómplices[708].

[705] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 539; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112.

[706] López Díaz Claudia, Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional, Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 42, No. 117 / p. 515-579 Medellín - Colombia. Julio-Diciembre de 2012, ISSN 0120-3886, pág. 540; Cfr. Bergsmo, M., y Saffon, M. Enfrentando una fila de atrocidades pasadas: ¿Cómo seleccionar y priorizar casos de crímenes internacionales centrales?, 2011. En: Ambos, K. (Coord.).Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales, Un estudio comparado Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH. Bogotá, pág. 23-112.

[707] OBOTE-ODORA, Alex: Case selection and prioritization criteria at the International Criminal Tribunal for Rwanda en: Bergsmo, Morten: Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases, Forum for International Criminal and Humanitarian Law (FICHL) / International Peace Research Institute, Oslo (PRIO),

[708] Tomado de lo expuesto por Alejandro Aponte Cardona en el concepto técnico presentado a esta Corporación en virtud del proceso de inconstitucionalidad en referencia.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional considera como factor para la concentración de la investigación, que se trate de las personas mayormente responsables de los crímenes más graves. En efecto, los criterios de selección de los casos del Fiscal[709] señalan que *"[n]o todo caso que alcance el umbral de admisibilidad será sometido a persecución; es necesario seleccionar los casos que más justifiquen la persecución. Entre los casos que alcanzan el umbral de admisibilidad, la Oficina del Fiscal considerará factores tales como la política de concentrarse en las personas mayormente responsables de los crímenes más graves, así como la maximización de la contribución a la prevención del crimen"*.

Así, puede decirse que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, establece como criterio de selección de casos, la calidad de la persona que se está investigando[710]. Su política está encaminada a *"centrarse sobre los que cargan con la mayor responsabilidad"*, entre los que se encuentran *"comandantes y otros superiores, si quienes son sus efectivos están involucrados en los crímenes"*, *"aquellos que tienen un rol causal importante en los crímenes"*, *"autores de mala reputación que se distinguen por su directa responsabilidad en crímenes particularmente graves", y* funcionarios de rango medio o bajo cuya participación resulta *"necesaria para el caso en conjunto"*. De acuerdo a lo anterior, puede decirse que el Fiscal ante la Corte Penal Internacional ha definido que los mayormente responsables de conductas criminales, son *"aquellos que cargan con el mayor grado de responsabilidad"*[711].

Por su parte, el Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona (CESL) limita la jurisdicción de la Corte a las "*personas que cargan con la mayor responsabilidad*", reiterando la Resolución 1315 de 2000 del Consejo de Seguridad[712]. De esa manera, la Corte Especial de Sierra Leona, enmarcándose en un contexto de conflicto armado interno, establece como criterios de selección de los casos, la orientación de la investigación hacia aquellos posiblemente responsables que tienen una posición de liderazgo político o militar u otras personas con autoridad de mando en niveles jerárquicos inferiores[713].

[709] Oficina del Fiscal-Corte Penal Internacional, *"Criteria for selection of situations and cases"*, 11.
[710] *"La consideración de la gravedad como criterio de selección, para la fase de investigación o de persecución, tanto en competencia como en admisibilidad, -a diferencia del criterio de priorización- se predica respecto de crímenes, no de autores"*. Concepto técnico allegado por el experto consultor en derecho internacional, Alejandro Aponte Cardona.
[711] Véase al respecto, AMBOS, Kai (coordinador). *"Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado"*. GIZ. Proyecto de *"Apoyo al proceso de paz en Colombia en el contexto de la Ley de Justicia y Paz"*. Embajada de la República Federal de Alemania, Bogotá, 2011.
[712] Véase el art. 1(1) y 15(1) del Estatuto de la CESL y S/ RES/1315 (2000), párrafo 3.
[713] ONU. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. *"Report of the Secretary General on the Establishment of the Special Court for Sierra Leone"*, 4 de octubre de 2000, Doc. No S/2000/915, párrs. 29-31, especialmente en el párr. 30. *"30. While those "most responsible" obviously include the political or military leadership, others in command authority down the chain of command may also be regarded "most responsible" judging by the severity of the crime or its massive scale. "Most responsible", therefore, denotes both a leadership or authority position of the accused, and a sense of the gravity, seriousness or massive scale of the crime. It must be seen,*

El Tribunal del Khmer Rouge en Camboya centró la investigación y el juzgamiento en los *"senior leaders"* de la República de Camboya y aquellos que fueran más responsables de los crímenes y serias violaciones al derecho internacional humanitario[714].

En este mismo sentido, la doctrina y las instancias especializadas de las Naciones Unidas han afirmado que en contextos de justicia transicional, investigar a los máximos responsables resulta ser una de las estrategias más eficientes a la hora no solo de entender las motivaciones de los hechos victimizantes, sino también de las estructuras de jerarquía de los grupos criminales.

Ya en 1991, en su trabajo pionero sobre el deber de los Estados de investigar, la experta internacional Diane Orentlicher afirmó que "*[e]l derecho consuetudinario parece indicar que los gobiernos pueden cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, mediante la persecución de aquellos más responsables de diseñar e implementar un sistema de atrocidades en contra los derechos humanos o de crímenes especialmente notorios […]*."[715]

Bajo esta misma línea, varios académicos proponen que una postura de acuerdo a la cual se focaliza la persecución penal en aquellos que tienen el más alto grado de responsabilidad, es coherente con el objetivo central de los procesos de transición y responde a la naturaleza de los crímenes de sistema, a los cuales se enfrenta un Estado que desee investigar violaciones masivas a los derechos humanos.[716]

Así lo ha advertido Orentlicher, según la cual "*el deber de castigar crímenes contra los derechos humanos impuesto por el derecho consuetudinario puede fácilmente acomodar las limitaciones que enfrentan las sociedades en transición […] el derecho consuetudinario se violaría cuando existe una impunidad total de crímenes graves cometidos de manera sistemática y notoria […] mas no requiere*

however, not as a test criterion or a distinct jurisdictional threshold, but as a guidance to the Prosecutor in the adoption of a prosecution strategy and in making decisions to prosecute in individual cases".

[714] (i) Senior leaders of Democratic Kampuchea ("senior leaders' category"), and (ii) those who were most responsible for "the crimes and serious violations of Cambodian laws related to crimes, international humanitarian law and custom and international conventions recognized by Cambodia that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979" ("most responsible persons category").

[715] See D. Orentlicher, 'Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime, 100 *Yale Law Journal* (1991) 2537 ff., at 2599. En: Sthan, Carsten. Complementarity, Amnesties and Alternative forms of justice: Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court. 3. J. Int'l Crim. Justice. 695 2000 at pg. 697 at. Pg 708. (Traducción libre)

[716] Ver entre otros: Judicialización de crímenes de sistema: Estudio de caso y análisis comparado. Serie Justicia Transicional. Michael Reed Hurtado (Editor). Ver también: Cryer, Robert, Prosecuting the Leaders: Promises, Politics and Practicalities. Gôtitingen Journal of International Law 45 (2009) 1; Greenawalt, Alexander. Prosecutorial Discretion and the International Criminal Court. 39 NYU J. Int'l L. &Pol. 583 2006-2007; y Cryer, Robert, Prosecuting the Leaders: Promises, Politics and Practicalities. Gôtitingen Journal of International Law 45 (2009).

el enjuiciamiento de toda persona que haya cometido ese delito. El enjuiciamiento de aquellos que eran más responsables de diseñar e implementar un sistema de atrocidades contra los derechos humanos […] aparentemente, libraría a los gobiernos de su obligación internacional de no tolerar o alentar tales violaciones, siempre y cuando los criterios utilizados para seleccionar a los posibles acusados no parezcan perdonar o tolerar los abusos del pasado."[717]

Finalmente, es de señalar que varios académicos han propuesto que en un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la obligación de investigar y juzgar a los perpetradores de tales crímenes bajo el derecho internacional se puede cumplir a través de una estrategia de juicios ejemplares.[718] En este sentido, han señalado que al investigar y juzgar a los máximos responsables, en lugar de todos aquellos que cometieron un delito, el Estado que se encuentra en transición puede reconocer los errores del pasado, asignar responsabilidades, marcar una ruptura con el pasado, y proporcionar un sentido de justicia colectiva[719] .

2. Convencionalidad de la racionalización de la acción penal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como organismos internacionales en materia de derechos humanos se han referido al deber que tienen los Estados de investigar con debida diligencia las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de su jurisdicción y de garantizar en esta medida, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Como lo demostrará a continuación el Estado colombiano, estos pronunciamientos evidencian que la implementación de mecanismos de racionalización de la acción penal no solo no desconoce obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que promueve la efectividad de la administración de justicia, y en esta medida, la garantía de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana ha señalado que "[e]l Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos, [y] de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido en el ámbito de su jurisdicción"[720] (subrayado propio).

[717] Orentlicher, Diane F. Settling Accounts: The duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime. The Yale Law Journal, Vol. 100, No. 8, Symposium: International Law. (2009) (Traducción libre)
[718] Ver: M. Cherif Bassiouni et. al., *Proposed Guiding Principles for Combating Impunity, in* POST-CONFLICT JUSTICE 255, 261 (M. Cherif Bassiouni ed., 2002)
[719] Greenawalt, Alexander. Prosecutorial Discretion and the International Criminal Court. 39 NYU J. Int'l L. &Pol. 583 2006-2007 pg. 621
[720] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 174. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de

En este mismo sentido, el Tribunal ha resaltado las obligaciones que tienen los Estados de prevenir, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurran dentro de su jurisdicción[721]; garantizar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos[722]; esclarecer la existencia de estructuras criminales complejas y sus conexiones que hicieron posible las violaciones[723]; y dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias; las cuales deben ser cumplidas simultáneamente entre otras, con las de: garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos[724]; esclarecer la *verdad* de los hechos ocurridos[725] en el entendido de que el derecho a la verdad es un derecho no solo individual sino que le pertenece

noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 47; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr.156.

[721] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 173; Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 47; Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr.156;

[722] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 91; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 255; y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr.155.

[723] Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 158; y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrs. 118, 119.

[724] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250 párr. 257; Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226, Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252 párr. 305.

[725] La Organización de Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la determinación de la verdad con respecto a las violaciones manifiestas de los derechos humanos para la consolidación de los procesos de paz y reconciliación. Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución respecto a las personas desaparecidas en Chipre de 9 de diciembre de 1975, 3450 (XXX), Preámbulo; Resolución respecto de la situación de los derechos humanos en El Salvador de 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/149, Preámbulo y párr. 4; Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Haití de 29 de febrero de 2000, A/RES/54/187, párr.8; Resolución sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala de 28 de enero de 2003, A/RES/57/161, párr. 17; Resolución sobre asistencia para el socorro humanitario, la rehabilitación y el desarrollo de Timor Leste de 13 de febrero de 2003, A/RES/57/105, párr. 12; Resolución sobre la promoción y protección de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluido el derecho al desarrollo de 19 de setiembre de 2008, A/HRC/9/L.23, Preámbulo; Resolución sobre la Proclamación del 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas de 23 de junio de 2010, A/HRC/RES/14/7, Preámbulo; Resolución sobre el Derecho a la Verdad de 12 de octubre de 2009, A/HRC/RES/12/12, párr. 1; Resolución sobre Genética Forense y Derechos Humanos de 6 de octubre de 2010, A/HRC/RES/15/5, Preámbulo; Resolución sobre el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de 26 de septiembre de 2011, A/HRC/18/L.22, Preámbulo, y Resolución sobre el Derecho a la Verdad de 24 de septiembre de 2012, párr.1.

a la sociedad en su conjunto[726]; garantizar la seguridad y mantener el orden público[727], y propender por la reconciliación[728].

Este conjunto de obligaciones están profundamente interrelacionadas[729], son interdependientes[730] y deben ser cumplidas en su integralidad, de manera tal que no se pueden interpretar aisladamente. Por tanto, el Estado debe utilizar todos los medios disponibles orientados al máximo cumplimiento de todas sus obligaciones. Esto implica, por ejemplo, que los esfuerzos judiciales y extrajudiciales deben estar encaminados a satisfacer el derecho a la justicia a la vez que a satisfacer el derecho a la verdad[731] de los individuos y la sociedad en su conjunto y garantizar la no repetición de los hechos.

Específicamente, en lo que se refiere al deber de investigar en contextos complejos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte ha afirmado que "[u]na debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigía que éstos fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión"[732] (subrayado propio).

En el mismo sentido el Tribunal ha señalado que "[e]n casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no solo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de

[726]Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 76 y 77; Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252 párr. 298. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 37/00 del 13.04.2000. Pág. 148.

[727] Corte IDH. *Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. párr. 70*;* Corte IDH. *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú.* Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20. párr. 75; Corte IDH*. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras.* Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. párr. 162; CORTE IDH. *Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el "Complexo do Tatuapé" de* FEBEM. Medidas Provisionales*.* Resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2005, Considerando decimosegundo.

[728] Corte IDH, *Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252.

[729] Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Párr. 171.

[730] Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. párr. 171. "Si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y alcance propios, en ciertas ocasiones, por las circunstancias particulares del caso o por la necesaria interrelación que guardan, se hace necesario analizarlos en conjunto para dimensionar apropiadamente las posibles violaciones y sus consecuencias".

[731] Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 159párr. 143; y Corte IDH. *Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240. párr. 204.

[732] Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 158; Cfr. Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 88 y 105.

derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda solo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación[733]" (subrayado propio).

De acuerdo a lo anterior, "las autoridades estatales deben determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades[734]. No basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios). Esto puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigación; el análisis de documentos clasificados o reservados, y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios, pero sin confiar totalmente en la eficacia de mecanismos técnicos como éstos para desarticular la complejidad del crimen, en tanto los mismos pueden resultar insuficientes. En consecuencia, no se trata solo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación[735]" (subrayado propio).

Recientemente en la sentencia de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños, la Corte tuvo la oportunidad por primera vez de pronunciarse sobre el alcance del deber de investigar de los Estados en contextos de transición de conflicto armado a la paz. En este caso la Corte se refirió a la convencionalidad de una ley de amnistía proferida en el Estado de El Salvador que excluía de la investigación algunas conductas delictivas dentro de las cuales se encontraban violaciones a los derechos humanos.

En esta decisión el Tribunal diferenció las hipótesis fácticas respecto a las cuales se había pronunciado en su jurisprudencia anterior sobre amnistías – a saber, contextos de transición de regímenes dictatoriales a democracias-, al afirmar que "a diferencia de los casos abordados anteriormente por este Tribunal, en el

[733] Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 118.
[734] *Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134*, párr. 219; *Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205*, párr. 454, y *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192*, párr. 101.
[735] Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 119.

presente caso se trata de una ley de amnistía general que se refiere a hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno. Por ello, la Corte estima pertinente, al realizar el análisis de la compatibilidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana y su aplicación al caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños, hacerlo también a la luz de lo establecido en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 así como de los términos específicos en que se acordó el cese de las hostilidades que puso fin al conflicto en El Salvador y, en particular, del Capítulo I ("Fuerza Armada"), punto 5 ("Superación de la Impunidad"), del Acuerdo de Paz de 16 de enero de 1992"[736] (subrayado propio).

Como se evidencia, en esta oportunidad la Corte matizó su jurisprudencia anterior tomando en cuenta no solo el derecho internacional humanitario, sino los propios términos del acuerdo de cese de hostilidades en El Salvador. Al hacer un análisis de estos dos elementos *en su conjunto* el Tribunal concluyó que en el caso de El Salvador no podrían concederse amnistías para crímenes internacionales[737]. En suma, la Corte amplió el espectro de su jurisprudencia anterior, para afirmar que no toda *grave violación a los derechos humanos* debe ser juzgada y sancionada penalmente (como sí sucede en contextos de transición de dictaduras hacia la democracia[738]), sino que en el contexto particular de El Salvador, tomando en consideración la interpretación combinada de las normas del derecho internacional humanitario y de los propios límites establecidos en los acuerdos de paz de El Salvador, todo *crimen internacional* debe ser investigado y sancionado.

De todo lo anterior se puede concluir que a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben investigar con debida diligencia las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de su jurisdicción buscando el procesamiento y sanción de los responsables y garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Ahora bien, en contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos,

[736]Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252. párr. 284
[737] Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252. párr. 265-286
[738] Corte IDH. *Caso Barrios Altos Vs. Peru.* Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41 a 44; Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. párr. 105 a 114; Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. párr. 152 y 168; Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. párr. 147, y Corte IDH. *Caso Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221. párr. 195.

el deber de debida diligencia en la investigación exige que se implementen todas las medidas que estén al alcance de los Estados con la finalidad de analizar los hechos a partir de una perspectiva comprehensiva que tenga en cuenta el contexto en el que tuvieron lugar y permita develar las macroestructuras que permitieron, promovieron y se beneficiaron del actuar criminal.

Por otra parte, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el contexto de un proceso orientado a poner término a través de la vía negociada a un conflicto armado no internacional, se permite el uso de herramientas de racionalización de la acción penal que incluyen, incluso, leyes de amnistía respecto a graves violaciones a los derechos humanos y mecanismos de selección. En este orden de ideas, no existe razón alguna para cuestionar la aplicación de criterios de priorización en el marco de procesos transicionales de conflicto armado a la paz, que buscan precisamente dar prevalencia a la investigación de los crímenes de más trascendencia y de los máximos responsables, con el fin de develar las estructuras criminales que perpetraron las graves violaciones a los derechos humanos.

Al contrario, la implementación de este tipo de herramientas permite optimizar los recursos de los cuales dispone el Estado para esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, y en esta medida, garantizar los derechos de las víctimas y la no repetición de atrocidades.

Por todo lo anterior, el Estado considera demostrado que las herramientas de racionalización de la acción penal cumplen con los estándares en materia de acceso a la justicia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Criterios de priorización implementados por el Estado colombiano

Como se señaló anteriormente, ante la coyuntura histórica que representa para el Estado colombiano el proceso de transición de conflicto armado a la paz que se viene adelantando, y la consecuente demanda de investigación de miles de violaciones a los derechos humanos en contextos de sistematicidad y masividad, se han implementado diversos mecanismos de investigación que buscan precisamente efectivizar el aparato de justicia. Estas herramientas, han sido implementadas, entre otros, a través de la citada Ley 1592 de 2012 y de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior ha supuesto el establecimiento de un nuevo sistema de investigación y gestión penal de la Fiscalía General, y el estudio, la elaboración y la aplicación de criterios de priorización de situaciones y casos.

Este nuevo sistema de investigación busca "i) la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de crímenes de sistema perpetrados por aparatos organizados de poder, a efectos de conocer la verdad de lo sucedido, evitar su repetición y propender por la reparación; ii) la investigación y desmantelamiento de las organizaciones delictivas responsables de la comisión de múltiples delitos ordinarios; y iii) en el caso de los delitos no perpetrados por organizaciones delictivas, el nuevo sistema apuntará, en especial, a combatir los patrones culturales discriminatorios y graves vulneraciones de los derechos fundamentales"[739]

Los criterios de priorización fueron establecidos concretamente a través de la mencionada Directiva 0001 de 2012, y se han implementado progresivamente, de acuerdo al plan fijado por el Comité de Priorización de Situaciones y Casos conformado por el Vicefiscal General de la Nación, un delegado del Fiscal General de la Nación, el Director (a) Nacional de Fiscalías, el Director (a) Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Fiscal Jefe de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, y el Jefe de la Secretaría Técnica.

Recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación precisamente por establecer disposiciones internas que le permitan concentrar la persecución penal en los crímenes más graves y representativos[740]. Según el informe "*la Alta Comisionada reconoce los esfuerzos desplegados por el Fiscal General para introducir estrategias innovadoras en la investigación de los casos de violaciones graves y de los derechos humanos, dando prioridad al procesamiento de las prácticas generalizadas y sistemáticas y adoptando elementos de las estrategias procesales practicadas en los tribunales internacionales*." [741]

A continuación, se hará referencia a los parámetros a partir de los cuales se evalúa la priorización de casos y situaciones, con base en los criterios establecidos por la Fiscalía General de la Nación.

[739] Fiscalía General de la Nación, Directiva 0001 de 4 de octubre de 2012, "Por la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación".
[740] Directiva No.0001 de 2012."Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de Gestión de aquéllos en la Fiscalía General de la Nación".
[741] Informe Anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. (A/HRC/22/17/Add.3*). Enero 7 de 2013

3.1 Criterio subjetivo

El criterio subjetivo de priorización, a la luz del principio constitucional de igualdad material cuyo mandato exige otorgar un trato igual entre iguales y desigual entre desiguales, busca tomar en consideración las calidades particulares de las víctimas y victimarios de las conductas delictivas.

De acuerdo a esto, se pretende valorar entre otros, si las víctimas de una conducta delictiva pertenecen a determinado grupo étnico, si fueron seleccionadas por sus victimarios de acuerdo a su género y/o minoría de edad, si fueron atacadas por defender los derechos de determinada comunidad, si la acción delictiva se desplegó en contra de alguna comunidad con el propósito de despojarla de sus tierras, o si, el ataque se dirigió a ciertos funcionarios públicos que investigaban la comisión de crímenes internacionales.

Adicionalmente, el número de víctimas puede ser tomado en cuenta, pero no como criterio prevalente. Así, un elevado número de víctimas puede ser importante al momento de determinar un ataque masivo contra la población civil, de acuerdo al elemento material que caracteriza los crímenes de lesa humanidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que en todo caso, un acto de violencia realizado contra una única víctima puede evidenciar la existencia de un plan, así como el carácter sistémico del ataque. Incluso, en los casos en los cuales los delitos no son cometidos por organizaciones delictivas, la calidad de la víctima debe ser valorada en especial, si se trata de un sujeto de especial protección constitucional.

Por otra parte, como se señaló, en virtud del criterio subjetivo se debe considerar la calidad del victimario a afectos de identificar a los máximos responsables y sus colaboradores en los términos señalados en la citada directiva. Este elemento de análisis, como se ha demostrado, cuenta con consenso en la doctrina y en la práctica de los tribunales internacionales.

A la luz del criterio analizado, se debe indagar siempre la calidad del autor que está relacionado la comisión de los crímenes. Al respecto, resulta pertinente resaltar que una persona que haya ocupado un mando medio la organización criminal puede, por su calidad, haber tenido un mayor control sobre el aparato, en la comisión de delitos específicos. Teniendo en cuenta hipótesis como esta, la Fiscalía ha señalado que este criterio debe ser articulado con criterios complementarios – a los cuales se hará referencia posteriormente-, como por ejemplo, el factor regional, con el fin de determinar la calidad de los autores ya sean superiores jerárquicos, o máximos responsables. En este sentido, se deberá tener en cuenta quiénes han ocupado la primera, segunda o tercera línea en la

actuación, considerando que solo aquellos ligados a la primera línea, pueden haber tenido dominio evidente sobre el hecho.

Este criterio resulta igualmente aplicable para aquellos casos en los que se investigan organizaciones delictivas, responsables de la comisión de delitos ordinarios. Ahora bien, cuando se trata de delitos perpetrados de forma aislada el criterio subjetivo se aplica teniendo en cuenta, entre otros, las especiales condiciones de superioridad del victimario y la existencia de vínculos de subordinación.

3.2 Criterio objetivo

El criterio objetivo de priorización se centra en el análisis de la conducta delictiva. No se trata de hacer un listado de los delitos del código penal que resultarán priorizados, al contrario este factor busca determinar: i) la gravedad de la conducta criminal, y ii) su representatividad.

Así, la gravedad de las conductas delictivas debe valorarse teniendo en cuenta: i) el grado de afectación en el disfrute de los derechos fundamentales o de bienes jurídicos protegidos sufridos por una víctima o una comunidad; y ii) la modalidad de ejecución.

En lo que se refiere a la representatividad, este factor busca que el aparato judicial investigue un conjunto complejo de hechos y conductas que den cuenta de dinámicas específicas en la comisión de los crímenes. Este criterio ofrece entre otros, resultados de carácter simbólico, fundamentales en contextos transicionales. En efecto, en dinámicas de comisión de crímenes como la colombiana, las conductas delictivas han estado rodeadas de rituales de terror, actos simbólicos de degradación de la dignidad y elementos míticos ligados a las vivencias de las víctimas y de las comunidades.

En esta medida, la priorización que se realiza con base en el criterio objetivo –siempre en articulación con los demás-, debe dar cuenta de estos rituales y escenarios de horror para lograr develar la verdad sobre los hechos y evitar su repetición. Esta estrategia de investigación busca así mismo que la sociedad tome consciencia de los hechos que han ocurrido en su interior.

Se parte entonces de reconocer que en contextos transicionales el papel del derecho penal puede ser limitado frente a las dinámicas masivas de comisión de crímenes, por lo cual el ejercicio del mismo debe cumplir una función de ilustración frente a la simbología del horror respecto a los crímenes cometidos.

A partir de lo anterior, se busca articular la verdad judicial con la verdad histórica.

3.3 Criterios complementarios

Además de los criterios anteriormente señalados, la Fiscalía General de la Nación estableció criterios complementarios que deben ser estudiados al momento de realizar el test de priorización, a saber:

Factibilidad: Implica la evaluación de la información disponible sobre la conducta punible en relación con la probabilidad de encontrar la información faltante. Para este fin se debe tener en cuenta entre otros, el tiempo transcurrido desde la comisión de la conducta valorando si es posible encontrar más información al respecto.

Viabilidad: Hace referencia a la capacidad económica, de cooperación y logística de la cual se dispone. Específicamente, implica la evaluación de los recursos humanos, de tiempo, de despliegue territorial y materiales, necesarios para la investigación de la conducta delictiva en cuestión. Este criterio obedece al principio de realidad, a la luz del cual se pretende valorar si, como consecuencia de las más diversas circunstancias respecto de hechos puntuales, o bien resulta imposible reconstruir un caso, o bien no es viable recaudar las pruebas e incluso, no es posible ubicar testigos reales.

Ahora bien, la aplicación de este factor debe ser compensada con la estrategia global que subyace a la priorización, es decir, la investigación concentrada en los aparatos organizados de poder que actuaron en contextos complejos.

Sometimiento del caso a la justicia internacional: Bajo este criterio se analiza si el caso en cuestión está siendo conocido por un sistema internacional de protección de los derechos humanos o si hace parte del examen preliminar que viene adelantando la Corte Penal Internacional sobre Colombia. Al ser un criterio complementario, su implementación será examinada conjuntamente con los demás criterios.

Riqueza didáctica: Busca analizar la capacidad que tiene un caso concreto para generar buenas prácticas de investigación, y persecución, así como jurisprudencia que promueva valores y principios fundamentales de la justicia. Los insumos que se obtienen del análisis expuesto sirven de base para proponer reformas judiciales y legislativas para prevenir la impunidad.

Regionalización: De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, este factor de análisis además de ser un criterio complementario, debe entenderse como un marco y condición general de aplicación de los criterios antes expuestos. Efectivamente, busca reforzar la elaboración de contextos y visibilizar los delitos cometidos en zonas geográficas específicas, así como las estructuras que los perpetraron. Del mismo modo, permite diferenciar delitos, dinámicas de actuación, y formas culturales, simbólicas y míticas en la comisión de las conductas. En este sentido, permite ampliar el contenido del criterio subjetivo.

4. Conclusiones

i) La racionalización de la acción penal ha sido un mecanismo utilizado tanto por tribunales domésticos como internacionales con la finalidad de efectivizar la administración de justicia en contextos de normalidad y de transición;

ii) A la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados están obligados a investigar con debida diligencia las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de su jurisdicción, utilizando los medios que tengan a su alcance;

iii) De acuerdo a la Corte Interamericana, la investigación debe estar dirigida a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho de la sociedad en su conjunto de conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en su interior;

iv) Específicamente, en contextos complejos de graves violaciones a los derechos humanos, la investigación debe partir de una visión comprehensiva de los hechos que tenga en cuenta las causas de los mismos, el contexto en el cual tuvieron lugar, las estructuras y aparatos de macrocriminalidad que los generaron, los patrones de actuación conjunta y las diversas formas de participación relacionadas con éstos;

v) Concretamente, en desarrollo de procesos de transición de conflicto armado a la paz, el tribunal interamericano ha reconocido la importancia de analizar las obligaciones internacionales de los Estados a la luz no solo de los estándares internacionales de derechos humanos, sino también, frente a los acuerdos en materia de justicia a los cuales ha llegado la sociedad de la cual se trate;

vi) De acuerdo a lo anterior, en contextos de transicionalidad como los anteriormente mencionados, la Corte ha reconocido la convencionalidad de diversos instrumentos que flexibilizan el ejercicio de la acción penal con el fin de promover el logro de la paz y el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar al interior de una sociedad. En este punto, la Corte ha reconocido incluso la posibilidad de emitir leyes de amnistía siempre y cuando se garantice en el Estado del que se trate, la investigación de los crímenes internacionales;

vii) En este sentido, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana, y a la luz de la practica de tribunales domésticos e internacionales, los mecanismos de racionalización de la acción penal cumplen con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia;

viii) Ahora bien, específicamente en lo que se refiere al mecanismo de priorización de la investigación penal –como herramienta de racionalización de la acción penal-a partir de la concentración de la misma en la identificación de los máximos responsables y patrones de criminalidad, y en el esclarecimiento de los crímenes más graves; existen diversos ejemplos de prácticas a nivel internacional que evidencian que en contextos de violaciones sistemáticas y/o masivas a los derechos humanos, ante la necesidad de poner fin a las hostilidades y buscar una finalización pacífica del conflicto, estas herramientas son efectivas e incluso necesarias. En este mismo sentido se han pronunciado organismos internacionales y doctrinantes expertos en la materia;

ix) Los criterios de priorización establecidos por la Fiscalía General de la Nación son coherentes con las prácticas internacionales descritas y específicamente, con los deberes concretos que se deben cumplir a la luz de las obligaciones internacionales en contextos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos frente a los cuales se busca llegar a acuerdos políticos que permitan el logro de la paz y la no repetición de las hostilidades.

x) De acuerdo a lo anterior, los mecanismos de racionalización de la acción penal que ha implementado el Estado colombiano en el marco del proceso de transición que adelanta, se adecuan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y cumplen a

cabalidad con las obligaciones internacionales del Estado de respetar y garantizar integralmente el derecho de acceso a la justicia, en sus componentes de verdad, justicia y reparación.

C. El Estado ha garantizado el seguimiento de líneas lógicas de investigación en el marco del proceso penal ordinario

La Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas afirman que en el marco del proceso penal ordinario no se siguieron líneas lógicas de investigación orientadas a la determinación de una eventual participación de agentes estatales en los hechos del caso. Específicamente la Comisión señala que "a pesar de los elementos mencionados previamente, durante el proceso no se siguió una línea de investigación efectiva que estuviera destinada a vincular a todas las personas responsables, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas[742]".

En el mismo sentido los representantes de las víctimas afirman que "[a]simismo, a lo largo de la investigación fueron surgiendo elementos probatorios importantes que podrían haber sido piezas claves para descifrar lo ocurrido, identificar a los responsables y encontrar el paradero de las víctimas. Sin embargo, muchas de estas líneas de investigación no fueron perseguidas por las autoridades a cargo de las investigaciones, evidenciando así la ausencia del impulso procesal diligente que es exigido por la Convención Interamericana para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos"[743].

Al respecto, el Estado demostrará que contrario a lo afirmado por la CIDH y por los representantes, desde el inicio del proceso ordinario se han seguido líneas de investigación con el objeto de establecer si existió participación de agentes estatales en los hechos. Para tal fin, se referirá a la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con la materia y resaltará algunos de los elementos probatorios que obran en el proceso que evidencian la línea de investigación seguida por la Fiscalía.

La Corte Interamericana ha señalado que "en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones a los derechos humanos se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación"[744]. En el caso concreto, desde el inicio de la investigación y a partir

[742] CIDH, Informe No. 85/13, Caso 12.251, Admisibilidad y Fondo, Vereda La Esperanza, 4 de noviembre de 2013, párr. 257.
[743] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pág. 155.
[744] **Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, párr. 101**; cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El

de la información allegada por las víctimas y aquella acopiada en las etapas preliminares, las autoridades encargadas de la investigación han realizado numerosos diligencias con la finalidad de esclarecer la responsabilidad de agentes estatales frente a los hechos de caso.

En efecto:

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.[745]

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina.[746]

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede del Batallón Héroes de Barbacoa.[747]

- El 23 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede de la Base Militar la Piñuela.[748]

- El 11 de diciembre de 1996, se ordenó el traslado de algunas piezas procesales que reposan en el expediente disciplinario.[749]

- El 20 de Marzo de 1997, se presentó un informe en el cual se señalan las labores que se han realizado con la finalidad de ubicar al Mayor Guzmán Lombana[750].

- El 31 de octubre de 1997 se citó a declarar al Mayor Guzmán Lombana sobre la Operación Rayo, la entrega de Irene Gallego a la Fiscalía y las operaciones de la Fuerza de Tarea Águila[751].

Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 146.

[745] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 95
[746] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 97
[747] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 200
[748] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 190
[749] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 91
[750] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 1. Folio 188
[751] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 7

- El 19 de noviembre de 1997, se ordenó diligencia de inspección judicial en los archivos del Ejército Nacional, con el fin de contar con la información del personal de Oficiales, Suboficiales y soldados de dicha institución, que integraban la Base de la Piñuela para la época de los hechos –segundo semestre de 1996-. Se ordenó también inspección judicial al expediente disciplinario adelantado por los mismos hechos.[752]

- El 28 de noviembre de 1997, se solicitó información sobre los oficiales del Ejército Nacional: Capitanes González y Vera, Mayores Hernández y Abondano, Coronel Bautista y el Teniente Blandón.[753]

- El 3 de diciembre de 1997, se ordenó realizar diligencia de inspección judicial al Comando General de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el fin de obtener información sobre el personal adscrito al Batallón Grupo Mecanizado Juan del Corral, el cual tiene área de operaciones en la zona del Carmen de Viboral.[754]

- El 4 de diciembre de 1997, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre el personal de soldados voluntarios que se encontraban en la zona.[755]

- El 6 de marzo de 1998, se ordenó, entre otras, inspección judicial al Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, declaraciones y reconocimientos fotográficos.[756]

- El 26 de marzo de 1998 fue llamado a declarar el Mayor Guzman Lombana con el fin de que aportara los datos de quienes ostentaban el mando en la base militar "La Piñuela"[757].

- En el mes de mayo de 1998 se aportó un listado del personal del Batallón "Héroes de Barbacoa" que prestó servicio en la Base Militar La Piñuela entre marzo y agosto de 1996[758]. Asimismo, un listado del personal integrante de la FTA que prestó servicio en la Estación de Policía de Cocorná entre 1996 y 1997[759].

[752] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 11
[753] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 36
[754] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 48
[755] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 92
[756] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 96
[757] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 2. Folio 118.
[758] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 3. Folio 107.
[759] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 3. Folio 61.

- En el mes de julio de 1998 fueron citados a declarar los Mayores del Ejercito Jairo Hurtado Olaya[760] y Hugo Abondano[761].

- El 1 de febrero de 1999, se expidió Informe de Misión 00248 por la Sección de Investigaciones de la División Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación en el cual se hace referencia entre otros, a investigaciones realizadas con la finalidad de determinar las disposiciones normativas que dieron origen a la Fuerza de Tarea Águila, las razones que motivaron su creación, los objetivos que persiguió, el tiempo en el que tuvo vigencia, su conformación, y la georreferenciación de las tropas para los días 21, 22, 26, y 27 de junio y 7 y 9 de julio de 1996. Así mismo, señala documentos en los que se hace referencia a los daños que habría sufrido la casa de Jose Eliseo Gallego Quintero, y finalmente a obtener evidencias sobre las heridas en combate que habría sufrido el Capitán González.[762]
- El 31 de mayo de 1999 se obtuvo información sobre el personal integrante de la FTA[763]

- En el mes de junio de 1999 también se realizaron inspecciones judiciales en la dirección regional de fiscalías[764], en el batallón de contraguerrillas "Héroes de barbacoa"[765], en las oficinas de la IV brigada[766] y en los archivos del Ejercito para determinar ubicación y datos del personal que perteneció a la FTA[767] y así mismo se realizó un informe con respecto al avance del proceso[768].

- En el mes de julio de 1999 se practicó inspección judicial a la indagación preliminar 117 adelantada en la IV Brigada del Ejército Nacional[769] y al Batallón "Granaderos"[770].

- El 7 de septiembre de 1999 se practicó inspección judicial en la Primera División del Ejército Nacional[771] y se recibió testimonio del Coronel Enrique Bernal Parada[772].

[760] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 3. Folio 47.
[761] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 3. Folio 65.
[762] Cuerpo Técnico de Investigación. División de Investigación. Sección de Investigaciones, Grupo Derechos Humanos. Misión de trabajo No. 03383. 1 de febrero de 1999
[763] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 21.
[764] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 104.
[765] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 92.
[766] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 215.
[767] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 25.
[768] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 87.
[769] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 67.
[770] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 4. Folio 68.
[771] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 5. Folio 51.
[772] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 5. Folio 51.

- En el mes de octubre de 1999, mediante inspección judicial, se obtuvieron las hojas de vida del personal perteneciente a la FTA[773].

- El 11 de agosto de 2000 se practicó inspección judicial en el archivo general del Ministerio de Defensa[774].

- Entre el 14 y el 28 de Noviembre de 2000 se realizó inspección judicial al archivo general del Ministerio de Defensa[775]; al proceso de radicado No.008-010799-98[776]; al Batallón no. 42 "Héroes de Barbacoa"[777]; al Batallón Pedro Nel Ospina[778]; a los informes de inteligencia de los años 1994, 1995 y 1996[779]; al Batallón no. 4 "Granaderos"[780]; a la oficina de personal de la IV Brigada[781]; a la oficina de inteligencia B2 de la IV brigada[782]; a la sede de la Brigada XIV[783]; a la sección de inteligencia de la IV brigada del Ejército[784]; y a las órdenes de operaciones expedidas por la IV Brigada[785].

- El 20 de febrero de 2001, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre las unidades militares a las que pertenecieron el Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana y el Mayor Luis Fernando Rojas Espinosa, entre 1994 y 1996[786].

- El 5 de marzo de 2001, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre las hojas de vida del Teniente Coronel Jairo Enrique Hernández Alonso, Mayor Nelson Vera Salamanca, Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas, Mayor Cesar Augusto Cárdenas González.[787]

- El 29 de julio de 2002, se identifica la ubicación del Coronel Carlos Arturo Bustamante, Mayor Jairo Leguizamón, Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas, Teniente José Luis Agudelo, con el fin de citarlos a rendir diligencia de declaración.[788]

[773] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 5. Folio 55 -110.
[774] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 5ª. Folio 1.
[775] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio.
[776] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio.
[777] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6.Folio 83.
[778] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 101.
[779] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 136.
[780] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 145.
[781] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 146.
[782] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 147.
[783] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 242.
[784] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 140.
[785] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 6. Folio 141.
[786] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 1
[787] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 4
[788] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 109

- El 27 de septiembre de 2002, se adelantó declaración del Coronel Carlos Arturo Suárez Bustamante.[789]

- El 3 de diciembre de 2002, se solicitó practicar interrogatorio al Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas y al Capitán José Luis Agudelo Jaimes.[790]

- El 21 de enero de 2008 se practicó una diligencia con la finalidad de establecer si en el Base Militar La Piñuela había estado un mayor de apellido Hernández[791]

- El 11 de junio de 2011 se dispone librar misión de trabajo al investigador asignado del CTI a fin de verificar por los medios pertinentes, quién o quiénes eran los comandantes del Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército que hacían parte de la IV brigada, para el año de 1996, y determinar que militares se encontraban bajo el mando del Mayor JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ ALONSO en la base militar la piñuela del municipio de Cocorná en el mes de junio del año de 1996[792].

- El 9 de octubre de 2012 se ordenó llamar a declarar al entonces Comandante de la XIV brigada del ejército, Brigadier General Carlos Vargas Forero, así como la práctica de inspección judicial a la sede del Comando de la Brigada XIV a fin de averiguar la fecha y hora en la cual se trasladó el BG Vargas Forero a la base militar de la Piñuela, al parecer el día 25 de junio de 1996[793].

- El 3 de septiembre de 2014, se ordenó Identificar plenamente y ubicar el lugar de facción o de residencia del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional que para la época de los hechos prestaban sus servicios en jurisdicción de los municipios de El Carmen de Viboral y San Vicente de Cocorná (Antioquia); determinar la situación personal actual del Mayor Jairo Enrique Hernández Alonso quien estuvo como Comandante de la Fuerza de Tarea Águila en el año 1994; y buscar información respecto de los integrantes de la Policía Nacional Álvaro Gómez de los Ríos, Jesús Enrique Real Osorio, Edilberto Bolanos Ardila, Jorge Sarmiento Mejía, y Jonnier Hoyos Bucheli[794]

[789] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 125
[790] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 140
[791] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 12. Folio 7-10.
[792] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 13. Folio 232 a 236
[793] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 14. Folio 32
[794] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno 15. Folio 175 a 177.

De acuerdo a lo señalado se puede afirmar que en el marco del proceso penal desarrollado en la jurisdicción ordinaria, se ha garantizado el seguimiento de líneas lógicas de investigación encaminadas a esclarecer la actuación de agentes estatales. En este sentido, el Estado le solicita respetuosamente a la H. Corte que declare que ha cumplido con el deber en cuestión.

D. EL ESTADO COLOMBIANO INVESTIGÓ LOS HECHOS DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO PENAL VIGENTE PARA LA ÉPOCA EN QUE ÉSTOS OCURRIERON, OBSERVANDO ADEMÁS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE DERECHO INTERNACIONAL

A continuación, el Estado se pronunciará sobre la argumentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de los representantes de las víctimas, según la cual en el presente caso existió una "inadecuada" calificación de las conductas punibles, porque en su sentir "(…) pese a estar tipificado en el derecho colombiano vigente a la época de los hechos, el delito de desaparición forzada no ha sido utilizado en las investigaciones internas, que han sido llevadas por los delitos de secuestro (…)"[795].

En ese orden de ideas, el presente acápite tiene por objeto demostrar que las afirmaciones de la CIDH, y de los ilustres peticionarios, carecen de sentido, toda vez que para el año de 1996, época en la cual ocurrieron los hechos del caso bajo estudio, la legislación penal colombiana no tenía tipificado el delito de desaparición forzada. De igual forma, el Estado demostrará que independientemente del nomen iuris de la conducta que dio inicio a la investigación, la Fiscalía General de la Nación siempre ha tenido en cuenta como posible hipótesis, la eventual participación de agentes estales. Finalmente, el Estado informará a la Honorable Corte, sobre la readecuación típica de la conducta penal investigada –en sede ordinaria y en la Jurisdicción de Justicia y Paz-.

Sin perjuicio de lo anterior, y como quiera que en el presente apartado se abordará únicamente lo concerniente al alegato de la tipificación de las conductas penales, debe aclararse que la información respecto al desarrollo y contenido mismo de las investigaciones adelantadas, fue tratado en el capítulo correspondiente[796].

Para esos efectos, las alegaciones que sobre estos aspectos presentará el Estado, se estructurarán de conformidad con la siguiente línea argumentativa: **1.** el principio de legalidad; **2.** la técnica de la legalidad flexible; **3.** el código

[795] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 16
[796] Supra pág. 109.

penal vigente para la época de los hechos; y **4.** la observancia del principio de legalidad en el caso concreto.

1. El principio de legalidad en el derecho penal

Como es de conocimiento de la Honorable Corte, una de las garantías que estructuran el debido proceso es el principio de legalidad, cuyo contenido esencial atiende a la prohibición de la ley *ex – post facto*, lo que significa la imposibilidad de que las leyes sancionen conductas cometidas con anterioridad a su promulgación. En ese orden de ideas, el principio de legalidad ha sido concebido desde una doble perspectiva: por un lado, como una garantía para que las personas solamente sean juzgadas de conformidad con leyes preexistentes al acto que les imputa; y, por otro, como un límite al poder punitivo del Estado, quien solamente podrá tipificar como delito, aquello que el legislador haya catalogado como tal.

Al respecto, la máxima *"nullum crimen, nulla poena sine lege praevia"*, resume el andamiaje que existe detrás del principio de legalidad, dentro del cual se encuentran axiomas del derecho penal que imprimen seguridad dentro de un ordenamiento jurídico. Así, al hablar del principio de legalidad, de contera se hará alusión a las características de la ley penal: previa, estricta, escrita y cierta, como quiera que por medio de ésta se afectan garantías individuales, y por consiguiente deberá exigírsele al legislador ser sumamente cuidadoso con la expedición de este tipo de normas.

En el ordenamiento jurídico colombiano, el principio de legalidad se encuentra regulado en el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política, norma en la que se lee: "(…) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (…)".

De otro lado, y en coherencia con los postulados de un Estado Social de Derecho, en Colombia solamente la rama legislativa, en cabeza del Congreso de la República, tiene la facultad de expedir leyes, por medio de las cuales se tipifiquen conductas como delito. Para esos efectos, dichas leyes deberán definir los supuestos de manera clara, expresa, estricta, escrita, inequívoca e indubitable. Asimismo, y atendiendo a los mismos lineamientos, deberá señalar la consecuencia jurídica a cada uno de los supuestos fácticos, estableciendo el trámite que se debe observar a lo largo de todo el proceso penal[797].

[797] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 29772. M.P. Augusto Ibáñez. Sentencia de 17 de septiembre de 2008. Pág. 15

En desarrollo de estas garantías, la Honorable Corte Constitucional colombiana ha señalado que el legislador deberá: "(i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas, (ii) señalar anticipadamente las respectivas sanciones, así como (iii) la definición de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo ello en aras de garantizar un debido proceso"[798].

De conformidad con lo anterior, se tiene que el principio de legalidad, en materia penal, comporta varios elementos que la doctrina especializada reconoce como "los principios legalistas que rigen el derecho penal": *nullum crimen sine praevia lege*: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; *nulla poena sine praevia lege*: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; *nemo iudex sine lege*: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; *nemo damnetur nisi per legale indicum*, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal[799].

En síntesis, la Honorable Corte puede constatar que el principio de legalidad en Colombia es de rango constitucional y en ese sentido se armoniza con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[800], así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos[801], instrumentos que hacen alusión a la preexistencia de los delitos y de sus respectivas sanciones.

2. "Legalidad flexible" como mandato del derecho internacional y su cumplimiento en el derecho colombiano.

Se ha venido diciendo en el presente acápite que el principio de legalidad proscribe la sanción de conductas que no estaban tipificadas como delito para la fecha en la que éstas fueron cometidas, lo que significa que en virtud de dicho principio no es posible aplicar retroactivamente la ley penal.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que algunas conductas y comportamientos han sido condenados por la comunidad internacional, aun cuando éstos no se encuentran tipificados como delito en las legislaciones internas, ha sido necesario ampliar el espectro y alcance del principio de legalidad, de tal manera que se pueda proceder con la investigación, enjuiciamiento y sanción de conductas que al momento de cometerse no configuraban delito alguno, pero que sí lo era para la comunidad internacional;

[798] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-444/11. M.P. Juan Carlos Henao. Sentencia de 25 de mayo de 2011.
[799] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-444/11. M.P. Juan Carlos Henao. Sentencia de 25 de mayo de 2011.
[800] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 15.
[801] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 9.

en otras palabras, aplicar retroactivamente la ley penal, en aquellos casos en los que se trata de delitos con trascendencia internacional.

Fue por esta vía, que las atrocidades cometidas en la segunda guerra mundial, tipificadas después como crímenes de lesa humanidad, no tenían una regulación penal al momento de su comisión y ello no impidió que sus responsables fueran sancionados. Siguiendo con esta línea, la comunidad internacional encontró que era posible sancionar este tipo de conductas, sin necesidad de contrariar el principio de legalidad, siempre y cuando al momento de la comisión, ese hecho ya fuera considerado delito por el derecho internacional, morigerando así los efectos de lo sucedido en los Tribunales de Núremberg.

Desde esa perspectiva, la comunidad internacional, en su afán de reprimir la impunidad, a través de las herramientas que le ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha logrado restringir los efectos del principio de legalidad, al punto de formular un nuevo estándar, que podría resumirse de la siguiente forma[802]:

> "(…) la ausencia de tipos penales nacionales para reprimir un crimen bajo el derecho internacional no se puede invocar por un Estado para no cumplir con su obligación de juzgar y castigar a los autores de este ilícito, si al tiempo de su comisión ya era delito bajo el derecho internacional o considerado delictivo según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional[803]."

En vista de lo anterior, y con el único fin de combatir la delincuencia y enfrentar una lucha seria en contra de la criminalidad, ha sido necesario articular los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos internos, de manera que a través de éstos se pueda ejercer la acción penal, y con ella la persecución de los responsables de conductas condenadas por el derecho internacional, muy a pesar de que no ocurra lo mismo en las legislaciones domésticas.

> "(…) Por ello, en tratándose de crímenes internacionales la legalidad supone la integración de los tratados internacionales a los sistemas jurídicos domésticos con plenos efectos como ley previa para hacer viable su sanción, así los mismos no estuvieran formalmente tipificados en la legislación nacional al momento de su comisión."[804]

[802] GIZ. Derechos de las víctimas y de los postulados: tensiones en el proceso de Justicia y Paz. CARDONA CHÁVEZ, Juan Pablo. Pág. 34
[803] Comisión Internacional de Juristas. Impunidad y graves violaciones de Derechos Humanos. Guía para profesionales No. 3, 2008. Pág. 133
[804] VELÁSQUEZ, Fernando. La flexibilidad del principio de legalidad y los crímenes que agravian a la humanidad.

Esa flexibilidad del principio de legalidad ha sido objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que como se demostrará, avala dicha flexibilización, en coherencia con lo dicho en el párrafo anterior, recogiendo así postulados propios del derecho internacional, en aras de incorporarlos al ordenamiento interno, no por capricho, sino porque el contexto y las circunstancias lo exigían, con el único fin de proteger y garantizar bienes jurídicos, de los cuales es titular la humanidad.

Así las cosas, el Alto Tribunal colombiano entiende que "[s]e replanteó, en función de la protección de la comunidad orbital, la dogmática del derecho penal internacional, y se redefinió el principio de legalidad."[805]

Desde esa perspectiva, la Corte Suprema de Justicia, siguiendo la línea trazada por los instrumentos internacionales, procedió con el juzgamiento de comportamientos que si bien no se encontraban tipificados para el momento de su comisión, nada impedía sancionar a sus responsables, toda vez que por su trascendencia y repercusión, aunado a la categoría de delitos que tenían en el escenario internacional, configuraban razones suficientes para justificar su sanción, máxime cuando los instrumentos internacionales así lo disponían:

> "Artículo 15.
> 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
> 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional."[806]
> Por su parte, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos establece:
> "Artículo 7. No hay pena sin ley.
> 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
> 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su

[805] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 33039. Pág. 26
[806] Organización de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.

comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas."[807]

Por esa vía, la Corte Suprema de Justicia reconoció que los tratados internacionales configuran una fuente del derecho penal doméstico, con independencia de la ley que lo adopte y lo concrete, razón por la cual las conductas contenidas en dichos instrumentos, podrán ser punibles desde la fecha en la que el tratado entró en vigencia, y por consiguiente se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano. [808]

Sobre este punto es importante recalcar que:
"(…) conforme al Bloque de Constitucionalidad establecido mediante los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, que otorga una prevalencia superior a los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico interno de nuestro país debe adecuarse a los principios que, se ha predicado, son de carácter internacional y que orientan las políticas en materia de protección de derechos humanos y sanción por sus violaciones a través de las instituciones estatales establecidas para tal fin, no puede desconocerse que hace varias décadas existen normas internacionales que han definido cuál debe ser la forma de proceder por parte del Estado Colombiano respecto de lo que se ha referido. En este entendido, no puede ser aceptable que por, la negligencia o dificultad legislativa en promulgar leyes internas que se hubiesen adecuado a dichos derroteros, se pretenda desconocer que a nivel internacional, previo a dicho trámite, ya se había proscrito la comisión del genocidio y se le había categorizado como un crimen atroz desconocedor de la humanidad, así como que su investigación puede hacerse en cualquier tiempo y, en razón de ello, no aplican reglas ni términos de prescripción respecto del ejercicio de la acción penal, civil o administrativa. (…)"[809].

Así las cosas, por medio de la legalidad flexible se evita caer en reduccionismos legalistas o –si se quiere- en formalidades, que deberán ser desestimadas por el juez en aquellos eventos en los cuales la trascendencia del delito y su impacto en la comunidad internacional, conminan al funcionario a ceder terreno en materia de legalidad. Será solamente por esta vía, que los Estados puedan hablar en verdaderos términos de justicia material, aun cuando ello implique la configuración de una excepción a la aplicación -a raja tabla- del multicitado principio de legalidad.

[807] Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950.
[808] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 33118
[809] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 33118

Bajo ese entendido, La Honorable Corte no podrá perder de vista que se trata entonces de una excepción a la regla general que por consiguiente no tiene aplicación en cualquier caso; por el contrario, su procedencia deviene como resultado de un análisis cuidadoso y responsable por parte del operador judicial, quien como se demostró líneas atrás, deberá acudir a principios, normas y jurisprudencia de derecho internacional, en aras de determinar si las conductas investigadas se encuadrarían dentro de los llamados "delitos internacionales", caso en el cual estará facultado para aplicar un criterio flexible respecto de la legalidad. Al respecto sostuvo la Corte Suprema de Justicia:

> "Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad al principio de legalidad es atendible exclusivamente a las cuatro categorías de los llamados delitos internacionales, vale decir a los crímenes de genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario."[810]

De conformidad con lo previamente expuesto, la Honorable Corte Interamericana puede evidenciar que el ordenamiento jurídico colombiano ha dado estricto cumplimiento a los estándares internacionales en materia de juzgamiento y sanción de los delitos que tienen una connotación internacional, cumpliendo así con las obligaciones contenidas en los instrumentos ya referidos, y al mismo tiempo, garantizando justicia material en cada caso concreto.

En ese orden de ideas, el "mandato" que se le impone a los Estados, respecto de los delitos internacionales, con independencia de lo que sobre la materia legislen sus órganos respectivos y dispongan las normas correspondientes en sus cuerpos normativos, ha venido siendo observado de manera rigurosa por Colombia, lo cual se desprende de la jurisprudencia citada.

3. El Código Penal colombiano y la tipificación del delito de desaparición forzada

Teniendo claro el marco teórico – normativo del principio de legalidad, a continuación se demostrará que si bien las investigaciones adelantadas en el presente caso, a pesar de recaer sobre conductas que en principio fueron tipificadas bajo el delito de secuestro, ello no impidió que se orientaran a esclarecer la desaparición de las víctimas.

Para esos efectos, el Estado se permitirá hacer énfasis en aquellos asuntos temporales, sobre los cuales es importante que esta Distinguida Corte concentre

[810] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 33039. Pág. 34

su atención, toda vez que será a partir de éstos que se determine si en efecto, como lo plantean los ilustres representantes y la Honorable Comisión, la Fiscalía no investigó los hechos por el delito de desaparición, pudiéndolo haber hecho en el año 1996[811], época en la que ocurrieron los hechos.

3.1 Los fiscales de Colombia están sometidos al imperio de la ley.

En vista de lo anterior, el Estado se permite informarle a este respetado Tribunal, que para el año de 1996 en el ordenamiento jurídico colombiano se encontraba vigente el Código Penal adoptado mediante el Decreto 100 de 1980, cuya vigencia se remontó hasta el 23 de julio de 2001.

Así, el Decreto 100 de 1980 consagraba en el Libro Segundo, Título X, los "delitos contra la libertad individual y otras garantías", tipificando como delito el secuestro y la detención arbitraria. En dicho cuerpo normativo, contrario a lo que sorpresivamente sostienen los ilustres peticionarios, la desaparición forzada no se encontraba tipificada como delito y, bajo ese entendido, no podría ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Con posterioridad se expidió la Ley 599 del año 2000, por medio de la cual se derogó el Decreto 100 de 1980, así como todas las demás normas que lo modificaron y complementaron, y se adoptó el nuevo Código Penal colombiano, cuya vigencia comenzó a partir del 24 de julio del año 2001.

Con la entrada en vigencia de este nuevo marco normativo, comenzaron a sancionarse conductas que el Decreto 100 no tipificaba como delitos, incluyendo dentro de éstas la desaparición forzada. Así las cosas, se incluyó dentro de los "delitos contra la libertad individual y otras garantías", el capítulo primero denominado "de la desaparición forzada", en cuyo artículo 165 se estatuye:

> "El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

[811] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 163

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior"

Un año más tarde, el 5 de agosto de 2002, el Estado colombiano ratificó el Estatuto de Roma, instrumento que en su artículo 5 consagra los delitos "más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto", y sobre los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional. Del mismo modo, el 4 de enero del año 2005, el Estado colombiano ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las normas vigentes para la época de los hechos, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación por el delito de secuestro, toda vez que las conductas denunciadas se adecuaban al tipo consagrado en el artículo 269 del Código Penal –Decreto 100 de 1980-, a cuyo tenor se lee: "el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de seis (6) a veinticinco (25) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales. (…)"

Lo anterior es así -y no podría ser de manera distinta-, bajo el entendido que las conductas que fueron denunciadas, encontraban su adecuación típica en lo preceptuado por la norma aludida. En consecuencia, no existía disposición diferente que permitiera efectuar un análisis a la luz de otro precepto normativo, y por lo tanto la actuación de la Fiscalía, además de ser la correcta, fue la jurídicamente procedente.

Debe recordarse que Colombia es un Estado Social de Derecho y por lo tanto sus instituciones y funcionarios se encuentran sometidos al imperio de la ley. Por ello, exigir un comportamiento distinto al que efectivamente tuvieron las autoridades colombianas, sería tanto como provocar o sugerir una actuación jurídicamente reprochable por parte de la Fiscalía General de la Nación, inadmisible desde cualquier punto de vista. Por tanto, adecuar típicamente las conductas al delito de secuestro, no solamente era el único camino que encontraba la Fiscalía, sino además era el que le imponía la norma que lo vinculaba.

3.2 En el año 2009 la representación de las víctimas en el proceso penal solicitó la readecuación típica de la conducta investigada

Mediante escrito de 7 de septiembre de 2009, los ilustres peticionarios solicitaron a la Fiscalía General de la Nación readecuar la "tipificación de los hechos punibles

que se investigan en el curso del trámite procesal"[812]. La solicitud se encuentra sustentada en "nueva consideraciones jurídicas" en virtud de las cuales sería procedente continuar la investigación no por el delito de secuestro, sino por el delito de desaparición forzada.

Las consideraciones jurídicas de los ilustres representantes, se encuentran en la misma línea argumentativa que se ha venido señalando en el presente acápite, esto es, en el marco de los desarrollos normativos y jurisprudenciales que sobre la materia ha tenido el derecho internacional, en la integración de éstos al ordenamiento jurídico interno vía bloque de constitucionalidad, así como también en el principio de legalidad.

En ese orden de ideas, y de conformidad con el planteamiento de los peticionarios, la Honorable Corte podrá percatarse de que en efecto, para el año 1996 las circunstancias y el panorama jurídico era absolutamente diferente del que se comenzó a evidenciar en la primera década del siglo XXI. En consecuencia, le asiste razón a los peticionarios cuando sostienen que para el año 2009 se estaban presentando nuevas consideraciones jurídicas que deberían ser tenidas en cuenta por la Fiscalía, como en efecto sucedió.

Desde esta perspectiva, se corrobora lo que ha venido sosteniendo el Estado colombiano, en la medida en que fueron esas nuevas circunstancias y consideraciones, sustentadas mayormente en el derecho internacional, las que motivaron los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y con ello, las nuevas dinámicas procesales en el derecho penal colombiano. Así, este Tribunal deberá tener en cuenta este conjunto de circunstancias temporales y cronológicas para comprender las razones por las cuales en el año 2011 la Fiscalía General de la Nación, procede con la readecuación típica en sus investigaciones, sin que ello signifique –se insiste- que no se hayan tenido en cuenta líneas de investigación distintas al secuestro como delito tipificado para la época de los hechos.

En síntesis, para finales del año 2009 se presenta la solicitud de readecuación típica por parte de los peticionarios; en el año 2010 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la posibilidad de sancionar conductas que fueron cometidas con anterioridad a su tipificación como delito –legalidad flexible-; y en el año 2011, la Fiscalía adopta la decisión de readecuar la tipificación de las conductas investigadas, como a continuación se describe.

[812] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno No. 12, folio 233 y ss.

3.3 En el año 2010 la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- fijó importantes lineamientos en materia de legalidad.

Por otro lado, el criterio de legalidad flexible analizado *supra* solamente vino a ser acogido por la jurisprudencia colombiana a partir del año 2009, oportunidad en la que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la primera sentencia proferida bajo el procedimiento contemplado por la Ley de Justicia y Paz[813], tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los alcances del principio de legalidad en tratándose de delitos con trascendencia internacional.

No obstante lo anterior, tuvieron que proferirse algunas decisiones por el máximo Tribunal de la Jurisdicción Penal en Colombia, para que finalmente se llegara a una posición más aterrizada sobre la materia. En ese orden de ideas, podría decirse que solamente hasta el año 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[814] decantó su postura respecto del alcance del principio de legalidad, fijando así importantes derroteros que sirven de guía e ilustración tanto para jueces y fiscales, y en general para los intervinientes en un proceso penal, y sobre los cuales el Estado se pronunció páginas atrás.

3.4 En el año 2011, la Fiscalía 80 Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH decidió readecuar la tipicidad de la conducta investigada.

Se ha venido insistiendo en que para la época de los hechos, la Fiscalía no podía adelantar la investigación por el delito de desaparición forzada, no por capricho o razones imputables a la voluntad del fiscal de conocimiento, sino porque así lo disponía el ordenamiento jurídico colombiano, en la medida en que el delito de desaparición forzada no estaba contemplado en la legislación penal.

No obstante, y luego de los avances ya referidos, el fiscal de conocimiento mediante decisión de 21 de junio de 2011, accedió a la solicitud elevada por la representación de las víctimas, ordenando así la readecuación típica de la conducta investigada –secuestro- al delito de desaparición forzada[815].

Sin perjuicio de lo anterior y como se ha venido señalando, a continuación el Estado demostrará que si bien la readecuación típica se llevó a cabo en el año 2011, ello no impidió que desde el mismo inicio de la investigación en 1996, la Fiscalía tuviera en cuenta dentro de sus líneas de investigación la posible participación de agentes del Estado, demostrando así que las actuaciones del

[813] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 31539.
[814] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Rad. No. 33039
[815] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno No. 13, folio 206 y ss.

ente investigador no dependieron, en ningún momento, de la tipificación de la conducta.

4. La investigación adelantada en la Jurisdicción Penal ordinaria, ha tenido en cuenta dentro de sus hipótesis, la posible participación de agentes del Estado.

La Honorable Comisión, en su escrito de sometimiento ante este Tribunal, sostiene que:

> "En el presente caso, aunque el delito de desaparición forzada se encuentra tipificado en el ordenamiento interno, no ha sido utilizado en las investigaciones internas a pesar de la solicitud de la parte civil. Teniendo en cuenta que uno de los elementos que distingue el secuestro de la desaparición forzada de personas es precisamente la participación directa o la aquiescencia de autoridades estatales, la Comisión considera que la calificación inadecuada de los hechos se ha constituido en un factor adicional que, como se indicó previamente (…) ha impedido las investigaciones de los vínculos existentes entre las Autodefensas del Magdalena Medio y la Fuerza Pública y, consecuentemente, la determinación de todos los niveles de responsabilidad"[816]. (Subraya por fuera del texto original)

En concordancia con el dicho de la distinguida Comisión, el Estado considera que en efecto, en derecho internacional, la distinción entre la conducta de secuestro y la de desaparición forzada, radica en que para la configuración de esta última se requiere la participación de agentes estatales, lo que significa que ante la hipótesis de la comisión de esta conducta, necesariamente deberá tenerse como línea de investigación la posible participación de autoridades estatales.

Desde esta perspectiva, la Honorable Corte podrá evidenciar que en el presente caso, aun cuando la investigación en sus inicios se adelantó por el delito de secuestro, la eventual participación de agentes estatales siempre fue tenida en cuenta por parte de la Fiscalía, y en esa medida, el presunto "impedimento" que alega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tiene asidero jurídico alguno.

Así las cosas, el Estado se permite recalcar que el *nomen iuris* no puede ser concebido en el presente caso como un factor determinante en la efectividad de la investigación, toda vez que a lo largo de ésta se han adelantado actuaciones

[816] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Párr. 275

tendientes a dilucidar la posible participación de miembros de la Fuerza Pública, aunado al hecho de que desde los inicios del proceso penal el señor Carlos Alberto Guzmán Lombana, miembro activo del Ejército Nacional de Colombia para la época de los hechos, ha estado vinculado en la investigación.

Con base en lo anterior, procede el Estado a ilustrar a la Honorable Corte sobre algunas de las diligencias que se han venido adelantando en el marco de la investigación que cursa en la Jurisdicción Penal ordinaria –Rad. 233-, las cuales fueron ordenadas con el fin de determinar la posible participación de agentes estatales en los hechos que nos ocupan. De igual manera, se relacionarán algunas de aquellas pruebas que si bien fueron practicadas u ordenadas en el marco de procesos diferentes, como por ejemplo el disciplinario, fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía para nutrir la investigación, veamos:

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.[817]

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina.[818]

- El 22 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede del Batallón Héroes de Barbacoa.[819]

- El 23 de agosto de 1996, la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, adelantó inspección en la sede de la Base Militar la Piñuela.[820]

- El 11 de diciembre de 1996, se ordenó el traslado de algunas piezas procesales que reposan en el expediente disciplinario.[821]

- El 19 de noviembre de 1997, se ordenó diligencia de inspección judicial en los archivos del Ejército Nacional, con el fin de contar con la

[817] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 95
[818] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 97
[819] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 200
[820] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 190
[821] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno anexo 1. Folio 91

información del personal de Oficiales, Suboficiales y soldados de dicha institución, que integraban la Base de la Piñuela para la época de los hechos –segundo semestre de 1996-. Se ordenó también inspección judicial al expediente disciplinario adelantado por los mismos hechos.[822]

- El 28 de noviembre de 1997, se solicitó información sobre los oficiales del Ejército Nacional: Capitanes González y Vera, Mayores Hernández y Abondano, Coronel Bautista y el Teniente Blandón.[823]

- El 3 de diciembre de 1997, se ordenó realizar diligencia de inspección judicial al Comando General de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el fin de obtener información sobre el personal adscrito al Batallón Grupo Mecanizado Juan del Corral, el cual tiene área de operaciones en la zona del Carmen de Viboral.[824]

- El 4 de diciembre de 1997, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre el personal de soldados voluntarios que se encontraban en la zona.[825]

- El 6 de marzo de 1998, se ordenó, entre otras, inspección judicial al Comando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, declaraciones y reconocimientos fotográficos.[826]

- El 1 de febrero de 1999, se expidió Informe de Misión 00248 por la Sección de Investigaciones de la División Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación en el cual se hace referencia entre otros, a investigaciones realizadas con la finalidad de determinar las disposiciones normativas que dieron origen a la Fuerza de Tarea Águila, las razones que motivaron su creación, los objetivos que persiguió, el tiempo en el que tuvo vigencia, su conformación, y la georreferenciación de las tropas para los días 21, 22, 26, y 27 de junio y 7 y 9 de julio de 1996. Así mismo, señala documentos en los que se hace referencia a los daños que habría sufrido la casa de Jose Eliseo Gallego Quintero, y finalmente a obtener evidencias sobre las heridas en combate que habría sufrido el Capitán González.[827]

[822] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 11
[823] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 36
[824] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 48
[825] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 92
[826] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 2. Folio 96
[827] Cuerpo Técnico de Investigación. División de Investigación. Sección de Investigaciones, Grupo Derechos Humanos. Misión de trabajo No. 03383. 1 de febrero de 1999

- El 20 de febrero de 2001, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre las unidades militares a las que pertenecieron el Mayor Carlos Alberto Guzmán Lombana y el Mayor Luis Fernando Rojas Espinosa, entre 1994 y 1996.[828]

- El 5 de marzo de 2001, el Ejército Nacional remitió al expediente penal información requerida sobre las hojas de vida del Teniente Coronel Jairo Enrique Hernández Alonso, Mayor Nelson Vera Salamanca, Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas, Mayor Cesar Augusto Cárdenas González.[829]

- El 29 de julio de 2002, se identifica la ubicación del Coronel Carlos Arturo Bustamante, Mayor Jairo Leguizamón, Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas, Teniente José Luis Agudelo, con el fin de citarlos a rendir diligencia de declaración.[830]

- El 27 de septiembre de 2002, se adelantó declaración del Coronel Carlos Arturo Suárez Bustamante.[831]

- El 3 de diciembre de 2002, se solicitó practicar interrogatorio al Mayor Carlos Mario Jaramillo Vargas y al Capitán José Luis Agudelo Jaimes.[832]

De conformidad con lo previamente expuesto, el Estado ha demostrado que la tipificación de las conductas investigadas se adecuó al delito de secuestro, porque así lo exigía el ordenamiento penal vigente, sin que ello impidiera que en el devenir de la investigación se tuviera en cuenta como posible hipótesis la participación de agentes estatales. De esta manera, los presuntos inconvenientes u obstáculos que, según la Honorable Comisión, representó una "tipificación inadecuada", no se configuran en el presente caso, en el cual se ha evidenciado que fueron innumerables las actuaciones del ente investigador, tendientes a encontrar algún grado de participación de miembros de las Fuerzas Militares en los hechos. Al respecto son muy pertinentes las consideraciones de la Comisión Internacional de Justicia cuando señala que:

> "Así, por ejemplo, la existencia *ex post facto* de un tipo penal de desaparición forzada en la legislación nacional, no es un obstáculo para llevar ante la justicia y condenar a los autores de desaparición forzada

[828] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 1
[829] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 4
[830] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 109
[831] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 125
[832] Fiscalía General de la Nación. Investigación Rad. 233. Cuaderno copia 9. Folio 140

cometidas cuando esta conducta ya era considerada delito por el derecho internacional."[833]

A partir de lo anterior, este Honorable Tribunal podrá evidenciar que el Fiscal de conocimiento adelantó la investigación de acuerdo al derecho penal vigente, es decir en el marco del delito de secuestro, sin restringir su espectro a las actuaciones de particulares, readecuando así la tipicidad de la conducta, una vez el ordenamiento jurídico se lo permitió.

Ahora bien, respecto del proceso penal adelantado en la Jurisdicción Penal de Justicia y Paz, los Ilustres peticionarios reconocen que si bien en principio la Fiscalía formuló una imputación por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado, mediante decisión de 1 de abril de 2009, la Fiscalía procedió con la readecuación de la tipicidad de la conducta, imputando al postulado Ramón Isaza los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y destrucción y apropiación de bienes protegidos.[834]

No obstante lo anterior y como quiera que en el marco de las diligencias de versión libre, los postulados van haciendo el relato de los hechos delictivos de los cuales tienen conocimiento, es posible –como sucedió en este caso- que la Fiscalía determine formular la acusación por un delito diferente o adicional al que inicialmente se imputó. Con ello, se confirma entonces que la adecuación típica inicial no impide de ninguna manera que el ente investigador contemple dentro de sus líneas de investigación la posible comisión de delitos diferentes.

Lo anterior toma mayor sentido en el proceso de Justicia y Paz, toda vez que se le permite a la Fiscalía formular imputaciones parciales, de conformidad con el contenido de las versiones que rinda el postulado. De hecho, tal y como sucede con Ramón Isaza, quien a pesar de tener una sentencia condenatoria en su contra, a la fecha sigue participando en las versiones de otros postulados y por lo tanto la Fiscalía podrá imputar nuevos delitos siempre y cuando de su relato ello sea procedente.

Con fundamento en los argumentos jurídicos esbozados en el presente acápite, son varias las consideraciones que el Estado se permite extraer:

i) Colombia es un Estado social de derecho, y en tal condición garantiza el cumplimiento del principio de legalidad desde la Constitución Política;

[833] Comisión Internacional de Juristas. Impunidad y graves violaciones de Derechos Humanos. Guía para profesionales No. 3, 2008. Pág. 132
[834] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 165

ii) La investigación iniciada en 1996, como consecuencia de los hechos ocurridos en la Vereda La Esperanza, tuvo como marco normativo el Decreto 100 de 1980, y por lo tanto las conductas denunciadas fueron adecuadas al tipo penal de secuestro;

iii) Con la entrada en vigencia de la Ley 599 del año 2000, el ordenamiento jurídico introdujo el tipo penal de desaparición forzada en el Código Penal colombiano, derogando además las disposiciones contenidas en el Decreto 100 de 1980;

iv) Antes de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, es decir antes del 24 de julio de 2001, no era posible investigar el delito de desaparición forzada en Colombia, toda vez que no existía dicho tipo penal;

v) Los peticionarios solicitaron la readecuación típica de la conducta en el año 2009;

vi) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó a pronunciarse sobre la técnica de la legalidad flexible en el año 2010, fijando importantes criterios para su procedencia;

vii) La investigación desde sus inicios contempló la posibilidad de una eventual participación de agentes estatales, tal y como lo demuestran las actuaciones adelantadas;

viii) Los peticionarios se equivocan cuando señalan que "(…) pese a estar tipificado en el derecho colombiano vigente a la época de los hechos, el delito de desaparición forzada no ha sido utilizado en las investigaciones internas, que han sido llevadas por el delito de secuestro (…)".

E. El ESTADO NO ES RESPONSABLE POR LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE IRENE DE JESÚS GALLEGO POR LOS HECHOS OCURRIDOS ENTRE EL 26 Y EL 28 DE JUNIO DE 1996

Sin perjuicio del reconocimiento de responsabilidad efectuado en el capítulo I., y de conformidad con la observación que el Estado formuló en el mismo, a continuación, el Estado expondrá los argumentos de hecho y de derecho que demuestran cómo los hechos ocurridos entre el 26 y 28 de junio de 1996, mientras estuvo en compañía de los miembros del Ejército Nacional, así como en presencia de la Fiscalía General de la Nación, no generan responsabilidad internacional. Para esos efectos, y teniendo en cuenta que tanto los

representantes como la Honorable Comisión, sustentan sus afirmaciones en algunas de las declaraciones rendidas en el marco del proceso penal, se procederá con el análisis de éstas, así como de las demás que reposan en el expediente, demostrando que son diversas las versiones que existen respecto de los hechos ocurridos el día 26 de junio de 1996, evidenciando el cúmulo de contradicciones que sobre el particular se han dado.

En ese orden de ideas, la cuestión planteada se abordará a partir de los dos momentos en los cuales las autoridades tuvieron una posición de garante respecto de la presunta víctima: **1.** cuando los miembros del Ejército Nacional la encuentran y **2.** cuando es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

1. Los hechos ocurridos el día 26 de junio de 1996 no suponen una "retención" en perjuicio de los derechos de Irene Gallego Quintero.

Alega la Honorable Comisión que "conforme a los hechos probados y tal cual fue reconocido por el mayor Carlos Guzmán, entonces comandante de la FTA, Irene Gallego fue retenida por agentes militares de dicho grupo el 26 de junio de 1996."[835] (Subrayado por fuera del texto original)

Por su parte, los Ilustres peticionarios sostienen en su escrito que "[d]e los hechos evidenciados en este caso surge claramente que en los días previos a su desaparición, Irene de Jesús Gallego Quintero fue privada de libertad por agentes militares (…)."[836](Subrayado por fuera del texto original)

De igual manera, sostiene la representación de las víctimas, con fundamento en el informe de la Honorable Comisión, que "[l]la participación de efectivos militares en la desaparición de Irene de Jesús está probada a través de diversos hechos y declaraciones. El día de su detención, Irene fue desvestida frente a varios militares y obligada a ponerse ropa del ejército. Esta circunstancia constituyen (sic) además una agresión a su intimidad personal, al verse forzada a exhibirse en medio de tantos soldados y personas de su familia."[837]}

Finalmente, se lee en el ESAP que "[a]l finalizar la tarde del 26 de junio de 1996, los soldados terminaron de desarrollar la Operación Rayo y no se tuvo conocimiento sobre lo que hicieron con Irene de Jesús Gallego Quintero, sino hasta el día 28 de junio de 1996 cuando en horas de la tarde, fue puesta a disposición de la Fiscalía Seccional del Municipio de El Santuario por el propio

[835] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Párr. 225
[836] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 135
[837] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 136

mayor Carlos Guzmán, quien comandaba las FTA, acusándola del delito de rebelión. (…)"[838]

De conformidad con lo anterior, el Estado encuentra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referencia varias declaraciones para imputar la desaparición de Irene Gallego a agentes del Estado. En ese orden de ideas, con el fin de ilustrar a este Honorable Tribunal respecto del contenido de las pruebas arrimadas por parte de la CIDH, a continuación el Estado presentará el contenido de éstas, al menos en lo correspondiente a la desaparición de Irene Gallego Quintero.

- **Declaración de Florinda de Jesús Gallego Hernández de 28 de noviembre del año 2000.[839]**

"(…) **fue sacada de la casa de PEDRO PABLO MUÑOZ**, es una casa ubicada en la Vereda La Esperanza, queda al lado de la quebrada El Vidal, (…) fue sacada por miembros del Ejército Nacional (…) **ella según lo que me comentó CARMEN** MUÑOZ estaba en la casa y el ejército llegó y que le decían que era una hijueputa guerrillera y que ella decía que no y lloraba (…). [E]llos por los huecos vieron cuando desvistieron a IRENE de su ropa de civil y le pusieron ropa del Ejército, la camuflaron, y a ella fuera de eso le colocaron un bolso con municiones atrás, era un bolso verde del ejército y así se la sacaron para la parte de afuera de la casa para decir que había sido una guerrillera que la habían encontrado uniformada y con munición. (…)" (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Declaración de José Eliseo Gallego Quintero de 19 de julio de 1996.[840]**

"(…) le echaron mano a ella y le dieron un tiro por el medio de las piernas y ya se la trajeron para la casa mía, llegó llorando y a esa si le echaron ropa, **mandaron a un soldado por la ropa y le trajeron la ropa para la casa mía**, a ella la uniformaron de vestido negro y tapada la cara con otro trapo negro y así llegó a mi casa (…)" (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Declaración de Carmen Muñoz Castaño de 4 de agosto de 1996.[841]**

[838] Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Pág. 136
[839] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 6, folio 167
[840] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 1, folio 38
[841] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 1, folio 170

"(…) a ella le digeron (sic) que entregara el fusil y a nosotros también y ella únicamente iba con la ropa puesta y ella de dónde fusil y revolcaron toda la casa y encontraron una macha de scopeta (sic) de mi papá que la tenía para espantar la plaga (…)"
A la pregunta formulada sobre el estado de ánimo en el que salió Irenede la casa, la señora Carmen muñoz respondió:
"(…) **ella salió tranquila**, no la espozaron (sic) y salieron de para arriba (sic) con ella con en (sic) dirección a la casa de los papás de ella." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Declaración de Jhon Fredy Castaño Gallego de 10 de noviembre de 2004.[842]**

"(…) el ejército tenía a Irene Gallego, en ese momento la tenían normal, suelta, mas (sic) luego cuando ya se iban a venir de allá, le pusieron camuflado y le montaron un bolso camuflado de los que ellos cargan y se la trajeron y no volvimos a saber nada de ella. (…)"

- **Declaración de María Engracia Hernández Quintero de 15 de abril de 1998.[843]**

"(…) durante el día, algunos de esos militares fueron a andar, y después llegaron con IRENE, ella bajaba llorando, iba con su ropa de casa, OCTAVIO fue el que patente (sic) le tocó verla, **porque a él lo mandaron por la ropa de IRENE a la casa.** (…) Antes cuando la bajaban de la casa de don PABLOS (sic), la vio fue OCTAVIO por un portillo de la casa, porque nos tenían a todos encerrados. Y OCTAVIO nos comentó cómo bajaba vestida con su ropa de casa, y llorando entre dos, en medio de militares (…)" (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

A partir de las declaraciones acabadas de señalar, la Honorable Comisión pretende probar en su informe que la desaparición de Irene es imputable al Estado, por cuanto en su sentir, de ellas se desprende que la víctima fue "retenida" por parte de agentes militares; recibió malos tratos por parte de éstos; fue obligada a desvestirse en presencia de varias personas; al salir del

[842] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 10, folio 81
[843] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 2, folio 200

lugar en donde fue "retenida", Irene iba vistiendo prendas privativas de las Fuerzas Militares; entre otras.

Como podrá apreciar la Honorable Corte, cada una de las declaraciones que allega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacen parte de la investigación penal –Rad. 233- adelantada por parte de la Fiscalía General de la Nación, de cuyo expediente se anexa copia íntegra. No obstante, llama la atención del Estado que si bien dichas declaraciones intentan relatar lo que sucedió el día 26 de junio de 1996 con Irene Gallego, ni los ilustres peticionarios ni la CIDH, aportan como prueba la declaración rendida por la misma víctima el 28 de junio de 1996, fecha en la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la CIDH manifiesta que "(…) no cuenta con este documento"[844], aun cuando es una pieza procesal que reposa en el expediente aludido.

En vista de lo anterior, sea esta la oportunidad para resaltar que Irene Gallego Quintero, de manera personal, libre y espontánea, se pronunció ante una autoridad jurisdiccional sobre los hechos y la forma en la que fue encontrada, desvirtuando así todas y cada una de las aseveraciones formuladas por los declarantes, quienes en la mayoría de casos constituyen una prueba de oídas, por cuanto no presenciaron los hechos.

Desde esa perspectiva, y antes de proceder con el análisis de las declaraciones de Irene Gallego, debe advertirse que en la misma diligencia, el Mayor Guzmán narró ante la Fiscal que presidió la diligencia, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que los miembros del Ejército encontraron a María Irene, sobre las cuales se le concedió la oportunidad de pronunciarse[845]. Por esa razón, y en aras de que la Honorable Corte vislumbre lo que en realidad sucedió el día 26 de junio de 1996, a continuación se transcriben apartes de la diligencia en cuestión:

"(…) después del combate la patrulla inició registro hacia la parte alta de la vereda "La Esperanza", se llegó a una casa y ahí se encontraba la señorita IRENE GALLEGO QUINTERO, la cual asustada, pensando que eramos un grupo de bandoleros, al darse cuenta no era así, que eramos del Ejército, **nos dijo que ella había sido miembro de este grupo** [guerrillero], pero que hacía mes y medio aproximadamente la habían sacado o echado por el hecho de que había quedado en embarazo, porque una mujer así no era útil para ellos, aduciendo también que ella tenía miedo, como a los que salen de ahí del grupo,

[844] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Párr. 104
[845] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno Anexo 1, folio 25.

posteriormente lo mandan a matar. **Nosotros ante esta situación optamos por llevarla con nosotros. (…) teniendo en cuenta que tenía amenaza de los bandidos**, decidimos que viniendo con nosotros y hacerle entrega a la Fiscalía con el fin de que se entere de la situación y no que después resultara un mal entendido por la situación adoptada por nosotros en darle protección, razón por la cual la dejamos a órdenes de la Fiscalía para lo pertinente. Se deja constancia que la versión anterior y suministrada por el Mayor, se hizo en presencia de la joven IRENE GALLEGO QUINTERO, a quien seguidamente el Despacho la interrogó en los siguientes términos: (…) PREGUNTADA: Díganos bajo juramento cuánto tiempo perteneció usted a este grupo subversivos (sic)? CONTESTÓ: Dos meses.- PREGUNTADA: A raíz de qué llegó a ser perteneciente a un grupo subversivos (sic)? CONTESTÓ: Porque fui obligada, porque yo estaba de novia con un muchacho de nombre ALONSO (…) y me quiso obligar a mí, que si no entraba con él, que me mataba, entonces por temor me fui con él. (…) PREGUNTADA: **Cuándo usted fue recuperada por el Mayor presente**, en qué sitio se encontraba, es decir si casa de habitación o campamento? CONTESTÓ: Estaba en la casa de un hermano mío de nombre ELADIO GALLEGO, me encontraba sola en esos momentos.- PREGUNTADA: A qué grupo perteneció usted? CONTESTÓ: Al E.P.L. **PREGUNTADA; Bajo juramento y en vista de que usted escuchó lo manifestado por el Mayor presente, confirma usted lo dicho por éste en su narración? CONTESTÓ: Sí, todo es cierto yo me vine porque me entregué y para que ellos me protegieran para de esta forma regresar a mi hogar.- PREGUNTADA: Cuál fue el trato que usted recibió de parte del Mayor y su personal? CONTESTÓ: El trato fue muy bien.**- PREGUNTADA: Qué personas a parte del personal al mando del Mayor, presenció que usted se venía en compañía de éstos? CONTESTÓ: Un tío de nombre ELISEO QUINTERO CASTAÑO y la mujer de él de nombre MARÍA ENGRACIA y los primos de nombre JUAN CARLOS y OCTAVIO. (…)" (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

El contenido de la declaración de Irene Gallego, la contundencia con la que respondió las preguntas formuladas por parte de la Fiscalía, así como la claridad en su discurso, otorgan una perspectiva clara de la forma en la que ocurrieron los hechos y de las razones por las cuales los miembros del Ejército tomaron la decisión de acompañarla y protegerla. De igual manera, se hacen latentes las contradicciones entre la narración que hace la propia víctima con el dicho de la Honorable Comisión y de los representantes, en la medida en que para ellos se trató de una "retención" y una "privación de la libertad", que como se acaba de demostrar nunca existió.

Asimismo, basta con hacer un ligero análisis de las declaraciones citadas en los párrafos anteriores, en contraste con la manifestación que hace Irene ante la

Fiscal del Santuario, para inferir que fue la propia víctima quien de manera expresa solicitó la protección de los miembros del Ejército Nacional, justificándose para ello en su condición de desertada de la guerrilla del EPL.

De conformidad con lo anterior, son varias las cosas que este Tribunal puede colegir:

i) Irene Gallego Quintero fue protegida por los miembros del Ejército, como quiera que de la información suministrada por aquella, respecto de su vinculación con un GAOML era imperioso prestarle acompañamiento y la protección necesaria;

ii) El trato que recibió Irene durante el tiempo que estuvo bajo la custodia de los miembros del Ejército fue respetuoso;

iii) Irene en ningún momento fue obligada a vestir prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, mucho menos desvistiéndose delante de alguna persona, lo cual hubiera sido informado por ella misma, quien por el contrario sostuvo que el trato fue bueno;

iv) Tan pronto como fue posible, el Mayor Guzmán la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, informando en detalle las circunstancias en las cuales la víctima fue encontrada.

De esta manera, queda absolutamente claro que no estamos ante un evento de retención o detención ilegal, sino que por el contrario se trató de una circunstancia especial, presentada en el marco del cumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el Ejército Nacional, razón por la cual fue necesario llevar a Irene junto con el personal que se encontraba en la zona. En consecuencia, no queda duda que durante el primer momento en que Irene estuvo bajo el control de los miembros del Ejército, es decir a partir del 26 de junio de 1996 y hasta el 28 de junio del mismo año, se le respetó su vida e integridad.

2. Los hechos ocurridos el día 28 de junio de 1996 en el despacho de la Fiscalía de Santuario.

Ahora bien, respecto del segundo supuesto que presuntamente configuraría la responsabilidad del Estado colombiano, esto es, cuando Irene es puesta a disposición del ente investigador, señala la distinguida Comisión en su informe: "Según la declaración de la Fiscal 29 Delegada, el 28 de junio de 1996 a las 5 p.m. se presentó a la Unidad de Fiscalías de El Santuario Antioquia, el mayor

Guzmán acompañado de Irene Gallego Quintero. Indicó que el mayor Guzmán le explicó lo acontecido pero no presentó `un informe que respaldase su procedimiento, sin una imputación definida y sin que en tal momento se vislumbre con claridad cuál es su presencia en la Fiscalía y cuál el motivo de la presentación de su joven acompañante.`(…)"[846]

Respecto de la situación anterior, son varios los asuntos que merecen una aclaración con la finalidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vislumbre que la actuación de las autoridades del Estado fue la correcta. Lo primero que se debe mencionar es que dentro de las funciones de los miembros de las Fuerzas Militares, no está la de hacer una "imputación" jurídica de conductas que puedan configurar la comisión de un delito. En ese sentido, el deber del Mayor Guzmán se agotó con la conducción de Irene hacia la Fiscalía General de la Nación, tal y como en efecto sucedió.

Lo segundo, que el Mayor Guzmán ilustró a la Fiscalía sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que encontró a María Irene, de tal manera que el ente investigador pudiera contar con los elementos necesarios para adoptar una decisión, en su calidad de autoridad competente, respecto de la situación jurídica de la víctima. Esto, teniendo en cuenta la especial situación que manifestó Irene respecto de su vinculación con la guerrilla del EPL.

En tercer lugar, que con base en la información suministrada, no solamente por parte del Mayor, sino también por Irene Gallego, y con fundamento en la autonomía y discrecionalidad propia de los funcionarios que pertenecen a la Rama Judicial en Colombia, la Fiscal determinó que no existía mérito para ordenar la privación de la libertad de Irene y, en consecuencia, procedió como correspondía, es decir, manteniendo la libertad de la víctima. No obstante, y en aras de formalizar la diligencia, se dejó constancia de la declaración del Mayor y de María Irene, según se señaló *supra*, y además se levantó un acta en la que se dejó expresa constancia de la comparecencia y de la decisión adoptada sobre la libertad de María Irene. Así, se lee en el acta en mención: "(…) se ordena su libertad inmediata e incondicional."[847]

Todo lo anterior demuestra que los funcionarios que tenían una posición de garante sobre la vida y la integridad de María Irene, actuaron de conformidad con la ley, en estricto respeto de las garantías constitucionales y con plena observancia de las competencias que el ordenamiento jurídico colombiano les

[846] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 85/13. Caso 12.251 Vereda La Esperanza. Párr. 104
[847] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno Anexo 2, folio 162.

asignaba. Por consiguiente, sostener que la lamentable desaparición de IreneGallego Quintero es atribuible al Estado, no tiene asidero jurídico alguno.
Sin perjuicio de lo anterior, y con el objetivo de aportar mayores elementos que le permitan a esta Honorable Corte corroborar lo que hasta este punto viene demostrando el Estado, a continuación se procederá a evidenciar las inconsistencias y contradicciones que presentan las declaraciones aportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las demás que reposan en el expediente penal –Rad, 233-.

- **Declaración de María Florinda Gallego Hernández de 25 de octubre de 1996.[848]**

"**A ella se la llevaron de la casa del promotor**, el Ejército se la llevó, yo la vi cuando se la llevaron, se la llevaron dizque por guerrillera, pero no sé nada por que (sic) ella estuvo un tiempo desaparecida de la región, y después llegó donde los papás, primero llegaron a la casa de los papás, el ejercito (sic), a ella le tenían la foto de ella misma que le cogieron en la casa y dijeron que era una guerrillera, **de la casa de los papás la sacaron uniformada de verde y con cachucha, botas, vestida del ejército, se la llevaron para la casa de don Eliseo** y a las cuatro de la tarde se fueron con ella, nunca más volví a saber de ella, a ella no le gustaba nada, ni el trabajo ni nada, no sé a que (sic) se dedicaba (…)" (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Declaración de Jhon Freddy Castaño Gallego de 15 de abril de 1998.[849]**

"sucedió en el sitio conocido como la MESETA, yo estaba como a las tres de la tarde para donde mi abuelo, cuando llegue se encontraba lleno de Ejército, ellos estaban en toda casa de mi abuelo José Eliseo Gallego, después llegaron los del Ejército con IRENE y **el Ejército me dijo que fuera a la casa de ella a traerle ropa y yo fui a la casa de ella y le traje la ropa, (…) se la entregué al Ejército y a ella le pusieron ropa de camuflado del Ejército** y se la llevaron hacia la autopista y de ahí para adelante ya no se mas (sic)." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

- **Declaración de Diosdado Quintero de 8 de noviembre de 2004.[850]**

[848] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 1, folio 91.
[849] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 2, folio 172.
[850] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 10, folio 64.

"(…) se (sic) que a IRENE se la encontraron en el camino que conduce hacia el salado, y **se la llevaron hacia la autopista la subieron a una camioneta y no se volvió a saber nada de ella, era una camioneta cuatro puertas**, no se que (sic) color, ni que tipo, ni marca." (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

Con base en el contenido de todas las declaraciones aludidas en el presente acápite, y especialmente en los apartes de éstas que fueron señalados con énfasis –negrilla y subrayado-, el Estado se permite llamar la atención de la Honorable Corte, en la medida en que para su valoración deberán ser concebidas como un todo, de tal manera que unas y otras, por referirse a los mismos hechos, se espera guarden relación.
Pese a lo anterior, y como lo ha venido evidenciando el Estado, son más las contradicciones que las concordancias encontradas, y por lo tanto merecen un análisis cuidadoso por parte de este Tribunal, máxime cuando ninguna de las declaraciones ofrecidas coincide con aquella que rindiera la misma Irene Gallego ante la Fiscalía General de la Nación.

En ese orden de ideas, son varios los aspectos en los que se contradicen los declarantes, y que vale la pena resaltar para el conocimiento de la Honorable Corte:

i) A pesar de que Irene Gallego manifestó que los miembros del Ejército Nacional la encontraron en la casa de su hermano Eladio Gallego, Florinda de Jesús Gallego Hernández y María Engracia sostienen que a Irene la "sacaron" de la casa de Pablo Muñoz. Por su parte, María Florinda Gallego asevera que ella vio cuando a Irene se la llevaron de la casa del promotor de salud, es decir de la casa de Juan Carlos Gallego, y que posteriormente llegó a la casa de los papás. Finalmente, Diosado Quintero declara que a Irene la encontraron en el camino y fue subida a una camioneta cuatro puertas;

ii) Respecto de las prendas de la víctima son varios los asuntos a resaltar. José Eliseo Gallego manifiesta que los militares enviaron a un soldado por la ropa de María Irene; por su parte, María Engracia Hernández señala que a "Octavio" lo mandaron por la ropa de María Irene; Jhon Fredy Castaño declara que él fue quien recogió la ropa de María Irene, en virtud de la presunta orden que le dieron los militares;

iii) Sobre la situación en la que presuntamente obligaron a Irene a vestir prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando se encontraba en la casa de José Eliseo Gallego, la Honorable Corte debe tener en cuenta que a pesar

de que la víctima no relata nada de eso en su declaración, Florinda de Jesús Gallego manifiesta que Carmen Muñoz le "comentó", lo que significa que no le consta, que a Irene la desvistieron y le pusieron ropa del Ejército con un bolso de munición atrás; José Eliseo dice que estando en su casa, a Irene le pusieron un vestido negro y le taparon la cara con un trapo del mismo color; María Florinda Gallego Hernández, quien presuntamente presenció los hechos, sostiene que cuando sacaron a Irene de la casa de los papás, es decir antes de llegar a la casa de José Eliseo, ella se encontraba uniformada de verde, con cachucha y botas, lo que supondría que así fue como llego vestida a la casa de José Eliseo

Nótese que son varias las contradicciones en las que incurren los declarantes, demostrando así que no existe, por parte de éstos, un relato claro y preciso que permita otorgarle valor probatorio al contenido de sus declaraciones. Por el contrario, lo que si aporta el dicho de los declarantes, es un margen de duda significativo, más aun cuando algunos dicen haber presenciado de manera directa los hechos, lo cual desentona ostensiblemente de la narración que de los mismos hace Irene Gallego.

Con fundamento en lo previamente expuesto, la Honorable Corte podrá entrever que las declaraciones reseñadas no conducen a un conocimiento certero de los hechos ocurridos el día 26 de junio de 1996, razón por la cual todas y cada una de dichas declaraciones, al menos en lo correspondiente a la desaparición de Irene Gallego, deberán ser desestimados por carecer de credibilidad.

En contraste con lo anterior, tanto la declaración del Mayor Carlos Guzmán, así como la que fuere efectuada por la propia víctima ante la Fiscalía General de la Nación, aportan suficientes elementos que permiten determinar que no existió una "retención" en perjuicio de María Irene, sino que por el contrario los miembros del Ejército Nacional le prestaron el acompañamiento y la protección que ésta requería, desvirtuando así cualquier otra situación sobre la cual no se pronunció en su declaración.

Desde esa perspectiva, el Estado ha demostrado que entre los días 26 y 28 de junio de 1996, tiempo durante el cual Irene estuvo bajo la protección del Estado, sus derechos fueron respetados y garantizados, de conformidad con la Constitución, la ley y los tratados internacionales. No obstante, una vez Irene Gallego abandona, por su propia cuenta y sin la compañía de algún agente estatal, las instalaciones de la Fiscalía del Santuario, sale de la esfera de control del Estado y con ello termina esa posición de garante de la que se ha venido hablando. Sobre el particular se pronunció la Fiscal que atendió la diligencia del día 28 de junio de 1996, señalando:

"(…) teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la joven IRENE GALLEGO era una persona mayor de edad, soy enfática en sostener que no entregué a la joven IRENE GALLEGO a los militares, desconociendo una vez firmada la diligencia, el rumbo que ella tomó y en compañía de quien."[851]

A la luz de las alegaciones efectuadas en los párrafos precedentes, y una vez demostrado que la lamentable desaparición de la joven Irene Gallego no obedeció a razones imputables directamente al Estado, de manera respetuosa se le solicita a este Honorable Tribunal declarar la ausencia de responsabilidad del Estado de Colombia, por los hechos ocurridos entre el 26 y el 28 de junio de 1996.

F. El Estado no es responsable por la alegada violación a los derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5,y 7 de la Convención Americana, así como de los artículos 1.a y 1.b de la CIDFP en relación con a Alias "Fredy" y su compañera sentimental

El Estado presenta las siguientes consideraciones respecto de las alegadas violaciones en relación con alias "Fredy" y su esposa, de manera subsidiaria, a la excepción preliminar instaurada en relación con los hechos referidos a dichas personas.

Adicionalmente, el Estado precisa que se pronunciara exclusivamente respecto de lo señalado por la CIDH en el Informe de Artículo 50, teniendo en cuenta que los peticionarios no representan a alias "Fredy" y a su esposa en el presente procedimiento. Por tanto, los alegatos de hecho y de derecho expuestos en el ESAP respecto las presuntas víctimas en cuestión, no hacen parte del presente caso.

De acuerdo con la Comisión, en su Informe No 85/13:

> "agentes militares colaboraron con las Autodefensas del Magdalena Medio para ejecutar la desaparición forzada de alias Fredy y su esposa. En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado de Colombia violó los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica, establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; así como el artículo I.a) de la

[851] Fiscalía General de la Nación. Rad. 233. Cuaderno 2, folio 163.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de alias Fredy y su esposa."[852]

El Estado rechaza esta conclusión, dado que de acuerdo con las indagaciones de autoridades judiciales colombianas y otras pruebas allegas al presente trámite internacional, alias "Fredy" y su compañera sentimental, pertenecían a la organización armada al margen de la ley con el nombre de Ejército Popular de Liberación (EPL). A partir de 1996, y luego de ser retenido por las ACMM, Fredy se vinculó con el grupo de Ramón Isaza e hizo parte de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Desde entonces actuó como miembro de las ACMM, hasta 2004, cuando murió en desarrollo de las actividades relacionadas con el actuar delictivo de las autodefensas ilegales[853].

De esta manera, las circunstancias fácticas en relación con alias "Fredy" y su compañera sentimental no configuran desaparición forzada. Esto en razón a que no se verifican los elementos consagrados en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En este punto debe considerarse que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se configure el ilícito internacional de desaparición forzada deben acreditarse las siguientes cuestiones: "**a)** la privación de la libertad; **b)** la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y **c)** la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada."[854] En concordancia con lo anterior, se ha concluido que la realización de la conducta en cuestión, conduce a sustraer a la víctima del "ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."[855]

[852] CIDH. Informe No 85/13. Caso 12.251. Admisibilidad y fondo, *Vereda La Esperanza (*Colombia) 4 de noviembre 2013. Párr. 223.

[853] República de Colombia. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 17 de febrero de 2014. Párr. 34.

[854] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia (Desaparecidos del Palacio de Justicia), Sentencia del 14 de noviembre de 2014(excepciones preliminares fondo, reparaciones y costas), párrafo 226.

[855] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. párrafos 140 y 141. al respecto, también: Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. (fondo, reparaciones y costas). párrafo 64.

Conforme con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que "la desaparición de una persona, porque no se conoce su paradero, no es lo mismo que una desaparición forzada."[856]

La aplicación del precedente previamente expuesto, al caso concreto, permite concluir que no se verifican los elementos necesarios para que pueda puede señalarse que alias "Fredy" y su esposa fueron objeto de desaparición forzada.

Respecto de la situación de alias "Fredy", conforme con el acervo recaudado en el marco del presente tramite internacional, se encuentra demostrado que dicho sujeto, de manera voluntaria, decidió integrar las autodefensas ilegales y contribuir de manera efectiva al desarrollo de su actuar delictivo. Fue en este contexto en el que perdió la vida, en el año 2004.

Lo descrito evidencia que, los hechos probados en relación con lo ocurrido a alias "Fredy", no permiten la verificación de los elementos que conducen a que una conducta se adecúe al ilícito internacional de desaparición forzada. En primer lugar, debe considerarse que la presunta víctima se unió a las autodefensas ilegales *motu propio*. No consta que dicho sujeto hubiese sido privado de la libertad, durante los años que hizo parte del grupo armado ilegal en cuestión. En consecuencia, no se constata el primer ingrediente normativo del artículo II de la CIDFP.

Adicionalmente, aunque hipotéticamente se admitiera que alias "Fredy" fue privado de la libertad por miembros de las autodefensas ilegales, tampoco habría lugar a que se configurara el ilícito internacional de desaparición forzada. Esto, en razón a que aún no se conocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En relación con este punto se recuerda que la situación previamente descrita no puede inferirse a través de un contexto general, pues debe existir evidencia que permitan arribar a esa conclusión respecto de los hechos específicos del caso concreto.

En consecuencia, al no configurarse una desaparición forzada en contra de alias Fredy, no hay lugar a la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica, en perjuicio de dicho sujeto.

Respecto de la presunta desaparición forzada de la esposa de alias "Fredy", el Estado también rechaza las conclusiones jurídicas a las que arribó la CIDH. El

[856] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia (Desaparecidos del Palacio de Justicia), Sentencia del 14 de noviembre de 2014(excepciones preliminares fondo, reparaciones y costas), párrafo 226.

Informe No 85/13, la Comisión señaló que "se cuenta con la declaración de Ramón Isaza quien manifestó que ella habría sido asesinada por miembros del EPL mientras intentaba recuperar a su hijo que se había quedado en la Vereda La Esperanza."[857]

Sin embargo, contrario a esta evidencia, la Comisión consideró que la esposa de alias "Fredy" fue objeto de desaparición forzada por parte de las ACMM y, por tanto, según la apreciación de la CIDH, las violaciones derivadas de tal conducta resultan atribuibles al Estado colombiano.

Lo anterior, permite concluir nuevamente que no existen elementos para que se determine la responsabilidad de Colombia en relación con lo ocurrido con la compañera sentimental de alias "Fredy". Conforme con las pruebas obrantes en el trámite internacional, la presunta víctima en cuestión fue asesinada por el EPL.[858] En consecuencia, no existe una conducta que sea atribuible al Estado.

Al respecto debe considerarse que, no existen evidencias que permitan concluir que el grupo insurgente que terminó con la vida de la esposa de alias "Fredy", contó con la con la colaboración o con la aquiescencia de agentes estatales. Desde ninguna perspectiva, resulta razonable que se concluya una posible connivencia entre el EPL y la Fuerza Pública colombiana.

Adicionalmente, aunque hipotéticamente se admitiera que la compañera sentimental de alias "Fredy" fue privada de la libertad por miembros de las autodefensas ilegales, se arribaría a la misma conclusión de los párrafos anteriores. Se insiste en que en el marco del presente trámite internacional aún no se conocen la circunstanciasen las que ocurrieron los hechos relativos a alias "Fredy" y su esposa. Sobre el punto en cuestión, se reitera que la situación previamente descrita no puede inferirse a través de un contexto general, pues debe existir evidencia que acredite esa conclusión respecto de los hechos específicos del caso concreto.

Por tanto, al no configurarse una desaparición forzada, tampoco se configura la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica respecto de la esposa de alias "Fredy".

[857] CIDH. Informe No 85/13. Caso 12.251. Admisibilidad y fondo, *Vereda La Esperanza (*Colombia) 4 de noviembre 2013. Párr. 97.

[858] Alias Fredy. Entrevista al programa Contravía. Minuto 3:49. [Disponible on line en https://www.youtube.com/watch?v=vbZyk9bnxmo]

- **Diligencias orientadas a identificar a alias Fredy y su esposa**

Las investigaciones respecto de lo sucedido con alias "Fredy" y su esposa han sido sumamente complejas dadas las dificultades para identificar plenamente la identidad de estas dos personas. Su contenido y alcance fue informado a la Comisión en el marco del cumplimiento de las recomendaciones del Informe No 85/13.

De esta forma el Estado remite a las medidas adoptadas por parte de las autoridades judiciales colombianas descritas en los escritos del Estado ante la CIDH de fecha 17 de febrero de 2014[859] y 22 de agosto de 2014[860]. En dichas comunicaciones se informó que, como producto de las investigaciones judiciales, alias "Fredy" responde al nombre de Luis Alberto Briceño Ocampo, con cédula de ciudadanía 16.162.011[861].

Con el fin de corroborar esta información e identificar plenamente que Luis Alberto Briceño Ocampo corresponde a la persona señalada como presunta víctima en el presente caso, el despacho del Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, se desplazó al municipio de Victoria, en el departamento de Caldas. Mediante dicha actividad se obtuvo la tarjeta de preparación para la cédula de Luis Alberto Briceño Ocampo y su registro civil de nacimiento[862].

Sin embargo, indagaciones con los presuntos familiares, sugieren dudas sobre la veracidad de los documentos que identifican a alias "Fredy" como Luis Alberto Briceño Ocampo. Paralelo a ello ha surgido información que indica que alias "Fredy" se identificaba con el nombre Luis Alfonso Guisao Suárez o Luis Alfonso Suárez.

Indagando con familiares de Luis Alfonso Suárez, se logró obtener su registro civil de nacimiento. Adicionalmente, el despacho del Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, adelantó gestiones investigativas en las cuales se

[859] República de Colombia. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 17 de febrero de 2014. Párr. 32 a 34.
[860] República de Colombia. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 17de febrero de 2014. Párr. 62.
[861] República de Colombia. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 17 de febrero de 2014. Párr. 34.
[862] Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional. Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito. Fiscal Carlos Alberto Camargo Hernández. Informe No. 11-28975. 21 de agosto de 2014. (Anexo 16)

estableció que posiblemente la compañera sentimental de alias "Fredy" responde al nombre de Diana Patricia Cordero Cochero[863].

Como se evidencia, el Estado ha llevado a cabo las gestiones para develar lo sucedido con alias "Fredy" y su esposa, incluyendo la identificación de estas dos personas. Sin embargo, la complejidad de la situación, en la cual participaron varios grupos armados organizados al margen de la ley, el hecho de que los habitantes de la región no contaran con información sobre alias "Fredy" y su compañera sentimental, así como las características de las circunstancias que envolvieron lo sucedido, han imposibilitado su plena identificación. Sin embargo, los hallazgos las pruebas allegadas al presente trámite internacional señalan que alias "Fredy" falleció como miembro de las ACMM y que su compañera fue retenida y asesinada por el EPL.

En consecuencia, el Estado solicita a la H. Corte declarar la ausencia de responsabilidad internacional por la alegada violación a los derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5,y 7 de la Convención Americana, así como de los artículos 1.a y 1.b de la CIDFP en relación con a alias "Fredy" y su compañera sentimental, dado que no se configuró una desaparición forzada respecto de estas presuntas víctimas.



[863] Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional. Fiscal 47 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito. Fiscal Carlos Alberto Camargo Hernández. Orden de Trabajo No 335, asignada el 2015-03-25. 25 de marzo de 2015. (Anexo 16)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[864] CIDH, Informe de informe de admisibilidad y fondo 85/13, Caso No. 12.251 Vereda La Esperanza, párrafos 233-236.

[865] El ICBF –Regional Antioquia- tiene 17 Centros Zonales, entre los cuales se encuentra el Centro Zonal del Magdalena Medio, cuya área de influencia comprende los municipios de Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Yondó.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[866] ICBF, Regional Antioquia, Centro Zonal Magdalena Medio, Informe 10900-135 de 11 de marzo de 2014.
[867] Ibídem.
[868] Ibídem.
[869] Ibídem.
[870] Ibídem.
[871] Ibídem.
[872] Ibídem.
[873] Ibídem.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[874] Ibídem.
[875] Ibídem.
[876] Ibídem.
[877] Ibídem.
[878] Ibídem.
[879] *El artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia contempla las medidas de restablecimiento del menor y en este sentido dispone lo siguiente: Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas: …**3. Ubicación inmediata en medio familiar**…"* La ubicación inmediata en medio familiar consiste en que una familia se compromete a bridarle a un niño, niña o adolescente, el cuidado y atención necesarios para el desarrollo integral, en sustitución de la familia de origen y asume con recursos propios la totalidad de los gastos para su cuidado y atención, así como la garantía de derechos de un niño, niña y adolescente. La medida de ubicación inmediata en medio familiar –Hogar Amigo- es decretada por el Defensor de Familia, el Comisario de Familia o el Inspector de Policía, previa verificación del estado de cumplimiento de los derechos del menor, de las condiciones de la familia de acuerdo con las normas técnicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
[880] Ibídem.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[881] Ibídem.
[882] ICBF, Regional Antioquia, Informe 530400-135-01, 18 de marzo de 2015.
[883] Ibídem.
[884] Ibídem.
[885] Ibídem.
[886] Ibídem.
[887] Ibídem.
[888] Ibídem.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

889 Ibídem.
890 Ibídem.
891 Ibídem.
892 Ibídem.
893 Ibídem.
894 Ibídem.
895 Ibídem.
896 ICBF, Regional Antioquia, Memorando 2015-133583, 16 de abril de 2015.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

> [redacted]

[897] Ibídem.
[898] Ibídem.
[899] Ibídem.
[900]El artículo 82 del Código de la Infancia y Adolescencia establece las funciones del Defensor de Familia y en el numeral 19 establece lo siguiente: *"19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia."*
[901] ICBF, Regional Antioquia, Memorando 2015-133583, 16 de abril de 2015.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[902] Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr. 60.

[903] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-292/04, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2004).
[904] Ibídem.
[905] Ibídem.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

[redacted]

907 CIDH, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.
908 Ibídem.
909 Ibídem.

[redacted]

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

> [redacted]

[redacted]

[910] Ibídem.
[911] Ibídem.
[912] CIDH, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011.

[913] CIDH, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

> [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted]

[redacted]

[914] Ibídem.
[915] Diligencia de Testimonio de la señora María Delfa Isaza Gómez, rendida ante la Fiscalía 80 de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, Rad. 233.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[916] Ibídem.
[917] Ibídem.
[918] Ibídem.
[919] Ibídem.
[920] Fiscalía General de la Nación, Oficio UNFJYP-D47-2306, 31 de diciembre de 2013.
[921] Ibídem.
[922] Ibídem.
[923] Contravía, Documental Los Desaparecidos de La Esperanza II, 4 de junio de 2008.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

VIII. REPARACIONES

A. El deber de reparar integralmente las violaciones

Como bien lo afirmó la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-180 de 2014, el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas del conflicto armado en Colombia, se apoya en el principio general del derecho según el cual, el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. El alcance de este deber propio del Estado ha sido determinado por la jurisprudencia internacional, a partir de diversos casos en los que, tras analizar los daños y lesiones ocasionadas, se determina el contenido propio del derecho a la reparación integral según el contexto.

Sentencias como la del Personal Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, Barcelona Traction y otras, dieron alcance al principio restitutio in integrum, tras aplicar, en algunos casos, medidas de compensación pecuniaria, garantías de no repetición, medidas de satisfacción y/o rehabilitación, según su pertinencia.

Por su parte, la Corte IDH ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo

adecuadamente[924]. Asimismo, ha reiterado que "la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron[925]. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados".[926] (subraya fuera de texto original)

Asimismo, instrumentos como *Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones*[927], contemplan el deber de los Estados de asegurar que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales. Por ello, los Estados deben adoptar procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces, que permitan el acceso a un recurso judicial efectivo y rápido, con independencia de quien resulte ser, en definitiva, el responsable de la violación.

En consecuencia, el Estado deberá reparar "a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario"[928]. Asimismo, los Estados deben procurar el establecimiento de "programas nacionales de reparación y otro tipo de asistencia a las víctimas, cuando el responsable directo de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones"[929].

Es por ello que dentro del ordenamiento del Estado colombiano se identifica la presencia de diferentes vías a las que pueden acudir las víctimas para obtener

[924] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 300
[925] Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287párr. 543
[926] Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr.452.
[927] Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Disponible en línea en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
[928] Ibíd., art.15
[929] Ibíd., art.16

reparación, así lo ha manifestado la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia SU-254 de 2013:

> "(i) la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima.
>
> (ii) Mientras que por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas.
>
> En lo que se refiere a la reparación por la vía judicial, es de mencionar que en el sistema jurídico colombiano se puede dar a través del proceso penal ordinario, mediante un incidente de reparación, y a través del proceso penal previsto por la justicia transicional, de conformidad con la Ley 975 de 2005, la cual estableció dentro de los procesos penales llevados dentro de la jurisdicción especial de Justicia y Paz, la posibilidad de iniciar un incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal. Así mismo, la reciente Ley 1448 de 2011 trae importantes regulaciones en el Título II de esa normativa, referido a los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales, y en el Título IV, capítulo III, sobre la restitución de tierras a través de procesos judiciales.
>
> De otra parte, la vía administrativa para la reparación a las víctimas, se encuentra ahora regulada por la Ley 1448 de 2011, que en el Título IV, capítulo VII, artículos 132 a 134, consagra las disposiciones sobre indemnización por vía administrativa, en el capítulo VIII, artículos 135 a 138, consagra medidas de rehabilitación, en el capítulo IX, establece las

medidas de satisfacción, en el Capítulo X, artículos 149 y 150, consagra las garantías de no repetición, y en el capítulo XI, artículos 151 y 152 establece la reparación colectiva. Antes de la expedición de la Ley 1448 de 2011, el tema de la indemnización individual por la vía administrativa se encontraba regulado por el Decreto 1290 de 2008, mediante el cual el Gobierno había dispuesto la creación de un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de actores armados organizados al margen de la ley, en donde se encontraban disposiciones relativas a la reparación administrativa para población desplazada, como la indemnización solidaria de que trataba el artículo 5º de esa normativa"[930] (Subraya fuera de texto)

Esta coexistencia de diferentes vías para acceder a la reparación integral en Colombia, y la complementariedad de las vías judiciales con la administrativa, no ha sido desconocida por el Estado, sino por el contrario fortalecida a través la creación de programas específicos que permiten lograr mejores niveles de reparación por vía no judicial, como los derivados de la Ley 1448 de 2011.

Como se demostrará, en el presente caso las víctimas contaron y cuentan con (I) la posibilidad de ser reparadas en sede judicial, y (II) la posibilidad de acudir a los mecanismos de reparación integral que ofrece la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas. A continuación, el Estado profundizará sobre estos aspectos, no sin antes hacer unas consideraciones previas sobre el principio de subsidiariedad.

B. El principio de subsidiariedad y sus implicaciones en el SIPDH

El principio de subsidiariedad encuentra su asidero en diversas fuentes del SIPDH. Desde la propia CADH, pasando por los pronunciamientos de la CorteIDH y la doctrina de los estudiosos en el tema, consienten de manera unánime en la importancia de este principio en nuestro sistema regional de protección de derechos humanos.

En la CADH, encontramos que los Estados establecieron como regla básica del sistema el principio de subsidiariedad. Es por ello que el preámbulo de este instrumento establece:

> "Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional

[930] Corte Constitucional colombiana, Sentencia SU -254 de 2013.

> coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos (…)"[931] (subraya fuera del texto original)

Dicha manifestación hace referencia a la protección del SIPDH, como mecanismo de naturaleza coadyuvante y complementaria de la que ofrece el derecho interno. En este sentido, es claro que el primer obligado y capacitado para atender y reparar las presuntas violaciones de los derechos humanos, es el Estado y no el sistema internacional.

En desarrollo de dicho principio, se estableció como un requisito de admisibilidad de cualquier petición interpuesta ante el SIPDH, el del agotamiento de los recursos internos. Dicha regla establece que: "1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos (…)"[932]

En este sentido, el principio de subsidiariedad se materializa, entre otras, en una regla de admisibilidad, que es el agotamiento de los recursos internos. Ello implica que para que una petición sea admitida por los órganos del SIPDH, el Estado ha debido tener la oportunidad de conocer y remediar la situación, so pena de que la solicitud sea inadmitida.

La CorteIDH se ha pronunciado en su jurisprudencia, recalcando el valor de dicha normativa, y desarrollando la aplicación de dicho principio y regla. En este sentido, en un caso reciente estableció que:

> "137. Por tanto, la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de establecer, en su caso, una violación de un derecho y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad (o subsidiariedad), que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, "coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos". De tal manera, el Estado "es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias

[931] CADH. Preámbulo.
[932] CADH. Art. 46.1.

> internacionales como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos". El referido carácter subsidiario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa."[933]

De esta manera, la CorteIDH, órgano judicial del SIPDH, reconoce que su jurisdicción no sustituye bajo ninguna perspectiva los sistemas domésticos. Por el contrario, su labor se limita a complementar dichos sistemas, lo cual implica que no podrá conocer ni reparar las violaciones de derechos humanos, hasta tanto el Estado haya tenido la oportunidad de hacerlo por sus propios medios.

En tal sentido, el principio de subsidiariedad pertenece al orden público internacional y sobre éste descansa todo el andamiaje del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En su voto concurrente a la sentencia del Caso Manuel Cepeda Vargas*,* el juez García Sayán además plantea que:

> "Así, los Estados americanos han querido dejar suficientemente claro que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa[934]. "En fin de cuentas, cuando se comete una violación surge la responsabilidad internacional del Estado –consecuencia directa del incumplimiento o la vulneración del deber, asimismo internacional, asumido por éste-, pero no necesariamente se pone en movimiento la competencia de la Corte Interamericana. Ésta se desplegará en la hipótesis de que no actúe la jurisdicción interna"[935]."[936] (Subraya fuera del texto original)

Además, el principio de subsidiariedad no sólo se refleja en la regla tradicional que indica la necesidad de agotar los recursos internos antes de acudir a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que también implica de una manera más general que son los operadores nacionales de cada Estado los mejor situados y llamados a garantizar los derechos de las víctimas,

[933] CorteIDH. Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286. Párr. 137.
[934] FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, *El agotamiento de los recursos internos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos*, IIDH, San José, Costa Rica, 2007, p. 43."
[935] GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana", en *La jurisdicción interamericana de derechos humanos,* CNDH y Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 2006, p. 90."
[936] CorteIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Voto Concurrente. Párr. 6

aun cuando existan recursos que aún estén pendientes de ser resueltos. En este sentido, el Juez García Sayán indica que:

> "Antes bien, los garantes en primera línea de la protección de los derechos humanos están llamados a ser los tribunales y autoridades nacionales. "En principio los operadores nacionales son los mejor situados para conocer, valorar y resolver sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos. Los operadores internacionales no intervienen sino ahí donde el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En consecuencia el principio de subsidiariedad establece un mecanismo adecuado para definir los límites de la jurisdicción internacional y las obligaciones de las autoridades nacionales"[937]."[938] (Subraya fuera del texto original)

Y que la CorteIDH:

> "(…) no puede situarse al margen o por encima de esa dinámica institucional ni pretender corregir decisiones internas salvo cuando se trate de decisiones contrarias o que confronten los parámetros internacionales a la luz de la Convención Americana"[939]. (Subraya fuera del texto original)

En suma, el respeto por el principio de subsidiariedad debe permear las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a tal punto que su desconocimiento implica poner en riesgo la propia estructura y legitimidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El principio de subsidiariedad no sólo implica que la CorteIDH no tenga como papel conocer asuntos que el Estado está llamado a resolver por medio de sus recursos, sino que también implica que el papel de la CorteIDH es respaldar los esfuerzos legítimos de los Estados que están dirigidos al fortalecimiento de las instituciones internas. Al respecto, el Juez García Sayán ha señalado que:

> "El carácter subsidiario de los órganos de protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos supone que las

[937] DEL TORO HUERTA, Mauricio Iván, "El principio de subsidiaridad en el derecho internacional de los derechos humanos con especial referencia al sistema interamericano", en *La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento,* Becerra Ramírez, Manuel (coord.), UNAM, México, 2007, p. 24, citando a PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, "Le principe de subsidiarité dans la Convention européenne des droits de l´homme", *Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte, Festschrift für Georg Ress zum 70. Geburtstag am 21. Januar 2005, Carl Heymanns Verlag, 2005, pp. 1077-1083."*

[938] CorteIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Voto concurrente, párr. 9 Voto concurrente, párr. 9.

[939] Ibídem, Párr. 12.

instancias internas cuentan con márgenes para establecer y aplicar criterios para reparar la violación. Ello permite que los órganos e instituciones nacionales refuercen sus capacidades para utilizar procedimientos y criterios que estén en concordancia con los parámetros internacionales en materia de derechos humanos."[940] (Subraya fuera del texto original)

En el mismo sentido:

"Al verificar la conformidad de las reparaciones otorgadas a nivel interno la Corte carece de tales límites; por el contrario, es ella la intérprete final de la obligación internacional de reparar en materia de derechos humanos pero está, a la vez, en el deber de reconocer **y estimular**, de ser el caso, los pasos dados en el derecho interno que sean concordantes con el ordenamiento internacional."[941] (Subraya y negrilla fuera del texto original).

El Estado está convencido de que el papel de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es vital para el buen funcionamiento de los mecanismos que han sido dispuestos internamente para garantizar los derechos consagrados en la Convención. En efecto, sus decisiones tienen la virtualidad de estimular o desestimular el uso de los recursos dispuestos domésticamente.

Es por ello que, la correcta apreciación de este principio, da como resultado que la justicia interamericana tenga en cuenta los recursos disponibles y las reparaciones otorgadas, a la hora de ordenar reparaciones específicas.

C. El valor que le ha reconocido la jurisprudencia de la Honorable Corte IDH al recurso contencioso administrativo como mecanismo que tiene la potencialidad de brindar una reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos

En este acápite, el Estado resalta el carácter que le ha reconocido la jurisprudencia de la Corte IDH a la jurisdicción contencioso administrativa, como mecanismo capaz de reparar de manera integral las violaciones a los derechos humanos. Esta virtualidad de ofrecer una reparación integral, aunado al principio de subsidiariedad en el Sistema Interamericano, hacen que la Corte

[940] CorteIDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252. Voto concurrente. Párr. 13.
[941] CorteIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Voto concurrente Juez Sergio García Sayán. Párr. 15.

IDH deba valorar necesariamente la capacidad de este recurso para ofrecer una reparación integral.

La CorteIDH ha reconocido y valorado el alcance de la justicia contencioso administrativa en Colombia en materia de reparaciones. Aunque la jurisprudencia en esta materia ha variado en las distintas decisiones, según los hechos presentados en cada uno de los casos que ha tenido la oportunidad de conocer el Tribunal Internacional, la Corte ha establecido unos criterios para el análisis del valor que se le debe dar a la acción de reparación directa como un recurso adecuado y efectivo para reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. En particular la CorteIDH ha afirmado que:

> "al evaluar la efectividad de los recursos internos llevados a cabo por la jurisdicción contencioso administrativa nacional, [...] debía determinar si las decisiones tomadas en aquella ha[bían] contribuido efectivamente a poner fin a la impunidad, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención"[942]. Asimismo ha señalado que este proceso no debía constituir "un mecanismo adecuado, por sí solo, para reparar casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual no es necesario que sea agotado [...] cuando exista otra vía para lograr tanto la reparación del daño como el juzgamiento y sanciones exigidos"[943]. (Subraya fuera de texto)

En el caso *Valle Jaramillo y otros*, si bien la Corte reafirmó que el proceso contencioso administrativo no constituye *per se* un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral a las víctimas, sí resaltó "el rol que cumple la jurisdicción contencioso administrativa en materia de reparaciones"[944] y señaló que este recurso "constituye un significativo aporte tendiente a la reparación integral de las violaciones declaradas en la sentencia"[945].

En este mismo caso, la H.Corte reconoció que el Consejo de Estado había comenzado a "penetrar la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el derecho de Colombia"[946], lo que implica que, de darse dicho desarrollo jurisprudencial en la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, "podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener,

[942] Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 217. Vr también Masacres de Ituango.
[943] Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 101.
[944] Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr.167.
[945] Ibídem, párr.167.
[946] Ibídem, párr.202.

en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos"[947] (Subraya fuera de texto original), y, por ende, ser considerada como un recurso adecuado y efectivo.

Siguiendo con esta línea jurisprudencial, en el caso *Cepeda Vargas* la Corte afirmó que la jurisdicción contencioso administrativa "puede ser relevante en lo que concierne a la obligación de reparar integralmente una violación de derechos"[948].

Luego en el caso de la Masacre de Santo Domingo, la Corte fue un poco más allá de lo reconocido en el caso Cepeda Vargas y estableció que "el proceso contencioso administrativo puede ser relevante en la calificación y definición de determinados aspectos o alcances de la responsabilidad estatal, así como en la satisfacción de ciertas pretensiones en el marco de una reparación integral."[949]. (Subraya fuera de texto original)

A diferencia de lo que había manifestado hasta entonces[950], a partir de ese caso, la Corte ha comenzado a reconocer que lo decidido a nivel interno a través de la jurisdicción contencioso administrativa, no sólo puede llegar a considerarse como una justa compensación, sino que puede ser relevante en la calificación de la responsabilidad estatal. Al respecto señaló que, "la vía contencioso administrativa será relevante en casos en que haya sido efectivamente intentada por personas afectadas por violaciones a sus derechos o por sus familiares." Si bien no es un "recurso que deba ser siempre agotado, [...] la Corte tomará en cuenta, en lo pertinente, los alcances y resultados de esa vía judicial en la determinación completa y adecuada de la responsabilidad estatal, así como en lo que corresponde a la fijación de una reparación integral a favor de las presuntas víctimas"[951]. (subraya fuera de texto original)

Finalmente, en el caso *Rodríguez Vera y otros,* la CorteIDH reiteró que "lo decidido por la jurisdicción contenciosa administrativa puede ser tomado en cuenta en lo que concierne a la obligación de reparar integralmente una violación de derechos"[952]. Asimismo, la Corte manifestó que "la jurisdicción contenciosa

[947] Ibídem, párr.202.
[948] Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. párr. 213 y 246.
[949] Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 30 de noviembre de 2012, párr.38.
[950] Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr.339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 206.
[951] Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 30 de noviembre de 2012, párr.38.
[952] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Párr. 548 Rodríguez Vera. Párr. 548.

administrativa permite un acceso más expedito a reparaciones por el daño causado"[953].

En dicho caso también concluyó que:

> "Sin embargo, la vía contenciosa administrativa será relevante en casos en que haya sido efectivamente intentada por personas afectadas por violaciones a sus derechos o por sus familiares. Es decir, no es un recurso que necesariamente deba ser siempre agotado, por lo que no inhibe la competencia de la Corte para determinar las reparaciones que estime pertinentes como consecuencia de las violaciones encontradas en el mismo. Sin perjuicio de ello, la Corte tomará en cuenta, en lo pertinente, los alcances y resultados de esa vía judicial en lo que corresponde a la fijación de una reparación integral a favor de las víctimas. La Corte recuerda que una reparación integral y adecuada no puede ser reducida al pago de compensación a las víctimas o sus familiares" (Subraya fuera de texto original)

Del recuento jurisprudencial citado, se pueden derivar al menos las siguientes conclusiones:

i) La CorteIDH ha reconocido y valorado el alcance de la justicia contencioso administrativa en Colombia en materia de reparaciones, como un recurso que *contribuye* a la reparación integral, en especial por su potencialidad de complementarse con otros recursos de manera que, en conjunto, tengan la virtualidad de reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en un caso concreto;

ii) Aunque este recurso, hasta el momento no ha sido considerado suficiente para alcanzar la reparación integral a las víctimas, se reconoce que es un recurso que ha tendido a ello. Particularmente importante es el reconocimiento de la H.Corte de que este recurso "podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos"[954]

[953] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Párr. 548 Rodríguez Vera. Párr. 548.
[954] Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr.202.

D. Reconocimiento de la Ley de Víctimas por parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Estado quiere señalar que la H.Corte Interamericana reconoció, en el caso de las *Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis),* los avances que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha representado en materia de reparaciones a nivel interno. Así, en dicho caso afirmó que:

> "470. En relación con las medidas de reparación, la Corte resalta que el Derecho Internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin perjuicio de ello, el Tribunal indica que, en escenarios de justicia transicional en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación.
>
> En esos contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia (…)
>
> 472. En el presente caso, la Corte reconoce y valora los avances llevados a cabo por el Estado en materia de reparación de víctimas del conflicto armado, los cuales se han venido desarrollando, con más ahínco, a partir de la promulgación de la Ley de Víctimas. Asimismo, resulta claro que, tal y como lo mencionó el declarante a título informativo en su exposición durante la audiencia y en el documento que entregó durante ésta, la situación a la que ha llegado el Estado ha sido producto de una evolución del conflicto y de las medidas tomadas por el gobierno no solo para combatirlo, sino también para que independientemente de lo que suceda con aquél, las víctimas tengan derecho a una reparación. De acuerdo con lo manifestado en el peritaje de Juan Pablo Franco, propuesto por el Estado, la Corte Constitucional ha reconocido los avances que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha representado en materia de reparaciones."(Subraya fuera de texto original)

A su vez, en el reciente caso *Rodríguez Vera c. Colombia,* respecto de la Ley de Víctimas la H.Corte afirmó que:

> "(…) la Corte advierte que algunos aspectos de dicho programa pudieran resultar acordes a las pretensiones de las víctimas. Por tanto, la Corte examinará las pretensiones solicitadas y ordenará las medidas de

reparación que estime pertinentes. El Estado podrá implementar dichas reparaciones a través de los programas de reparación establecidos a nivel interno, siempre y cuando sean acordes a las medidas ordenadas en la presente Sentencia."[955] (Subraya fuera de texto original)

En el presente caso, el Estado considera que la H.Corte debe valorar el carácter adecuado y efectivo de la Ley de Víctimas para reparar integralmente las violaciones alegadas en el caso, en conjunto con los demás recursos adecuados y efectivos para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Como ya se mencionó, en el presente caso las víctimas contaron y cuentan con (I) la posibilidad de ser reparadas en sede judicial, y (II) la posibilidad de acudir a los mecanismos de reparación integral que ofrece la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas. A continuación, el Estado profundizará sobre estos aspectos:

E. Reparación en sede judicial

La reparación en sede judicial procura el otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas. Esto implica que el juez al momento de fijar las reparaciones, deberá analizar caso por caso, teniendo en cuenta las violaciones que se aleguen y los daños que se logren acreditar. Las víctimas del presente caso: (i) cuentan la posibilidad de ser reparadas en el marco de las investigaciones penales que aún se adelantan por los hechos del caso y (ii) contaron y cuentan con la posibilidad de ser reparadas a través de la jurisdcción contenciosa administrativa, especificamente, a traves de la acción de reparación directa.

En lo que se refiere a la reparación en el marco de los procesos penales, es de mencionar que en el sistema jurídico colombiano se puede dar tanto a través del proceso penal ordinario, así como a través del proceso de Justicia y Paz previsto en la Ley 975 de 2005. En ambos casos se cuenta con la posibilidad de iniciar incidentes de reparación integral.

Esto quiere decir que, como recurso complementario a la reparación que las víctimas han recibido y podrán recibir a través de la Ley de Víctimas y de la acción de reparación directa que se expondrán más adelante; las víctimas del presente caso también cuentan con la posibilidad de participar activamente en

[955] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del palacio de justicia) vs. Colombia, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 551.

los procesos penales que se están delantado en relación con los hechos del caso. Esta participación incluye la posibilidad con la que cuentan las víctimas de solicitar reparación por los daños ocasionados.

Frente a la reparación que se da en el marco de procesos penales, es de resaltar que la propia CorteIDH ha reconocido y valorado estas medidas destinadas a reparar integralmente a las víctimas. En su reciente sentencia en el caso de *Rodríguez Vera c. Colombia* la Corte señaló que:

> "Por otra parte, la Corte reconoce y valora que en la condena penal dictada contra el Comandante de la Escuela de Caballería se hayan incluido medidas destinadas a reparar integralmente a las víctimas."[956]

Por su parte, como ya lo ha manifestado el Estado en este escrito, la acción de reparación directa en lo contencioso administrativo constituye un recurso adecuado y efectivo para la protección y garantía del derecho a la reparación. Tal y como es de conocimiento de la H. Corte, en el presente caso, algunos familiares de las víctimas acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa. Conforme a lo anterior, a continuación se relaciona un cuadro con el fin de ilustrar a la Corte qué personas han accedido al recurso de reparación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

No.	**NOMBRE**	**Agotamiento del contencioso**
a. Núcleo familiar de Aníbal de Jesús Castaño Gallego:		
1.	María Oveida Gallego Castaño	Sí
2.	Leidy Yohana Castaño Gallego	Sí
3.	Santiago Castaño Gallego	Sí
4.	Hernando Castaño Gallego	Sí
5.	Abelino Castaño Gallego	Sí
6.	Bernabe Castaño Gallego	Sí

[956] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287. Párr. 552.

7.	Rubén Antonio Castaño Gallego	Sí
8.	María Brígida Castaño Gallego	No
9.	Ester Julia Castaño Gallego	No
10.	Heriberto Antonio Castaño Gallego	No
11.	María Elvira Castaño Gallego	No
b. Núcleo familiar de Oscar Hemel Zuluaga Marulanda:		
1.	María Romelia Marulanda Zuluaga	Sí
2.	José Bernardo Zuluaga Aristizábal	Sí
3.	Arbey Esteban Zuluaga Marulanda	Sí
4.	Sandra Liliana Zuluaga Marulanda	Sí
5.	Luz Marina Zuluaga Marulanda	Sí
6.	Blanca Orfilia Zuluaga Marulanda	Sí
7.	Bernardo Efrén Zuluaga Marulanda	Sí
8.	Daniel Antonio Zuluaga Marulanda	Sí
9.	Adolfo de Jesús Zuluaga Marulanda	Sí
10.	Gladis Elena Zuluaga Marulanda	Sí
11.	María Noelia Zuluaga Marulanda	Sí
12.	Omaira Lucía Zuluaga Marulanda	No
13.	Jhon Arnilson Zuluaga Marulanda	No
14.	Aníbal Alonso Zuluaga Marulanda	No
c. Núcleo familiar de Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero		

1.	María Dioselina Quintero	Pendiente de Fallo
2.	Héctor Hugo Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
3.	Román Antonio Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
4.	Diana Marcela Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
5.	Clara Rosa Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
6.	Jorge Enrique Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
7.	Pedro Claver Quintero	No
8.	Luis Alberto Quintero	No
9.	Martha Lucía Quintero	No
10.	Luz Marina Quintero	No
11.	Duván Alexander Quintero	No
12.	Leónidas Cardona Quintero	No
d. Núcleo familiar de Irene de Jesús Gallego Quintero		
1.	Ester Julia Quintero de Gallego	Sí
2.	José Apolinar Gallego Quintero	Sí
3.	María Lucely Gallego Quintero	Sí
4.	Eladio Gallego Quintero	Sí
5.	María Luz Mery Gallego Quintero	No
6.	Luz Mary del Socorro Gallego Quintero	No
7.	Marleny Gallego Quintero	No

8.	José Iván Gallego Quintero	No
e. Núcleo familiar de Juan Carlos Gallego Hernandez y Octavio de Jesús Gallego Hernández		
1.	Eliseo de Jesús Gallego Quintero	No
2.	Maria Engracia Hernández de Gallego	Sí
3.	Florinda de Jesús Gallego Hernández	Sí
4.	María Aurora Gallego Hernández	Sí
5.	María de los Ángeles Gallego Hernández	Sí
f. Cónyuge e hijos de Octavio de Jesús Gallego Hernández		
6.	María Florinda Gallego Hernández	Sí
7.	Yanet Gallego Gallego	Sí
8.	Deicy Gallego Gallego	Sí
9.	Johana Gallego Gallego	Sí
g. Núcleo familiar de Jaime Alonso Mejía Quintero		
1.	Alba Rosa Mejía Quintero	Sí
2.	Oliva del Socorro Mejía de Gallego	Sí
3.	Luz Dary Mejía Quintero	Sí
4.	Marta Edilma Mejía Quintero	Sí
5.	Elda Emilsen Mejía Quintero	Sí
6.	José Octavio Mejía Quintero	No
7.	Pedro Nel Mejía Quintero	No

8.	Ana Oveida Mejía Quintero	No
9.	Consuelo de Jesús Mejía Quintero	No
10.	Rubén de Jesús Mejía Quintero	No
11.	Dolly Amanda Mejía Quintero	No
12.	Luz Mery Mejía Quintero	No
13.	Luis Alveiro Mejía Quintero	No
14.	Edgar de Jesús Mejía Quintero	No
G. Núcleo familiar de Hernando de Jesús Castaño Castaño		
1.	Florinda de Jesús Gallego Hernández	Sí
2.	Jhon Fredy Castaño Gallego	Sí
3.	Claudia Yaneth Castaño Gallego	Sí
4.	Wilder Castaño Gallego	Sí
5.	Juan Diego Castaño Gallego	Sí
6.	Celeni Castaño Gallego	Sí
7.	Jasmin Lorena Castaño Gallego	Sí
8.	Héctor de Jesús Castaño Castaño	No
9.	Berardo de Jesús Castaño Castaño	No
10.	María Sofía Castaño Castaño	No
11.	Josefina Castaño Castaño	No
12.	Blanca Inés Castaño Castaño	No
13.	Edilma de Jesús Castaño Castaño	No

h. Núcleo familiar de Orlando de Jesús Muñoz		
1.	Arsecio Muñoz García	No
2.	Rubén Darío Muñoz Castaño	Sí
3.	Abelardo Muñoz Castaño	Sí
4.	Carlos Amador Muñoz Castaño	Sí
5.	Rosa María Muñoz Muñoz	No
6.	María Aurora Muñoz Muñoz	No
7.	Marco Aurelio Muñoz Muñoz	No
8.	María Rubiela Muñoz Castaño	No
9.	Cruz Elena Muñoz Castaño	No
10.	Bertha Inés Muñoz Castaño	No
11.	Florinda Muñoz Castaño	No
12.	Oscar Santiago Muñoz Castaño	No
i. Núcleo familiar de Andrés Antonio Gallego Castaño		
1.	María de la Cruz Hernández de Gallego	Sí
2.	Ricaurte Antonio Gallego Hernández	Sí
3.	Eusebio Gallego Hernández	Sí
4.	María Nubia Gallego Hernández	Sí
5.	Lucelly Gallego Hernández	Sí
6.	Omaira Gallego Hernández	Sí
7.	Rosa Linda Gallego Hernández	Sí

8.	Belarmina Gallego Hernández	Sí
9.	María Florinda Gallego Hernández	Sí
10.	Miguel Antonio Gallego Castaño	No
11.	Juan de Jesús Gallego Castaño	No
12.	Juan Cristobal Gallego Castaño	No
j. Núcleo familiar de Leónidas Cardona Giraldo		
1.	María del Rocío Cardona Fernández	Sí
2.	Yormarti Cardona Cardona	Sí
3.	Luz Dary Cardona Giraldo	Sí
4.	María Cemida Cardona Giraldo	Sí
5.	Aura Luz Cardona Giraldo	Sí
6.	Cándida Rosa Giraldo Gallego	Sí
7.	María Isabel Giraldo Gallego	No
8.	Bernardo de Jesús Giraldo Gallego	No
9.	Elda Nury Giraldo Gallego	No
10.	Marcela Giraldo Gallego	No
k. Núcleo familiar de Javier de Jesús Giraldo Giraldo		
1.	Nelly Soto de Castaño	No
2.	Cruz Verónica Giraldo Soto	No

Como lo puede apreciar la Honorable Corte frente a cada una de las víctimas directas de desaparición, encontramos que varios familiares acudieron al recurso contencioso. Este hecho permite concluir que la acción de reparación, además de ser el recurso adecuado y efectivo para lograr una indemnización por los

daños materiales e inmateriales que se pudieren haber causado, se encontraba disponible para ser agotado. En este sentido, si bien los peticionarios alegan la existencia de obstáculos fácticos como la "situación de temor a que se vieron sometidos durante muchos años por el dominio que dentro de la región del oriente antioqueño tuvieron distintos grupos armados"[957]; el Estado desea poner de presente que salvo que demuestren lo contrario, es claro que todas las víctimas pudieron haber tenido acceso al recurso contencioso administrativo.

Por otra parte, el Estado quiere dejar presente que la acción de reparación directa ha estado disponible todo este tiempo, y aún sigue estándolo para aquellos familiares de las víctimas de desaparición que no agotaron este recurso. En este sentido, la jurisprudencia administrativa en Colombia ha sido constante en afirmar que ante un hecho continuado, como lo puede ser la desaparición de una persona, el recurso seguirá vigente hasta tanto no haya cesado la conducta. Específicamente en el caso de desaparición, hasta que no hayan sido encontrados y entregados los restos de la presunta víctima.[958]

En efecto, las características de un daño continuado en el tiempo, en términos generales, impiden que mientras no cese el perjuicio, pueda comenzar el cómputo del término de caducidad de las acciones de reparación ante el contencioso administrativo. Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana, con el fin de establecer pautas expresas para salvaguardar al máximo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Al respecto, el Consejo de Estado manifestó lo siguiente:

> "(…) el carácter continuado del daño no impide acudir a la jurisdicción para reclamar su indemnización en acción de reparación directa, como quiera que el mismo no se ha consolidado, situación que de igual manera no da lugar a la configuración del fenómeno de la caducidad."[959]

Ahora, frente a las víctimas para quienes la jurisdicción contencioso administrativa ha reconocido reparaciones, el Estado considera que no habría lugar a que la Honorable Corte decretara indemnizaciones adicionales a las que ya han sido otorgadas en el orden interno.

[957] Escrito Solicitudes Argumentos y Pruebas, pág. 119.
[958] Al respecto, puede consultarse: Auto de julio 26 de 2011, en el proceso 08001-23-31-000-2010-00762-01, Auto de 3 de marzo de 2010, en el proceso 50001-23-31-000-2008-00350-01 (36282); Auto de 19 de julio de 2007, en el proceso 25000-23-26-000-2004-01514-01 (31135) y la Sentencia de febrero 28 de 2011, en el proceso 73001-23-31-000-1999-00098-01; Sentencia Consejo de Estado, Sección 3. Septiembre 17 de 2013.
[959] Auto de 19 de julio de 2007, en el proceso 25000-23-26-000-2004-01514-01. Además pueden consultarse: Auto de julio 26 de 2011, en el proceso 08001-23-31-000-2010-00762-01, Auto de 3 de marzo de 2010, en el proceso 50001-23-31-000-2008-00350-01 y la Sentencia de febrero 28 de 2011, en el proceso 73001-23-31-000-1999-00098-01.

Sobre este punto el Estado quiere poner de presente que en el marco del proceso acumulado adelantado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, se profirió sentencia del 15 de junio de 2010[960] por medio de la cual declaró la responsabilidad de la Nación a título de falla en la prestación del servicio POR OMISIÓN por las desapariciones forzadas de las siguientes personas:

1. Irene de Jesús Gallego Quintero
2. Leonidas Cardona Giraldo
3. Jaime Alonso Mejía Quintero
4. Hernando Castaño
5. Octavio de Jesús Gallego Hernández
6. Juan Carlos Gallego Hernández
7. Oscar Hemel Zuluaga Marulanda
8. Aníbal de Jesús Castaño Gallego
9. Andres Antonio Gallego Castaño
10. Orlando de Jesús Muñoz Castaño

En esta misma sentencia, el Tribunal de Antioquia ordenó las siguientes reparaciones económicas:

- **Perjuicios Materiales – Lucro Cesante:**

Nombre de la víctima	**Lucro cesante reconocido en la sentencia**	**Lucro cesante calculado - ESAP**
Andrés Antonio Gallego Castaño	Para la esposa: $58’869.207 Para su hijo: $46’607.541 Total: $105’476.748	$84´119.401,60
Anibal de Jesús Castaño Gallego	Para sus hijos: 1. $69’260.155 2. $65’322.227 Total: $134’582.382	$175´369.893,44
Hernando de Jesús Castaño Castaño	Para sus hijos: 1. $26’808.685 2. $25’814650 3. $24’795.891 4. $23’048.432	$164´444.737,62

[960] Tribunal de Antioquia, Sentencia 15 de junio de 2010. (Anexo 14)

	5. $24’192.594 Total: $124’660.252	
Irene de Jesús Gallego Quintero	Para cada uno de sus padres: $16’332.214 Total:32’664.428	$183´764.586,76
Juan Carlos Gallego Hernández	Para su madre: $12’802.303	$177´736.472,73
Leonidas Cardona Giraldo	Para su hijo: $134’238.213	$175´623.864,69
Octavio de Jesús Gallego Hernández	Para su esposa: $81’549.051 Para sus hijos: 1. 19’853.410 2. 20’540.288 3. 20’943.365 Total: $ 142’886.014	$170´438.166,52
Oscar Hemel Zuluaga Marulanda	Para cada uno de sus padres: $26’065.585 Total: $52’131.170	$195´875.503,54

No se reconoció suma alguna a los demandantes del núcleo familiar del señor Jaime Alonso Mejía Quintero comoquiera que no se aportó medio probatorio que acreditara dependencia económica.

Tampoco se reconoció suma alguna a los hermanos de Orlando de Jesús Muñoz Castaño, pues no se aportó prueba alguna que permitiera inferir que los hermanos dependían económicamente de él.

Se observa que las liquidaciones efectuadas por el Tribunal son adecuadas y obedecen los parámetros establecidos por el Consejo de Estado. Es así como, la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante elaborada por el Tribunal Administrativo tomó en cuenta los parámetros jurisprudenciales establecidos por el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo comoquiera que, por ejemplo, para el caso del señor Oscar Hemel Zuluaga Marulanda se determinó reconocer para sus padres la suma que resultara de lo que éste percibiría hasta cuando cumpliera los 25 años de edad. Lo mismo sucedió para los padres de la joven Irene de Jesús Gallego Quintero y del joven Juan Carlos Gallego Hernández.

En efecto, vale destacar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres de una víctima, se ha señalado en varias oportunidades por jurisprudencia de esa Corporación que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años[961].

Argumento igualmente aplicable para aquellos casos en los que se estudia el reconocimiento de los perjuicios a favor de los hijos de una víctima, a quienes se les presume su dependencia económica hasta los 25 años de edad. Haciendo uso de esta presunción, el Tribunal, por ejemplo, efectuó la liquidación para las hijas del señor Octavio de Jesús Gallego Hernández.

Lo anterior con fundamento en los siguientes razonamientos:

> "En cuanto al lucro cesante en cabeza de los menores de edad, de la existencia de la obligación alimentaria se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que se deben alimentos, entre otros, a los hijos hasta el día anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se deriva de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere que la existencia del perjuicio material, dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación. Con este criterio la Corporación, inicialmente, fijó el lucro cesante futuro para los hijos menores de edad, en casos como el que aquí se estudia, hasta la edad de 18 años. No obstante, el criterio actual de la Sala, considera que la liquidación del lucro cesante debe realizarse hasta que los hijos cumplan 25 años de edad, como quiera que frente a estos las reglas de la experiencia hacen presumir su manutención hasta dicha edad, aspecto éste que llevó a la modificación del criterio jurisprudencial inicial. De igual forma, se modificó el criterio jurisprudencial que se tenía en relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio."[962]

[961] Sobre el particular ver por ejemplo: Sentencia de 26 de marzo de 2008, exp.16530 M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia de 18 de marzo de 2010 M.P. Dra Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de quince de octubre de 2008 M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
[962] Sentencia del 12 de junio de 2014 M.P. Jaime Orlando Santofimio Exp: 29.501

- **Perjuicios Morales:**

No.	NOMBRE	Perjuicios morales reconocidos
• **a. Núcleo familiar de Aníbal de Jesús Castaño Gallego:** •		
1.	María Oveida Gallego Castaño	100 SMLMV[963]
2.	Leidy Yohana Castaño Gallego	100 SMLMV
3.	Santiago Castaño Gallego	100 SMLMV
4.	Hernando Castaño Gallego	50 SMLMV[964]
5.	Abelino Castaño Gallego	50 SMLMV
6.	Bernabe Castaño Gallego	50 SMLMV
7.	Rubén Antonio Castaño Gallego	50 SMLMV
8.	María Brígida Castaño Gallego	No agotó este recurso
9.	Ester Julia Castaño Gallego	No agotó este recurso
10.	Heriberto Antonio Castaño Gallego	No agotó este recurso
11.	María Elvira Castaño Gallego	No agotó este recurso
• **b. Núcleo familiar de Oscar Hemel Zuluaga Marulanda:** •		
1.	María Romelia Marulanda Zuluaga	100 SMLMV
2.	José Bernardo Zuluaga Aristizábal	100 SMLMV

[963] Para el momento en el que se realizó el pago, 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes correspondían a cincuenta y tres millones quinientos sesenta mil pesos ($53´560.000), de acuerdo a la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República para la fecha del pago este valor correspondía a US$30.352 dólares americanos.
[964] Para el momento en el que se realizó el pago, 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes correspondían a veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos ($26´780.000), de acuerdo a la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República para la fecha del pago este valor correspondía a US$15.176 dólares americanos.

3.	Arbey Esteban Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
4.	Sandra Liliana Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
5.	Luz Marina Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
6.	Blanca Orfilia Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
7.	Bernardo Efrén Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
8.	Daniel Antonio Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
9.	Adolfo de Jesús Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
10.	Gladis Elena Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
11.	María Noelia Zuluaga Marulanda	50 SMLMV
12.	Omaira Lucía Zuluaga Marulanda	No agotó este recurso
13.	Jhon Arnilson Zuluaga Marulanda	No agotó este recurso
14.	Aníbal Alonso Zuluaga Marulanda	No agotó este recurso
• **c. Núcleo familiar de Miguel Ancízar Cardona Quintero y Juan Crisóstomo Cardona Quintero** •		
1.	María Dioselina Quintero	Pendiente de Fallo
2.	Héctor Hugo Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
3.	Román Antonio Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
4.	Diana Marcela Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
5.	Clara Rosa Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
6.	Jorge Enrique Cardona Quintero	Pendiente de Fallo
7.	Pedro Claver Quintero	No agotó este recurso
8.	Luis Alberto Quintero	No agotó este recurso

9.	Martha Lucía Quintero	No agotó este recurso
10.	Luz Marina Quintero	No agotó este recurso
11.	Duván Alexander Quintero	No agotó este recurso
12.	Leónidas Cardona Quintero	No agotó este recurso
• **d. Núcleo familiar de Irene de Jesús Gallego Quintero** •		
1.	Ester Julia Quintero de Gallego	100 SMLMV
2.	José Apolinar Gallego Quintero	100 SMLMV
3.	María Lucely Gallego Quintero	50 SMLMV
4.	Eladio Gallego Quintero	50 SMLMV
5.	María Luz Mery Gallego Quintero	No agotó este recurso
6.	Luz Mary del Socorro Gallego Quintero	No agotó este recurso
7.	Marleny Gallego Quintero	No agotó este recurso
8.	José Iván Gallego Quintero	No agotó este recurso
• **e. Núcleo familiar de Juan Carlos Gallego Hernandez y Octavio de Jesús Gallego Hernández** •		
1.	Eliseo de Jesús Gallego Quintero	No agotó este recurso
2.	Maria Engracia Hernández de Gallego	100 SMLMV
3.	Florinda de Jesús Gallego Hernández	100 SMLMV[965]
4.	María Aurora Gallego Hernández	100 SMLMV[966]

[965] Florinda de Jesús Gallego recibió 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por cada uno de sus hermanos.
[966] María Aurora Gallego Hernández recibió 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por cada uno de sus hermanos.

5.	María de los Ángeles Gallego Hernández	100 SMLMV[967]
f. Cónyuge e hijos de Octavio de Jesús Gallego Hernández		
6.	María Florinda Gallego Hernández	100 SMLMV
7.	Yanet Gallego Gallego	100 SMLMV
8.	Deicy Gallego Gallego	100 SMLMV
9.	Johana Gallego Gallego	100 SMLMV
• **g. Núcleo familiar de Jaime Alonso Mejía Quintero** •		
1.	Alba Rosa Mejía Quintero	50 SMLMV
2.	Oliva del Socorro Mejía de Gallego	50 SMLMV
3.	Luz Dary Mejía Quintero	50 SMLMV
4.	Marta Edilma Mejía Quintero	50 SMLMV
5.	Elda Emilsen Mejía Quintero	50 SMLMV
6.	José Octavio Mejía Quintero	No agotó este recurso
7.	Pedro Nel Mejía Quintero	No agotó este recurso
8.	Ana Oveida Mejía Quintero	No agotó este recurso
9.	Consuelo de Jesús Mejía Quintero	No agotó este recurso
10.	Rubén de Jesús Mejía Quintero	No agotó este recurso
11.	Dolly Amanda Mejía Quintero	No agotó este recurso
12.	Luz Mery Mejía Quintero	No agotó este recurso
13.	Luis Alveiro Mejía Quintero	No agotó este recurso

[967] María de los Ángeles Gallego Hernández recibió 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por cada uno de sus hermanos.

14.	Edgar de Jesús Mejía Quintero	No agotó este recurso
• • **G. Núcleo familiar de Hernando de Jesús Castaño Castaño** •		
1.	Florinda de Jesús Gallego Hernández	100 SMLMV
2.	Jhon Fredy Castaño Gallego	100 SMLMV
3.	Claudia Yaneth Castaño Gallego	100 SMLMV
4.	Wilder Castaño Gallego	100 SMLMV
5.	Juan Diego Castaño Gallego	100 SMLMV
6.	Celeni Castaño Gallego	100 SMLMV
7.	Jasmin Lorena Castaño Gallego	100 SMLMV
8.	Héctor de Jesús Castaño Castaño	No agotó este recurso
9.	Berardo de Jesús Castaño Castaño	No agotó este recurso
10.	María Sofía Castaño Castaño	No agotó este recurso
11.	Josefina Castaño Castaño	No agotó este recurso
12.	Blanca Inés Castaño Castaño	No agotó este recurso
13.	Edilma de Jesús Castaño Castaño	No agotó este recurso
• • **h. Núcleo familiar de Orlando de Jesús Muñoz** •		
1.	Arsecio Muñoz García	No agotó este recurso
2.	Rubén Darío Muñoz Castaño	50 SMLMV
3.	Abelardo Muñoz Castaño	50 SMLMV
4.	Carlos Amador Muñoz Castaño	50 SMLMV
5.	Rosa María Muñoz Muñoz	No agotó este recurso

6.	María Aurora Muñoz Muñoz	No agotó este recurso
7.	Marco Aurelio Muñoz Muñoz	No agotó este recurso
8.	María Rubiela Muñoz Castaño	No agotó este recurso
9.	Cruz Elena Muñoz Castaño	No agotó este recurso
10.	Bertha Inés Muñoz Castaño	No agotó este recurso
11.	Florinda Muñoz Castaño	No agotó este recurso
12.	Oscar Santiago Muñoz Castaño	No agotó este recurso
• • **i. Núcleo familiar de Andrés Antonio Gallego Castaño** •		
1.	María de la Cruz Hernández de Gallego	100 SMLMV
2.	Ricaurte Antonio Gallego Hernández	100 SMLMV
3.	Eusebio Gallego Hernández	100 SMLMV
4.	María Nubia Gallego Hernández	100 SMLMV
5.	Lucelly Gallego Hernández	100 SMLMV
6.	Omaira Gallego Hernández	100 SMLMV
7.	Rosa Linda Gallego Hernández	100 SMLMV
8.	Belarmina Gallego Hernández	100 SMLMV
9.	María Florinda Gallego Hernández	100 SMLMV
10.	Miguel Antonio Gallego Castaño	No agotó este recurso
11.	Juan de Jesús Gallego Castaño	No agotó este recurso
12.	Juan Cristobal Gallego Castaño	No agotó este recurso
• • **j. Núcleo familiar de Leónidas Cardona Giraldo** •		

1.	María del Rocío Cardona Fernández	100 SMLMV
2.	Yormarti Cardona Cardona	100 SMLMV
3.	Luz Dary Cardona Giraldo	50 SMLMV
4.	María Cemida Cardona Giraldo	50 SMLMV
5.	Aura Luz Cardona Giraldo	50 SMLMV
6.	Cándida Rosa Giraldo Gallego	100 SMLMV
7.	María Isabel Giraldo Gallego	No agotó este recurso
8.	Bernardo de Jesús Giraldo Gallego	No agotó este recurso
9.	Elda Nury Giraldo Gallego	No agotó este recurso
10.	Marcela Giraldo Gallego	No agotó este recurso
• **k. Núcleo familiar de Javier de Jesús Giraldo Giraldo** •		
1.	Nelly Soto de Castaño	No agotó este recurso
2.	Cruz Verónica Giraldo Soto	No agotó este recurso

Ahora, es de anotar que el Ministerio de Defensa Nacional mediante resolución 2265 del 23 de abril de 2012[968], resuelve: "reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de **CUATRO MIL OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS DOS PESOS CON 23/100 M/CTE (4,083,339,702.23[969])**, en la forma como quedó expuesta en la parte motiva (…)". Dicha suma fue cancelada mediante transferencia electrónica el 27 de abril de 2012[970].

Antes de concluir, el Estado quisiera destacar que si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo constituye sólo uno de los factores determinantes en la reparación integral de las víctimas de violaciones de DDHH; en Colombia existe un amplio marco normativo y operacional de reparación integral que

[968] Ministerio de Defensa Nacional, resolución 2265 del 23 de abril de 2012, (Anexo 17)
[969] De acuerdo a la tasa representativa del mercado certificada por el Banco de la República para la fecha del pago este valor correspondía a US$2´313.992 dólares americanos.
[970] Ministerio de Defensa Nacional, Certificación de Transferencia, 20 de enero de 2014. (Anexo18)

complementan las medidas dictadas en esta jurisdicción. De esta manera, y en desarrollo de los términos de la H.Corte la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, "podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos"[971] (subraya fuera de texto)

De lo anterior se puede concluir que:

i) El recurso ante lo contencioso administrativo siempre ha estado y sigue estando disponible para los familiares de presuntas víctimas de desaparición forzada;

ii) la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha condeno al Estado colombiano por los hechos del presente caso;

iii) la condena a la Nación se han traducido en órdenes de pago de indemnizaciones de carácter pecuniario, tanto de perjuicios morales, como materiales, que a la fecha, se han pagado efectivamente a los beneficiarios de las víctimas;

iv) las reparaciones ordenadas en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no sólo conforman un componente trascendental de la reparación integral dentro del marco de la actual política de Estado, sino que además constituye un recurso adecuado y efectivo para brindar una protección al derecho a la reparación.

F. La Ley de Víctimas como recurso adecuado y efectivo para la reparación integral de los hechos del caso

Como se manifestó al inicio de este escrito, las víctimas y sus familiares han sufrido el impacto del conflicto armado interno en Colombia. Esto implica la existencia de un derecho a la reparación integral de manera administrativa y una especial atención por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través la ruta individual de reparación integral.

De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[972]:

[971]Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr.202

[972] Ley 1448 de 2011. "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones." (Anexo 10)

"Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima." (Subraya fuera de texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, y para los hechos del caso *sub judice*, los familiares directos de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancizar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo y Javier de Jesús Giraldo Girlado, son considerados como víctimas en los términos de la ley 1448 de 2011[973].

Los demás familiares incluidos en el anexo único de víctimas presentado por la CIDH, así como los referenciados por los peticionarios en el Capítulo III del ESAP; podrán ser consideradas como víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011 con respecto a otros hechos victimizantes que sean reportados al momento de realizar la respectiva inscripción en el RUV, sin perjuicio de que no coincidan con los hechos del presente caso[974]. En todo caso, el Estado quiere dejar de presente

[973] En el caso de Jaime Alonso Mejía Quintero, es de resaltar que no aparecen familiares directos en las listas entregadas por la CIDH y los peticionarios

[974] Si bien algunos de los familiares no aparecen registrados en el RUV por desaparición, esto no obsta que sean reparados por este hecho victimizante. Si al construir el Plan de Asistencia, Atención y Reparación

que esta circunstancia bajo ningún supuesto podrá ser entendida como una posibilidad de ampliar el marco fáctico que hace parte del objeto de litigio.

En relación con la reparación administrativa que ofrece la Ley 1448, el Estado: 1) demostrará la idoneidad de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia y 2) incluirá la información relativa a las víctimas del presente caso.

1. Idoneidad de la Ley 1448 de 2011 para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es en esencia un programa de reparación por vía administrativa, que busca atender de manera integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado:

> "470. En relación con las medidas de reparación, la Corte resalta que el Derecho Internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin perjuicio de ello, el Tribunal indica que, en escenarios de justicia transicional en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. En esos contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia, siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad –en especial, a partir de la consulta y participación de las víctimas-; su adopción de buena fe; el nivel de inclusión social que permiten; la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas pecuniarias, el tipo de razones que se esgrimen para hacer reparaciones por grupo familiar y no en forma individual, el tipo de criterios de distribución entre miembros de una familia (órdenes sucesorales o porcentajes), parámetros para una justa distribución que tenga en cuenta la posición de las mujeres entre los miembros de la familia u otros aspectos diferenciales tales como si existe propiedad colectiva de la tierra o de otros medios de producción".[975] (subraya fuera de texto original)

Integral se evidencia la necesidad de implementar medidas de reparación diferentes a la económica para reparar estos hechos, la víctima tendrá acceso a estas medidas.

[975] Corte Interamericana De Derechos Humanos – Corte IDH-Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (operación génesis) vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párr. 470. Subraya fuera de texto.

La necesidad de implementar programas de reparación administrativa, en contextos de justicia frente a contextos de violaciones masivas a los derechos humanos, también ha sido mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, la cual en el Informe sobre la Implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas Iniciales del Proceso de Desmovilización de las AUC, de octubre de 2007, sostuvo:

> "97. En cualquier caso, el tema es particularmente conflictivo, pues en el marco de los balances que pretende realizar la Ley de Justicia y Paz como instrumento de justicia transicional, las víctimas se ven obligadas a resignar una parte considerable de sus expectativas de justicia por la reducción sustancial de las penas por crímenes atroces, a cambio de alcanzar la paz, lograr la verdad y el acceso efectivo a una reparación. De allí que no resulte razonable que el Estado, que ha establecido el marco jurídico del proceso y garantiza su suerte, no asuma respecto de las reparaciones a las víctimas el mismo papel central que reconoce asumir para lograr los demás elementos de la ecuación: la aplicación de justicia penal, la verdad, las políticas de memoria y el desmonte efectivo de los grupos ilegales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios."[976] (subraya fuera de texto original)

En razón de lo anterior, la CIDH, en mencionado informe, termina por recomendar al Estado de Colombia lo siguiente:

> "6. Estudiar la revisión del sistema de acceso a reparaciones previsto en el marco legal por la vía exclusiva del incidente de reparaciones en el procedimiento penal. El Estado debe asumir un rol principal y no secundario en garantizar el acceso de las víctimas a reparaciones, conforme a los estándares del derecho internacional. Para ello la CIDH recomienda la adopción de un programa de reparaciones que funcione de manera optativa frente a la vía judicial penal y complementaria de las demás reparaciones de índole colectiva y de los programas y servicios

[976] Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH. Informe sobre la Implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas Iniciales del Proceso de Desmovilización de las AUC y Primeras Diligencias Judiciales, octubre de 2007. Párrafo 97. Tomado de internet https://www.cidh.oas.org/countryrep/ColombiaAUC2007sp/Colombiadesmovilizacion2007-2.sp.htm

sociales destinados a la población que ha padecido la violencia en Colombia."[977] (subraya fuera de texto original)

Atendiendo a estas particularidades y a otras obligaciones internacionales del Estado de Colombia frente a la reparación integral de las víctimas[978], el Estado de Colombia, profirió la Ley 1448 de 2011. Esfuerzo que fue valorado positivamente por la propia CIDH en el Informe Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones, así:

> "18. Como ha sido reconocido en distintas oportunidades, por el Gobierno de Colombia, organismos de la sociedad civil y la comunidad internacional, el conflicto interno en Colombia ha ocasionado graves violaciones a los derechos de millones de colombianos. En este sentido, la CIDH valora la voluntad del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a través de un programa de reparación integral y se pone a disposición del Gobierno de Colombia a fin de colaborar con el proceso de implementación de dicho programa y darle seguimiento."[979] (subraya fuera de texto original)

Además del reconocimiento de la importancia de los programas de reparación administrativa mencionada por la Corte IDH y la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en su serie sobre mecanismos para fortalecer el Estado de Derecho en contextos de conflictos armados no internacionales, afirmó que los países que atraviesan por procesos de transición se enfrentan a dos problemas fundamentales: (i) violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y (ii) un contexto caracterizado por "una capacidad institucional débil, unas relaciones sociales rotas, niveles de confianza muy bajos y escasez de recursos financieros"[980]. Problemáticas presentes en el caso colombiano, por lo cual los programas especiales de reparación administrativa resultan fundamentales en la búsqueda por satisfacer los derechos de las víctimas, lograr el fortalecimiento del Estado y construir una sociedad democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.

[977] Ibíd. CIDH. Informe Ley de Justicia y Paz.
[978] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belem do Pará, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre otras, contienen la obligación de reparar integralmente y han sido ratificadas por el Estado de Colombia.
[979] CIDH. Lineamientos Principales para Una Política Integral de Reparaciones. OEA/Ser/L/V/II.131. Doc. 119 febrero 2008. Original: Español. Párrafo 18. Subraya fuera de texto.
[980] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- ACNUDH, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programas de reparaciones. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2008, P.17.

El valor de este tipo de reparaciones en contextos como el colombiano es también reconocido por el Centro Internacional para la Justicia Transicional- ICTJ, organismo que sostiene:

> "Colombia lleva 47 años en conflicto armado. Durante ese periodo, miles de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) han sido cometidas. Las víctimas de esas acciones configuran un enorme universo de titulares del derecho a la reparación. Tan solo el sistema institucional de Justicia y Paz registra más de 300.000 solicitudes de indemnización. No obstante, esa cifra podría ser mucho mayor.
>
> Como consecuencia, el país dispone de mecanismos de reparación judicial que, si bien son valiosos para las víctimas que han podido acceder a ellos, han sido desbordados por la masividad de las atrocidades. Por consiguiente, surgió un debate sobre la justicia y utilidad de los programas administrativos de reparaciones. El origen de esta discusión suele ubicarse con la expedición del Decreto 1290 de 2008."[981] (subraya fuera de texto)

De las anteriores afirmaciones es posible concluir que, el hecho de que los países se enfrenten a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos tiene como consecuencia que el universo de víctimas a reparar sea amplio y que recoja "formas diversas y múltiples de abuso"[982], que las situaciones que se pretenden reparar son con frecuencia de tal índole, que son irreparables[983] y no se podrá devolver a la víctima al *status quo ante*[984].

Es en esta realidad, que se ha llevado a establecer la necesidad de implementar reparaciones a través de programas administrativos masivos que cumplan con los estándares internacionales y se ajusten a las necesidades de la realidad nacional[985]. Estos, a diferencia de la reparación por vía judicial, "no están dirigidos a restituir o compensar a las víctimas por cada uno de los daños sufridos, ni en directa proporción al daño"[986].

[981] Instituto para la Justicia Transicional- ICTJ. La práctica institucional del programa de reparaciones administrativas para víctimas en Colombia. Carlos Lozano Acosta Investigador especializado de ICTJ.. Subraya fuera de texto.
[982] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- ACNUDH, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programas de reparaciones. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra 2008, P.17
[983] Íbidem.
[984] Íbidem.
[985] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Op.Cit. Ver también OACNUDH, op. Cit.980, P.9.
[986] Instituto para la Justicia Transicional- ICTJ. Elementos para un programa administrativo de reparaciones colectivas en Colombia, Catalina Díaz .Tareas Pendientes: propuesta para la formulación de políticas públicas de reparación en Colombia, ICTJ, Bogotá, 2010, P. 282.

De lo anterior se deriva un concepto de reparación que apunta a que los esfuerzos masivos otorguen beneficios directos a las víctimas con carácter de reparación material y simbólica, en sus dimensiones individual y colectiva, buscando satisfacer no sólo reclamos individuales[987]. Los programas masivos de reparación suponen, de acuerdo con el concepto arriba esbozado, que las medidas en ellos contenidas buscan abarcar ese universo amplio y complejo de víctimas al cual se enfrentan, no sólo buscando la satisfacción de los reclamos individuales, sino también reconociendo a las víctimas y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y la solidaridad social[988].

De lo anteriormente expuesto se concluye que: (i) el horizonte de la *restitutio in integrum* no es el estándar de justicia apropiado en contextos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos; (ii) en el marco de esquemas de justicia transicional, dada la masividad de las violaciones y del elevado número de víctimas, resulta imposible garantizar una restitución de los derechos que devuelva a todas las personas victimizadas al estado en que se encontraban antes de la violación de los derechos, y (iii) en el balance que se realiza al diseñar esquemas de justicia transicional, la integralidad de la reparación no debe ser entendida conforme al monto de la indemnización sino a la entrega de todos los componentes internacionalmente aceptados, como lo son la entrega de una compensación económica, la materialización de las garantías de no repetición, la rehabilitación física y mental y medidas de satisfacción que propendan por la redignificación de las víctimas.

La integralidad del programa masivo de reparación administrativa incorporado en la Ley 1448 de 2011 está dada, en la medida que, además del componente material, aborda otros aspectos directamente dirigidos al plano inmaterial, a la recuperación del proyecto de vida, el restablecimiento de la víctima en el goce efectivo de sus derechos y, sobre todo, a la recuperación de su estatus como ciudadano.

1.1 Las reparaciones derivadas de la Ley 1448 de 2011.

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país, este tiene su fundamento axiológico en la inclusión de los componentes, sugeridos internacionalmente, que hacen parte de la reparación integral, a saber: **1.1.1)** indemnización administrativa; **1.1.2)** medidas de restitución; **1.1.3)** medidas de satisfacción; **1.1.4)** medidas de rehabilitación; **1.1.5)**

[987]DE GREIFF, Pablo. Justicia y Reparaciones. En: DÍAZ, Catalina (Edit.), Reparaciones para las Víctimas de la Violencia Política, ICTJ, 2008. Pp. 303 – 308.
[988] Ibídem., P. 308.

garantías de no repetición; y **1.1.6)** medidas específicas para el hecho victimizante de desaparición forzada de personas.

La reparación integral concebida desde la consagración de los derechos de las víctimas conforma un concepto que comprende un conjunto amplio de medidas reconocidas como indispensables para lograr un goce efectivo de derechos, que se implementan teniendo en cuenta las necesidades reales de las víctimas.

Como se mencionó anteriormente, la Ley determina que la reparación integral no incluye solo compensar económicamente a la víctima a través de una indemnización administrativa; sino que además la reparación pretende abarcar la integralidad del daño producido en el ámbito material, emocional, social y cultural de las víctimas a través de medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. En este sentido, de acuerdo al contenido de la Ley de Víctimas, a las personas que ostenten esta calidad, se les proporcionarán medidas de asistencia y reparación, las cuales se relacionan en el siguiente gráfico:



1.1.1 Indemnización administrativa

El componente de indemnización pecuniaria que se otorga a través de la Unidad de Víctimas, no comprende la totalidad de los perjuicios ocasionados por las violaciones a los derechos humanos; sino que tiene el carácter de una compensación que el Estado entrega a las víctimas teniendo en cuenta la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, desde un enfoque diferencial y con observancia de los principios de progresividad y gradualidad.

1.1.2 Medidas de restitución

Para la Corte IDH, "*(…) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, el restablecimiento de la situación anterior*".[989] En ese sentido, la Ley de Víctimas comprende la restitución como la búsqueda del retorno al estado original de los derechos de las víctimas, de una manera transformadora frente a los daños causados con la ocurrencia del hecho victimizante. Son ejemplos de medidas de restitución: la restitución de tierras, la restitución en materia de vivienda, la garantía de retorno o reubicación de la población en situación de desplazamiento, las medidas en formación y generación de empleo. Hay situaciones en las que lamentablemente devolver las cosas al estado anterior de las violaciones es imposible, tal es el caso de las vidas humanas, de los sentimientos de las personas, de sus proyectos de vida, en esos casos se adoptan otros tipos de medidas para reparar.

En concreto, algunos ejemplos de tales medidas, comprenden lo siguientes:

- **Restitución de tierras:** Es la devolución de las tierras que fueran despojadas o abandonadas forzosamente como consecuencia de violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a partir del 1° enero de 1991, ya sea para poseedores o propietarios. La Restitución de Tierras es únicamente respecto de aquellas despojadas o abandonadas. Los bienes muebles (animales, cultivos, enseres, maquinaria, equipos, automóviles, etc.) no son objeto de restitución bajo la Ley 1448. Los procesos de restitución se inician de manera gradual y progresiva, es decir, no en todo el país de manera simultánea, sino por zonas microfocalizadas. Vale la pena mencionar que en Colombia, la restitución de tierras se realiza mediante un proceso mixto (judicial y administrativo) a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y los Jueces y Tribunales especializados en restitución de tierras.

- **Créditos y pasivos**: La Ley 1448 de 2011 establece que las personas víctimas del conflicto interno tienen derecho a ciertas medidas especiales en materia de créditos. Por ello, determinó la creación de líneas preferenciales de crédito dirigidas a financiar los negocios y proyectos productivos de las víctimas, con el ánimo de recuperar su capacidad productiva. Es importante aclarar que estos cupos de crédito financian actividades productivas en curso y no proyectos a implementar o iniciativas empresariales sin experiencia. Actualmente se cuenta con dos

[989] Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs Guatemala, sentencia de reparaciones y costas de noviembre 19 de 2004.

líneas de crédito, uno destinado al financiamiento de actividades productivas del sector rural y el otro al financiamiento de negocios que no sean agrícolas o ganaderos.

- **Retorno o reubicación de personas en situación de desplazamiento forzado:** con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar, La Ley de Víctimas establece que el retorno o la reubicación será procedente, solo bajo condiciones de seguridad favorables. Esto implica que se deberá permanecer en lugares donde el Estado pueda garantizar el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento. Cuando no existan las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar elegido, las víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar los hechos que generen o puedan generar su desplazamiento.

1.1.3 Medidas de satisfacción

Las medidas de satisfacción son aquellas que buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, en la medida que disponen de un alcance o repercusión pública[990]. Este tipo de medidas, contribuyen al logro de una reparación más amplia, pues apuntan a ejercer acciones sobre los daños irreparables.

Por ello, estas medidas reconocen la imposibilidad de restaurar las condiciones de vida de las víctimas a la situación a la que se encontraban antes de que ocurrieron los hechos. Estas medidas de carácter simbólico, como lo son el reconocimiento público de los hechos, el esclarecimiento histórico, el reconocimiento de responsabilidades y las solicitudes de perdón público, contribuyen a la dignificación de las víctimas y a la transformación de las interpretaciones y sentidos que tradicionalmente se le dieron a los hechos victimizantes.

Para esto el Estado ha diseñado una serie de medidas que buscan satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Adicionalmente, ha diseñado mecanismos que buscan apoyar, promover y hacer públicas las iniciativas locales (tanto individuales y colectivas) de verdad y memoria, así

[990] Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 219.

como de formación y capacitación en Derechos Humanos, expresiones artísticas, proyectos comunitarios, entre otros.

De este modo, se puede decir que existen unas medidas que son de carácter institucional en tanto implican la responsabilidad o participación directa del Estado, como lo son por ejemplo:

- Exención en la prestación del Servicio Militar (a cargo del Ministerio de Defensa en articulación con la Unidad para las Víctimas). Esta medida se puede solicitar por la víctima y/o sus representantes, cuando el beneficiaro de la medida se encuentre en el registro y sea la víctima directa o el familiar directo de la víctima.

- Aceptaciones públicas de los hechos y solicitudes de perdón público (coordinada por la Unidad para las Víctimas, en articulación con otras entidades).

- Acompañamiento en la entrega de restos óseos de las víctimas a sus familiares (a cargo de la Fiscalía General de la Nación).

- Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (participan la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial).

Por otra parte, se encuentran medidas que giran en torno a la recuperación de prácticas y escenarios socioculturales a través de objetos o espacios, que buscan la preservación y honra de la memoria de las víctimas y comunidades afectadas por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH como lo son:

- Actos de homenaje y dignificación.

- Conmemoración de fechas representativas para las comunidades establecidas a nivel municipal, departamental y nacional.

- Construcción de lugares o monumentos de memoria.

- Fortalecimiento de la tradición oral.

- Recuperación de escenarios de encuentro comunitario.

- Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales, que se perdieron por causa de un hecho victimizante.

Así mismo, existen otras medidas dirigidas directamente a la sociedad civil y que giran en torno a la reconstrucción de los hechos y su difusión desde la perspectiva de las víctimas, con el fin de generar un cambio frente a la forma como los colombianos entienden y asumen el conflicto, como lo son: Foros, conversatorios, talleres, cátedras, festivales, muestras, expresiones artísticas (audiovisuales, música, literatura, teatro, etc.), entre otras.

En todo caso las medidas de satisfacción, como las demás medidas que constituyen la reparación integral, son derechos de las víctimas que el Estado reconoce y que ejecutará en la medida en que las víctimas las consideren adecuadas y necesarias para resarcir el daño causado.

1.1.4 Medidas de rehabilitación

De acuerdo la Ley 1448 de 2011, las medidas de rehabilitación consisten en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Así mismo, de acuerdo con el artículo 136, son programas que deben incluir tanto las medidas individuales como las colectivas, de tal manera que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva.

Así mismo, el acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares, promoviendo acciones afirmativas a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos.

Estos programas se basan en los siguientes principios:

- Pro-actividad: Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las víctimas.

- Atención individual, familiar y comunitaria: Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual. Se deberá incluir entre sus prestaciones la

terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.

- Gratuidad: Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

- Atención preferencial: Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén contemplados en el programa.

- Duración: La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales.

- Ingreso: Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención.

- Interdisciplinariedad: Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Para la garantía de este tipo de medidas se ha generado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas- PAPSIVI-, el cual se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante (Decreto 4800 de 2011, Artículo 164.)

El PAPSIVI constituye la línea técnica que le permite a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario (incluido en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la

recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades.[991]

1.1.5 Garantías de no repetición

El artículo 149 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, contiene las siguientes garantías de no repetición:

- La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la Ley;

- La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad;

- La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos;

- La prevención de violaciones de derechos humanos para lo cual ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado;

- La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos;

- Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la Atención Integral contra Minas Antipersonal;

- Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir un enfoque diferencial;

- Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional

[991] Ministerio de Salud y Protección Social. Tomado de internet, http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Victimas/Paginas/papsivi.aspx, visto el 17 de agosto de 2015.

Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de cero tolerancia a la violencia sexual en las entidades del Estado;

- Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales;

- Difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior;

- El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas;

- La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los grupos armados al margen de la ley;

- Diseño e implementación de estrategias, proyectos y políticas de reconciliación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 975, tanto a nivel social como en el plano individual;

- El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica;

- La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios públicos condenados en violaciones de derechos humanos;

- La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver los conflictos sociales;

- Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal para las víctimas;

- La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o permita la ocurrencia de las violaciones de derechos humanos de conformidad con los procedimientos contencioso administrativos respectivos;

- Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos ocurridos en el marco de las violaciones contempladas en la Ley.

Al respecto, vale la pena mencionar que la Unidad para las Víctimas trabaja para la generación de este tipo de medidas, desde la perspectiva individual y colectiva.

En materia de acceso a la justicia, se adelantó el proceso de articulación entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de visibilizar algunos temas que requieren del trabajo de estas dos instituciones y en donde se formalizó un espacio de intercambio entre la Dirección de Articulación de la Fiscalía y la Dirección de Reparación de la Unidad para las Víctimas, para así poder coordinar acciones en materia de investigaciones de casos individuales y colectivos de mayor relevancia. El propósito de este importante espacio es propiciar un dialogo técnico entre los funcionarios especialistas en los temas en mención, a través de la exposición de las rutas, procesos y herramientas existentes, así como, las diferentes demandas de las víctimas en la materia, y lograr acordar acciones conjuntas para dar respuestas oportunas y pertinentes a esta población, partiendo de reconocer la importancia de este tema en la perspectiva de construcción de paz en nuestro país.

En cuanto a casos nacionales, el Comité de Impulso en materia de justicia, ha apoyado a la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones relacionadas con los casos de agresiones a periodistas y su respectiva priorización. En el marco de la articulación entre la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación, el grupo de Garantías de No Repetición ha gestionado la priorización de dichos casos.

Frente a lo anterior podemos concluir que la totalidad de esta oferta está disponible para las víctimas del presente caso, con la implementación de medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición. La implementación de estas medidas se genera de manera concertada y de acuerdo a las necesidades y deseos de cada persona, atendiendo siempre los estándares internacionales en materia de reparación integral.

Finalmente, el Estado quisiera resaltar que la indemnización administrativa es simplemente uno de los diversos componentes presentes en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, siendo complementaria a la satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición; a lo que debe sumarse que la reparación administrativa en ningún momento sustituye o impide la reparación por vía judicial.

1.1.6 Medidas específicas para el hecho victimizante de desaparición forzada de personas

Dentro del hecho victimizante de desaparición forzada han presentado especial importancia las siguientes medidas:

1.1.6.1 Acompañamiento psicosocial a familiares víctimas de desaparición forzada que asisten los procedimientos judiciales de entrega cuerpos y/o restos.

Dentro de las herramientas dispuestas en la Ley 1448 de 2011, la Unidad para las Víctimas, cuenta con medidas de satisfacción que son parte del programa de la reparación integral de las víctimas de hechos victimizantes como la desaparición forzada. Las medidas de satisfacción son un componente de la reparación integral, las cuales tienen un carácter material e inmaterial, tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido, a través de la reconstrucción de los hechos y preservación de la memoria histórica. Estas acciones tienen como principal objetivo proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas.

De esta forma, estas medidas contribuyen a la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, en especial sobre la reparación de daños de carácter inmaterial, con lo cual contribuyen a la transformación cultural a partir de la protección de los Derechos Humanos y acciones cívicas para evitar la repetición de los hechos, a través del diseño de medidas que buscan satisfacer los derechos de las víctimas y reconstruir su proyecto de vida.

La Unidad para las Víctimas ha buscado en el marco del hecho victimizante de desaparición forzada mecanismos que contribuyan a apoyar, promover y hacer públicas iniciativas locales (tanto individuales y colectivas) de verdad y memoria, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las víctimas al reconocimiento de la desaparición, así mismo, para garantizar la no repetición de estos hechos, con el objetivo de crear una cultura de derechos y respeto por la vida en atención a la prevención y protección de todas las personas víctimas de la desaparición forzada y el derecho internacional de los derechos humanos.

En este sentido, la Unidad pone a disposición esta herramienta de acompañamiento a las víctimas del presente caso con el fin de satisfacer sus derechos conculcados, y cesar el padecimiento continuado al que han sido expuestos por causa de las acciones perpetuadas en el contexto del conflicto armado interno.

1.1.6.2 Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal

En el marco del acompañamiento a las víctimas, la Unidad para las Víctimas diseñó como medida de satisfacción orientada a la mitigación del dolor de las víctimas, la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal, que tiene como objetivo facilitar herramientas, a los sobrevivientes de conductas como la desaparición forzada, para su recuperación emocional a través del desarrollo de nueve encuentros grupales. En este proceso, las acciones han sido cuidadosamente construidas, bajo las premisas del enfoque psicosocial, desarrolladas por las víctimas a partir de su propia autonomía y autodeterminación.

La Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal es un espacio reflexivo y solidario, que se desarrolla a través de encuentros grupales en los que las víctimas comparten sus sentimientos, creencias y experiencias, construyendo un escenario donde se busca permitir el bienestar emocional. Es así como en los encuentros grupales, las personas que han vivido hechos de violencia pueden reconocer que no están solas en su daño, sino que como ellas, hay muchas personas que han logrado afrontar el sufrimiento, re-construyendo su proyecto de vida y mejorando cada día las relaciones con los demás. Es por lo anterior, que la estrategia busca facilitar herramientas a los y las sobrevivientes del conflicto armado a través de encuentros grupales que apoyen su recuperación emocional.

1.1.6.3 Atención psicosocial en el marco del hecho victimizante de desaparición forzada

La atención psicosocial es consagrada como una medida de rehabilitación la cual tiene como objetivo aliviar el sufrimiento por la pérdida de los seres queridos, que en el caso de la desaparición forzada, es el instrumento para la rehabilitación efectiva de las víctimas indirectas de la desaparición forzada. Es así que el grupo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, ha diseñado una estrategia de atención especial a las víctimas de este hecho.

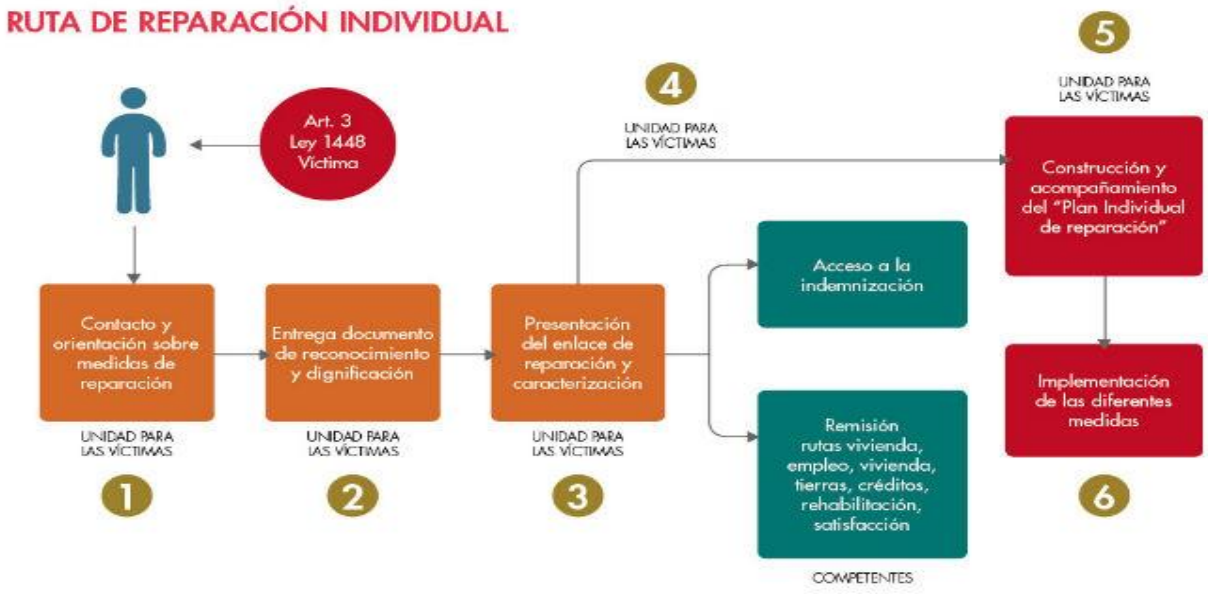
El artículo 163 del Decreto 4800 de 2011, establece que la Unidad para las víctimas, diseñará las directrices del enfoque psicosocial como componente transversal, el cual contendrá los lineamientos que respondan a la necesidad de materializar el enfoque psicosocial desde una perspectiva de reparación integral en todas las acciones, planes y programas, de atención, asistencia y reparación integral que se implementen en el marco de la Ley 1448 de 2011. Desde esta perspectiva, la Unidad para las Víctimas ha contemplado que el acompañamiento psicosocial es una de las condiciones que debe ser transversal a todo el proceso

de atención, tanto para el acceso a los derechos de las víctimas en asistencia como en reparación integral. Es por ello que se ha buscado avanzar en la construcción de alternativas complementarias entre sí, orientadas a mitigar el impacto emocional que emerge a partir de las graves violaciones a los Derechos Humanos y de las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

1.2 La Ruta de Reparación Individual

Con el fin de dar alcance a las medidas de reparación integral antes expuestas para el caso concreto, es fundamental tener en cuenta cómo procede la reparación individual. Es de anotar que esta reparación individual se hace a través de un proceso que, de manera gradual y progresiva, se implementa para el resarcimiento de los daños que de manera particular o propia hayan sufrido las personas víctimas del conflicto armado interno. Por ello, este proceso busca la implementación de medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.

Para dar cumplimiento a la labor antes descrita, se ha diseñado la ruta de reparación integral, la cual se presenta a continuación:



Con el fin de materializar la reparación individual la Unidad para las Víctimas diseñó e implementó un modelo de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (MAARIV), con esquemas de acompañamiento y fortalecimiento

social que permite gestionar de manera unificada las rutas de asistencia y reparación individual integral. **En este marco, las víctimas construyen su propio Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral –PAARI-**, que incluye medidas diferenciadas para cada una de ellas.

Así, cada uno de los Planes de Asistencia, Atención y Reparación Integral **–PAARI–**son diseñados con el fin de reparar individualmente a las víctimas del conflicto armado según las necesidades de cada una. Por ello, este plan se construye bajo el acompañamiento permanente de la Unidad, y de forma conjunta con las víctimas, a fin de disponer de la información personalizada necesaria para conocer las necesidades de cada una. Según estas especificidades, se establecen medidas diferenciadas para cada una de ellas en materia de restitución, rehabilitación, de satisfacción, no repetición e indemnización administrativa. Además, con esta metodología se identifican las carencias y capacidades de cada individuo, con el objeto de articular la oferta de programas de formación profesional o técnica, entre otros.

Esta ruta está disponible para las víctimas del presente caso[992], con la totalidad de los componentes de la reparación integral, lo que va mucho más allá de la indemnización administrativa, lo cual, como ya se mencionó es solamente uno de sus elementos.

1.3 Ruta de reparación colectiva

La ruta de reparación colectiva busca implementar el conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a las que tendrían derecho las comunidades y las organizaciones o grupos sociales y políticos, en términos políticos, materiales y simbólicos. Este enfoque está dirigido a la reparación del tejido social de las comunidades afectadas, al igual que a la recuperación de sus prácticas culturales y tradicionales, si en el caso hubiera lugar a ello, como una forma de garantizar la reconstrucción de su identidad colectiva como comunidad, y de su vida en relación.

La creación del Programa de Reparación Colectiva obedeció a los criterios establecidos en las recomendaciones emitidas por el Programa Institucional de Reparación Colectiva de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Estos criterios son: i) integralidad y coordinación del trabajo interinstitucional; ii) participación efectiva en el proceso; iii) reconocimiento explícito de las

[992] Tal y como se mencionó líneas arriba, para el caso de los familiares indirectos esta ruta también se encuentra disponible. Valga aclarar que no importa frente a que hecho victimizante sean registrados, pues durante la construcción del PAARI surgirán las necesidades específicas de cada una de las víctimas.

afectaciones de la población; iv) reconstrucción de le memoria histórica con miras a un proceso de reconciliación; v) implementación de medidas culturalmente apropiadas; y vi) transformación de las condiciones que pudieron generar las violaciones de derechos[993].

El Programa de Reparación Colectiva consta de los siguientes componentes: i) recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho a través de acciones y medidas tendientes a fortalecer la presencia permanente de las instituciones, con fundamento en el respeto y promoción de los derechos humanos, la capacidad de respuesta local para la garantía de derechos, la transformación de la cultura institucional, así como los mecanismos ciudadanos e institucionales de control y participación; y depuración de aquellos funcionarios que cohonestaron prácticas violatorias de derechos humanos; ii) construcción colectiva de ciudadanía política a través de la promoción de la participación y el fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva en los asuntos públicos de decisión e incidencia, con miras a la transformación de la cultura política ciudadana, y la cualificación de liderazgos y vocerías legítimas y no discriminatorias; iii) reconstrucción de los proyectos comunitarios, sociales y/o políticos afectados a partir del reconocimiento de la victimización, del daño colectivo y su reparación a través de medidas materiales, políticas y simbólicas; iv) reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos de reparación colectiva a través de medidas y acciones del Programa de Reparación Colectiva, orientadas a la toma de conciencia por parte de la sociedad y las comunidades y grupos sociales de su papel activo como sujetos de la reparación colectiva; v) rehabilitación comunitaria articulada a la atención psicosocial y dirigida a la reconstrucción del tejido social y a la protección de la cultura; vi) restablecimiento de las condiciones que permitan y potencien la existencia y el papel de comunidades, grupos y organizaciones sociales y políticas a través de su restitución, rehabilitación y fortalecimiento como actores sociales y políticos en la construcción de la democracia; vii) articulación de medidas materiales de reparación colectiva con otras medidas de la política pública sobre derechos sociales, económicos, culturales y políticos, con el fin de alcanzar el goce efectivo de los mismos; y viii) construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva, sus miembros individualmente considerados y la sociedad en su conjunto[994].

Para la implementación de esta ruta, es necesario que el grupo respecto al cual se busca la reparación, cumpla con las características establecidas en la

[993] Decreto 4800 de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones, Art. 224.
[994] Decreto 4800 de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones, Art. 226.

mencionada Ley para ser reconocido como sujeto colectivo de reparación. Al respecto la ley señala que una comunidad, es un conjunto social que comparte su identidad basada en prácticas, cultura, patrones de enseñanza, territorio o historia, con interés en generación de bienes indivisibles o públicos, que persigue objetivos comunes. Tal es el caso de las veredas, cabeceras de corregimientos o municipios de arraigo claro y conocido por sus habitantes, y los colectivos étnicos que comprenden pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, palenqueras y raizales, o las formas organizativas propias del pueblo Rrom.

En este sentido, de acuerdo a la ley en cuestión y sus decretos reglamentarios, son sujetos de reparación colectiva las comunidades, las organizaciones sociales y políticas y los grupos sociales y políticos por violaciones a sus derechos colectivos y a los derechos individuales de sus miembros que tengan un impacto colectivo, ocurridas con ocasión del conflicto armado después del 1 de enero de 1985[995].

Ahora bien, la implementación de esta ruta de reparación se efectúa a través de cinco etapas que serán descritas a continuación:

- Fase de identificación del sujeto de reparación colectiva y acercamiento: Durante esta fase además de una exhaustiva recolección de información sobre el sujeto de reparación colectiva, se lleva a cabo un encuentro con diferentes líderes de la comunidad con el fin de conocer el interés de sus miembros de hacer parte del proceso de reparación colectiva. Una vez la comunidad decide comenzar con el proceso, se conforma un comité de impulso, que representa al sujeto colectivo en el desarrollo de la ruta de reparación colectiva. Desde esta etapa deben vincularse las instituciones y entidades territoriales.

- Fase de alistamiento para iniciar la construcción de los Planes Integrales de Reparación Colectiva: Esta fase contempla el alistamiento comunitario e institucional. El primero consiste principalmente en la implementación de mecanismos para garantizar la participación de los diferentes integrantes del sujeto de reparación colectiva, y otorgar elementos a las víctimas para la identificación de necesidades y expectativas con respecto a este

[995] Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; decreto 4800 de 2011 "Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones", Art. 223; decreto 4635 de 2011 "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras", Art., 3, 4 y ss.

proceso. Por su parte, el alistamiento institucional comprende principalmente la capacitación a las entidades públicas, con el fin de llevar a cabo el plan de reparación. En esta fase también se da inicio a la implementación de la estrategia de reconstrucción del tejido social, que consta de diferentes acciones en materia de acompañamiento psicosocial durante el desarrollo de la ruta de reparación colectiva.

- Fase de identificación y diagnóstico de los daños colectivos de los sujetos de reparación colectiva: En esta fase se busca construir un documento que dé cuenta de los diferentes daños y afectaciones que sufrió la comunidad a raíz del conflicto armado. Este documento es condición *sine qua non* para la construcción del plan de reparación integral colectiva.

- Fase de diseño y formulación concertada del Plan Integral de Reparación Colectiva: En esta fase se lleva a cabo la formulación del plan de reparación colectiva conjuntamente con el sujeto de reparación, a partir de los hallazgos evidenciados en el diagnóstico del daño. De acuerdo a ello, las medidas que se definan en el plan, deben guardar una relación directa con los hechos y daños identificados[996].

- Fase de implementación: Durante esta fase se ejecutan los Planes de Integrales de Reparación Colectiva por parte de cada una de las entidades responsables, de acuerdo a las condiciones establecidas en el mencionado Plan. Durante la implementación de los planes se garantiza la adopción y ejecución de medidas de prevención, protección, y seguridad para evitar la re victimización de los sujetos de reparación colectiva[997] .

Dentro de las medidas adoptadas con el fin de garantizar la reparación de sujetos colectivos se encuentran las siguientes: i) restitución de territorios y retorno y/o reubicación para sujetos colectivos; ii) reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva mediante la reconstrucción y preservación de la memoria histórica; iii) generación de empleo y autoempleo para sujetos de reparación colectiva; iv) cogestión, coordinación y priorización para el goce efectivo de derechos; v) restitución de derechos de grupos sociales y políticos;

[996] Decreto 4800 de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Art. 230.
[997] Decreto 4800 de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. Art. 231.

vi) rehabilitación comunitaria y reconstrucción del tejido social; y vii) reparación de las afectaciones ocasionadas al ambiente.

De los argumentos presentados frente a la idoneidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, para la reparación integral de las víctimas del presente caso es necesario tener en cuenta las siguientes conclusiones:

i) la naturaleza de la reparación administrativa es la de ser aplicada para el restablecimiento de los derechos de las víctimas en contextos de violaciones masivas a los derechos humanos, los cuales son semejantes a los que ha atravesado Colombia a lo largo de más de medio siglo de conflicto armado interno;

ii) la reparación por vía administrativa no excluye la reparación por vía judicial, estas son complementarias, estando ambas disponibles en el Estado para las víctimas de las violaciones de derechos humanos; y
iii) la reparación administrativa, disponible a través de la Ley 1448 de 2011, contiene una serie de elementos que van mucho más allá de la indemnización, pues se cuenta con medidas de satisfacción, restitución, garantías de no repetición y rehabilitación; haciendo que ésta cumpla con los estándares de la Corte IDH, la CIDH y las Naciones Unidas en materia de reparaciones.

2. Información relativa a las víctimas del presente caso.

2.1 Registro Único de Víctimas

Antes de iniciar con este acápite de la contestación, es necesario anotar, que en Colombia la reparación administrativa no sólo ha operado desde la expedición de la Ley 1448 de 2011, sino que ha funcionado de acuerdo a diferentes marcos normativos como la Ley 387 de 1997 y el Decreto 1290 de 2008, que no son excluyentes entre sí, sino complementarios; por lo que las medidas de reparación pueden derivarse de uno u otro esquema. La misma Ley 1448 de 2011 garantizó la coexistencia jurídica, mediante su artículo 60 que indica "La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten"[998].

[998] Ley 1448, art. 60 (Anexo 10)

Haciendo esta salvedad y bajo el entendido que las víctimas que aparecen registradas en el Registro Unico de Víctimas no necesariamente se encuentran registradas por los hechos del presente caso; el Estado a continuación presentará un cuadro con información de cada una de las víctimas relacionadas en el ESAP. Frente a cada una de las víctimas se señalará: i) estado en el RUV, ii) núcleo familiar, iii) hecho victimizante por el cual se encuentran incluidos[999] y marco jurídico por el cual ingresan al registro.

Al revisar los datos suministrados por el sistema, podemos concluir que, de las 115 personas relacionadas como víctimas en el ESAP[1000], 2[1001] no pudieron ser objeto de consulta en la medida que el Estado no cuenta con sus documentos de identidad. De las 113 personas restantes, es decir aquellas que sí pudieron ser objeto de consulta, 97 se encuentran incluidas en el RUV, frente a 15 personas no existe coincidencia en las bases de datos[1002] y 1 persona está en proceso de valoración.

Si bien, tal y como lo manifiestan los peticionarios en su ESAP[1003], algunas de las víctimas han recibido reparación vía administrativa por conductas diferentes a las del caso *sub judice*; lo cierto es que la mayoría de las víctimas estan registradas en el RUV lo que les permite acceder a la ruta de reparación ofrecida por la Unidad. Tal y como se explicó lineas arriba, el PAARI se diseña de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de las víctimas. Por lo que el hecho victimizante bajo el cual se encuentran registrados no impide que sean reparados por los hechos del presente caso. Esto, solo frente a las demás medidas de reparacion que ofrece la Ley de Víctimas, diferentes a la reparación económica.

[999] Nuevamente es de resaltar que si bien todas las víctimas del presente caso pueden acceder a las Ruta de Reparación que ofrece la Unidad, no todas se encuentran incluidas por el hecho victimizante de desaparición forzada. Esto debido a que la ley reconoce como víctimas de desaparición únicamente al cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa.
[1000] Valga anotar que si bien en el ESAP se enumeran 116 víctimas en realidad son 115, pues la señora María Florinda Gallego Hernández se relaciona en los numerales 51 y 101, debido a que es cónyuge de Octavio de Jesús e hija de Andrés Antonio Gallego Castaño.
[1001] Leonidas Quintero y Eliseo de Jesús Gallego Quintero.
[1002] Siempre que se indique en el estado del RUV "No se encuentra en base" debe entenderse que la categoría propiamente hace referencia a que i) no se encontró en base de datos o, ii) no coincide la cédula brindada con un registro. Es de aclarar que de las 23 personas cuyos documentos no coinciden en el cuadro que se presenta, 8 se encuentran registradas e incluidos en el RUV con documentos de identidad distintos a los reportados en el ESAP (bien sea porque al momento de registrase aun eran menores de edad y por lo tanto tenían tarjeta de identidad o poqrue se cometió algun error de digitación). Para cada uno de estos casos se encontrará la explicación en pie de página. Las cifras que se reportan arriba ya incluyen a estas 8 personas en el conteo general de las víctimas que de encuentran inclidas en el RUV.
[1003] Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, página 170.

No	NOMBRE	CÉDULA	ESTADO RUV	HECHO VICTIMIZANTE RUV	FECHA HECHOS	FECHA DECLARACION	MARCO JURIDICO EN EL QUE INGRESAN AL REGISTRO
ANÍBAL DE JESÚS CASTAÑO GALLEGO[1004]							
1	MARÍA OVEIDA GALLEGO CASTAÑO	43403456	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000 1/30/2005	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 RUV - LEY 1448 DE 2011
2	LEIDY YOHANA CASTAÑO GALLEGO	1045024704	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/30/2005	N/R	RUV - LEY 1448 DE 2011
3	SANTIAGO CASTAÑO[1005] GALLEGO	1045022485	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
4	HERNANDO CASTAÑO GALLEGO	70692040	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
5	ABELINO CASTAÑO GALLEGO	71111362	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	24 DE ABRIL DE 1994	31 DE OCTUBRE 2012	RUV - LEY 1448 DE 2011

[1004] Núcleo familiar de Aníbal de Jesús Castaño Gallego desde el numeral 1 hasta el 11.
[1005] La cédula aportada por los peticionarios en el ESAP se encuentra errada. El Estado se permite rectificarla en esta oportunidad

6	BERNABE CASTAÑO GALLEGO	70693261	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
7	RUBÉN ANTONIO CASTAÑO GALLEGO	70411371	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/30/2000	29 DE MAYO DE 2013	RUV - LEY 1448 DE 2011
8	MARÍA BRÍGIDA CASTAÑO GALLEGO	21657426	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
9	ESTER JULIA CASTAÑO GALLEGO	21657273	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
10	HERIBERTO ANTONIO CASTAÑO GALLEGO [1006]	3449218	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
11	MARÍA ELVIRA CASTAÑO GALLEGO	21658917	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
OSCAR HEMEL ZULUAGA MARULANDA[1007]							
12	MARÍA ROMELIA MARULANDA DE ZULUAGA (FALLECIDA)	21657576	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1999	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1006] Se encuentra persona homónima en declaración sipod-513621, con número de cédula 70380516
[1007] Núcleo familiar de Oscar Hemel Zuluaga Marulanda desde el numeral 12 hasta el 25.

13	JOSÉ BERNARDO ZULUAGA ARISTIZABAL	3.447.565	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1990	1/1/1990	DECRETO 1290 DE 2008
14	ARBEY ESTEBAN ZULUAGA MARULANDA [1008]	1120747298	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
15	SANDRA LILIANA ZULUAGA MARULANDA [1009]	1036423231	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
16	LUZ MARINA ZULUAGA MARULANDA	1036422614	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1999	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
17	BLANCA ORFILIA ZULUAGA MARULANDA	1120739415	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1999	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
18	BERNANDO EFRÉN ZULUAGA MARULANDA	9186663	INCLUIDO	DESAPARICION	6/21/1996	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008

[1008] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°385577- registra con tarjeta de identidad N°93022108806
[1009] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°385577- registra con tarjeta de identidad ºN°91060958136

19	DANIEL ANTONIO ZULUAGA MARULANDA	70418591	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
20	ADOLFO DE JESÚS ZULUAGA MARULANDA	70384097	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO			
21	GLADIS ELENA ZULUAGA MARULANDA [1010]	32392911	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
22	MARÍA NOELIA ZULUAGA MARULANDA	32392795	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	04/01/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
23	OMAIRA LUCIA ZULUAGA MARULANDA	38872868	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
24	JHON ARNILSON ZULUAGA MARULANDA	15186290	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
25	ANÍBAL ALONSO ZULUAGA MARULANDA	5164853	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R

[1010] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°385577- registra indocumentada

JUAN CRISÓSTOMO Y MIGUEL ANCIZAR CARDONA QUINTERO[1011]							
26	MARÍA DIOSELINA QUINTERO (FALLECIDA)	43403528	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	2 DE AGOSTO DE 2002	SIPOD - LEY 387 DE 1997
27	HÉCTOR HUGO CARDONA QUINTERO	1045019640	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	4/25/1999(H) 6/29/2000(D) 3/30/2000(D)	2 DE AGOSTO DE 2002	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
28	ROMÁN ANTONIO CARDONA QUINTERO	1045016750	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	4/25/1999 (H) 7/17/1998 (H) 6/29/2000 (D) 3/30/2000 (D)	2 DE AGOSTO DE 2002	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
29	DIANA MARCELA QUINTERO	1045018019	INCLUIDO	DESAPARICION, DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	4/25/1999 (H) 6/29/2000 (DESP) 3/30/2000 (DESP)	2 DE AGOSTO DE 2002	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1011] Núcleo familiar de Juan Crisóstomo y Miguel Ancizar Cardona Quintero desde el numeral 26 hasta el 37

30	CLARA ROSA CARDONA QUINTERO	1037579895	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	03/05/2000	18 DE DICIEMBRE 2014	RUV - LEY 1448 DE 2011
31	JORGE ENRIQUE CARDONA QUINTERO (FALLECIDO)	70698120	INCLUIDO	HOMICIDIO	3/31/2003	2 DE AGOSTO DE 2002	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIV - LEY 418 DE 1997
32	PEDRO CLAVER QUINTERO	70693278	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, HOMICIDIO	4/25/1999 (H) 03/05/2000 (D)	18 DE DICIEMBRE 2014	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 RUV - LEY 1448 DE 2011
33	LUIS ALBERTO QUINTERO	70694452	INCLUIDO	HOMICIDIO Y AMENAZA	4/25/1999 (H) 03/05/2000 (A)	18 DE DICIEMBRE 2014	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 RUV - LEY 1448 DE 2011
34	MARTHA LUCIA QUINTERO	32220420	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1999 03/01/2001	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997

35	LUZ MARINA QUINTERO[1012]	43597701	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
36	DUVÁN ALEXANDER QUINTERO	1045021773	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	4/25/1999 6/29/2000	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
37	LEÓNIDAS QUINTERIO (FALLECIDO)	SIN CEDULA	NO ES POSIBLE CONSULTAR SIN ID	NO ES POSIBLE CONSULTAR SIN ID	N/R	N/R	N/R
IRENE DE JESÚS GALLEGO QUINTERO[1013]							
38	ESTER JULIA QUINTERO DE GALLEGO (FALLECIDA)	21656387	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y DESAPARICION	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
39	JOSÉ APOLINAR GALLEGO QUINTERO	3447618	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y DESAPARICION	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008

[1012] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración FUD - NK000404418 - registra con cedula 43697701-
[1013] Núcleo familiar de María Irene de Jesús Gallego Quintero desde el numeral 38 al 45.

40	MARÍA LUCELY GALLEGO QUINTERO	43785898	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	04/10/2001	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
41	ELADIO GALLEGO QUINTERO (FALLECIDO)	71111121	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/30/1996	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
42	MARÍA LUZ MERY GALLEGO QUINTERO	43715125	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
43	LUZ MARY DEL SOCORRO GALLEGO QUINTERO	43467734	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
44	MARLENY GALLEGO QUINTERO	43713616	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
45	JOSÉ IVÁN GALLEGO QUINTERO	71114037	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
JUAN CARLOS Y OCTAVIO DE JESÚS GALLEGO HERNÁNDEZ[1014]							
46	ELISEO DE JESÚS GALLEGO QUINTERO (FALLECIDO)	SIN CEDULA	NO ES POSIBLE CONSULTAR SIN ID	NO ES POSIBLE CONSULTAR SIN ID			

[1014] Núcleo familiar de Juan Carlos y Octavio de Jesús Gallego Hernández desde el numeral 46 al 50.

47	MARÍA ENGRACIA HERNÁNDEZ DE GALLEGO (FALLECIDA)[1015]	21656223	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
48	FLORINDA DE JESÚS GALLEGO HERNÁNDEZ	21660262	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 02/12/2001	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
49	MARÍA AURORA GALLEGO HERNÁNDEZ	21625885	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
50	MARÍA DE LOS ÁNGELES GALLEGO HERNÁNDEZ	21625884	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/19/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
OCTAVIO DE JESÚS GALLEGO[1016]							
51	MARÍA FLORINDA	32391307	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y DESAPARICION	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1015] La cédula relacionada en base se encuentra errada- se encuentra registro como incluida para la señora María Engracia Hernández de Gallego con cédula 21652223- bajo declaración SIPOD N°584707

[1016] Núcleo familiar de Octavio de Jesús Gallego desde el numeral 51 hasta el 54.

	GALLEGO HERNÁNDEZ						SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
52	YANET GALLEGO GALLEGO	1045020921	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
53	DEICY GALLEGO GALLEGO	1036398159	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
54	JOHANA GALLEGO GALLEGO	1045022304	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
JAIME ALONSO MEJÍA QUINTERO[1017]							
55	ALBA ROSA MEJÍA QUINTERO	21624893	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
56	OLIVA DEL MEJÍA DE GALLEGO	21658678	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	06/11/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
57	LUZ DARY MEJÍA QUINTERO	43785777	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	6/29/2000 3/30/2000
58	MARTA EDILMA MEJÍA QUINTERO	21625880	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R

[1017] Núcleo familiar de Jaime Alonso Mejía Quintero desde el numeral 55 hasta 68.

59	ELDA EMILSEN MEJÍA QUINTERO	43404506	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
60	JOSÉ OCTAVIO MEJÍA QUINTERO	70380222	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
61	PEDRO NEL MEJÍA QUINTERO	3449472	VALORACION				
62	ANA OVEIDA MEJÍA QUINTERO	21625881	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	1/1/1999 3/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
63	CONSUELO DE JESÚS MEJIA QUINTERO	21626154	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/20/2000 3/30/2000	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
64	RUBÉN DE JESÚS MEJÍA QUINTERO	70692453	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	2/20/1997	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
65	DOLLY AMANDA MEJÍA QUINTERO	43402680	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	4/13/1999	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008

66	LUZ MERY MEJÍA QUINTERO	43403029	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/22/2003	N/R	RUV - LEY 1448 DE 2011
67	LUIS ALVEIRO MEJÍA QUINTERO	70694164	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
68	EDGAR DE JESÚS MEJÍA QUINTERO	70696103	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	01/01/2000	4 DE ABRIL DE 2013	RUV - LEY 1448 DE 2011
HERNANDO DE JESÚS CASTAÑO CASTAÑO[1018]							
48	FLORINDA DE JESÚS GALLEGO HERNÁNDEZ	21660262	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 02/12/2001	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
69	JHON FREDY CASTAÑO GALLEGO	70385541	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
70	CLAUDIA YANETH CASTAÑO GALLEGO	1036395557	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
71	WILDER CASTAÑO GALLEGO [1019]	1036397128	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R

[1018] Núcleo familiar de Hernando de Jesús Castaño Castaño desde el numeral 69 hasta 80. La señora Florinda de Jesús Gallego Hernández ya había sido relacionada en el numeral 48 del presente listado y se incorpora nuevamente sin asignar nuevo número de consecutivo- para evitar duplicidades-, debido a que es hermana de Juan Carlos y Octavio de Jesús Gallego Hernández y cónyuge de Hernando de Jesús Castaño Castaño.
[1019] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°144521- registra con tarjeta de identidad N°92040271386

72	JUAN DIEGO CASTAÑO GALLEGO	1036398327	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 02/12/2001	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
73	CELENI CASTAÑO GALLEGO [1020]	1036400155	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
74	JASMIN LORENA CASTAÑO GALLEGO [1021]	1036402085	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
75	HÉCTOR DE JESÚS CASTAÑO CASTAÑO	70691953	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
76	BERARDO DE JESUS CASTAÑO CASTAÑO	70693232	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	8/18/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
77	MARÍA SOFÍA CASTAÑO CASTAÑO	21624889	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/16/2000	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1020]Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°144521- registra con tarjeta de identidad N°95013121576
[1021] Se encuentra registrado como incluido bajo declaración SIPOD N°144521- registra con registro civil N°26361202

78	JOSEFINA CASTAÑO CASTAÑO	43403482	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y AMENAZA	10/31/1996(A) 11/02/1996(D)	N/R	RUV - LEY 1448 DE 2011
79	BLANCA INÉS CASTAÑO CASTAÑO	43402045	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	17 DE ABRIL DE 1994	28 DE MAYO DE 2013	RUV - LEY 1448 DE 2011
80	EDILMA DE JESÚS CASTAÑO CASTAÑO	21625595	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	20 DE ENERO DE 1993	21 DE MAYO DE 2013	RUV - LEY 1448 DE 2011
ORLANDO DE JESUS MUÑOZ[1022]							
81	ARSECIO MUÑOZ GARCÍA (FALLECIDO)	624155	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
82	RUBÉN DARÍO MUÑOZ CASTAÑO	70384549	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
83	ABELARDO MUÑOZ CASTAÑO	70384508	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
84	CARLOS AMADOR MUÑOZ MUÑOZ	71111122	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
85	ROSA MARÍA MUÑOZ MUÑOZ	21657968	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/28/2000 6/30/2000	N/R	SIRAV - DECRETO

[1022] Núcleo familiar de Orlando de Jesús Muñoz desde el numeral 81 hasta el 92.

							1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
86	MARÍA AURORA MUÑOZ MUÑOZ	21659586	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	06/10/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
87	MARCO AURELIO MUÑOZ MUÑOZ	70380465	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	11/28/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
88	MARÍA RUBIELA MUÑOZ CASTAÑO	32392060	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	06/10/2000 3/30/2000	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
89	CRUZ ELENA MUÑOZ CASTAÑO	43759046	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
90	BERTHA INÉS MUÑOZ CASTAÑO	43869670	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	6/30/2002(H)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIV - LEY 418 DE 1997
91	FLORINDA MUÑOZ CASTAÑO	42883944	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R

92	OSCAR SANTIAGO MUÑOZ CASTAÑO[1023]	98090968106	NO SE ENCUENTRA EN BASE	NO SE ENCUENTRA EN BASE	N/R	N/R	N/R
ANDRÉS ANTONIO GALLEGO CASTAÑO[1024]							
93	MARÍA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ DE GALLEGO	21624025	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	04/03/1996(H) 6/29/2000(DESPL) 3/30/2000(DESPL)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
94	RICAURTE ANTONIO GALLEGO HERNÁNDEZ	70698710	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	6/29/2000(DESPL) 3/30/2000(DESPL) 04/03/1996(H)	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
95	EUSEBIO GALLEGO HERNÁNDEZ	71396659	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	6/30/2000(DESPL) 04/03/1996(H)	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008

[1023] Si bien en el ESAP no se aporta documento de identificación, la consulta se hizo con el número de Registro Civil aportado por la CIDH en el listado único de víctimas.

[1024] Núcleo familiar de Andrés Antonio Gallego Castaño desde el numeral 93 hasta el 103. La señora María Florinda Gallego Hernández ya había sido relacionada en el numeral 51 del presente listado y se incorpora nuevamente sin asignar nuevo número de consecutivo- para evitar duplicidades-, debido a que es cónyuge de Octavio de Jesús e hija de Andrés Antonio Gallego Castaño.

96	MARÍA NUBIA GALLEGO HERNÁNDEZ	43404177	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	04/03/1996(H) 6/30/2000(DESPL)	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
97	LUCELLY GALLEGO HERNÁNDEZ	43788516	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	6/29/2000(DESPL) 3/30/2000(DESPL) 04/03/1996(H)	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997 SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008
98	OMAIRA GALLEGO HERNÁNDEZ	21627749	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	04/03/1996 (H) 6/30/2000(DESPL)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
99	ROSA LINDA GALLEGO HERNÁNDEZ	32390185	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	04/03/1996 (H) 6/30/2000 (DESPL)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
100	BELARMINA GALLEGO HERNÁNDEZ	32391756	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION Y HOMICIDIO	04/03/1996(H) 2/17/2000(DESPL)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008

							SIPOD - LEY 387 DE 1997
51	MARÍA FLORINDA GALLEGO HERNÁNDEZ	32391307	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO, DESAPARICION	6/29/2000(DESPL) 3/30/2000(DESPL)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997
101	MIGUEL ANTONIO GALLEGO CASTAÑO	626172	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	4/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
102	JUAN DE JESÚS GALLEGO CASTAÑO	3447737	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/26/2000	2013	RUV - LEY 1448 DE 2011
103	JUAN CRISTÓBAL GALLEGO CASTAÑO	3448759	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 6/29/2000 6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
LEÓNIDAS CARDONA GIRALDO[1025]							
104	MARÍA DEL ROCIÓ CARDONA FERNÁNDEZ	32392046	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	8/28/1991(H) 6/30/2000(DESP)	N/R	SIRAV - DECRETO 1290 DE 2008 SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1025] Núcleo familiar de Leónidas Cardona Giraldo desde el numeral 104 hasta el 113.

105	YORMARTI CARDONA CARDONA	1045023296	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
106	LUZ DARY CARDONA GIRALDO	32391046	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	3/31/2000 3/30/2000	2 DE OCTUBRE DE 2000	SIPOD - LEY 387 DE 1997
107	MARÍA CEMIDA CARDONA GIRALDO	32391086	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
108	AURA LUZ CARDONA GIRALDO	43751936	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
109	CÁNDIDA ROSA GIRALDO GALLEGO	21657694	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
110	MARÍA ISABEL GIRALDO GALLEGO	43787324	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	7/20/2010	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
111	BERNARDO DE JESÚS GIRALDO GALLEGO	15443423	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
112	ELDA NURY GIRALDO GALLEGO	36296759	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y AMENAZA	06/12/2002(A) 6/29/2000(D) 3/30/2000(D)	22 DE MARZO DE 2013	RUV - LEY 1448 DE 2011 SIPOD - LEY 387 DE 1997

113	MARCELA GIRALDO GALLEGO	1090382482	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO	6/29/2000 6/30/2000 3/30/2000	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
JAVIER DE JESUS GIRALDO GIRALDO[1026]							
114	NELLY SOTO DE CASTAÑO	21657798	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	1/1/1899 12/02/2006	N/R	SIPOD - LEY 387 DE 1997
115	CRUZ VERÓNIC GIRALDO SOTO	1128400617	INCLUIDO	DESPLAZAMIENTO Y HOMICIDIO	06/12/2004 12/02/2006	30 DE JULIO DE 2004	SIPOD - LEY 387 DE 1997

[1026] Núcleo familiar de Javier de Jesús Giraldo Giraldo numerales 115 y 116.

2.2 Reparación administrativa

En efecto, tal y como mencionan los peticionarios[1027], a pesar de que la mayoría de las víctimas se encuentran incluidas en el RUV, tan sólo algunas han recibido reparación administrativa por los hechos del caso *sub judice*. A continuación el Estado hará una breve relación de las mismas:

2.2.1 Octavio de Jesús Gallego

No.	Nombre	Cédula	Parentesco	Valor	%
1	Maria Florinda Gallego Hernández	32391307	Esposa	$17´163.920	83,32%
2	Yanet Gallego Gallego	1045020921	Hija	$3´436.080	16,68%

Es de anotar que por estos mismos hechos la señora Maria Florinda Gallego Hernández y Yanet Gallego Gallego fueron reparadas en lo contencioso administrativo. Cada una de ellas recibió reparación por daños morales equivalentes a 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Asimismo, por la modalidad de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la señora Maria Florinda Gallego recibió $81´549.051 y la señora Yanet Gallego Gallego recibió $19´853.410.

2.2.2 Andrés Antonio Gallego Castaño

No.	Nombre	Cédula	Parentesco	Valor	%
1	María de la Cruz Hernández de Gallego	21624025	Esposa	$10.300.000	50%
2	Ricaurte Antonio Gallego Hernández	70698710	Hijo	$1.287.500	6.25%
3	Eusebio Gallego Hernández	71396659	Hijo	$1.287.500	6.25%
4	Maria Nubia Gallego Hernández	43404177	Hija	$1.287.500	6.25%
5	Lucelly Gallego Hernández	43788516	Hija	$1.287.500	6.25%
6	Omaira Gallego Hernández	21627749	Hija	$1.287.500	6.25%
7	Rosa Linda Gallego Hernández	32390185	Hija	$1.287.500	6.25%

[1027] Véase, pie de página 770, Escrito Argumentos Solicitudes y Pruebas

8	Belarmina Gallego Hernández[1028]	32391756	Hija	$1.287.500	6.25%
9	Maria Florinda Gallego Hernández	32391307	Hija	$1.287.500	6.25%

Es de anotar que por estos mismos hechos la esposa e hijos de Andrés Antonio Gallego Castaño fueron reparados en lo contencioso administrativo. Cada una de ellos recibió reparación por daños morales equivalentes a 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Asimismo, por la modalidad de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la señora María de la Cruz Hernández de Gallego recibió $58´869.207 y su hijo Ricaurte recibió $46´607.541.

2.2.3 Javier de Jesús Giraldo Giraldo

No.	Nombre	Cédula	Parentesco	Valor	%
1	Nelly Soto de Castaño	21657798	Esposa	9.938.000	50%
2	Cruz Verónica Giraldo Soto	1128400617	Hija	9.938.000	50%

2.3 Reparación Colectiva

Teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana en su informe de admisibilidad y fondo 85/13, recomendó al Estado colombiano implementar, con la participación de la comunidad de la Vereda La Esperanza, una medida reparación colectiva que reconociera el impacto que tuvieron los hechos del presente caso en la comunidad; la Unidad para las Víctimas dio inicio a este proceso.

Es así como en el mes de julio de 2014, se presentó el sujeto de reparación colectiva al Comité Territorial de Justicia Transicional-CTJT. Lo anterior, en la medida que los Comités, al ser la máxima instancia de articulación territorial, son quienes toman la determinación final sobre el sujeto colectivo. Este fue el primer paso para dar inicio a la ruta.

Este proceso hoy denota los siguientes avances:

[1028] Si bien los peticionarios mencionan en el ESAP que la señora "Maria de la Cruz Hernández Gallego y sus hijos: Ricaute, Eusebio, Maria Nubia, Lucelly, Omaira, Rosa Linda" recibieron reparación administrativa por la desaparición de su cónyuge y padre Andrés Antonio Gallego Castaño; el Estado quiere anotar que Belarmina y Maria Florinda también recibieron dicha indemnización.

El 25 de julio del 2014 se expuso la importancia de priorizar este caso dentro del marco de la reparación colectiva en la región de Antioquia, por su significancia dentro del contexto del conflicto armado, la incidencia en las garantías de no repetición en esta zona del país, además de la reconstrucción de la memoria como forma de verdad, justicia y reparación que se alcanzaría con la implementación de la ruta, así como la recomendación de la CIDH al respecto.

A este Comité asistieron las siguientes autoridades del municipio de Carmen de Viboral, al cual pertenece la Vereda La Esperanza:

- El alcalde municipal- Nestor Martínez Jiménez;
- La Secretaría de Gobierno- Olga Ligia Jiménez Montoya;
- El Personero Municipal- Leonardo Aristizábal Zuluaga;
- El Secretario de Planeación- Jeyrsson Alid Zuluaga;
- La Secretaria de Educación- María Yolanda Sánchez Álzate;
- La Secretaria de Salud- Natalia Arbeláez;
- La Secretaria de Hacienda- Euscaris Gómez;
- Proyectos Especiales- Beatriz Elena Moreno;
- Coordinadora SENA Carmen de Viboral- Gloria Elena Moreno;
- Policía Nacional- Jheferson Pérez;
- Unidad para las Víctimas, Retornos y Reubicaciones- Claudia Restrepo;
- Unidad para las Víctimas, Sistemas Internacionales- Mábel Casas Caro;
- Unidad para las Víctimas, Reparación Colectiva- Gloria Espinosa;
- Director Territorial de Antioquia- Jorge Mario Alzate;
- PAICMA- Eliana María Ceballos;
- Representante de las víctimas - Dora Arbeláez;
- Representante de las Víctimas- Flor Gallego;
- Asesora Municipal Conciudadanía- Alba Gómez;
- ICBF centro zona 12 oriente- Andrea Vallejo;
- Inclusión Social SENA Rionegro- Ángela Viviana Ríos;
- Coordinadora Juventud- Lorena González;
- Diputado departamento de Antioquia- Alpidio Betancur;
- Ejército Nacional- Javier Ortega;
- Enlace Municipal para Víctimas- Juan Alberto Castrillón

En dicha reunión, se presentó el caso ante el Comité, siendo aprobada la Vereda La Esperanza como sujeto colectivo priorizado.

El segundo paso se constituye con el acercamiento comunitario y la conformación del Comité de Impulso. Es aquí donde se recoge la información sobre el posible Sujeto de Reparación Colectiva (SRC). Es decir, sus

características, capacidad de conjunto, estructuras organizativas, autoridades representativas y tradicionales, y sus necesidades de formación. Es el inicio de la reconstrucción de la confianza entre la comunidad y el Estado.

Esta fase se realizó el día 01 de septiembre de 2014 en la Vereda La Esperanza, Municipio de Carmen de Viboral. En esta misma reunión se conformó el Comité de Impulso integrado por miembros de la Vereda la Esperanza. Asimismo, se fijaron los compromisos por parte de la Unidad: i) definir junto con la comunidad (comité de impulso) la metodología para la identificación y diagnóstico de los daños colectivos; y ii) coordinar la realización de los talleres y actividades acordadas encaminadas al diseño del Plan de Reparación Colectiva.

El día 30 de septiembre de 2014 se realizó el segundo encuentro con la comunidad con el fin de seguir fortaleciendo el proceso de acercamiento y confianza para la consolidación de los comités de impulso y las metodologías de trabajo, en la cual se hicieron los cronogramas de lo que iba ser el proceso de diagnóstico del daño colectivo.

El día 01 de octubre de 2014 se realiza acercamiento comunitario con el desarrollo de las siguientes actividades:

- Instalación de la jornada por parte del Enlace Municipal de Víctimas, como representante de la administración municipal y del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
- Profesionales de la Unidad para la Atención a las Víctimas exponen el tema Reparaciones Colectivas: Aspectos normativos, hipótesis de victimización, medidas de reparación, así como la ruta de reparación. Se resuelven inquietudes formuladas por los presentes. Se enfatiza en que el trabajo se realizará consultando los intereses de la comunidad y serán ellos quienes identifiquen los daños causados por el conflicto armado y formulen el plan de reparación, orientados y guiados por los profesionales de la Unidad para la Atención a las Víctimas.
- Igualmente se le informa a la comunidad sobre la importancia de la vinculación de las entidades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el desarrollo de la ruta de reparación colectiva para lo cual la Unidad para las Víctimas adelantará las acciones pertinentes.
- A la comunidad se le hacen algunas claridades con respecto a la diferencia entre la ruta de reparación individual de la colectiva.
- Se conforman cuatro grupos de trabajo a quienes se les entregan las preguntas orientadoras sobre Reparaciones Colectivas.

En este acercamiento comunitario se identifica la solicitud de los asistentes a las reuniones de ampliar el sujeto de reparación colectiva, con el fin de incluir a la vereda San Vicente, pues se encuentra ubicada de manera adjunta a la Vereda La Esperanza. Adicionalmente, mencionan los presentes, comparte afectaciones y forma de vida. Es por ello que se decide volver a preguntar a los miembros de la comunidad sobre si existe o no consenso frente a la ampliación del sujeto de reparación colectiva.

Respecto de la ampliación del sujeto de reparación colectiva, se adelanta una reunión el día 16 de julio de 2015, con el objeto de determinar si es viable la medida. En esta reunión es aprobada la ampliación del sujeto de reparación colectiva a la vereda San Luis, lo cual implica volver a las fases iniciales del proceso, hecho que fue conocido por la comunidad y en lo que se estuvo de acuerdo.

Teniendo en cuenta lo anterior se coordinó una reunión con el nuevo integrante del sujeto para la última semana de agosto de 2015, a fin de darle a conocer su inclusión dentro del sujeto y recoger su voluntariedad. La finalidad de dicha jornada era socializar la ruta de reparación colectiva y recoger acta de voluntariedad. La asistencia fue solo de 15 personas, lo que se considera baja. Pese a lo anterior, se hizo exposición de los objetivos y el marco general de la ruta de reparación colectiva.

No fue posible la firma del acta de voluntariedad, toda vez que la misma comunidad pidió que para la firma de este documento era necesario la presencia de toda la comunidad, por lo tanto queda pendiente para próxima jornada. La fecha propuesta para el próximo acuerdo es el día 14 de septiembre, pero por tiempos para requerimiento logístico se hace necesario definir una nueva fecha.

***

El Estado considera necesario retomar algunas de las conclusiones del presente capítulo:

i) La CorteIDH ha reconocido y valorado el alcance de la justicia contencioso administrativa en Colombia en materia de reparaciones, como un recurso que *contribuye* a la reparación integral, en especial por su potencialidad de complementarse con otros recursos de manera que, en conjunto, tengan la virtualidad de reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en un caso concreto;

ii) Aunque este recurso, hasta el momento no ha sido considerado suficiente para alcanzar la reparación integral a las víctimas, se reconoce que es un recurso que ha tendido a ello. Particularmente importante es el reconocimiento de la H.Corte de que este recurso podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos;

iii) En el balance que se realiza al diseñar esquemas de justicia transicional, la integralidad de la reparación no debe ser entendida conforme al monto de la indemnización sino a la entrega de todos los componentes internacionalmente aceptados, como lo son la entrega de una compensación económica, la materialización de las garantías de no repetición, la rehabilitación física y mental y medidas de satisfacción que propendan por la redignificación de las víctimas;

iv) En el presente caso, el Estado considera que la H.Corte debe valorar el carácter adecuado y efectivo de la Ley de Víctimas para reparar integralmente las violaciones alegadas en el caso, en conjunto con los demás recursos adecuados y efectivos para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación;

v) La reparación por vía administrativa no excluye la reparación por vía judicial, estas son complementarias, estando ambas disponibles en el Estado para las víctimas de las violaciones de derechos humanos. La reparación administrativa, disponible a través de la Ley 1448 de 2011, contiene una serie de elementos que van mucho más allá de la indemnización, pues se cuenta con medidas de satisfacción, restitución, garantías de no repetición y rehabilitación; haciendo que ésta cumpla con los estándares de la Corte IDH, la CIDH y las Naciones Unidas en materia de reparaciones.

Adicionalmente, al revisar la información proporcionada por el Estado en este capítulo de la Contestación tenemos que: **i)** algunos núcleos familiares han acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya se ha proferido la consecuente condena al Estado colombiano por los hechos ocurridos en el segundo semestre de 1996 en Vereda La Esperanza, y ya se ha ejecutado su correspondiente pago; **ii)** De igual manera, persiste la posibilidad que algunas víctimas, como fue señalado con anterioridad, puedan acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de acceder a una reparación directa; **iii)** De cualquier manera, el Estado colombiano tiene un amplio marco de

reparación integral que permite una adecuada y efectiva protección y garantía del derecho a la reparación para las víctimas, particularmente mediante las solicitudes que se pueden presentar bajo el esquema de la Ley 1448 de 2011.

En virtud de lo anterior, se solicita a la H.Corte que: **i)** no proceda a ordenar indemnizaciones que en el ámbito interno pueden ser efectivamente causadas y otorgadas mediante los mecanismos descritos; y, **ii)** En todo caso, y de ordenarse reparaciones materiales e inmateriales, se solicita a la H.Corte que se tome en consideración las reparaciones ya otorgadas en el ámbito de la jurisdicción interna del Estado y los daños probados ante el H. Tribunal, a la hora de valorar las indemnizaciones a las que haya lugar.

G. Observaciones frente a los listados de víctimas

El Estado pone de presente ante la H.Corte, que de los listados de víctimas y sus familiares remitidos con el Escrito de Sometimiento del Caso y con el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas se deriva que la H.Comisión incluyó 113 personas y los representantes de las víctimas incluyeron 115 personas.

Sin embargo, y a pesar de que en el listado único de víctimas la Comisión no incluyó al menor Leónidas Cardona Quintero, mellizo de Juan Crisóstomo Cardona Quintero, y al señor Eliseo de Jesús Galleo Quintero, padre de Juan Carlos y Octavio de Jesús Gallego Hernández; el Estado no se opondrá a que sean reparadas según lo que se pruebe en el marco de este proceso internacional.

IX. COSTAS

El Estado colombiano le solicita a la Corte que, conforme a su jurisprudencia, el pago de las costas y los gastos decretados se limite a los montos probados por los representantes de las víctimas, siempre que guarden estricta relación con las gestiones realizadas respecto del caso de la referencia y su quantum sea razonable[1029].

[1029] Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, Serie C N° 117. Párrafo 143.

X. PRUEBAS

A continuación, el Estado presentará sus observaciones sobre las pruebas solicitadas y ofrecidas por la Comisión y los representantes de las presuntas víctimas. Posteriormente, ofrecerá algunas pruebas documentales, testimoniales y periciales.

A. Observaciones sobre las pruebas del Escrito de Sometimiento

1. Observaciones en relación con la prueba pericial: las pruebas no están relacionadas con el orden público interamericano

1.1 Requisitos que determinan el ejercicio de la facultad otorgada a la Comisión Interamericana para proponer pruebas periciales.

El artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte IDH autoriza a la CIDH para que proceda a la eventual designación de peritos, cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano. Al respecto, la Corte IDH ha establecido que:

> "De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la "eventual designación de peritos" podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana "cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos", cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho excepcional, sujeta a ese requisito que no se cumple por el sólo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos. Tiene que estar afectado de "manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos", correspondiéndole a la Comisión sustentar tal situación."[1030] (subraya fuera del texto original)

Como puede verse, según el precedente de la Corte Interamericana, la designación de peritos por parte de la CIDH tiene carácter excepcional y se encuentra sometida a la verificación de condiciones específicas. Es así como la Comisión tiene la obligación de sustentar con precisión los motivos que dan lugar a que las cuestiones debatidas afecten de manera relevante el Orden Público Interamericano.

[1030]Caso Pedro Miguel Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando noveno, y Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, Considerando tercero.

Desde esta perspectiva, el Tribunal ha reconocido que el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 35.1.f del Reglamento, está estrechamente ligada a que las cuestiones a definir en el marco de la controversia puedan "tener un impacto sobre fenómenos que ocurren en otros Estados Parte de la Convención"[1031]. Entonces, corresponde a la Comisión sustentar con precisión las circunstancias excepcionales que dan lugar a ello.

Conforme con lo previamente expuesto, debe la Comisión, en cada caso en que ofrezca una prueba pericial, demostrar mediante una argumentación razonada y suficiente que el objeto de ésta trasciende de los hechos específicos del caso y del interés de las partes, de manera que el pronunciamiento de la H.Corte permita la creación de estándares de derecho internacional que tengan un impacto relevante sobre fenómenos de los demás Estados Parte de la Convención.[1032]

Conforme con lo previamente expuesto, la H.Corte ha inadmitido los peritos propuesto por la CIDH en las ocasiones en que su ofrecimiento no ha cumplido con la carga argumentativa previamente descrita. Al respecto, en el Caso *Mémoli*, se concluyó lo siguiente:

> "Con respecto a la vinculación del referido peritaje con el orden público interamericano, la Comisión alegó que este peritaje "permitirá a la Corte Interamericana profundizar en su jurisprudencia en materia de libertad de expresión, desde el punto de vista de los aspectos novedosos que plantea al caso y que no han sido abordados aún mediante los casos contenciosos". La Comisión señaló que "el presente caso tiene la particularidad de plantear la relación existente entre la garantía de plazo razonable y el derecho a la libertad de expresión, en circunstancias en las cuales la amenaza de una sanción civil pendiente durante un tiempo muy extendido, sumada a medidas cautelares como el embargo de los bienes, tienen el efecto o equivale en si misma a una sanción del ejercicio de la libertad de expresión".

[1031]Caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de febrero de 2013, parrafo12.

[1032]Esto ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se expone a continuación: "La Presidencia destaca que, de acuerdo a lo expuesto en la demanda del presente caso ante la Corte, éste sería uno de los primeros casos en el Sistema Interamericano que podría exigir el análisis de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos referentes al derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual. En este sentido, el Presidente considera que el objeto de los peritajes de la señora Jernow y del señor Uprimny trascienden los hechos específicos del presente caso y el interés concreto de las partes en el litigio y por tanto afecta el orden público interamericano además de que los estándares internacionales sobre prejuicios discriminatorios (…)" (Resolución del Presidente de la Corte de 7 de Julio de 2011. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, considerando 13) (Subraya fuera de texto)

> El Presidente de la Corte toma nota de lo señalado por la Comisión en cuanto a la alegada relación de dicho peritaje con el orden público interamericano. No obstante, considera que de la información aportada no se desprende que su objeto abarque información, conocimientos o parámetros jurídicos en materia de protección de derechos humanos que puedan afectar de manera relevante el orden público interamericano y que, en cualquier caso, no sean de competencia de la Corte procesar y analizar para el caso conforme a sus atribuciones, competencia y jurisprudencia.
>
> En virtud de las consideraciones anteriores, no concurren las circunstancias excepcionales que permiten admitir la declaración pericial propuesta por la Comisión Interamericana."[1033] (subraya fuera del texto original)

Como puede verse, para la H.Corte, el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 35.1.f del Reglamento está sometido a una carga argumentativa que debe ser observada de manera rigurosa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es así, como la CIDH debe demostrar que su ofrecimiento de la prueba pericial, está fundado en que el objeto de la controversia se encuentra revestido de características excepcionales y que tendrá un impacto relevante sobre fenómenos que ocurren en otros Estados Parte de la Convención (afectación del orden público interamericano).

Así, en las ocasiones en que la CIDH se limite a afirmar que los puntos a tratar permitirán el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre aspectos específicos, sin expresar las razones por las que las cuestiones en litigio atañen al orden público interamericano, la Corte Interamericana deberá concluir que no se encuentran demostradas las circunstancias excepcionales que permiten admitir la declaración pericial propuesta por la Comisión Interamericana.

En este punto, debe precisarse que no corresponde a la Corte Interamericana subsanar las falencias argumentativas en que pueda incurrir la CIDH en su ofrecimiento de la prueba pericial. Por tanto, no resulta procedente que dicho Tribunal entre a determinar directamente si en el caso concreto se afecta el orden público interamericano, cuando la Comisión no hubiese sustentado de manera suficiente que tal situación tiene verificación respecto del caso concreto. Tal actuación desconocería el alcance que el precedente le ha asignado al artículo 35.1.f del Reglamento.

[1033] Caso Mémoli vs. Argentina, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de diciembre de 2012, considerandos 6 al 8.

1.2 Inobservancia de los requisitos reglamentarios que determinan la facultad de la Comisión para ofrecer pruebas periciales

En el presente caso se tiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la práctica de 2 peritajes. Como sustento del ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 35.1.f del Reglamento, en su Escrito de Sometimiento del Caso, manifestó lo siguiente:

> "Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el caso permitirá a la Corte consolidar su jurisprudencia sobre las obligaciones de los Estados en el contexto de un conflicto armado interno, en particular, a través de un análisis de atribución de responsabilidad estatal directa por acciones de grupos que actúan con connivencia del Estado. Además, el caso permitirá un análisis más profundo de un tema que ha sido materia de seguimiento por parte de la Comisión en los últimos años y que se relaciona con el impacto de la implementación de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, en la obligación de investigar conforme a los estándares interamericanos.
>
> En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales:
>
> 1. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos sobre la atribución de responsabilidad a los Estados como consecuencia de actos perpetrados por grupos no estatales pero que actúan con connivencia de agentes estatales. Asimismo, profundizará los supuestos de connivencia que conforme a los estándares internacionales aplicables pueden dar lugar a una atribución de responsabilidad directa y las consecuencias de dicha atribución en el alcance de la obligación de investigar y en la fijación de las medidas de reparación.
>
> 2. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien analizará los estándares internacionales que resultan aplicables al análisis de normas internas en el marco de iniciativas en materia de justicia transicional. El/la perito/a, tomará en consideración la Ley de Justicia y Paz 975 en Colombia y las obligaciones de los Estados en materia de investigación, una vez que una persona sometida a dichas normas confiesa un crimen. El/la perito/a desarrollará las medidas investigativas de seguimiento concretas que

deben adoptar los Estados para que la aplicación de estas normas no generen situaciones contrarias al derecho a la verdad y la justicia. Finalmente analizará el deber de continuar e impulsar en la justicia ordinaria la investigación necesaria respecto de otros actores que en base a la información revelada en los procesos especiales de justicia transicional."[1034]

La cita previamente expuesta evidencia que la argumentación de la Comisión Interamericana, en relación con el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 35.1.f del Reglamento, se limitó a: **i)** la enunciación de los temas que según su apreciación podrá abordar la Corte durante el trámite jurisdiccional que se surte en el presente caso; **ii)** su apreciación, no sustentada, sobre la supuesta utilidad de la práctica de una prueba pericial sobre dichos temas y **iii)** la posibilidad de que a partir de ello el Tribunal precise o desarrolle su jurisprudencia.

Es claro que lo expuesto en el párrafo anterior no constituye una motivación razonada y suficiente. La Comisión únicamente manifestó que en su opinión los asuntos a tratar afectan el orden público interamericano de los Derechos Humanos, pero en ningún momento señaló las razones que sustentan tal afirmación. Esto quiere decir que la premisa que se esgrime parte de la conclusión que se pretende sustentar, lo cual da lugar a la configuración de una falacia, que convierte en irrazonada su argumentación (petición de principio o *petitio principii*)[1035].

De conformidad con el precedente expuesto en el acápite anterior, la carga argumentativa de la Comisión debía consistir en la clara manifestación de las razones por las cuales las cuestiones a tratar, podían "tener un impacto sobre fenómenos que ocurren en otros Estados Parte de la Convención"[1036]. Es claro que la CIDH se abstuvo de fundamentar y precisar la ocurrencia de tal situación. Esto determina el incumplimiento de los requisitos que rigen el adecuado ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 35.1.f del Reglamento.

Por el contrario, la argumentación de la CIDH en su fundamentación sobre la relevancia del presente caso y la presentación de sus peritos se sustenta en parte, en que la Honorable Corte podrá conocer de la Ley 975 "Ley de Justicia y Paz". Dicha ley, es un mecanismo de justicia transicional netamente nacional,

[1034] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vereda La Esperanza, Escrito de Sometimiento del Caso, 13 de diciembre de 2014.
[1035] Se estará en presencia de una petición de principio o argumento circular cuando la conclusión del argumento ya está incluida en una de las premisas que lo sustenta.
[1036]Caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de febrero de 2013, parrafo12.

cuyo conocimiento por parte de la Corte no acarrearía impacto alguno en los demás paises del hemisferio, por tanto, no es abarcado por la noción de orden público interamericano.

Adicionalmente, según como se expuso previamente, la Corte ha establecido mediante su jurisprudencia que la designación de peritos por parte de la Comisión "tiene carácter excepcional"[1037]. El Estado observa que las cuestiones señaladas por la CIDH, en el presente caso, no reúnen esa característica.

La Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre "(…) las obligaciones de los Estados en el contexto de un conflicto armado interno, en particular, a través de un análisis de atribución de responsabilidad estatal directa por acciones de grupos que actúan con connivencia del Estado (…)"[1038] El tema en cuestión, ha sido desarrollado en casos como: Caso la Rochela Vs Colombia[1039], Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia[1040], Caso La Cantuta Vs. Perú,[1041] entre otros. Por tanto, en la actualidad existe un precedente decantado sobre ese punto de derecho. Aún más, gran parte de este precedente se ha cristalizado al analizar casos colombianos en los que la Corte IDH ha estudiado estos puntos de hecho y de derecho. Así las cosas, se descarta que el punto bajo análisis sea un asunto excepcional en el Sistema Interamericano.

Como puede verse, en el presente caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos omitió expresar en debida forma las razones por las que las cuestiones a tratar en el presente caso afectan de manera relevante el Orden Público Interamericano. Adicionalmente, se encuentra demostrado que el tema de la atribución de responsabilidad internacional del Estado por hechos cometidos por terceros con connivencia de agentes estatales, ya ha sido extensa y reiteradamente decantado por la jurisprudencia de la Corte IDH. Finalmente, el peritaje que trataría sobre la Ley 975 de 2005 "Ley de Justicia y Paz" no cumple con el criterio de relevancia para el orden público interamericano que permitiría que fuera propuesto por la CIDH, pues su impacto sería netamente doméstico.

[1037]Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando noveno, y Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, considerando tercero.
[1038]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vereda La Esperanza, Escrito de Sometimiento del Caso, 13 de diciembre de 2014.
[1039]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de Mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 32, entre otros.
[1040]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 131 y siguientes.
[1041] Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162.

Conforme con los argumentos previamente expuestos, se concluye que en el caso concreto la CIDH no cumplió con los requisitos reglamentarios que determinan el ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 35.1.f del Reglamento. Por tanto, se solicita a la Corte que desestime las pruebas periciales ofrecidas por dicho órgano.

B. Observaciones sobre las pruebas del Escrito de Argumentos, Solicitudes y Pruebas

1. Observaciones en relación con las pruebas documentales

En relación con las pruebas documentales, el Estado le solicita a la H.Corte que tenga en cuenta aquellas observaciones señaladas a lo largo del documento de contestación. En todo caso, el Estado quisiera reiterar que los Representantes utilizan como pieza probatoria en relación con el contexto y los hechos del caso, el Informe de Artículo 50 de la Comisión Interamericana. Sobre el particular, el Estado expresa su preocupación, dado que el mencionado informe es un documento producido por uno de los actores dentro del procedimiento, el cual contiene consideraciones de hecho y de derecho, pero que de ninguna manera puede dar fe de los hechos objeto de análisis por parte de la H. Corte Interamericana. En todo caso, la CIDH es un actor que ha tomado una posición, tanto así, que ha sometido el caso ante la Honorable Corte IDH para que determine que el Estado colombiano debe ser declarado internacionalmente responsable. En este sentido, los hechos y contexto allí expresados presentan una posición que carece de la objetividad necesaria para constituir una prueba en el trámite judicial ante la honorable Corte.

Considerar el Informe de Artículo 50 como prueba autónoma de los hechos de un caso contencioso sometido ante la H. Corte, no sólo la prevendría de llevar un análisis del caso autónomo -toda vez que dicho informe recoge la opinión de la Comisión-, sino que actuaría en contravía del Reglamento de la Corte. El artículo 35.1(e) señala que al momento de someter el caso ante la H. Corte, la CIDH debe entregar "las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. Se hará indicación de las pruebas que se recibieron en procedimiento contradictorio". De esta forma el Reglamento califica como pruebas únicamente aquellas presentadas por las partes en el procedimiento ante la CIDH y, de ninguna manera, el Informe de Artículo 50.

De esta manera, el Estado solicita a la Corte Interamericana que no tenga en cuenta el Informe No. 85/13 de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos como material probatorio del contexto y/o de los hechos del presente caso y que, en consecuencia, se desestimen como ciertos todas las afirmaciones conceptuales o fácticas realizadas con base probatoria en dicho informe.

Adicionalmente, se le solicita a la Honorable Corte que valore los documentos presentados por los representantes según su naturaleza y su valor, de conformidad con su jurisprudencia.

2. Observaciones en relación con la prueba testimonial

Los representantes de las presuntas víctimas presentaron como el objeto de los testimonios de sus representados, el siguiente:

> "Los familiares propuestos como testigos declararán sobre la forma en que se enteró de la desaparición de sus familiares y lo que sabe acerca de lo que les ocurrió; la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos hechos; a lo que se vieron enfrentados para responder a los cambios familiares, económicos y de residencia derivados de las desapariciones forzadas de sus familiares; y el accionar de los grupos paramilitares en la zona; las gestiones realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los obstáculos enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos les han afectado al declarante y miembros de su familia, incluyendo los familiares que fallecieron durante estos últimos 19 años; así como acerca de las medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre otros aspectos relevantes para el caso."[1042]

En primer lugar, el Estado desea hacer referencia a ciertos hechos, que si bien no son parte del marco fáctico que presentó la CIDH en su informe de fondo, son mencionados como parte integrante del objeto de las declaraciones de los testigos. Esto es "la pérdida de bienes y viviendas" y "los cambios (…) de residencia derivados de las desapariciones forzadas". El Estado desea precisar, que en el informe de fondo de la CIDH, que limita el marco fáctico del caso, sólo se hace referencia a los daños que habría sufrido la casa del señor Eliseo Gallego,[1043] y no, en general, a la pérdida de bienes y viviendas de las presuntas víctimas y sus familiares. En este sentido, ésta sería la única alegación admisible frente a pérdida de bienes.

Por otra parte, tampoco se refiere el informe de fondo a presuntos cambios de residencia o desplazamientos derivados de las desapariciones. Estas afirmaciones, que afectan ostensiblemente el marco fáctico sobre el cual se está

[1042] Escrito Solicitudes Argumentos y Pruebas, pág. 15
[1043] CIDH. Informe de Fondo. Párr. 304.

desenvolviendo el presente litigio, no tienen cabida en virtud de su ausencia en el informe que fija la plataforma fáctica de este caso.

Por último, cabe resaltar que el objeto de las declaraciones, aun cuando abarca una gran variedad de situaciones, finaliza con una afirmación abierta, esto es que la declaración versará también sobre: "otros aspectos relevantes para el caso". El Estado considera que este último fragmento del objeto resulta ser demasiado abierto para ser el marco de una declaración testimonial, toda vez que permitiría que en ellos sea referido cualquier elemento que pudiera ubicarse por fuera del marco fáctico. Esto redundaría en una grave afectación al derecho de defensa del Estado.

Por tanto, el Estado solicita que se tengan en cuenta estas observaciones, y en consecuencia, se excluya del objeto de estas declaraciones, lo referido a la pérdida de bienes más allá de los presuntos daños a la casa del señor Eliseo Gallego, los supuestos cambios de residencia a los que se vieron obligados los familiares de las presuntas víctimas a causa de las desapariciones forzadas, y la expresión "entre otros aspectos relevantes para el caso".

Adicionalmente, la representación de las presuntas víctimas anunció la presentación de la prueba testimonial del señor Hollman Morris bajo los siguientes términos:

> "**Hollman Felipe Morris Rincón**, quien declarará sobre la forma en que tuvo conocimiento de los hechos del caso en su labor periodística; las entrevistas que realizó a los familiares de las víctimas, el ataque que el mismo presenció en la carretera cercana a la Vereda la Esperanza durante el acto realizado por la comunidad en Noviembre de 1996, así como sobre la entrevista que realizó al señor Ramón Isaza en el Magdalena Medio. Se referirá a la forma y contratiempos que tuvo para acceder al lugar donde se encontraba el señor Isaza y el señor NN Freddy con su hijo. Además, declarará las labores que las familias han llevado a cabo para buscar justicia y encontrar a sus familiares desaparecidos, y lo que le consta sobre el accionar del Estado sobre estas desapariciones a la época de los hechos."

Frente a esta declaración, el Estado solicita a la Honorable Corte que excluya del objeto del peritaje las expresiones referentes a que el señor Morris declarará sobre "el ataque que el mismo presenció en la carretera cercana a la Vereda la Esperanza durante el acto realizado por la comunidad en Noviembre de 1996" y los "contratiempos que tuvo para acceder al lugar donde se encontraba el señor Isaza y el señor NN Freddy con su hijo."

En primer lugar, el presunto ataque que el señor Morris habría presenciado en la carretera cercana a la Vereda la Esperanza no se encuentra referenciado en el informe de fondo de la CIDH, y por tanto no haría parte del marco fáctico de este caso. Aún más, dicho hecho ni siquiera fue mencionado por la representación de las presuntas víctimas en el ESAP para sustentar alguna violación. Por tanto, no resulta ni relevante, ni conforme al proceder en el trámite de los casos ante la Corte IDH, el incluir este incidente en el análisis de este caso.

Por otra parte, el pretender incluir dentro de la declaración del señor Morris los contratiempos que tuvo para acceder al lugar donde se encontraba el señor Isaza y NN Freddy con su hijo, son a todas luces irrelevantes en el análisis del presente caso. Por tanto, dicho aparte debería ser excluido del objeto de esta declaración.

3. Observaciones en relación con la prueba pericial

El Estado presenta las siguientes observaciones a los objetos establecidos por los representantes en relación con las pruebas periciales:

- Sobre el objeto del peritaje que sería rendido por Vilma Liliana Franco Restrepo: El peritaje que sería rendido por la Dra. Franco parte de supuestos que no se encuentran comprobados y que incluso, postulan un prejuzgamiento hacia el Estado en el marco de su responsabilidad internacional. Así, por ejemplo, hace mención de la utilización de estrategias contrainsurgentes que parten de la "doctrina del enemigo interno", cuya utilización no se encuentra sustentada en el marco fáctico. Además, el objeto parte del señalamiento de la existencia de esta doctrina para derivar otras actuaciones que ha tomado el Estado colombiano en el marco del conflicto armado que sostiene, y afirma sin un análisis previo, que ello se encuentra en contravía de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, se le solicita a esta Honorable Corte excluir de este objeto la mención referida a la "doctrina del enemigo interno" y adicionalmente, que en su formulación no se presuponga la inconformidad de las medidas adoptadas por el Estado con los estándares internacionales.

- Sobre el objeto del peritaje sería rendido por Luz Marina Monzón Cifuente: El objeto del peritaje que sería presentado por la Dra. Monzón parte del hecho de la existencia de una práctica sistemática de desapariciones forzadas para la época de los hechos, lo cual se encuentra en el marco del debate presentado ante la Honorable Corte IDH. Por tanto, el objeto del

peritaje no puede partir de la presunción de la existencia de dicho contexto o práctica, toda vez que se incurriría en un prejuzgamiento del Estado en este punto a debatir.

- Sobre el objeto del peritaje que sería rendido por David Medina Hernández: El Estado considera que, teniendo en cuenta que el objeto del peritaje ofrecido por la representación de víctimas para el Dr. Medina versa sobre "los procesos penales ordinarios seguidos por las desapariciones forzadas de las víctimas del caso", éste no debería ser tenido como un perito sino como un testigo o declarante a título informativo. Esto, toda vez que su declaración no se enmarcaría en su experticia sobre un tema, sino sobre su conocimiento sobre los procedimientos en particular.

- Sobre el objeto del peritaje sería rendido por Hada Luz García Méndez y Yeny Carolina Torres Bocachica: Este peritaje ofrecido por la representación de las presuntas víctimas se refiere a los presuntos daños ocasionados por la "impunidad" en que permanecerían las detenciones y desapariciones forzadas que habrían sufrido las presuntas víctimas. La utilización del término "impunidad"[1044] implica en sí mismo la falta en el deber de debida diligencia del Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos, lo cual, es objeto del litigio. En este sentido, este peritaje no puede partir de la suposición de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento a estos deberes, pues se incurriría en el prejuzgamiento del ente estatal.

C. Pruebas que ofrecerá el Estado

1. Prueba documental

La prueba documental ofrecida por el Estado se señala a lo largo del documento y está contenida en el listado de anexos que se dispone más adelante.

2. Prueba testimonial y declaraciones informativas

[1044] Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 172. La impunidad ha sido definida por la Corte como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

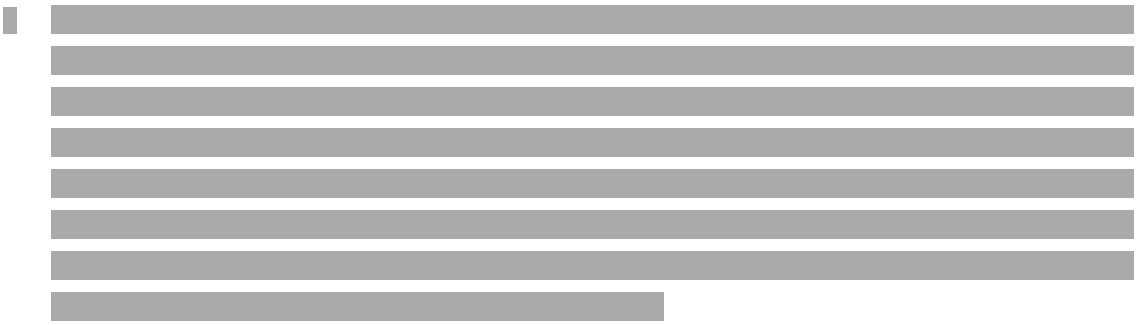
El Estado ofrece los siguientes declarantes informativos:

- **Uldy Teresa Jiménez**, Magistrada de Justicia y Paz. Declarará sobre las medidas adoptadas por el Estado, específicamente por la Magistratura, para implementar los procedimientos establecidos en la ley de Justicia y Paz, así como los resultados obtenidos a la fecha en materia de verdad, justicia y reparación.

- **Liliana Calle,** Fiscal 47 de Justicia y Paz. Declarará sobre la investigación penal a su cargo, relacionada con los hechos del caso sometido al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre la participación de las víctimas y sus representantes en dichas investigaciones.

- **Iris Marín,** Subdirectora de la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras. Declarará sobre el alcance de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y su virtualidad para reparar integralmente las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado en Colombia y en particular para reparar las violaciones alegadas en el caso "Vereda La Esperanza".

- **Declarante/ nombre por definir a la brevedad.** Quien declarará sobre los esfuerzos institucionales que se han desplegado por la Fiscalía General de la Nación para implementar el procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz – y en las reformas de la misma- así como los resultados obtenidos a la fecha.



3. Prueba pericial

El Estado ofrece los siguientes peritos ante la H. Corte:

- **Juanita María Goebertus**[1045], Coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien se referirá sobre la compatibilidad de las herramientas de justicia transicional implementadas por el Estado desde la expedición de la Ley 975 de 2005, con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia. Entre otros, se referirá a la concentración de la acción penal en la investigación de máximos responsables, la priorización de casos, y la investigación de crímenes de sistema y macro contextos;

- **Carlos Eduardo Valdés Moreno**[1046], Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien se referirá sobre la legislación y los mecanismos con los que cuenta el Estado colombiano para investigar el delito de desaparición forzada, específicamente, sobre las medidas encaminadas a la localización, identificación e inhumación de los restos de las víctimas de este delito, todo ello a la luz de los estándares internacionales sobre la materia. Así mismo se referirá a las dificultades que representa la implementación de estos mecanismos y los avances que hasta el momento se han obtenido en el caso colombiano;

- **Nelson Camilo Sánchez**[1047]**.** Se solicita el traslado del peritaje que el Dr. Sánchez presentó en el caso Yarce y Otras vs. Colombia, cuyo objeto trató "sobre los programas de reparación administrativa en contextos de justicia transicional y la adecuación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) a los estándares internacionales en la materia"

XI. PETITORIO

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente, el Estado le solicita a la H. Corte como pretensiones principales que:

i) Acepte el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, en los términos en los que fue planteado.

[1045] Hoja de vida del perito. (Anexo 20)
[1046] Hoja de vida del perito. (Anexo 21)
[1047] Hoja de vida del perito. (Anexo 21)

ii) Efectúe un control de legalidad frente a las actuaciones de la Comisión Interamericana, y como consecuencia declare que en el marco del presente procedimiento se desconocieron las garantías del debido proceso y específicamente las de seguridad jurídica y equilibrio procesal.

iii) declare su falta de competencia para conocer de los hechos relacionados con alias "Fredy", su esposa e hijo.

iv) declare que el Estado no es responsable por la presunta vulneración de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial presuntamente derivadas del procedimiento de Justicia y Paz.

v) declare que el Estado ha garantizado el seguimiento de líneas lógicas de investigación en el marco del proceso penal ordinario.

vi) declare que el Estado colombiano investigó los hechos de conformidad con el derecho penal vigente para la época de los hechos, observando criterios y estándares de derecho internacional.

vii) declare que el Estado no es responsable por los hechos ocurridos entre el 26 y 28 de junio de 1996 en perjuicio de Irene de Jesús Gallego.

viii) declare que el Estado no es responsable por la alegada violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, y libertad personal de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de los artículos 1.a y 1.b de la CIDFP.

ix) no ordene reparaciones que en el ámbito interno pueden ser efectivamente causadas y otorgadas, mediante los mecanismos descritos

x) rechace las pruebas objetadas por el Estado, y decrete aquellas que fueron ofrecidas en el acápite correspondiente

Como pretensiones subsidiarias se le solicita a la H. Corte que:

i) reconozca la convencionalidad de las herramientas de justicia transicional implementadas por el Estado colombiano.

ii) declare que el Estado no es responsable por las presuntas violaciones de los derechos de alias "Fredy" y su esposa.

iii) de ordenarse reparaciones materiales e inmateriales, se tengan en cuenta aquellas que fueron otorgadas en el ámbito interno.

XII. LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Affidavit presentado por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Declaración del Mayor General y Jefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares Edgar Ceballos Mendoza, rendida ante fedatario público el 12 de enero de 2006.

Anexo 2. Radiograma No. 5241-DIV1-G3-PO-375 de 2 agosto de 1994 de la Primera División del Ejército Nacional.

Anexo 3. Planes de Control. Plan No. DIV1-BR4-B3-PO-375 de 25 de junio de 1996.

Anexo 4. Instrucciones de Coordinación del Plan Operacional. Ministerio de Defensa Nacional.

Anexo 5. Denuncias 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 BR14-BIBAR-S2-252 del 12 de junio de 1996. Denuncias N°1313, 1312/ BR14-BIBAR-S2-722, de abril 22 de 1996. Denuncias N° 0978 del 22 de marzo de 1996 y 1413 de 26 de abril de 1996.

Anexo 6. Ley 589 de 2000, por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.

Anexo 7. Decreto 4218 de 2005, por el cual se reglamenta el artículo 9 de la ley 589 de 2000.

Anexo 8. Ley Estatutaria 971 de 2005, por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones.

Anexo 9. Ley 1408 de 2010, por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación.

Anexo 10. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Anexo 11. Decreto 303 de 2015, por el cual se reglamenta la ley 1408 de 2010.

Anexo 12. Historia clínica No. 7993494 de 30 de junio de 1996, expedida por el Hospital Militar Central.

Anexo 13. Proceso disciplinario No. 008-10799-98.

Anexo 14. Proceso Contencioso Administrativo acumulado Rad. No. 2002-00528.

Anexo 15. Proceso Contencioso Administrativo Rad. 2002-00527.

Anexo 16. Proceso Penal Jurisdicción de Justicia y Paz.

Anexo 17. Ministerio de Defensa Nacional, Resolución No. 2265 de 23 de abril de 2012.

Anexo 18. Ministerio de Defensa Nacional. Certificación de Transferencia de 20 de enero de 2014.

Anexo 19. Proceso penal 233.

Anexo 20. Hoja de vida de Juanita Goebertus, Coordinadora de Justicia Transicional de la Alta Consejería para la Paz.

Anexo 21. Hoja de vida de Carlos Valdés, Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Anexo 22. Hoja de vida de Camilo Sánchez.

***

Quedo muy atenta a cualquier inquietud de la Honorable Corte.

Cordialmente,



ÁNGELA MARÍA RAMÍREZ RINCÓN
AGENTE DEL ESTADO